



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ARENA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Si se me permite quisiera detenerme un poco, no en los artículos de la expropiación, que efectivamente la ley que tratamos dispone y acerca de los cuales muchos compañeros ya han argumentado, sino en el artículo primero, porque considero que es allí donde estamos estableciendo un nuevo horizonte para la Argentina. O por decirlo de otra manera: es allí donde vamos a marcar un antes y un después en la política hidrocarburífera del país.

Con la sanción de esta ley el gran tema que estamos incorporando a la legislación argentina es el de declarar de interés público nacional el logro del autoabastecimiento, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

En estos días de debate, aquí en el recinto y en diversos medios de comunicación, se ha dicho que el gobierno y quienes decidimos acompañar este proyecto tomamos una decisión aventurada, porque lo recomiendan las encuestas. Que esta normativa se trata de un engaño, una estafa emocional e ideológica que se hace a los argentinos. Se habla de imprevisibilidad en el mercado, de inseguridad jurídica, de tratamiento discrecional hacia la empresa española, de falta de controles; por sólo nombrar algunas cosas de todas las que hemos escuchado en estas semanas.

Nosotros no venimos meramente a posibilitar la expropiación de una empresa privada que no ha cumplido con las exigencias de la ley. Lo que estamos apoyando, fundamentalmente, es la decisión soberana de que nuestro país proteja y preserve sus recursos estratégicos como lo hacen, sin excepción, todos los países del mundo.

El gran cambio que entonces estamos introduciendo es la imposición de límites, basados en el interés general, a la aplicación de las leyes de mercado en toda la actividad petrolera, cualquiera sea la empresa que las ejecute.

Venimos también a validar una decisión que tiene un alto consenso social. Es decir, una decisión que cuenta con el amplio apoyo de todos los argentinos. Y esto no se trata de que las encuestas digan que “sí” o que “no”. La cuestión de la soberanía hidrocarburífera forma parte de una larga tradición histórica y política de nuestro país que la mayoría de los argentinos y de las argentinas no hemos olvidado.

Precisamente al leer los diversos artículos y preparar estas palabras no pude dejar de recordar a muchas de las personas que ya fueron nombradas aquí como Enrique



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y José Estenssoro. También recordé a ese gran pensador argentino nacido en Entre Ríos que fue Arturo Enrique Sampay y toda la Constitución que fue votada en 1949.

No tengo dudas de que lo que estamos haciendo hoy es retomar el espíritu de aquella Constitución que instauró una organización social superadora de la república ideada en 1853.

En lo económico, la no siempre recordada Constitución de 1949, planteaba objetivos sociales que apuntaban a la justicia distributiva, ya que definía precisamente la función social de la economía, del capital, del campo, de la propiedad, del trabajo. Y al Estado, le otorgaba roles participativos como “gerente del bien común” en un marco de nacionalización de las riquezas fundamentales del país, los servicios públicos esenciales, el sistema financiero y el intercambio comercial exterior que hasta entonces llevaban el sello del tutelaje británico.

Pese a que transcurrieron ya varias décadas, considero que los principios enunciados entonces tienen una actualidad que es la razón de su permanencia, en contraposición con otros modelos que han ido agotándose en sí mismos.

Todos lo sabemos bien: la energía es un recurso de vital importancia en el desarrollo sustentable de los países. Sin energía no se sale de la pobreza. Sin energía no hay trabajo. Sin energía no hay crecimiento equitativo. Sin una adecuada planificación energética no se puede satisfacer las necesidades sociales. Al sancionar esta ley, estamos generando un impacto positivo en los productores que tendrán acceso al combustible necesario para sus maquinarias, a los transportistas para los cuales es una herramienta de trabajo y, en definitiva para todos los ciudadanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no entelequias...

Entonces, cuando lamentablemente las empresas privadas no acompañan el crecimiento del país ni el bienestar de su población, debe ser el Estado quien realice las acciones necesarias para que ese crecimiento y ese bienestar sean posibles.

El rédito económico no es sólo lo que debe primar en una política de hidrocarburos. Aquí de lo que estamos hablando es de equidad social, de lo que hay que hacer aunque los números económicos no marquen rentabilidad.

Lo que hoy estamos posibilitando es que no sólo se realicen las inversiones de capital privado de corto plazo y ganancia rápida, sino que existan también las inversiones que tienen que ver con la exploración y la mirada estratégica que debe tener todo país. Nuestro país necesita una YPF argentina y una política energética nacional, sustentable y de largo plazo para beneficio de todos sus habitantes. Eso es lo que hoy estamos ratificando con esta norma.

Es cierto que con los objetivos no basta para conseguir resultados concretos. Pero, si no tenemos las herramientas, si no tenemos el rumbo claro, nada podemos esperar. Por eso, con la impronta de apoyar una de las decisiones políticas más trascendentes de los últimos tiempos, y en la seguridad de estar haciéndolo para beneficio de todos los argentinos, es que votaré positivamente este proyecto de ley.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ARREGUI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La nacionalización de YPF que estamos concretando con la aprobación de esta ley de la Nación, la tenemos que ver como una nueva etapa en el proceso crecimiento de la inversión económica que se viene dando en la Argentina desde el año 2003.

Nuestro país nunca ha crecido durante tantos años seguidos como lo viene haciendo desde que asumió Néstor Kirchner. También es nuevo el sistemático crecimiento del consumo que se ha venido dando y la consecuente presión sobre la capacidad instalada del aparato productivo y su infraestructura.

La inversión pública y privada vienen creciendo con fuerza durante estos 9 años y así se explica que el crecimiento se haya podido sostener, pero también comienzan a quedar en evidencia aquellos sectores que no acompañan el crecimiento y pasan a convertirse, por su importancia, en un serio obstáculo al desarrollo del conjunto.

Esto es lo que ha ocurrido con YPF y por eso debemos avanzar con este proyecto de nacionalización que nos propone nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nuestra Argentina está viviendo un momento de excepcional importancia. En los primeros 20 años de democracia, entre 1983 y 2003 no pudimos romper los obstáculos estructurales, lo que fue el huevo de la serpiente que se construyó durante la dictadura militar y que significó un sistema de complicidades y poder que condujo los principales resortes económicos del país y que condicionó recurrentemente al poder político.

Una de las más grandes virtudes de nuestra propuesta política, y verdaderamente creo que es una de las razones que explican el 54% que obtuvo nuestra presidenta en la última elección, es la habilidad que ha demostrado para no caer en ninguno de los condicionamientos que nos vienen planteando desde el año 2003. Siempre hemos salido para adelante. La respuesta siempre ha sido, y será, la profundización del modelo.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por eso, respondimos con la ley de medios a la encerrona mediática; con la ley de nacionalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ante el desfinanciamiento estratégico que generaban las AFJP, y hoy respondemos con la nacionalización de YPF ante la falta de inversiones en el sector petrolífero y la necesidad de contar con este recurso clave para poder seguir creciendo con inclusión social como lo venimos haciendo.

El crecimiento económico con inclusión es el objetivo central de nuestro proyecto y por lo tanto es LA POLÍTICA la que se debe ocupar de superar cualquier obstáculo que se interponga con dicho objetivo. El gobierno nacional en estos 9 años realizó inversiones colosales en el sector energético que han llevado, como explicó el ministro Julio De Vido, a duplicar la oferta energética nacional, estancada desde 1983. Pero vemos que en el actual escenario internacional con esto no alcanza. Necesitamos más; necesitamos un fortísimo proceso de inversiones y una nueva política de asociaciones en el sector hidrocarburífero, y es por eso que hoy tenemos que recuperar YPF como herramienta clave para conducir este proceso.

El Estado nacional vuelve a controlar YPF a través de esta ley que hoy estamos discutiendo y, a partir de allí, define los objetivos estratégicos de su política hidrocarburífera. La nueva YPF deberá ser conducida por los mejores cuadros profesionales, como dijo nuestra presidenta, pero es importante enfatizar que esos profesionales de primer nivel internacional, nada podrían hacer sin el respaldo político que significa un gobierno nacional que junto con los gobiernos de las provincias con recursos hidrocarburíferos se comprometen en la construcción de la soberanía argentina en materia de petróleo y gas.

La recuperación de YPF es un punto de inflexión en la historia de nuestra Nación y es muy importante que nosotros los legisladores así lo planteemos. La democracia argentina se viene consolidando en estos últimos 29 años, pero aún arrastra muchas asignaturas pendientes en materia social y fundamentalmente en la distribución del ingreso. Entre 1983 y 2003, muchas veces el país entró en crisis económicas y políticas muy profundas. Esos son los “momentos” que hay que analizar para entender lo que ocurrió y que nunca más debe volver a ocurrir. En cada una de esas crisis, el salario real se pulverizó, el empleo productivo se derrumbó y la salida de capitales especulativos fue cada vez mayor. Esos momentos de crisis económica y política en esos 20 años, fueron los momentos donde el “viejo modelo de acumulación económica” recuperaba el control y destruía todos los avances que se podrían haber logrado en la distribución del ingreso y la calidad de vida de los argentinos.

Las crisis económicas durante los primeros 20 años de democracia lograron en materia de concentración del ingreso y caída del salario real lo que antes lograban valiéndose de un golpe de Estado. Es por ello que es tan importante avanzar en la consolidación de nuestro modelo, para no perder todo lo que hemos logrado en estos 9 años y para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

construir una nueva institucionalidad política y económica que administre las crisis para que no signifiquen retrocesos en materia de distribución del ingreso.

Estamos construyendo una Argentina justa, libre y soberana. No es fácil el contexto internacional. De hecho nunca lo fue para países que, como el nuestro, vienen padeciendo desde hace décadas un “sistema de reglas e instituciones” pensado para el beneficio de los países desarrollados. Pero hoy, a diferencia de otros momentos de nuestra historia, no estamos solos. En América Latina y el Caribe encontramos respaldos, puntos de coincidencia, espacios para debatir y hacer valer nuestras posiciones. Tenemos que seguir trabajando unidos y organizados, como nos pidió nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley que vamos a aprobar es un paso más en ese largo camino que estamos recorriendo con nuestro pueblo.

3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ASSEFF

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

YPF NECESITA UNA DIRECCIÓN TÉCNICA CAPACITADA E INVERSIONES
Nuestro Partido Nacionalista Constitucional se opuso en 1992 a la malventa de YPF, privatizada a horcajadas de un consenso mayoritario de la ciudadanía. La oposición del PNC no fue producto de considerar que YPF estatal no exigía profundos cambios por entonces. El modelo estatal-burocrático, plagado de corrupción intestina – “a YPF lo queremos tanto que nos lo llevamos a nuestras casas” era la chanza que circulaba en la empresa, aludiendo a cómo se hurtaba de sus almacenes; ¡ni hablar de los sobreprecios y otros cohechos! – requería radicales cambios. Empero, en lugar de esas reformas – que incluían la ineludible asociación con capitales privados para reforzar y potenciar las tareas exploratorias y extractivas -, el gobierno de Carlos Menem optó por la privatización lisa y llana. El día en que la Cámara de Diputados privatizó la empresa que en épocas de esperanza creó el Dr. Hipólito Yrigoyen, continuó Marcelo de Alvear y dirigió el gran argentino Enrique Mosconi, hubo algarabía insólita en el recinto. Los diputados justicialistas se abrazaban alborozados. Pareció que existió un factor adicional que fogueó tanta alegría.

No satisfecho con su obra a favor de esa privatización, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner – impulsor principalísimo de la venta de YPF, en virtud de las expectativas de sobrerregalías que su amigo el ministro Domingo Cavallo le prometiera – enajenó su más de 4 por ciento de acciones que poseía la provincia. Se las vendió a...



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Repsol.

Luego sobrevino un hecho irresponsable e imperdonable: Menem enajenó la acción de oro, alejando definitivamente al Estado de la dirección real de YPF.

La gestión de Repsol fue del tipo capitalismo rapiña. Con la aprobación sistemática – tácita o explícita – del Estado nacional y sin objeciones del organismo regulador y menos aún de los de control, la Argentina asistió durante nueve penosísimos años a la caída de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento que había logrado con el Dr. Arturo Frondizi y luego en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Estos nueve años de gestión de los presidentes Kirchner se erigen, en materia energética, en la década infame del petróleo.

La perspectiva determinaba que este año 2012 debíamos importar combustibles por us\$14 mil millones. Una sangría.

Los responsables de esta catástrofe, con el ministro Julio De Vido a la cabeza, ahora son... interventores en YPF. En lugar de enjuiciarlos políticamente por el pésimo desempeño se muestran como los “salvadores” del desastre. Inaudito.

La producción de crudo fue declinando a una tasa anual del 3%, en contraste con el incremento del consumo. Un contrasentido irracional.

Pagamos a Bolivia más de us\$6 por el millón de BTU de gas, a Qatar 16, pero a las empresas locales apenas 2,5: ¡Insustentable! Desalentador de cualquier inversión. Factor desencadenante de la caída de reservas. Neuquén lo dijo varias veces oficialmente: ¡Páguennos a nosotros lo mismo que a Bolivia y le daremos al país todo el gas que se importa!

El ex presidente Kirchner impulsó una operación de “argentinización” de YPF vía el aterrizaje en la empresa de los señores Eskenazi. Accedieron al 25 por ciento de las acciones invirtiendo sólo el 10 por ciento de su valor. El resto del precio lo pagarían con los dividendos de YPF. Esto determinó que se repartiera el 90 por ciento de las ganancias, con el expreso consentimiento del director estatal de YPF. Faltándonos divisas y capitales – siempre escasos para atender a las crecientes demandas – Repsol, con la anuencia gubernamental, remesaba alegremente miles de millones de dólares hasta amortizar los 13 mil millones que invirtió en 1992 y superar ese monto en casi 10 mil millones adicionales. ¿Cómo llamar a esto? ¿Vaciamiento? ¿Sangría? ¿Drenaje? ¿Expolio? ¿Y cómo denominar a la complicidad de los nueve años kirchneristas? Ninguna empresa puede expandir su negocio si distribuye tan abultados dividendos. Lo de YPF es lisa y llanamente un formidable vaciamiento del que es cómplice el gobierno kirchnerista.

Hasta hace unos meses la presidenta Cristina F. de Kirchner ponderaba en sus relatos públicos la gestión de Repsol. En octubre de 2010, por caso, exaltó el descubrimiento del reservorio no convencional de Vaca Muerta en el Norte neuquino-Sur mendocino, como una prueba de las virtudes de la empresa dirigida por los españoles.

Algo acaeció en el decurso de los últimos meses: se quebró el vínculo con la familia Eskenazi y se rompió la relación con Repsol. La Cámara de Diputados no pudo conocer el motivo y tampoco otros antecedentes. Y sobre todo la Cámara baja se vio impedida de tener siquiera un boceto de un Plan Energético Nacional y de saber cuáles son las previsiones para trocar el actual casi 90 por ciento de dependencia respecto de los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

combustibles fósiles, para llegar a mayores porcentajes de energías renovables y menos contaminantes y también de fuentes alternativas como la eólica y la solar. Sencillamente, los altos funcionarios despreciaron a la representación del pueblo por antonomasia y no vinieron a dar explicaciones y a exhibir sus planes.

El modo con el que se tomó YPF fue horrible. El viceministro de Economía, Kicillof, dijo irresponsablemente que “seguridad jurídica” son palabras “horribles”. Lo horrible es cómo se hizo la intervención. Puede ser que el negocio petrolero sea tan interesante que las grandes corporaciones norteamericanas, chinas y de otros lares no vacilen en venir, a pesar de esta inseguridad jurídica que pareciera que nos place practicar. Pero lo harán con reaseguros de más renta y menos riesgo, es decir nos resultará más caro.

Como nacionalista me angustia que el presidente Santos de Colombia le diga a su visitante español: “Señor Rajoy, acá no expropiamos”, marcando una diferencia entre los procedimientos amigables de su país y los inconcebiblemente hostiles del nuestro. Hoy en España nos tachan a los argentinos como “ladrones”. Esto es el resultado desgraciado de actitudes inadmisibles de nuestros gobernantes. Nos desprestigian. Un país sin prestigio es un país sin poder, a pesar de que posea recursos cuantiosos como los de Vaca Muerta y los del mar.

Se pueden y se deben hacer las cosas que se deben realizar sin necesidad de emplear hostilidades manifiestas, agitar populismos baratos o demagogia desgastada. Los pueblos exigen y merecen que se defiendan inteligentemente sus intereses. No que se bastardee todo en todo momento.

Lo de Repsol era insostenible, tanto como la colusión del Estado en esa decadente y pésima gestión empresarial. Empero, la solución no pasa por volver a hacer lo que ya fracasó; esto es un intervencionismo estatal desmadrado, que regula todo, pero no controla nada en la realidad y que, por encima de todo, mete su mano deshonestamente en todos los recipientes que halla. En rigor, no es el Estado el de la mano larga e ilegal, sino quienes lo ocupan y obran en su nombre.

El Estado grande que reclama la Argentina es el que dispone de muchas neuronas, porque convoca a personas altamente preparadas para la gestión de políticas públicas y porque está dirigido por un equipo político de estrategias. Es un Estado que ejecuta las políticas de Estado que previamente han acordado los dirigentes principales de la Nación. Es un Estado que sabe controlar, que regula sutilmente – está, pero casi ni se lo nota -, que interviene cuando no existe otra alternativa, que alienta la iniciativa privada, la creatividad de la Nación.

Lo que no quiere la Argentina es un país estatizado. Esa funesta idea de que todo lo importante – y cada vez más sectores son considerados “importantes” – debe caer en la esfera estatal nos empequeñece y empobrece. No es casual que desde hace medio siglo estemos decayendo. Nos empeñamos en hacer todo lo contrario de lo que significa genuina prosperidad.

La crisis europea y de EE.UU. nos ha confundido aún más. Se tiende a creer que ese colapso financiero se debió a la ausencia del Estado en Europa y en EE.UU. La verdad es que en Francia, España, Italia y otros países el Estado tuvo y tiene enorme presencia y, a pesar de ello, sobrevino la crisis. Ésta fue de especulación financiera y de manejos irresponsables y corruptos en ese sector y no una derivación del “Estado ausente”. En



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

todo caso, hubo excesiva desregulación en el sector financiero, pero a nadie en Europa o EE.UU. se le pasa por la cabeza ahuyentar al capital de riesgo o sostener que a partir de ahora será el Estado quien asuma, con su inversión pública, cien roles que le pertenecen a la sociedad, que los desempeñará mejor y con menos lesión para las agotadas arcas públicas.

No es posible el vaivén: en los noventa, privatizamos todo, en la década siguiente volvemos todo al Estado. Así no se maneja y conduce un país serio. El nuestro cada día es menos creíble.

Existen muchos planos en los que el Estado tiene funciones indelegables. Sin embargo, no obstante que el estatismo avanza en el país impulsado por la ideología hoy vigente en esferas oficiales, el Estado argentino está ausente en el mar.

Tenemos una de las más grandes plataformas marítimas del planeta, pero no la patrullamos, no la ocupamos, no pescamos lo suficiente, no la estamos explorando para hallar los recursos hidrocarburíferos. No sabemos si la construcción del submarino nuclear que anunció a la sazón la ministra de Defensa en 2010 está avanzando.

Submarino que necesitamos para marcar presencia, disuadir predaciones y expolios, para asegurar soberanía. A Enarsa le asignaron el mar. Es una empresa estatal. ¿Por qué no hizo absolutamente nada? ¿Necesitamos a YPF para hacer lo que debió realizar Enarsa? No entiendo, y cuando un representante del pueblo no comprende algo esencial, lo mínimo que debe hacer es obrar con prudencia. Votar esta iniciativa del P.E.N. en estas condiciones sería una inexcusable ligereza.

El Estado debe garantizar justicia, educación, salud, seguridad – para consignar funciones irrenunciables y clásicas – eficaces. ¿Cómo cumple esos roles?

Deplorablemente. El Estado tiene que asistir a los necesitados, pero paralelamente debe prepararlos para su vuelta al trabajo digno. ¿Cómo cumple esa doble función? ¿Acaso sin clientelismo y con resultados que permitan visualizar que regresamos a la cultura del trabajo que nos hizo el “país promesa” del que hablaba Ortega y Gasset a principios del siglo XX?

Hoy se anuncia mucho y más Estado, pero la experiencia nos enseña que eso significa más burocracia y menos resultados benéficos.

El dominio del recurso hidrocarburífero es de las provincias. Así lo establece la Constitución. Entonces, es falaz que con este proyecto de estatizar el 51% de las acciones de YPF estemos “recuperando soberanía”. Es una descomunal mentira y esa mendacidad es tan relevante en mi concepto que enerva cualquier virtud que pudiera tener el proyecto de ley que estamos tratando.

¿Por qué no se le fueron quitando las concesiones a Repsol, una a una, por incumplimientos y de ese modo se obtenía el resultado de recuperar las áreas sin que fuese menester actuar agresivamente? Tampoco existe explicación para esta incógnita. No puedo apoyar una iniciativa que encierra mil objeciones y otras tantas dudas. No puedo respaldar al vaivén y menos al cambio abrupto e inexplicado: hasta hace tres meses estaba todo de maravillas y de repente estamos al borde del abismo. No creo que sea conveniente ganarnos la antipatía española por más horrores que haya cometido Repsol. Había y hay opciones para hacer lo que se debe sin incurrir en actitudes que aparejan descrédito.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

No me han informado sobre cuál es el plan energético para los próximos veinte años. En los discursos que he escuchado hasta ahora en esta Cámara no puedo lograr retener un par de ideas hacia el futuro.

El medio millón de votos que tuvo mi candidatura en la provincia de Buenos Aires me dio un mandato para que desempeñe un papel de representante que controla, que no apoya a ciegas, que no se transmuta. Seré fiel a esa manda política. Adicionalmente, con su voto negativo en el Senado – uno de los tres en ese sentido – Adolfo Rodríguez Saá – con quien fui aliado en las elecciones de 2011 – signa mi voto, ineludiblemente negativo, más allá de que una YPF mixta, con mayoría estatal, bien gestionada, siempre contará con mi entusiasta colaboración. ¡Ojalá podamos lograr esa meta!

4. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AVOSCAN

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

- El proyecto de expropiación del 51 % de las acciones de YPF tiene un alto valor simbólico para todos los argentinos. Lo tuvo cuando se privatizó, y cuando se desnacionalizó: incluso un periodista de mi provincia se animó a calificar al hecho como “la segunda colonización española”. Y tiene mucho sentido hablar de “colonización” cuando los números nos demuestran que la lógica de Repsol para gerenciar YPF fue la de una empresa colonial. O, si se prefiere, la de una economía de “enclave”: concentración en una única actividad económica, sin transferencia de recursos ni tecnologías, mientras duren las condiciones de privilegio, con escasa inversión y giro de ganancias extraordinarias a las casas matrices. Como fue el caso de La Forestal, por citar un ejemplo mencionado ayer en esta Cámara.

- Y así como fue alto el valor simbólico de esa privatización, también es alto el valor de su recuperación. Estamos dando un paso enorme en el proceso anunciado por nuestra presidenta Cristina Kirchner, cuando el primero de marzo destacó la necesidad de desmontar los mecanismos de la Argentina de la convertibilidad.

- La recuperación del control de YPF para el Estado nacional tiene quizá el mismo peso que la transformación del Banco Central, pero su valor simbólico para el pueblo argentino es mucho mayor. Por historia, por significado, por las expectativas que despierta, esta nueva YPF se visualiza como el paso más firme en la definitiva



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

consolidación de una nueva independencia económica, con soberanía política y justicia social.

Muchos oradores trajeron a esta sala de sesiones el recuerdo de los impulsores de la política petrolera nacional: Enrique Hermitte, que planificó la búsqueda de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907; Luis Huergo, infatigable director de Minería; Yrigoyen y su histórica decisión de constituir la empresa YPF; Enrique Mosconi, primer titular de YPF y figura clave en su desarrollo.

También podríamos hablar de algunas fechas claves en este largo camino por la independencia económica. Durante la gestión de Roque Sáenz Peña, en 1914, se anularon todas las concesiones petroleras en las que no se estuviera trabajando, un antecedente muy importante para el tema que estamos analizando.

En 1930, la Standard Oil junto a sus aliados impulsaron el primer golpe de Estado contra un gobierno constitucional, el de Hipólito Yrigoyen, para bloquear la posibilidad de que una ley avanzara en la nacionalización de los recursos petroleros.

Durante los gobiernos peronistas de 1945 a 1955 se creó Gas del Estado; se desarrolló el gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires, y se apalancó el crecimiento industrial con precios de fomento del combustible.

El 15 de noviembre de 1963, el gobierno del presidente Illia decreta la nulidad absoluta de los contratos petroleros firmados por Frondizi, por considerarlos “dañosos a los derechos e intereses de la Nación”.

Algunos antecedentes que nos demuestran que cuando se prioriza el desarrollo nacional y la generación de empleo, debemos tener el ánimo bien templado para tomar las medidas necesarias. En su momento, se cuestionó el acto de Illia aduciendo que había sido terriblemente costoso para el país. Un ejemplo demuestra lo contrario: una de las áreas revertidas a favor de YPF era la de Loma de la Lata, el yacimiento gasífero más importante del país.

Y no era un dato menor: según algunos estudios, ese yacimiento hubiera reportado ganancias por 64.000 millones de dólares a la empresa Esso. Además de evitar la ilógica de pagar más caro el petróleo que extraían las empresas privadas del subsuelo nacional que el petróleo importado.

Como antecedente también sobre sus repercusiones: la Argentina fue amenazada de perder muchas oportunidades por aquella acción. Más o menos como toda la pirotecnia



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que estamos escuchando últimamente. Pero los beneficios de la medida fueron inmensamente superiores a los costos.

Quiero traer a la memoria también los terribles momentos que vivieron las provincias productoras a principios de los 90, con la privatización de la empresa YPF. Siguiendo la lógica perversa del Consenso de Washington, se invirtieron los términos de la política petrolera: dejó de ser un elemento estratégico para ser un commodity exportable. La rentabilidad de caja pasó a ser la medida de la eficiencia.

En los '90, los voceros del establishment argumentaban que YPF era la única petrolera del mundo que daba pérdidas. Y aseguraban que el déficit del Estado producía la hiperinflación que nos castigaba. Pero ocultaban que YPF había sido endeudada a niveles escandalosos por la última dictadura militar: se la obligó a contraer más de 400 préstamos internacionales que nunca ingresaron a sus arcas. Recursos que fueron directamente al Tesoro para sostener una política de cambios ficticia y una política que privilegiaba la valorización financiera del capital.

Esos fueron los falsos justificativos de un cambio de paradigma que quebró el sistema productivo del país, destruyó su red de infraestructura y frustró a varias generaciones de argentinos. Nos aseguraban que las privatizaciones iban a terminar con el déficit y el endeudamiento. Nada de eso pasó, quedó claro.

Quiero recordar los padecimientos sufridos por los pobladores de Catriel, en mi provincia, que vieron cómo todo su mundo, su esquema de representaciones, sus relaciones sociales, sus sueños, se desmoronaban. Al igual que en Cutral Co – Plaza Huincul; Comodoro Rivadavia; Pico Truncado; Tartagal; Salta... YPF había tenido 55.000 empleados y de golpe pasaba a tener 5.000... En algunas ciudades, los despedidos de YPF representaban más del 10 % del total de la población. Y todavía están sufriendo las consecuencias sociales y económicas de semejante descalabro.

Pero el descalabro también lo sufrió el país. La desarticulación de la empresa petrolera estatal nos introdujo en la lógica del mercado petrolero mundial sin tener amortiguadores que nos protegieran en los momentos de crisis. Y a padecer la estricta lógica de las empresas trasnacionales: realizar inversiones sólo en aquellos sectores que garanticen la mayor rentabilidad en el corto y mediano plazo.

La conducción de Repsol decidió para la Argentina una política de hiper-explotación de los yacimientos, máxima rentabilidad y reinversión en otros sectores del mundo. Una política que bien puede calificarse como la “Segunda conquista del Virreinato del Río de la Plata”, ya que siguió la lógica del colonizador.

La política de Repsol de escasas inversiones, riesgo nulo y maximización de los beneficios con remisión de utilidades, consta en algunos estudios económicos realizados



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

por investigadores independientes. Como el desarrollado por Andrés Asiain y Agustín Crivelli, del Instituto de Investigación de Historia Económica y Social del CONICET.

Ellos afirmaron en su estudio que “la inadecuada explotación de los yacimientos no es consecuencia de una ineficiente gestión empresarial, sino el fruto de la estrategia global de la multinacional española. La misma ha explotado las reservas descubiertas bajo la gestión estatal de YPF como una fuente de liquidez para sostener inversiones en otras regiones y cubrir quebrantos financieros en su país de origen. La consecuencia de dicha estrategia ha sido la caída de las reservas de hidrocarburos en la Argentina, y la consecuente merma en la producción”.

YPF, bajo el control de Repsol, fue un típico ejemplo de “Economía de enclave”: aquella que se localiza en un área determinada, explotando intensamente un solo producto mientras dura la demanda del mercado. Y al finalizar la actividad deja poco o nulo provecho para el país donde se desarrolla, pues no existe reinversión ni diversificación de la economía, ni genera un mercado regional de producción y consumo. Las ganancias contribuyen al crecimiento de las fortunas personales de los productores, mientras el Estado tiene escasa o ninguna intervención más allá de la captación de ingresos fiscales”.

La nueva YPF que estamos gestando a partir de esta discusión tiene algunas características diferenciadoras de experiencias pasadas, que nos permitirán – estimo -, salvar algunas polémicas que terminaron paralizando el accionar concreto.

En primer lugar, sobre la posibilidad de la participación del capital privado en la actividad petrolera. La nueva YPF contará en su composición accionaria con el capital privado y permanecerá o se sumará aquel que se sienta en condiciones de realizar las inversiones necesarias para desarrollar la actividad petrolera, que es una actividad de largo plazo y no de rentabilidad inmediata. Y teniendo en cuenta, fundamentalmente, que la conducción estratégica, el establecimiento de los objetivos y el funcionamiento de la empresa estarán a cargo del sector estatal.

Pero hay otro paradigma inherente a esta formulación de la nueva YPF que me interesa resaltar: la inclusión del federalismo dentro de la definición de la política petrolera, mediante dos caminos: la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, donde estarán representadas todas las provincias; y la participación del 25 % del total de las acciones de YPF a las provincias productoras.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Quiero resaltar dos aspectos de este principio federal: en primer lugar, el reconocimiento a los estados provinciales como protagonistas en la explotación de un recurso no renovable, que en muchas oportunidades ha dejado más pasivos ambientales que ganancias; y por otro, la búsqueda del equilibrio entre el interés de la Nación como totalidad y el de las provincias productoras.

Existe un sector que viene insistiendo en la necesidad de devolver al Estado nacional la propiedad absoluta de los recursos del subsuelo, y afirma que las provincias productoras, con apenas el 15 % de la población, tienen en sus manos la política petrolera del país. Confunden “provincialización” con “privatización”, y advierten sobre los riesgos de un falso federalismo que sólo beneficia a algunas oligarquías provinciales.

Aquí deberíamos ser más precisos en los términos y reconocer que existen diferentes modelos de federalismo. Así como tenemos un nacionalismo popular y un nacionalismo autoritario, que se oponen antitéticamente, tenemos un federalismo popular y un federalismo de las élites. Un federalismo vivo, que nace y se desarrolla en las prácticas políticas del pueblo, y un federalismo de cartón de algunas dirigencias conservadoras que lo toman como excusa para aferrarse al poder.

Un bueno ejemplo de este federalismo popular es el de Facundo Quiroga. En 1826, el caudillo riojano se levantó contra el atropello del gobierno central de Bernardino Rivadavia, por la propiedad de la mina de plata del cerro Famatina. Rivadavia pretendía ponerla bajo la órbita nacional mientras que Quiroga prefería afirmar la autoridad provincial.

Ese fue el primer antecedente de un reclamo federal sobre los recursos del subsuelo. Fue una lucha entre un poder que empezaba a pretenderse hegemónico (el puerto) contra un interior que buscaba un desarrollo independiente.

Un ejemplo de “Federalismo de cartón”: en 1920, provincias productoras del Norte (caso Salta), evitaron sumarse a la experiencia de YPF y prefirieron negociar con multinacionales como Standard Oil. Intereses que contribuyeron al golpe de 1930 contra Yrigoyen. Un golpe con olor a petróleo.

La experiencia histórica posterior – especialmente la historia reciente -, nos debe permitir sacar algunas enseñanzas que potencien el desarrollo equilibrado del país, sin subalternizar a ninguna región en beneficio de otras.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La reforma de la Constitución de 1994, en su artículo 124, estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Recogía así un viejo anhelo de las provincias.

Y así como hablaba de “economía de enclave” para definir la política instrumentada por Repsol en YPF, también podemos definir como “economía de enclave” la que dispuso la vieja YPF sobre los territorios nacionales – especialmente en la Patagonia -, y en las provincias.

El modelo centralizado y radial de la YPF anterior a la privatización ya estaba mostrando sus limitaciones en la década del 80. Había sido de gran utilidad y fue un ejemplo internacional hasta los 70, por su capacidad de acción, la generación de recursos y la capacitación de su personal. Pero hacia dentro de las provincias empezaban a verse algunas limitaciones: los pasivos ambientales, la dificultad para hacerse escuchar por las autoridades nacionales, la priorización de trabajos según las necesidades de las áreas más pobladas del país y no del desarrollo regional, el olvido por generar economías sustentables en conjunto con los estados provinciales.

Desde su creación, en 1957, las nuevas provincias de Río Negro y Neuquén asentaron en sus Constituciones la propiedad provincial del subsuelo y los recursos naturales. Pero dejaban en claro – lo que quedó a salvo en las distintas reformas constitucionales -, que la explotación de los hidrocarburos debía realizarse en conjunto con el Estado nacional.

Esa búsqueda de equilibrio no fue el común denominador en otros estados provinciales: en sus Constituciones hay pocas menciones a la participación de la Nación, y en un caso se establece el principio de “subsidiaridad” del Estado en la explotación. Un digno testimonio del paradigma privatizador de los 90 y que, estimo, sería importante empezar a salvar a partir de la aprobación de este proyecto que estamos tratando.

Este proyecto nos lleva a la consolidación del federalismo por dos vías:

- Para las provincias productoras, la posibilidad de participar en las decisiones al ser parte de la empresa YPF;
- Para todas las provincias, la posibilidad de definir las políticas petroleras en el ámbito del Consejo Federal de Hidrocarburos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Creo que se confunde – en algunos casos involuntariamente; otras veces, a propósito –, la situación de los estados productores de hidrocarburos. Hay quienes pretenden compararlos a una renta natural de la tierra, como la de la soja, y prefieren olvidar que en realidad, los hidrocarburos son recursos no renovables y lo que las provincias productoras quieren es una oportunidad para preparar sus economías en vista de esa posibilidad futura.

Y hay otros que afirman que por contar con destilerías y sistemas de almacenamiento o transporte, deben también ser parte de esta renta petrolera extraordinaria. Esto es un error porque en un caso estamos hablando de una retribución a la propiedad del recurso. Y en el otro, los servicios, tienen diferentes gravámenes que le permiten también participar de la renta petrolera.

Considero que este proyecto que estamos tratando hoy en la Cámara es superador de experiencias pasadas; que establece un claro equilibrio entre el necesario federalismo y las necesidades de la Nación contemplada como un todo; que nos permitirá mantener el desarrollo autosustentable y con inclusión social que caracteriza a este modelo que comenzó en mayo de 2003.

5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BARCHETTA

Fundamentos del apoyo en general del bloque del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Señor Presidente:

El señor diputado Juan Carlos Zabalza ya expresó el voto positivo que damos en general los legisladores del Partido Socialista, interbloque Frente Amplio Progresista al proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del patrimonio de YPF S.A., que estamos debatiendo en esta sesión. Se trata de mantener una posición coherente con nuestro programa histórico: a diferencia de muchos funcionarios que hoy integran el gobierno nacional, los integrantes del Partido Socialista, no apoyamos ninguna de las privatizaciones que se concretaron en la década del 90, ni brindamos respaldo a la política de vaciamiento de los últimos años.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Vamos a acompañar en general la iniciativa del Poder Ejecutivo porque creemos en la participación del Estado en la vida económica nacional, con un rol protagónico en la defensa de la soberanía y los recursos naturales. Pero esto no inhibe la posibilidad de plantear las serias disidencias que tenemos con el proyecto y con el modelo llevado adelante por el gobierno nacional en materia energética.

Está claro, en primer lugar, que esta propuesta del PEN que hoy discutimos viene a emparchar los fracasos de la política oficial desde 2003 en materia hidrocarburífera. No podríamos llamar de otro modo al esquema que nos llevó en menos de una década a ser nación importadora de hidrocarburos, cuando veníamos de aplicar un modelo en esta materia que en el siglo XX copiaban países como México o Brasil.

En este contexto, me gustaría recordar que tras su nacimiento en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creciendo con una fuerza notable, por la visión estratégica de figuras públicas como Enrique Mosconi y gracias al aporte de millones de anónimos en todo el país. YPF fue un símbolo de la Argentina que creyó en sí misma y estuvo presente desde siempre en las regiones más distantes. Todas las provincias contribuyeron al crecimiento de la empresa. Con el pago de sus impuestos los argentinos, a través de varias generaciones, aportaron para la investigación y el desarrollo de nuevas áreas petroleras y refinerías.

Si el compromiso que este Parlamento quiere asumir es el de hacer honor a esa tradición, no se pueden ratificar los artículos que plantean esta federalización incompleta de los recursos petroleros nacionales.

Si dejáramos afuera del esquema de reparto de utilidades a las provincias que no tienen actualmente producción de gas y petróleo, estaríamos legitimando un criterio discriminatorio.

Como legislador santafesino no puedo obviar el hecho de que los recursos que obtiene el Estado nacional por los derechos de exportación de la soja son coparticipados con todas las provincias, a pesar de que en muchas de ellas no existen áreas sembradas con dicha oleaginosa. Es decir, no se aplica para todos los casos el mismo criterio.

Nuestra posición sostiene una mirada más amplia que la planteada en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Si se pretende preservar para todos los argentinos los recursos hidrocarburíferos y nacionalizarlos para garantizar que la renta petrolera contribuya efectivamente al desarrollo de toda la Nación, todas las provincias deberían estar incluidas en la ley sobre el control de YPF.

Por otro lado, la exploración, refinación y comercialización de los hidrocarburos se llevan a cabo hoy con los decretos vigentes desde 1989, que permitieron en las últimas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

dos décadas la privatización, el desguace y posterior vaciamiento de YPF y la extracción salvaje de nuestras reservas y utilidades. Es por ello que tal como planteamos en el dictamen de minoría del interbloque Frente Amplio Progresista, creemos que debe diseñarse con urgencia un nuevo marco regulatorio para el sector en la Argentina que permita modificar en profundidad la política energética nacional. En la misma línea, quiero expresar:

- Los argentinos tenemos la oportunidad de evitar nuevos fracasos. Para ello, debemos evitar que se desnaturalice una decisión tan importante como la de volver a involucrar al Estado nacional en la administración de los recursos energéticos. La nueva YPF con participación mayoritaria del Estado nacional y de las provincias en su paquete accionario, necesita transparencia, y para ello debe estar alcanzada por los organismos de control como la Auditoría General de la Nación y la SIGEN.
- Asimismo, la nueva YPF debe tener un fuerte control social. Las organizaciones sociales, los trabajadores, los usuarios y representantes de todos los partidos políticos debemos tener acceso a sus mecanismos de control y de gestión, de modo de garantizar que la empresa sea efectivamente de carácter público.
- Por último, así como se decidió la expropiación de acciones de la empresa Repsol debido a sus repetidos incumplimientos en su participación en YPF, debería retomarse el control del cien por ciento del paquete accionario de la firma petrolera. Si la finalidad es que los argentinos recuperemos nuestra soberanía hidrocarburífera, debemos revisar también la continuidad del grupo Petersen en el esquema accionario de YPF. Es de público conocimiento que se trata de accionistas que tomaron créditos en 2007 para financiar su ingreso a la compañía, a pagar con las utilidades obtenidas por la misma. Se trata de un esquema que le impide a este sector de accionistas contribuir al crecimiento de YPF, ya que ellos mismos tienen previsto destinar todos los dividendos obtenidos a seguir pagando la compra de acciones.

Estos son algunos de los lineamientos que entiendo deberían tenerse en cuenta de aquí en más para caminar hacia una verdadera recuperación de nuestra soberanía energética. Para finalizar, sintetizo todo lo dicho aquí con la posición que hemos asumido desde el interbloque FAP durante esta sesión: “Nosotros no la privatizamos, nosotros no la vaciamos”.

6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BEDANO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Esta sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se vive como una fecha histórica porque se trata de la recuperación de la decisión argentina sobre los estratégicos recursos energéticos.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, adoptó la decisión de expropiar el 51% del capital accionario de la principal empresa del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, (YPF) inscribiendo una página en la larga etapa argentina por el control de sus recursos de energía en el plano de los hidrocarburos que son imprescindibles para el desarrollo presente y futuro de nuestra economía, que reconoce un notable crecimiento que correría el riesgo de soportar trabas inexpugnables de no asumirse y encararse el problema de la energía.

Con la decisión de expropiar el 51% del capital accionario el Estado pretende avanzar hacia el autoabastecimiento de hidrocarburos que se alcanzó durante muchos años. La nueva YPF debe proporcionar la solución a los problemas de la explotación, la industrialización y comercialización de combustibles.

La Argentina está consolidando su economía con sostenido crecimiento y se requiere la solución de los problemas energéticos. Sin esa solución no existirá justicia social ni creación de empleos.

YPF significa trabajo, crecimiento sustentable y desarrollo en las provincias. El capital público y privado, argentino o extranjero, es y será bienvenido en la medida que se brinde al desarrollo de las altas políticas que fije el Estado nacional.

Argentina convertida en país importador

Es evidente que las políticas de privatización de YPF no arrojaron resultados, fueron un fracaso. Se dismanteló una empresa de primera línea, con prestigio internacional, para llegar al año 2011 como país importador de petróleo y gas constituyendo un pesado gravamen para la economía argentina. El déficit del citado año fue de 3.029 millones de dólares. Debiendo importarse en 2011 9.300 millones de dólares. Lo paradójico es que YPF, convertida en empresa privada, desde el año 1999 hasta 2011 obtuvo utilidades por 16.450 millones de dólares.

La presidenta de la Nación lo manifestó con claridad en el discurso de elevación del proyecto ahora en análisis: "de proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por (falta) de recursos, ya que somos el 3er. país en el mundo -según la agencia de petróleo de los Estados Unidos- luego de China y EEUU en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

tener gas".

Sin embargo, pese a las evidentes ventajas hidrocarburíferas, lo notable es que somos un país que debe importar petróleo.

YPF: nueva etapa

Con la nacionalización de los recursos amparados en este proyecto la Argentina asume un gran desafío. Deberá reordenarse la empresa, ponerla en funcionamiento invirtiendo en exploración de nuevos recursos. Es rol del Congreso, en lo inmediato, apoyar la intervención dispuesta por el Ejecutivo hasta la constitución del CONSEJO FEDERAL DE HIDROCARBUROS, organismo responsable de promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales para la fijación de la política hidrocarburífera de la Argentina.

YPF, desde los años del general Enrique Mosconi, fue una de las grandes empresas del mundo llevada al fracaso empresarial. Pasó del autoabastecimiento petrolífero a permanecer actualmente en el listado de único país que no maneja los recursos naturales.

Declaración de utilidad pública sujeto a expropiación

El 51% del patrimonio de la empresa perteneciente a REPSOL-YPF, que es sujeto a expropiación, es una decisión correcta que se adopta a los efectos del cumplimiento de los objetivos enunciados. Del total, un 51% corresponderá al Estado nacional y el 49% a las provincias, en forma equitativa en relación con los niveles de producción y de reservas, integradas en la organización federal.

El nuevo directorio de YPF atendiendo, al 51% expropiado se conformará en proporción a las tenencias de Nación, provincias y la representación de los trabajadores de la misma. El Congreso de la Nación tiene potestad sobre la futura transferencia.

Considero que el proyecto de ley al que Diputados brinda tratamiento contempla los derechos constitucionales que amparan el capital privado y los intereses soberanos del Estado argentino de disponer de los recursos naturales.

No puede aceptarse lo que se afirma desde algún bloque de minoría de que la nacionalización sea "llevarse por delante los principios jurídicos".

Por el contrario, la norma asegura una YPF controlada y ordenada, contemplada en los derechos y obligaciones de la Constitución Nacional.

Como representantes del pueblo argentino, como diputados de la Nación que nos toca actuar en las presentes circunstancias, debemos brindar un impulso positivo y hacerlo con seguridad, dado que YPF resume el futuro de las generaciones por venir.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

7. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BERTOL

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de minoría del bloque Propuesta Republicana en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Tal como expresé en mi intervención en el recinto de esta Cámara reitero mi rechazo al proyecto venido en revisión del Senado sobre declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de la acciones clase “D” de dicha empresa pertenecientes a REPSOL YPF S.A. sus controlantes o controladas, en forma directa e indirecta (OD 288-D-12; expediente 29–S-2012).

Asimismo, sostengo mi voto favorable al dictamen de minoría presentado por mi bloque Propuesta Republicana.

En primer lugar, creo que hoy deberíamos estar aquí analizando y diseñando entre todos una política de estado de largo plazo que nos ayude a resolver la crisis energética que afecta a nuestro país. Una política pública que nos inicie en un camino de mejora de la institucionalidad del sector, dotándolo de las más eficientes y modernas leyes e instituciones; y no un proyecto como el venido en revisión que no aporta soluciones a la falta de inversiones en el ámbito energético, no promueve el autoabastecimiento ni mejora un gerenciamiento hasta ahora deficiente.

Esta situación, sin embargo, no resulta sorprendente cuando el tema energético ha sido hasta hoy voluntariamente ignorado, o invisibilizado, por el gobierno nacional. Tanto es así, que la presidente Cristina Fernández de Kirchner no lo ha mencionado en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año.

Hablamos de crisis energética con fundamento en los sucesivos documentos públicos de los ex secretarios de Energía de la Nación que bien describen la precaria situación del sector energético de nuestro país y que, desde su conocimiento y experiencia, proponen medidas a implementar en el largo plazo a fin de revertir la señalada crisis (pueden consultarse en www.iae.org.ar sitio Web del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”).

En materia de política petrolera dichos documentos, señalan como componentes básicos de un programa a debatir y proyectar:

1. planificar a largo plazo;
2. asegurar a largo plazo el autoabastecimiento de hidrocarburos con nuestros propios yacimientos;
3. implementar una nueva política petrolera que infunda seguridad a los inversores y al



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mismo tiempo consagre como principio general el mecanismo de adjudicaciones de concesiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas; en la cual no se renueven contratos de concesión en forma directa y sin puja licitatoria;

4. reformar la ley de hidrocarburos para fortalecer el papel del Estado nacional en la definición de los criterios generales para la adjudicación de concesiones de áreas de gas y petróleo;

5. consagrar como principio general la estabilidad tributaria por el tiempo de la concesión (los mismos criterios se aplicaran para la construcción de las nuevas refinerías que el país ya necesita);

6. crear una agencia nacional de hidrocarburos con la misión de: llevar adelante la política nacional en materia de exploración y producción de hidrocarburos; realizar la planificación del subsector hidrocarburos; coordinar con las administraciones provinciales la aplicación homogénea en todo el territorio nacional de la política petrolera y gasífera que debe ser única; representar los intereses del Estado nacional en la plataforma económica exclusiva; llevar la estadística sectorial en forma transparente; ser responsable de las licitaciones de áreas exploratorias en el mar; realizar auditorías de reservas en las áreas concesionadas y permisionadas; entre otras cuestiones.

7. adecuar a ENARSA a fin de que alcance un funcionamiento eficiente, sometido al control de la Auditoría General de la Nación para la realización sólo de aquellas funciones que le sean encomendadas expresamente por el estado nacional para el adecuado funcionamiento del sector energético argentino.

A ello suman los expertos citados, la necesidad de una diversificación de la matriz energética y de una política de conservación energética que contribuya a la mitigación del cambio climático.

Señor presidente: una política de Estado significa un objetivo público a alcanzar a través de decisiones articuladas con participación del sector público y privado y de la ciudadanía que se conciben para generar un impacto en el tiempo y se concretan con una planificación estratégica.

Coincidimos con la senadora Norma Morandini cuando nos dice que: “Construir una política de Estado no es sólo la validación mayoritaria de una ley, política de Estado, es construir la política con los otros”.

Por el contrario, lo que hoy estamos discutiendo, no coincide ni con lo expuesto por los secretarios de Energía, ni constituye una política pública concertada, es tan solo un mal proyecto, que:

i. no garantiza la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento nacional en materia de hidrocarburos;



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

ii. no garantiza la estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos del momento de registro de cada inversión, ni las políticas de importación de insumos, de exportación de productos y de transferencia de utilidades; y

iii. no promueve un federalismo de concertación en el que estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires se brinden asistencia mutua a los efectos de fortalecer las potencialidades nacionales en materia de producción y agregación de valor, la capacidad de financiamiento a tasas competitivas y la capacidad de negociación de los estados provinciales.

Surgen entonces muchas preguntas que quedan sin respuesta:

I - ¿Cómo podemos pensar que la solución de la crisis energética vendrá de la mano de las mismas personas que han sido responsables de ella?

Si el gobierno es socio parte del derrumbe de YPF porque nunca ejerció los controles legales debidos, ¿por qué vamos a pensar que ahora lo hará? ¿Por qué darles el control a los “descontrolados” de los trenes y de una línea aérea nacional que ni siquiera tiene en orden sus balances?

¿Será porque YPF es también parte del relato, del recorte de la realidad, como el INDEC y sus índices falaces; como el amor declamado por los jubilados y por la mejora de sus condiciones de vida, cuando por otro lado se usan los fondos de la ANSES para cubrir cuanta deuda el Estado tiene o cuanto emprendimiento la señora presidenta imagina o promueve?

II - ¿Cómo podemos pensar en afrontar una gestión eficiente de una empresa estatal si no contamos con los recursos humanos necesarios para ello?

Actualmente, en la Argentina no existe un registro unificado, ni accesible, que nos informe sobre la cantidad y disponibilidad de profesionales relacionados con la investigación de hidrocarburos: ingenieros (especializados en petróleo, gas, etc.); geólogos; geofísicos y especialistas en Ciencias del Mar, cuando hay un desarrollo de la investigación Off-Shore.

El Consejo Superior Profesional de Geología, único organismo que pudo acercarnos algunos datos en base a sus socios, estimó el siguiente número de profesionales en la Argentina:

- a) Geólogos: 2000 profesionales en la actualidad.
- b) Geofísicos: 250 profesionales en la actualidad.

Lamentablemente, pese a varios requerimientos, el Conicet no nos proporcionó la información solicitada.

Comparando estos datos con Brasil, surge claramente la poca inversión en recursos humanos, con relación a profesionales expertos en manejo de hidrocarburos que se da en nuestro país.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Brasil otorga becas de postgrados (en Japón, Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, entre otros), para alrededor de 100.000 graduados anualmente. Las áreas son: Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Geología, Ingeniería en petróleo e hidrocarburos. Esto tiene un costo de 1.800 millones de dólares anuales. (puede consultarse www.sys2.sbgf.org.br Sociedade Brasileira de Geofísica)

Por supuesto, que la comparación debe hacerse tomando en cuenta las diferencias entre Petrobras e YPF; a saber, la primera tiene una tasación de 158.300 millones de dólares, mientras que YPF 7.600 millones. Esto es sólo un 4,8% del valor de la empresa Brasileira. Asimismo, la cantidad de empleados en el grupo Petrobras es de 77.000 mientras que en YPF es de 13.448.

III - ¿Cómo podemos avalar a través de este proyecto la forma en que actuó el gobierno nacional, el cual a través de un decreto de necesidad y urgencia intervino una empresa privada, echó a sus directores y tomó el control? (decreto N° 530/12).

Tal como lo señalamos en nuestro dictamen de minoría, no existen antecedentes legislativos en períodos democráticos por el cual el Congreso de la Nación haya intervenido una empresa privada por ley o el Poder Ejecutivo por decreto. Los antecedentes encontrados de esa especie son todos de dictaduras militares. En nuestro ordenamiento jurídico, las intervenciones a una empresa privada sólo pueden ser dispuestas por un juez, a pedido de un socio o de autoridad administrativa (art. 113 y ss, y art. 303, inc. 2°, ley 19.550).

Advertida esta situación, observamos además que el dictado del decreto N° 530/12 no se encontró rodeado de las circunstancias fácticas excepcionales o extraordinarias que exige el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional para su emisión.

El artículo 99 de la Constitución Nacional establece: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... inc. 3). Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.”

Frente a la claridad del texto constitucional no caben dudas que el decreto N° 530/12 fue emitido sin la existencia de una situación de excepcionalidad que implique la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. No existía imposibilidad de tratar la medida por el proceso ordinario que demanda la sanción de las leyes, ya que el Congreso Nacional se encontraba en el momento de su dictado en período de sesiones ordinarias, y tal como se puede observar, el Congreso está aprobando leyes en tiempo récord desde el comienzo de sus sesiones de este año. Sin embargo, ¿cuáles son las circunstancias que según el proyecto del Poder Ejecutivo habilitan a su emisión?



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Si leemos los considerandos del DNU en cuestión nos encontramos con un análisis técnico económico del sector petrolero que abarca el período 1997-2011. En dicha reseña hay cuadros comparativos y datos de la economía de los últimos 14 años. No hay en el escrito ningún señalamiento a un hecho o una situación puntual que por su excepcionalidad o magnitud se traduzca en un grave riesgo para la población que justifique la medida “excepcional” adoptada. Demostrativo de ello es el considerando en el cual se dice “Que la estrategia predatoria por parte de Repsol-YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional, puesto que como consecuencia, las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas”. ¿Dónde está el hecho excepcional y contemporáneo que justifica la intervención intempestiva e ilegal de una empresa privada a través del dictado de un DNU? No lo vamos a encontrar porque no existe, del propio texto del decreto se puede arribar validamente a esa conclusión.

Por otra parte, preocupa el párrafo que dice “Que asimismo, para asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se propician a través del referido Proyecto de Ley que se envía en el día de la fecha, resulta imperioso el dictado de un acto de esta naturaleza, a fin de adoptar las disposiciones necesarias que la urgencia requiere, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, disponiéndose la intervención transitoria de YPF S.A. por un plazo de TREINTA (30) días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país...”

Esta manifestación demuestra el avasallamiento del Poder Ejecutivo por sobre las facultades exclusivas del Poder Judicial. El Ejecutivo ha pretendido adoptar una medida cautelar como si fuera el juez de una causa.

No había “necesidad ni urgencia” que justificara el dictado del DNU 530/12, y tampoco el objeto del mismo. - intervención a una empresa privada -, podría haberse satisfecho por una medida así, ni aún ante la existencia de la urgencia invocada.

El DNU 530/2012 no supera el test de constitucionalidad requerido, ya que el objeto del mismo no es un presupuesto habilitante para el dictado de un DNU.

Del carácter excepcional de los decretos surge que el análisis sobre su utilización debe realizarse con un carácter sumamente restrictivo, toda vez que una interpretación amplia lesionaría el principio de división de poderes.

Con el dictado del DNU N° 530/2012 se viola doblemente la división de poderes, por un lado se avasalla la potestad legislativa y por el otro la del poder judicial al decretar una intervención de las personas jurídicas, que por imperio de lo establecido por el artículo 113 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550) debe establecerse a través de la correspondiente manda judicial, siendo inviable que la misma sea dispuesta empleándose un decreto de necesidad y urgencia.

El Estado como accionista poseía un representante en el directorio de YPF S.A, y desde ese lugar podría haber ejercido el control sobre las decisiones societarias y, en su caso, haber solicitado la intervención judicial de la empresa si lo consideraba necesario. No lo hizo.

Por el contrario, prefirió evadir ilegalmente el trámite ordinario de las leyes y los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

procesos judiciales pertinentes, utilizando una herramienta excepcional como los decretos de necesidad y urgencia sin la existencia de los presupuestos que lo validan. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto

Ante la claridad del alcance del art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la inexistencia de los presupuestos que habilitan la facultad excepcional conferida al Poder Ejecutivo, sumado a los argumentos que se desarrollarán en el punto siguiente respecto a las incompatibilidades de los funcionarios designados para ocupar transitoriamente los cargos jerárquicos en YPF SA, propugnamos el rechazo del decreto N° 530/2012 y la declaración de nulidad de la intervención efectuada por Poder Ejecutivo en YPF SA.

IV - ¿Cómo podemos avalar a través de este proyecto las designaciones del ministro de planificación federal, inversión pública y Servicios, JULIO DE VIDO, el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Lic. AXEL KICILLOF, y todos los demás funcionarios públicos que fueron elegidos para ocupar cargos jerárquicos en la empresa YPF S.A., si tales nombramientos son incompatibles en relación con las normas vigentes de la ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública y del Código de Ética de la Función Pública (Decreto 41/99)?

Todas las designaciones de funcionarios públicos para ocupar cargos jerárquicos en la empresa YPF S.A. con motivo de la intervención dispuesta por el decreto 530/2012 violan la ley 25.188 de Etica en la función pública, el Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99) y sus normas reglamentarias.

Existe incompatibilidad de funciones en los casos del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido y del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, designados temporariamente al frente de YPF, según Decreto N° 530/2012. Esta situación fue denunciada ante la Oficina Anticorrupción a cargo del Dr. Julio Vitobello por nuestro bloque Propuesta Republicana, acompañado de diputados de distintos bloques políticos.

La lista de funcionarios denunciados por estar comprendidos por serias incompatibilidades en sus designaciones son:

- 1) Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios e interventor de YPF S.A.
- 2) Axel Kicillof, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y subinterventor de YPF S.A.
- 3) José Strada, ministro de Infraestructura de la Provincia de San Juan y secretario general de la intervención de YPF S.A.
- 4) Nicolás Arceo, subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y director económico financiero de YFP S.A.
- 5) Rodrigo Cuesta, síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación y director de Servicios Jurídicos y Administrativos y Fiscales de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- 6) Emmanuel Alvarez Agis, subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y director Comercial de YPF S.A.
- 7) José María Olazagasti, secretario privado del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y director de Comunicación e Imagen de YPF S.A.
- 8) Juan Manuel Abud, vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Energía y director de Recursos Humanos de YPF S.A.
- 9) Juan José CARBAJALES: Director de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima; Dirección de Firmas Participadas;
- 10) Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
- 11) Antonio Pronsato, interventor del Enargas y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
- 12) Damián Camacho, vicepresidente 2° del Banco de Inversión y Comercio Exterior y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
- 13) Luis Vitullo, coordinador del Plan Argentina Conectada y miembro de la Unidad General de Operaciones de YPF S.A.
- 14) Walter Fagyas, asesor del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y director de Downstream de YPF S.A.
- 15) Exequiel Espinoza, presidente de ENARSA y director de Upstream de YPF S.A.

Estos funcionarios están afectados por incompatibilidades absolutas para desempeñarse como directivos de YPF S.A. o de la intervención en esa sociedad, por las siguientes consideraciones:

- a) Sus designaciones violan los arts. 1°, 13, 15, inciso a) de la ley 25.188 de ética en la función pública. En caso de persistir la incompatibilidad denunciada, la consecuencia está prevista en el art. 17 de la ley 25.188, que establece claramente que los actos emitidos en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta, y que las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
- b) Además, estas designaciones quebrantan diversas disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por decreto 41/99. En particular, se violan los artículos 23, 41 y 44.
- c) También infringen el "Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por decreto 8566/61, y expresamente extendido por el decreto 946/2001 al ámbito del Sector Público Nacional descripto en el artículo 8°, incisos a) y b), de la ley 24.156.

A modo ejemplificativo señalo sólo la incompatibilidad del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido.

De Vido fue nombrado interventor de la empresa YPF S.A. por el decreto 530/2012, en él se establece que el interventor tendrá las facultades que el estatuto de YPF S.A. confiere al directorio y/o presidente de la empresa.

Por su parte, la ley 22.520 de ministerios, atribuye en su art. 22 como competencia del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a la energía. En especial, le corresponde entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional (inc. 35), y en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas (art. 36).

Por ello, resulta manifiesta la imposibilidad de que el ministro De Vido sea interventor de YPF S.A., atento a que dicha empresa realiza actividades que caen bajo el ámbito de competencia de la cartera ministerial del citado funcionario.

La confrontación de los hechos expuestos con las normas jurídicas referenciadas, dan cuenta prima facie que nos encontramos ante un supuesto de violación del bloque normativo que establece el sistema de incompatibilidades ético-funcionales aplicables a las personas que ocupan cargos en el Estado.

Tal como indiqué en mi discurso, adjunto a este escrito el texto completo de la denuncia presentada conjuntamente por los diputados Pablo Tonelli, Paula Bertol, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Federico Pinedo, Julián Obligio y Eduardo Amadeo presentada ante el Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción Dr. Julio F. Vitobello el 2 de mayo de 2012.

V - ¿Cómo podemos avalar a través de este proyecto los años de falta de información pública sobre la real marcha del sector energético, la falta de transparencia que no nos permite un diagnóstico serio sobre la situación, que no nos permite ser previsibles?

Creo en la necesidad de un Estado transparente, profesional, de cara a la gente. Suscribo por ello los dichos del Senador Sanz vertidos en la sesión del día 25 de abril del corriente año en la Cámara de Senadores, a quién aquí cito: “Se trata del siglo XXI y el Estado más que pequeño o grande debe ser inteligente. Y un Estado inteligente, que es lo que tenemos que discutir en la Argentina hoy, en estas horas, debe proteger y explotar sus recursos con visión estratégica, asociándose con los privados, no dependiendo ni renegando de ellos. Un Estado inteligente protege a sus empresas en el mundo, impulsa la reinserción de su producción, y en el extranjero abre mercados y fortalece vínculos. Un Estado inteligente apuesta fuerte y decididamente por la innovación. Un Estado inteligente es previsible para propios y extraños, para el pequeño comerciante, para el trabajador por hora y para el gran inversor. ¡Para todos! Ahora bien, a fin de construir y hacer efectivo ese Estado inteligente, es necesario despojarse de atavismos ideológicos y de consignas del siglo pasado”.

VII – ¿Cómo podemos avalar un proyecto que prevé en su artículo 15 que YPF SA continuará operando como sociedad anónima según la ley 19.550, no siéndole aplicable la legislación vigente sobre control de las empresas o entidades en las que el estado nacional o los estados provinciales tienen participación?

VIII - ¿Cómo podemos avalar un proyecto que dispone la expropiación por causa de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública de parte del capital accionario de YPF, discriminado entre sus socios y sobre el que el propio gobierno a través del secretario Axel Kicillof ha expresado que "no se pagará un peso"?

Señor presidente, si aprobamos este proyecto:

1. YPF seguirá siendo privada.
2. El Estado se habrá apropiado intempestivamente de acciones, sin pagar su precio.
3. Habrá ingresado un accionista de facto a la empresa.
4. Se controlará a los estados provinciales mediante un convenio de sindicalización obligatoria de acciones.

DICTAMEN DE MINORIA

Por todas las razones expuestas, acompaño el dictamen de minoría del Bloque Propuesta Republicana, cuyo contenido resumo a continuación, de manera muy sintética:

Mi bloque propone un proyecto de ley alternativo sobre GARANTIA FEDERAL Y AUTOABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS.

Su objeto es establecer pautas de cooperación inter jurisdiccional a los efectos de implementar un federalismo de concertación en materia de hidrocarburos, con la finalidad de:

- a) garantizar a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus derechos al dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y al ejercicio de todo poder no delegado al gobierno federal por la Constitución Nacional; y
- b) promover el desarrollo de mecanismos que garanticen la realización de las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr el autoabastecimiento.

En materia de DERECHOS PROVINCIALES Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, nuestro proyecto ratifica que las provincias mantienen, como parte de su patrimonio inalienable e imprescriptible, el dominio originario y la administración sobre los yacimientos líquidos y gaseosos que se encuentran en sus ámbitos territoriales. Al mismo tiempo que enfatiza que corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en su territorio o bajo su jurisdicción en el lecho argentino del río de la Plata.

Las provincias podrán efectuar la exploración y explotación de hidrocarburos a través de la estructura administrativa organizativa que estimen correspondiente.

Como nos preocupa la PROMOCION DE INVERSIONES PARA EL AUTOABASTECIMIENTO, el proyecto establece que el Estado nacional ejercerá sus funciones respetando los siguientes principios de acción:

- a) la estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos del momento de registro de cada inversión, por 10 años, incluyendo las políticas de importación de insumos, de exportación de productos y de transferencia de utilidades;
- b) el respeto de precios de mercado para los productos hidrocarburíferos, sin perjuicio



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de las políticas redistributivas que se implementen por leyes impositivas generales, razonables y no discriminatorias;

c) la estabilidad de las pautas establecidas por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en materia de regalías al momento de registro de cada inversión, por diez años; y

d) el otorgamiento de facilidades y estímulos impositivos para la exploración en la plataforma marítima argentina.

El proyecto propone hacer cierto el FEDERALISMO DE CONCERTACION y por ello determina que el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán acciones que les permitan tener una información transparente y completa de los procesos de exploración, explotación y elaboración de hidrocarburos. Se brindarán asistencia mutua a los efectos de fortalecer las potencialidades nacionales.

Además, el dictamen que apoyamos crea el ENTE FEDERAL DE HIDROCARBUROS como entidad autárquica, cuya principal función será: asistir, asesorar y coordinar, cuando corresponda, al Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el ejercicio de sus facultades y competencias en esta materia.

Presidido por un representante del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, estará integrado por un representante de cada provincia y uno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la selección de sus directivos y funcionarios superiores se regirá por el principio de idoneidad, transparencia, publicidad y participación ciudadana.

Por sobre todo, este ENTE deberá garantizar las condiciones de accesibilidad para la información del sector que propicien la rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana en los asuntos de la materia.

REFLEXIONES FINALES

Pensar que todo lo ocurrido, que la crisis energética fue producto sólo de la codicia e impericia de los empresarios de Repsol es sólo posible en la mente de los funcionarios y legisladores incondicionales al gobierno, quienes nada cuestionan, nada observan ni advierten, sólo acompañan y aplauden. La incondicionalidad resta criterio y razón a quienes la ofrecen y, además, el tiempo y los acontecimientos la van diluyendo hasta hacerla desaparecer, en perjuicio de quienes hoy son destinatarios de la misma.

¿Quiénes son los responsables de que un país exportador de repente se convierta en un país importador de energía? ¿Por qué nos se controló? ¿Por qué se toman medidas tres años más tarde?

¿Por qué no pensar que hubo otras complicidades, gatopardismos, negociados, acuerdos espurios, tal como venimos advirtiendo que se han producido en el marco de la mayoría de las negociaciones que el gobierno nacional conduce, por ejemplo respecto de Aerolíneas Argentinas?

¿Es que acaso esta forma de actuar tendrá resultados positivos en el largo plazo? Señor presidente, no podremos ser prolijos, correctos y adultos sin antes salir de la adolescencia eterna. No podremos madurar sin antes dejar de ser un país que vive



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

reaccionando de manera intempestiva, con un gobierno que golpea puertas, pega puñetazos en las mesas a los gritos y amenaza a todos con el dedo levantado, mientras que un grupo los aplaude incondicionalmente, sin pensar, sin reaccionar ante violaciones sucesivas de derechos y garantías.

La cuestión es no caer en la ilusión de invulnerabilidad y unanimidad que facilita la nube triunfalista de un porcentaje electoral que no será eterno, - porque nunca lo fue. La tendencia al “pensamiento colectivo” puede operar como un ruido de baja intensidad que impide tomar conciencia de las señales de alarma. Todo el mundo parece estar predispuesto a prestar atención selectiva a los mensajes que alimentan “los sentimientos compartidos de confianza y optimismo” de sus miembros, desatendiendo aquellos otros que parezcan desmentirlos. (Goleman Daniel, El punto ciego en las negociaciones).

Tal sensación de confianza elimina las posibilidades de llegar al consenso político, a la creación de una política de estado. Tal sensación de invulnerabilidad va de la mano de la ilusión de unanimidad y suprime la voz disidente.

Entonces, esa seguridad en la que descansa hoy el grupo mayoritario anula el debate al momento de tomar una decisión, - tal como nos ocurre hoy en este recinto.

Seguramente los inversionistas en petróleo, que suelen trabajar en Estados fallidos (inestables), vendrán a la Argentina; pero, ¿se animarán otros empresarios, de distintos ramos, a invertir en un país que no respeta la ley y en el que las políticas públicas son pendulares?

Me sumo a las palabras de Daniel Gustavo Montamat, “[Con este proyecto] han querido tocar el corazón porque han hecho resurgir un símbolo detrás de la sigla de YPF... Sin embargo, no creo que puedan reencarnar en esta YPF de hoy el espíritu de Yrigoyen y de Mosconi”.

Las emociones son impulsos para actuar, la fuerza de ellas lleva a actos de heroísmo. Tal vez eso sientan muchos hoy, quienes rodean a YPF de un halo de simbolismo, de romanticismo, de un significado afectivo que efectivamente lo tiene pero que nada tiene que ver con lo que estamos resolviendo hoy.

¡Cuidado!, la emoción no puede nublar la razón en un lugar como este: el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la mente racional, por lo que es preciso esforzarse porque ambas se equilibren y nos permitan tomar decisiones inteligentes.

Tampoco son las emociones dominio exclusivo de algunas personas, grupos o bloques políticos; todos las sentimos, todos las podemos expresar. Yo pertenezco a una familia “ypefiana” como han dicho muchos en este recinto, pero la YPF de mis padres no es la de hoy, por eso reclamo razón y sensatez a la hora de tomar decisiones. Ello no obsta, sin embargo, a que comparta los sentimientos de quienes con orgullo exhiben un pasado ligado a YPF, y por ello he recordado en esta sesión, con profunda emoción, a mi padre quien fue inspector de YPF durante cuarenta años y al diputado Fescina quien se opuso a la privatización de YPF y junto a quien trabajé en esta Cámara muchos años.

Por último quiero expresar muy claramente que no me opongo a una YPF estatal, pero tampoco a una privada, siempre que sea una empresa eficiente y controlada. Me opongo junto con mi bloque a esta expropiación en particular, en el contexto en el que se está



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

dando.

Nos oponemos a la falta de respeto a la Constitución y a las leyes.

Nos oponemos a la improvisación.

Nos oponemos a la falta de transparencia.

Nos oponemos a la falta de diálogo.

8. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BIANCHI (M. C.)

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Asistimos hoy a una sesión especial, no sólo por la naturaleza de la convocatoria, sino - y fundamentalmente - porque creemos que el objetivo que nos reúne implica la recuperación de un resorte fundamental de la independencia económica, con profundas implicancias en el presente, y también para el futuro.

Quiero señalar que el consenso mayoritario en el que lo hacemos, recupera un instrumento igualmente importante de la soberanía política, como es el ejercicio de la soberanía popular. Estamos reformulando el modo en que el Estado debe posicionarse en una materia tan central del desarrollo con equidad, y lo hacemos en el pleno ejercicio de la representación política.

Respecto de la primera cuestión, por razones de la mejor brevedad, voy a adherir sucintamente a la valoración que ya ha hecho el Poder Ejecutivo al analizar el desempeño de Repsol en el marco de un modelo de negocios negativo para el interés nacional. Esa gestión empresaria se manifestó interesada sólo en la maximización del beneficio inmediato, monetizó reservas sin hacer inversión para reponerlas, y lo que es peor aún, utilizó un recurso estratégico no renovable como un commodity de libre disponibilidad. Asistimos al despliegue de un modelo de negocios sin preocupación por su sostenimiento y reproducción racional en el país, sin preocupación alguna por los costos económicos, sociales o ambientales de su acción, y sin ideas de futuro común con el país.

Como expresaron con desfachatez los ejecutivos españoles en sus presentaciones, la mayor preocupación de Repsol era disminuir "su exposición al riesgo argentino". Con su tamaño y su esquema de negocios, Repsol no solamente definió su política respecto



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de nuestro petróleo y de nuestro gas, sino que -por la vía de su inacción en inversión y exploración- colaboró de manera activa en generar un déficit en la balanza comercial, con lo que perjudicó así la inversión pública en infraestructura, el esfuerzo realizado en el desarrollo de mercados para nuestra producción, la mejora en la industrialización y, en general, el desempeño de nuestra economía. Llevó adelante una gestión predatoria, de liquidación de activos, de vaciamiento y de lógica colonial. Y también profundamente oportunista, porque hizo un aprovechamiento inescrupuloso de una relación de fuerzas negativa para los intereses populares, beneficiándose del resultado social de la dictadura y de la ola neoliberal de los noventa. Sin esos cataclismos sociales, una pequeña empresa refinadora con estaciones de servicio en España jamás hubiera podido hacerse de YPF.

Sabían que ese esquema no podía durar para siempre, y tal vez por eso nunca tuvieron intención de renegociar realmente ninguna de sus decisiones estratégicas. Al contrario, trataron de estirar los plazos con tratativas engañosas, apostaron al fin del ciclo político iniciado en el 2003, y luego a la dificultad de ponerle límites reales.

Apostaron a la presión internacional del establishment económico y financiero, y al lobby corporativo y mediático de adentro y de afuera, amenazando con juicios, sanciones, aislamiento y desfinanciamiento. La respuesta de Repsol frente al reclamo gubernamental constituyó una afrenta a todos los argentinos, no solamente al gobierno al que iba dirigida. Al igual que lo han sido las diatribas patoteras de quienes confunden los intereses del hermano pueblo español y de su Estado, con los de una empresa que ni siquiera lo es.

Para el sostenimiento de su política predatoria y de presión, apostaron a que la Argentina no se iba animar. A que el gobierno nacional no se iba animar. A que la presidenta no se iba animar. Se equivocaron y mucho. No contaron con el temple, el modo y la decisión de nuestra presidenta frente a esta situación. Y es noble reconocerlo en este recinto: no contaron con el espíritu y la vocación nacional de la abrumadora mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y el gigantesco apoyo de la ciudadanía argentina.

En este día de recuperación quiero compartir con los demás diputados mi agradecimiento militante a la presidenta por esta valiente decisión, y por otras tan significativas del ciclo iniciado el 25 de mayo de 2003 por Néstor Kirchner, sin las cuales no hubiera sido posible arribar a este momento en estas condiciones. La reconstrucción de la rectoría económica del Estado, la refinanciación de la deuda, el pago al Fondo Monetario, la recuperación de la administración de los fondos jubilatorios. La restitución y ampliación de derechos sociales y civiles: la libre negociación salarial en las paritarias, los millones de nuevos jubilados, la movilidad semestral de las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario. La política en materia de derechos humanos basada en memoria, verdad y justicia, con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por los tribunales de la Constitución y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sus correspondientes garantías sustanciales y procesales. La promoción de la integración regional: el no al ALCA, el fortalecimiento del Mercosur y la construcción de la UNASUR. La celosa defensa de la soberanía popular frente a cualquier tutela militar, corporativa o mediática.

Quiero expresarlo como agradecimiento militante, porque este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo devuelve una vez más al peronismo su sentido y su razón de ser. A ese peronismo combativo, resistente, espacio fundamental de la constitución política del movimiento obrero y del movimiento nacional, saga de las principales luchas populares del siglo XX por el que opté por la política hace más de cuarenta años. Porque nos devuelve a esa idea de justicia, independencia y soberanía que nos conmovió y nos llevó a la militancia. Sé que en este reconocimiento a nuestra presidenta represento a los miles de peronistas que resistieron a la oleada neoliberal cada día, y que hoy se sienten orgullosos y satisfechos. No resignaron nunca su esperanza y su convicción porque entre otras cosas, se han sentido al igual que yo responsables de sostener con la conducta personal y política la lucha, la alegría, el trabajo, la ética de miles de compañeros que dieron lo mejor de sí para hacer de esta Argentina un país más igualitario y más justo. Para todos esos militantes, los que están aquí y los que ya no, hoy es un día de reivindicación.

No quisiera, desde ningún punto de vista, marcar diferencias en un momento de unidad como éste, pero sí señalar, para aquellos que pretenden reducir al gobierno a un mero ejercicio del poder sin programa, que la naturaleza histórica del movimiento nacional se revela una y otra vez en un programa popular con potencia y con capacidad para protagonizar episodios con la entidad del que hoy estamos viviendo.

Porque este proyecto, no es como se ha dicho en estos días, ni un simulacro de progresismo, ni una confiscación, ni el ejercicio oportunista de la voluntad política para manejar una caja más. Tampoco es una reacción tardía como reducen otros. Estamos ante una muestra de la autonomía de la política frente a las tutelas corporativas, sean empresarias o mediáticas. Estamos ante un acto de ejercicio de defensa del interés nacional, de la soberanía económica, de la inclusión y de los derechos sociales. Estamos aquí defendiendo la continuidad de un programa popular que ha permitido revertir paulatinamente los enormes retrocesos producidos por la dictadura militar y la oleada neoliberal.

Nada más alejado de mi intención que mirar el pasado en tono admonitorio. No nos reservamos ningún beneficio de inventario. Sólo quisiera extraer de la historia que hemos vivido, las enseñanzas que nos permitan hacer más exitoso el andar en este presente.

En este sentido, quiero decir que creo que hoy es un día importante también porque se sinceran posiciones, y se establecen divisiones sólo con quienes tienen interés en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

diferenciarse. Es una pena que algunos dirigentes valiosos sigan las pequeñas especulaciones estadísticas de una derecha que no logra modernizarse ni dejar atrás sus vínculos y relaciones económicas con la dictadura y con las políticas de vaciamiento y prebendas del neoliberalismo. Lo han podido hacer en otras latitudes más o menos cercanas, pero parece que resulta muy difícil a las variantes vernáculas incorporarse a la modernidad del Estado de derecho, en serio, y hacer honor a su mentado republicanismo. No quieren aprender, no quieren ser parte de los consensos nacionales reales y corren detrás de los que exhiben muestras de buena onda mientras mandan patotas a desalojar personas en situación de calle, detrás de los que hablan de gobierno y detentan una pavorosa falta de gestión y de sensibilidad en sus políticas sociales. No nos van a acompañar quienes, a diferencia de los que no reservamos beneficio de inventario, hacen ejercicio de la distracción y la desmemoria. No nos van a acompañar en esta iniciativa, los que creen que gobernar es una campaña propagandística permanente, piloteados por lo más rancio del establishment de adentro y de afuera, y guiados por encuestas y especulaciones cuantitativas menores. No nos van a acompañar, los que no entienden que la representación política es algo más que pavonearse con las derechas europeas y preguntarle a un consultor dónde conviene ponerse dependiendo de las circunstancias. No van a integrar este consenso realmente conmovedor los que acompañan las amenazas contra el país y enarbolan la defensa de la “seguridad”, extrañando aquella de la que gozaron para expoliar. No acompañan esta iniciativa, los que hablan de seguridad jurídica y fueron beneficiarios de las leyes de emergencia económica que rompieron todas las ecuaciones contractuales en la Argentina, y pretendieron imponer por encima de los derechos constitucionales durante la crisis de 2001.

¿Qué mayor seguridad jurídica que la que dan la Constitución y las leyes? Se expropia por causa de utilidad pública declarada por ley, y la indemnización del caso será discutida como manda la Constitución. Se está procediendo estrictamente de acuerdo a derecho. Entonces, ¿de qué inseguridad se habla? Qué mayor seguridad que esta coincidencia de fuerzas políticas representativas del voto popular, que defienden los intereses nacionales para encarar, ahora sí, como se ha dicho aquí en muchas intervenciones, una política hidrocarburífera y energética que acompañe el desarrollo con equidad, y defina estratégicamente el futuro de la Nación.

Señor presidente: porque apoyo este proyecto de país, porque creo en una Argentina integrada en una Latinoamérica con un proyecto energético común, y porque espero que quienes hoy dan la espalda al país para defender otros intereses encuentren la recriminación social que se merecen, voto positivamente este proyecto de ley.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

9. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BLANCO DE PERALTA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Sin dudas el consenso logrado, el apoyo popular y nuestra propia memoria, dejan en claro que éste será un día histórico. A partir de mañana podremos decir que contamos nuevamente con una YPF manejada por y para el Estado, y orientada a seguir impulsando un crecimiento con inclusión social. Como argentina, como peronista y especialmente como patagónica, vengo hoy a celebrar la recuperación estratégica de nuestro petróleo.

Hace un tiempo ya que los gobernadores de las provincias productoras vienen realizando esfuerzos e intimando a Repsol para que invierta y produzca más. Incluso, llegaron a retirar la concesión de la explotación en yacimientos en los que la falta de inversión provocó que estén inactivos o con bajo rendimiento. Intentaron en forma conjunta, a través de la OFEPHI, aumentar la producción. Sin embargo, es la medida tomada por Cristina la que viene a solucionar el problema de fondo, al recuperar para los argentinos la empresa que sostiene nuestra matriz energética.

La medida significa para los argentinos, y especialmente para quienes vivimos en provincias donde la actividad petrolera y gasífera está muy arraigada, mucho más que recuperar una empresa. Significa recuperar historia, soberanía, es el regreso de lo que nunca debimos perder, es reparación histórica, es hacernos cargo de los errores y gestionar para solucionarlos, es pensar en el ayer pero también en el hoy y en el mañana, estableciendo un nuevo horizonte para el desarrollo de la Nación a largo plazo.

En cuanto a la depredación de nuestros recursos naturales, que aplicó Repsol a nivel nacional, Santa Cruz no fue la excepción. Esa empresa se dedicó en mi provincia a explotar las reservas de petróleo descubiertas antes de 1998 (es decir, durante la administración estatal), provocando una progresiva reducción en la extracción, con consecuencias adversas –incluso– para el país todo.

Queda visto entonces que en Santa Cruz sufrimos la YPF que se va, por eso aguardamos con fe y esperanza el futuro que viene y que alguna vez conocimos. Los pueblos del flanco norte de Santa Cruz merecen una reparación histórica. La inversión no es para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

nosotros un simple gráfico; es desarrollo y es, por sobre todo, el camino de aquella YPF que hoy debemos recuperar para todos los argentinos.

Quiero expresar el orgullo y la felicidad que significan para mí ser parte hoy de la dirigencia política que acompaña a la presidenta en esta decisión histórica. Mi padre aportó 42 años de su vida a YPF; yo nací, ya hace más de medio siglo, en un hospital de YPF; estudié en una escuela de YPF, fui becada por esa, nuestra gran empresa, siento hoy una emoción enorme. Quiero recordar hoy a los más de 40.000 trabajadores que quedaron en la calle, para ellos y sus familias también es este día. Sé que volver a contar con nuestra empresa nacional de hidrocarburos significa poseer una herramienta más para continuar en este camino de industrialización, de agregado de valor y de trabajo genuino, que ha sido iniciado en el 2003.

Ese fue un año bisagra en el destino de la Patria, pero para nosotros, los patagónicos que durante tantos años fuimos olvidados, fue sentirnos parte, sentirnos hermanos del resto de las regiones del país; dejamos, entonces, de ser considerados el “patio trasero de la Argentina”. Hoy, en el 2012, nos toca dar sanción al proyecto que viene del Senado como una invitación a consolidar este rumbo que tantas satisfacciones nos da, sobre todo a quienes hasta la llegada de Néstor a la Presidencia habíamos sido rezagados por el poder central.

En la provincia somos, recién ahora, un poco más de un habitante por kilómetro cuadrado. Necesitamos que esta mirada federal del país, que conduce Cristina, se complemente con una empresa ágil, moderna y eficiente. Esto merecerá del esfuerzo de todos, trabajadores, PYMES, UTES, actores políticos y sociales.

No es hora de sectores aislados, es la hora de concentrar nuestras mayores energías en acciones que pongan la mirada serena e inteligente en el superior objetivo de avanzar, decididos, hacia una nueva matriz energética, diversificada y soberana. Creo, humildemente, que los santacruceños aportaremos a esos preceptos.

Nuestro gas y nuestro petróleo empiezan hoy a transitar la senda de la Patria. El petróleo no es un bien de mercado. Para nosotros, los patagónicos, es la herramienta de reivindicación por tanta postergación y negaciones. YPF es ahora, no uno o varios yacimientos que se llevan las ganancias, es para mí y miles en mi provincia y en el país, la paz, el pan y el trabajo.

Por eso, creo que este proyecto busca continuar el camino iniciado por Néstor; viene a rescatar los sueños, a consolidar la justicia social. Tiene como finalidad recuperar soberanía, poniendo un eslabón más en la cadena que, como ayer en Obligado, haga parar tanta invasión disfrazada. Porque como dijo Perón: “La economía nunca es libre, o la maneja el Estado en beneficio del pueblo o la manejan las corporaciones en perjuicio de este”. Ha llegado la hora de que el Estado nuevamente tome la conducción de YPF para que los beneficios sean, como en el pasado, para el pueblo argentino.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BRAWER

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En esta coyuntura histórica, debemos tener presente qué representa recuperar una empresa de las características de YPF.

Recuperar YPF significa, ante todo, recuperar un medio que facilite el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestra sociedad, en el marco de un ejercicio de soberanía irrenunciable. Establece, a su vez, la creación de puestos de trabajo, garantiza la accesibilidad de los productores a los combustibles a un menor costo y eleva la disponibilidad de los mismos en nuestro mercado.

Recuperar YPF significa, asimismo, arrogarnos la posibilidad, como Estado, de trazar los lineamientos necesarios para la planificación de una estrategia racional de crecimiento sostenido y sustentable, en el marco de un proceso de afirmación independiente sobre los recursos de nuestro suelo, sin soslayar la posibilidad de desarrollar nuevas formas de explotación de fuentes energéticas alternativas.

Si uno estudia en profundidad la historia de nuestra América Latina, es de rigor encontrar analogías entre los distintos procesos de liberación nacional, y cómo éstos en la mayoría de los casos, han tenido como telón de fondo la lucha por los recursos estratégicos.

Medidas fundacionales como la nacionalización del petróleo en México, llevada a cabo por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, son dignas de destacar como ejemplos históricos para poder apreciar cómo la nacionalización de los hidrocarburos pudo potenciar el desarrollo sustancial de las fuerzas productivas en todos los órdenes de la vida social y económica.

Es desde la nacionalización de sus recursos naturales y del excedente que generó este proceso, que el pueblo mexicano pudo proyectar un desarrollo sostenido en otros órdenes de su vida económica y cultural.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Lamentablemente, los gobiernos que en ese país hermano han sucedido al del general Cárdenas, han ido paulatinamente relegando las tradiciones profundamente revolucionarias, estratégicas y democráticas que caracterizaron a su gestión.

A su vez, tristes períodos de la historia de nuestros pueblos siguieron caminos análogos a las administraciones que sucedieron al gobierno del general mexicano. El rasgo distintivo de éstas, estuvo caracterizado por la aplicación de brutales políticas de desinversión y descapitalización, generalmente ejecutadas por dictaduras militares o gobiernos que, sacando provecho artero del voto popular, no vacilaron en traicionarlo, sometién dose a los dictados de los organismos de crédito internacionales, promotores de la aplicación de políticas de ajuste y de achicamiento estatal.

Esta política, como no podía ser de otra manera, tuvo su correlato en lo que respecta a los hidrocarburos. En este sentido, gobiernos y empresas transnacionales han fomentando golpes de Estado, guerras y procesos de brutal saqueo de los recursos de nuestros países en vías de desarrollo.

Efectivamente, para la hegemonía de capitales concentrados el fin justificaba -y sigue justificando-, los medios. No importa que estos medios hayan sido y sigan siendo actos de agresión armada, o bien, traiciones al voto popular.

Como ejemplo, baste recordar las terribles consecuencias que produjo a dos pueblos hermanos, el paraguayo y el boliviano, la llamada guerra del Chaco, en la que dos compañías, monopólicas en esa época, la Royal Dutch Company y la Standard Oil, utilizaron a los gobiernos títeres de esas naciones para su puja de intereses, forjando un conflicto armado que duró tres años dejando como saldo miles de muertos.

No es casual que una de esas empresas, la Standard Oil, a través de una de sus subsidiarias en nuestro país, la West Indian Corporation, estuviese involucrada en el primer golpe de Estado que sufriera nuestra sociedad, el 6 de septiembre del año 1930, a escasos días de que fuera a debatirse en nuestro Senado la Ley de Nacionalización del Petróleo.

Esta ley estaba destinada a darle el marco legal adecuado al proceso que había tenido su origen en el año 1922, con la designación del general Enrique Mosconi como director general de la empresa YPF.

Cabe precisar que la creación de YPF sentó las bases materiales necesarias para la aplicación de una política de desarrollo consecuente en materia de extracción de hidrocarburos, al destacar el carácter estratégico que estos representaban en el contexto de un proyecto de autonomía nacional.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Son las palabras del propio general Mosconi, las que definen el ideario que guió su gestión al mando de la empresa: “Nuestro país, que poseía ricos yacimientos en la Patagonia, importaba el combustible líquido necesario para su vida, su defensa y su seguridad. Los cañones de nuestros buques hubieran quedado inmovilizados y nuestros aviones encerrados en sus hangares tan pronto terminaran las reservas existentes, y si por cualquier circunstancia la República viese cortadas sus rutas marítimas de aprovisionamiento, por causas comerciales de tiempo de paz o por razones de guerra, nuestras industrias así como también las actividades bélicas, tanto en el mar como en el aire, se paralizarían inmediatamente. Si esto se produjese en caso de conflicto armado, la suerte de las armas quedaría resuelta inmediatamente. Esto importaba una situación de peligro.

“Por otra parte, si la Providencia había dotado a nuestro subsuelo patagónico de ricos yacimientos de petróleo, el país, que disponía de esta riqueza providencial y la dejaba yacer en sus depósitos, dependiendo del extranjero para su aprovisionamiento en época de paz como de guerra, declaraba un estado de manifiesta inferioridad.

“La circunstancia de que ya se conocieran los procedimientos de elaboración de petróleo y sus costos respectivos, ponía de manifiesto que el país pagaba por el combustible un precio más elevado del que hubiera sido justo y equitativo, de modo que a la situación de peligro y de inferioridad debíamos agregar la desventaja, por un continuo, incesante y elevado drenaje de dinero, con evidente perjuicio para las finanzas y economía de la Nación.

“Este análisis fue motivo de que se formaran y robustecieran en mí las primeras ideas de cooperar en una obra que tendiera a eliminar en absoluto de la República el trinomio de peligro, inferioridad y desventaja, transformando así la situación imperante”.

YPF, entonces, fue concebida, a partir de la gestión de Mosconi, como aquel instrumento capaz de elevar la producción estatal de petróleo hasta el nivel del autoabastecimiento, desplazando a la producción de las empresas extranjeras. En este marco, su visión geoestratégica consistía en imponer una política nacional en el mercado de ventas, poniendo fin al monopolio de las empresas transnacionales, llegando a postular, como objetivo de máxima, el poder organizar definitivamente el autoabastecimiento del país, sobre la base de una política industrial plenamente soberana e independiente de los poderes centrales.

Claro que políticas como las desplegadas por la gestión del general Mosconi, representaban un peligro mortal para los intereses de los grandes monopolios privados, que todavía operaban en nuestro país amparados por el viejo Código de Minería de 1886, el cual, en su artículo 9º, prohibía al Estado nacional el ejercicio del dominio útil sobre los hidrocarburos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En ese contexto histórico, nuestro país vio interrumpida su institucionalidad. Unos años después, y ya en plena “década infame” durante el gobierno del general Agustín P. Justo, pactos secretos y leyes ajustadas a los intereses de los grandes monopolios recortaron las atribuciones de YPF, profundizando el proceso de enajenación del país respecto de sus recursos energéticos; caracterizados por una fuerte tendencia a la desnacionalización del petróleo.

Baste recordar lo que sostenía el diputado socialista boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz: “Nadie, medianamente interesado en el principio y la práctica de la autodeterminación nacional, debiera ignorar la importancia económica y política decisivas que al respecto tiene el descubrimiento y control de recursos naturales no renovables. Y ninguno, entre todos éstos, en el área latinoamericana de la dependencia, más importante que el petróleo, a causa de la irremediable y creciente condición energética deficitaria de los Estados Unidos (cabeza del mundo capitalista en crisis, y para el que el subcontinente constituye un área de seguridad nacional y última reserva occidental de recursos de carácter estratégico)”. Vaya este párrafo como dedicatoria a la memoria de este diputado, defensor incansable de los derechos de los trabajadores, quien fuera asesinado durante la dictadura de García Meza en el año 1980.

Para finalizar, hoy, en pleno siglo XXI, asistimos a una coyuntura histórica en la que los poderes del capital concentrado, con total impunidad invaden naciones soberanas, no dudando en destrozar culturas milenarias, en someter a la barbarie a pueblos enteros ni en asesinar a miles de personas, con el único propósito de apropiarse de los recursos naturales de los pueblos más postergados para ser fieles a los intereses de sus monopolios.

En esta escena, es necesario más que nunca adoptar una política independiente en cuanto a la administración y explotación de nuestros recursos, en sintonía con nuestra historia y de cara al futuro, en solidaridad, hermanados con aquellos pueblos con quienes compartimos los desafíos que nos presenta la construcción de ese gran proyecto común, liberador y dignificador, que Bolívar sabiamente denominara la “Patria Grande”.

11. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BROMBERG

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Quiero comenzar esta presentación ante esta Honorable Cámara agradeciendo ante todo al pueblo de mi querida provincia de Tucumán que me haya dado el honor y la responsabilidad de estar sentado acá este día, y que por eso mismo me haya permitido ser uno de los más humildes protagonistas de un hecho que va a marcar la historia de los argentinos para las próximas décadas.

Este debate será memorable para las próximas generaciones de los argentinos, porque marcará el primer hito de la refundación institucional de un Estado nacional, capaz de sostenerse en el tiempo y contra cualquier acechanza internacional o cualquier flaqueza local.

Antes y después de esta intervención mía habrá colegas que, con más elocuencia y más profundidad que yo, se explayarán largamente sobre la importancia y la trascendencia que tendrá para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas la efectiva recuperación de nuestra más plena soberanía hidrocarburífera. Hemos escuchado y seguiremos escuchando este día informes muy precisos y muy claros acerca de la trama económica, jurídica y energética que sostiene esta decisión mayoritaria de los argentinos. Déjenme entonces usar el tiempo que me corresponde del debate para proponer una reflexión política acerca de las trascendentes decisiones que estamos adoptando.

En un mundo que se agita y se convulsiona todos los días acosado por los dolores, las tragedias, los dramas y los temores de un cambio de época tan irreversible como desconcertante, parece cada vez más evidente que los recursos naturales se han transformado en el botín de guerra máspreciado y más codiciado. Ya descaradamente, en las doctrinas que imponen las misiones a las fuerzas armadas de las grandes potencias globales, pueden leerse desde hace años ideas y propuestas acerca de la necesidad que tienen esas naciones de garantizarse esos recursos a como dé lugar, en los rincones del planeta donde se encuentren.

En 1970, en su “Carta a los Pueblos de la Tierra”, el general Perón ya alertaba sobre esta situación y afirmaba que los pobres de entonces iban a ser “los ricos del mañana”, sencillamente porque eran los poseedores de esos recursos naturales que los países ricos ya estaban despilfarrando de una manera suicida.

Ese “mañana” ha llegado. Ahora es el momento en que aquella profecía política ha comenzado a cumplirse y seríamos unos verdaderos canallas y traidores a la patria si no aceptáramos el reto de comenzar a construir en nuestra patria las políticas imprescindibles para generar esas defensas, que no son otra cosa que la protección del futuro de las próximas generaciones de argentinos.

La poderosa mayoría multipartidaria que se ha gestado en torno a la aprobación de esta “Ley de Soberanía Hidrocarburífera” habla por sí sola. Este consenso no se ha construido en base a prebendas, a negociaciones inconfesables entre bambalinas o a otro tipo de concesiones espurias.

Esta vez hemos confluído en una única decisión política de construir esos instrumentos necesarios para garantizar a los argentinos el manejo de su energía, diputados y senadores de las más distintas extracciones políticas, de un modo espontáneo y directo. Esta vez hay coincidencias y hay consenso porque todos hemos coincidido en que, más allá de las diferencias que se puedan expresar en particular, se impone que los argentinos retomemos en nuestras manos el poder de manejar nuestro petróleo y nuestro



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

gas, para garantizar las bases de nuestro desarrollo autónomo en medio de un mundo donde la desorientación de los poderosos solamente es comparable con la inmensa codicia que los lleva a apoderarse de los recursos naturales de los países que no saben o no pueden defenderse debidamente.

Esta ley que vamos a aprobar este día no le pertenece a un solo gobierno a una sola facción política. Nuestra querida presidente tendrá el inmenso orgullo de entrar en la historia grande de los argentinos por haber tenido el talento, el coraje y la decisión de haber interpretado en este momento histórico la voluntad de millones de argentinos de recuperar, con plena responsabilidad y plena capacidad, la gestión de todos los recursos energéticos nacionales. Cristina Fernández de Kirchner tendrá su lugar entre los grandes presidentes de nuestra patria porque supo antes que nadie que esta “Ley de Soberanía Hidrocarburífera” es una ley de todos los argentinos, y por eso mismo este día vamos a votar con orgullo, entusiasmo y responsabilidad cada uno de sus artículos para dar vuelta definitivamente la página de la impotencia nacional.

La decisión de nacionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la determinación de volver a manejar nuestro petróleo y nuestra energía no valdrían de mucho si no estuvieran sostenidas por la plena conciencia de que estamos comenzando a fundar un nuevo modelo de Estado nacional; un Estado nacional que sea capaz de defender ante todo a todos los ciudadanos, garantizando la inclusión social y la equidad aun en medio de un mundo cuyas estructuras económicas y sociales parecen derrumbarse cada día. No sería esta la primera vez que los argentinos somos capaces de recrear nuestras estructuras estatales para ponernos en sintonía con lo que sucede en el mundo. No para estar frívolamente a la moda de las ideas que hacen circular los poderosos, sino para estar dispuestos y decididos a defender de la mejor manera los intereses nacionales y populares frente a los peligrosos avatares de un mundo crecientemente peligroso.

Más allá de las cuestiones ideológicas, que no son para desechar por cierto, el Estado argentino moderno que supo terminar con la organización social y política heredada de la Colonia —y devastadas por las guerras civiles— fue una construcción contradictoria y repleta de tensiones de dos generaciones de argentinos dispuestos sobre todo a aprovechar las condiciones mundiales para generar el crecimiento y el progreso del país. En esos momentos históricos también una crisis devastadora estaba afectando a los países más importantes de Europa porque la Revolución Industrial estaba cambiando tan rápidamente la estructura económica y social de esas naciones que la escasez de alimentos pasó a ser rápidamente uno de los principales problemas a resolver.

La crisis del 30 obligó a otras generaciones de argentinos a replantear todas las herramientas del Estado nacional para enfrentar las duras condiciones internacionales. Esa tarea fue genialmente completada por el general Perón que supo en su momento terminar de reformar la organización del Estado instalando el principio de la justicia social como uno de los bastiones de la legitimidad política de esas estructuras.

La que lideró el general Perón fue también una construcción política sistemática y planificada que buscó generar las mejores condiciones para que la Argentina pudiera responder a los desafíos del mundo en ruinas y repleto de tensiones y temores de holocaustos nucleares que dejó la Segunda Guerra Mundial.

Esta vez, la Argentina tuvo la enorme fortuna de entrar en la inmensa crisis



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

internacional del 2008 sostenida por un gobierno que desde un lustro antes había decidido poner el interés nacional por sobre cualquier otro valor y consideración. Estábamos saliendo de nuestra propia crisis apocalíptica del 2001, pero fortalecidos por la certeza de que contábamos con los recursos y con el liderazgo que nos permitirían superar todas las tormentas.

Ya en ese momento, el coraje puesto de manifiesto por nuestro pueblo y por nuestro gobierno nos llevó a todos a vislumbrar claramente la necesidad de comenzar a generar las instituciones que permitan sostener y apuntalar nuestras conquistas a lo largo del tiempo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner condujeron ese proceso en que fue necesario empezar a recrear desde las ruinas las herramientas que la Nación iba necesitando para no caer otra vez en el abismo de la frustración.

La histórica decisión de nacionalizar YPF nos pone a todos nosotros —sin distinción de alineamiento partidario— ante el desafío y la responsabilidad de comenzar a definir las estructuras de ese nuevo Estado, referidas específicamente a la necesidad de asegurar a los argentinos la energía que necesitamos para seguir creciendo.

Sé que para los argentinos que transitamos la política del siglo XX, de alguna manera sigue funcionando aún el alerta de no permitir que la nueva YPF se transforme en una maraña de prebendas y pequeños negocios que frustren su eficiencia y su productividad. Probablemente, no se trata de otra cosa que de la mezcla de prejuicios y malos recuerdos. De todos modos, tenemos por delante la enorme oportunidad de escribir otra historia recreando las condiciones para que nuestra más querida empresa de energía se transforme en una organización inteligente, flexible y por sobre todas las cosas capaz de liderar a miles de argentinos en la tarea de construir y sostener una empresa de energía capaz de proteger el derecho de los cuarenta millones de argentinos a vivir y a generar riqueza sostenidos por toda la energía que requieran su trabajo, su capacidad y su talento.

Será tarea de este Honorable Congreso generar las herramientas legales para sostener ese esfuerzo en el tiempo mejorando lo que haya que mejorar y corrigiendo lo que haya que corregir. Mientras tanto, quiero decir también que más allá de nuestros prejuicios y de nuestros malos recuerdos, se abre paso una nueva generación de argentinos dispuesta a crear su propio espacio y su propio tiempo en la historia nacional, y creo que debemos confiar en su creatividad, en su liderazgo y sobre todo en su capacidad para imaginar aquello que para nosotros resulta imposible, porque claramente será de ellos la tarea de crear y conducir las estructuras del Estado argentino del Siglo XXI que se hace imprescindible comenzar a construir desde ahora.

Cuando las grandes potencias que habían hecho de los principios neoliberales un credo intangible e indiscutible, decidieron que debían nacionalizar bancos y empresas para superar las crisis de sus países que las debilidades de sus propios sistemas habían generado, nosotros ya habíamos empezado a consolidar nuestro modelo de crecimiento sostenido con inclusión social. En ese momento clave de la historia de la humanidad, los argentinos, bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, ya habíamos comenzado un camino muy coherente y consistente en la revalorización del Estado como actor económico decisivo para asegurar la inclusión social y el incremento de la productividad. Nos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

habíamos permitido crear nuestra propia ortodoxia económica evitando caer en las recetas que nos seguían exportando aquellos que estaban en el ojo de la tormenta, y por eso mismo pudimos capear todos los temporales universales con tasas de crecimiento muy por encima del promedio mundial.

Cuando la gravísima crisis del 2008 y del 2009 llevó a la grandes potencias a emitir muchísimo dinero como una manera elemental de reactivar la economía, el proceso de reconstrucción del poder del Estado que había comenzado Néstor Kirchner en 2003, ya nos había permitido a los argentinos la identificación y el uso de los fondos de pensiones como la reserva del capital nacional necesaria para sostener altísimas tasas de crecimiento aún en medio de las condiciones internacionales más adversas.

Tal vez la clave de nuestros éxitos de los últimos nueve años resida en la audacia y en la capacidad de un liderazgo que se permitió innovar en el camino de la heterodoxia, para demostrar que de las crisis económicas no se sale necesariamente aplicando los ajustes que inevitablemente luego van a originar otras crisis con explosiones sociales, como puede verificarse en estos días en los principales países europeos.

El contraste entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que recién está despuntando, tal vez explique porque hay voces que se escandalizan ante la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF, cuando esa es una potestad tan arraigada en el derecho internacional que las grandes potencias capitalistas occidentales no dudaron en utilizarla cuando lo creyeron necesario para enfrentar la crisis financiera más grande de la historia de la humanidad.

La aprobación de esta Ley de Soberanía Hidrocarburífera por esta mayoría es una demostración indiscutible de la legitimidad y de la legalidad de las medidas que estamos tomando. Acá nadie le va a sacar nada a nadie por la fuerza. Hay unas normas y unas leyes que estamos reformando y que estamos respetando para que nadie pueda decir luego que los argentinos ejercemos nuestra soberanía vulnerando los derechos ajenos. Probablemente, lo que no ocurra es que el Estado argentino acepte pagar y sin chistar todo lo que le pide la empresa que antes controlaba YPF. De todos modos no será la primera ni la última vez que Repsol deba sentarse a negociar un precio por sus activos en algún país de la Tierra. Eso sí: la ley que aprobamos hoy deberá imponer claramente los parámetros para una negociación justa, porque no es posible que terminemos pagando por nuevo aquello que la falta de inversiones y el manejo irresponsable lo ha transformado en un valor muy menor al que es reclamado.

La presidente de todos los argentinos se ha hecho eco plenamente de una consigna que escuchamos de nuestros compatriotas. Ella ha dicho hace poco en un acto público en Rosario, VAMOS POR TODO, y no faltaron los malintencionados, los cobardes o los tramposos que la criticaron duramente por haberse hecho eco de una demanda popular muy extendida, y resumida en una frase que se repite en todas las tribunas.

Ese VAMOS POR TODO es también un vibrante VAMOS CON TODOS, porque el “todo” que reclaman los argentinos es la construcción de las instituciones de ese nuevo Estado nacional del siglo XXI, que sea capaz de asegurar por décadas este ciclo virtuoso de crecimiento sostenido con inclusión social que los argentinos –todos sin distinción— gozamos desde 2003 en adelante.

Sabiamente, muchos de los representantes parlamentarios de los partidos de la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

oposición han comprendido el desafío que tenemos por delante, y por eso mismo nos acompañan con su voto para la aprobación en general de esta Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Cuando votemos en particular cada uno de los artículos de esta norma, cada uno expondrá sus puntos de vista y entonces estará a la vista de todos que la voluntad abrumadoramente mayoritaria de los argentinos de recuperar plenamente el poder de gestión de sus riquezas energéticas, ha sido enriquecida por la diversidad y los matices de los puntos de vista de cada una de las tradiciones políticas que honran este Honorable Congreso.

Entonces, aquella consigna del VAMOS POR TODO va a cobrar su real dimensión, porque en realidad se verá a los ojos de todo el mundo que VAMOS CON TODOS a cumplir con el desafío de crear las condiciones institucionales para que esta etapa de progreso y felicidad de nuestro pueblo y esta etapa de grandeza de la Nación no pueda ser malversada o destruida por ninguno de los que vengan después de nosotros.

14. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CASELLES

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

“En la vida de un pueblo, el momento crucial es aquel en el que el pueblo deja que el poder vaya a parar a manos de criminales. Y también cuando un pueblo, teniendo oportunidad de ello no la usa para mantener las condiciones necesarias a un gobierno responsable. Después resulta siempre mucho más difícil echar a los criminales que han tomado el poder. En mi interpretación la corresponsabilidad empieza primero y termina después y tal responsabilidad se la encuentra hasta en los jóvenes, no en la misma medida que los padres”, Willy Brandt en Entrevista con la historia, de Oriana Fallaci.

1. Los Hechos

La Matriz del saqueo kirchnerista como continuidad tribal de la matriz del saqueo menemista.

LA MATRIZ DEL SAQUEO EN AYSA

Como lo advertimos en AYSA el 28 de marzo de 2006, hoy YPF culmina el proceso de saqueo criminal de la Argentina.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Con fecha 21 de marzo de 2006, ingresa a la Cámara de Diputados para su tratamiento el decreto 303/06 por el cual se rescinde por culpa del concesionario el contrato de concesión suscripto por el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A adjudicada mediante decreto 787/93.

Con fecha 21 de marzo de 2006, el Poder Ejecutivo decide crear mediante el decreto 304/06 una sociedad anónima, motivada en garantizar la fluidez operativa del servicio y lograr la adaptación a los cambios y contingencias. Esta nueva empresa tuvo las siguientes características: Es una sociedad anónima regida por la ley 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales) cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales del área atendida.

El capital social quedaba en un 90% en manos del Ministerio de Planificación Federal y el otro 10% en manos de los ex trabajadores de OSN comprendidos en el Programa de Propiedad Participada.

Se facultó al ministro de Planificación o al funcionario que éste designase a realizar todos los actos tendientes a la constitución y puesta en marcha de la sociedad, incluyendo la designación de directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Los empleados se regirían bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

Se facultó a contratar personal para realizar las gestiones correspondientes a garantizar la prestación del servicio.

Se excluyó expresamente el acogimiento a los principios generales del derecho administrativo y sus normas como también de la Ley 19.549 (Procedimientos Administrativos) decreto 1.023/01 (compras y contrataciones), ley 13.064 (Obra Pública).

Al igual que en ENARSA fue una forma pura de sociedad anónima, a pesar de que momentáneamente pudiese tener la mayor parte de las acciones el Estado.

El viejo esquema del menemismo era la entrega de negocios rentables a empresas extranjeras que junto con socios nacionales se beneficiaban con la paridad cambiaria establecida en la convertibilidad. Diez años después, la confusión del entonces presidente Kirchner entre lo privado y lo público –como los viejos señores feudales- se basó en la creencia de que el Estado puede ser él.

El objetivo final de lo que explicamos en ese momento era afirmar que hay una nueva matriz de privatización en la Argentina bajo una apariencia reestatizante.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Con el manto de una vuelta hacia un Estado benefactor, lo único concreto que se palpa es que toda la normativa desarrollada por los gobiernos kirchneristas desde su asunción es una privatización al interior de los negocios de una facción política del poder.

Así como en los noventa se privatizaba y se abría a licitación pública internacional en beneficio de empresas extranjeras con capitalización de deuda, hoy se desestatiza creando sociedades anónimas sujetas al derecho privado, sin control estatal de ninguna especie, con una parte del capital en manos del Estado y el resto cedido en acciones a los grupos económicos que pacten una sociedad con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Y lo que es más escandaloso aún: estas sociedades dispondrán de patrimonio público en beneficio privado.

El modelo actual, nacido en AySA, nos sorprendió con una novedad: ya no asistimos a la transferencia de plenos poderes a un presidente, jefe de Gabinete o ministro, sino que vemos estupefactos como ahora directamente se transfiere a una sociedad anónima creada por decreto o por ley, sin control alguno por parte del Estado.

El Estado ha decidido abandonar tomar a su cargo la prestación de los servicios bajo formas que permitieran control y revisión pública. En cambio, elige formas que lo alejen todo lo posible de ello. En el caso de AySA una sociedad anónima bajo el control de un ministerio con plenos poderes para establecer derechos y obligaciones.

En el informe que elaboramos en el año 2006 que titulamos “La nueva matriz de saqueo desestatización por desapoderamiento final. El nacimiento del patrimonialismo corrupto.” Nos referimos que ni siquiera la ley de Reforma del Estado, conocida como ley Dromi (23.696) se atrevió a tanto. En su artículo 18, cuando hablaba de la modalidad de selección de los prestatarios privados de los servicios establecía algunas formas mínimas de comparación de precios y análisis de antecedentes de los oferentes. Esos contratos de concesión y las privatizaciones tuvieron formas legales que se estuvieron ejecutando. Las formas societarias que ahora se presentan desde el mismo bloque oficialista que antes nos ofreció esa ley, estarán sujetas al derecho privado y no al derecho público, obviando todas las responsabilidades y controles que este permite.

En ese informe consideramos legítimo poner en duda varias cuestiones: Entre otras, que no había fundamento razonable y razonado por el cual se hubiese elegido la creación de figuras jurídicas de dudosa naturaleza.

En ese informe, que tenía a AySA como antecedente, dejamos abiertos algunos interrogantes que hoy tienen plena vigencia:

- ¿Cuál era el inconveniente de mostrar al público que se ha elegido al mejor socio para la explotación del servicio?
- ¿Qué reparo ofrecía tener el debido cuidado respecto a los antecedentes de los empleados de esas empresas?



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

¿Cuál era el contrato que rige entre el Estado y estas nuevas sociedades anónimas?
¿Funcionarios de dudosa honorabilidad se harían cargo de un negocio que ya no le es rentable a los grupos empresarios que explotaron los servicios públicos desde su privatización?
¿Estos funcionarios lo harían en tanto su rol de funcionarios, o estamos frente al nacimiento de una nueva clase empresaria argentina surgida desde los despachos del poder?
¿Este es, también, el modelo al que se iba a utilizar en materia de gas y petróleo con Repsol YPF? La respuesta a esta última pregunta es obvia y está en los hechos que vienen aconteciendo desde aquellos días hasta hoy.

Cuando se sancionó la ley 26.412 de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, vimos que se daba la misma lógica nacida en AySA. Nos referimos en este Parlamento a que no creíamos que hubiese que convalidar una deuda fraudulenta del grupo económico Marsans que administraba hasta esa fecha Aerolíneas Argentinas, amparada por un comportamiento delictivo y de connivencia del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime y dicho grupo económico. Denunciamos el vaciamiento realizado por el grupo Marsans y que el rescate que se votaba favorecía al grupo económico y a los funcionarios que debiendo controlar no lo hicieron. Este rescate tapaba el vaciamiento y la connivencia entre empresarios y el Estado que no controlaba. Como dijimos en ese momento no votamos el rescate de Aerolíneas porque era convalidar una deuda fraudulenta, era convalidar el robo. Pero nos referimos a algo más: en ese año 2008 se daba un absurdo, al estatizar una deuda privada fraudulenta de una empresa española aparecía un pseudoprogresismo que aplaudía, ¿Por qué? Nos pregunta en ese entonces, y con la certidumbre de siempre dijimos “No”, no puede ser así, no se puede convalidar un robo.

En definitiva, como nos referimos en el año 2006, es evidente que estamos ante la presencia de una matriz que bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un ministro, administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos grupos económicos. Es un sistema patrimonialista y corrupto, hacia el interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos

2. Los problemas de culpas y responsabilidad. Una Nación. Una clase política. Una clase empresaria. Un pueblo

Karl Jaspers, en su obra *El problema de la culpa*, distingue cuatro conceptos de culpa: culpa criminal, culpa política, culpa moral y culpa metafísica.

La culpa criminal, por definición, es aquella derivada de la comisión de delitos (acciones demostrables objetivamente que infringen leyes inequívocas).



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La culpa política, “se debe a las acciones de los estadistas y de la ciudadanía de un Estado, por mor de las cuales tengo yo que sufrir las consecuencias de las acciones de ese Estado, a cuya autoridad estoy sujeto y a través de cuyo orden determino mi existencia (responsabilidad política). Cada persona es corresponsable de cómo sea gobernada. Instancia es la fuerza y la voluntad del vencedor...” . Es decir, culpabilidad política de un pueblo, de aquellos que permitieron, avalaron y votaron el saqueo indiscriminado de la Nación, como funcionarios, e integrantes del Parlamento que encubrieron en todos estos años; en los cuáles se consumó el vaciamiento de YPF, desde su privatización. Al igual que la Justicia, que permitió hasta hoy, la impunidad de quienes cometieron delitos en todo el proceso en cuestión.

La culpa moral que es aquella que tengo siempre que realizo acciones como individuo, a la cual define Jaspers como “...la tengo por lo tanto por todas las acciones que llevo a cabo, incluidas las políticas y las militares. Nunca vale, sin más, el principio de obediencia debida. Ya que antes bien, los crímenes son crímenes, aunque hayan sido ordenados (si bien hay siempre circunstancias atenuantes, dependiendo del grado de peligro, el chantaje y el terror), toda acción se encuentra sometida también al enjuiciamiento moral. La instancia es entonces la propia conciencia...” . Siendo que aquí, encontramos la culpa moral que deberá analizar cada uno en la medida de su participación personal, por acción u omisión, aunque su conducta no llegue a configurar culpa criminal.

Y la culpa metafísica, es la responsabilidad de todos, de cada uno de los hombres, “hay una solidaridad entre hombres como tales que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden en su presencia o con su conocimiento. Si no hago lo que puedo para impedir el asesinato de otros, sino que me quedo como si nada (dice Jaspers) soy también culpable. Si no arriesgo mi vida para impedir el asesinato de otros, sino que me quedo como si nada, me siento culpable de un modo que no es adecuadamente comprensible por la vía política y moral. Que yo siga viviendo una vez que han sucedido tales cosas es algo que me grava con una culpa imborrable” .

La primera categoría de culpa ha sido analizada y valorada en profundidad en mi dictamen de minoría y en mis anteriores intervenciones en plenario de comisiones y en el recinto. En la presente inserción, haré especial referencia a los otros tres tipos de culpa, especialmente la culpa política y la culpa moral de quienes son responsables en uno u otro sentido, de las conductas predatorias que provocaron el vaciamiento de la empresa petrolera y el saqueo de nuestras reservas energéticas.

3. Los fundamentos humanistas de nuestra negativa a ser partícipes, ayer y hoy, del crimen organizado y de la impunidad política y judicial asegurada

El humanismo está amenazado hoy por un nuevo tribalismo corrupto e impune. Por eso hay sólo dos alternativas para estos tiempos de oscuridad: o reafirmamos los valores del humanismo o destruimos la civilización por vía de nacionalismos vacíos, populismos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

fascistas y mentiras sistemáticas. Es difícil entender que partidos políticos de un origen claramente humanista, tanto provengan de la emancipación liberal, socialista utópica e incluso marxista, todos ellos –tanto liberales como marxistas- héroes de la resistencia al avance de Hitler y del fascismo, bajo ideologismos vulgares e ignorantes del sentido de la historia se plieguen a una trampa supuestamente nacional y popular de organizaciones criminales y que concluyen en el tribalismo del que manda o la que manda, sus familiares más directos y sus testaferros.

3.1. La historia de la idea de humanismo

Como dice el gran psicoanalista y profeta de este siglo, Erich Fromm, la sociedad moderna –sobre todo en épocas de crisis- vive la amenaza creciente de un supuesto nacionalismo tribal. La idea humanista es tan vieja como el mundo. Su principal tradición es muy anterior al judeocristianismo y puede encontrarse en Lao Tsé con su idea del taoísmo, del llamado al Ser; en el hinduismo con la Diosa Madre, con Krishna y en el Budismo en todas sus vertientes.

Para lo que importa en la historia de Occidente, la idea humanista que se basa en la fe irrestricta por la libertad, por la solidaridad y por la igualdad interior de todos los hombres del mundo, nace en el mundo hebreo, aunque es posible reconocer en Akenatón, faraón egipcio, ya estas ideas. Ya en el Génesis, como lo dice la Kabbalah, toda la naturaleza fue creada completa, acabada, menos el hombre que al elegir la libertad se entendió a sí mismo como ser inacabado cuyo desarrollo espiritual y de espíritu de libertad podía llevarlo al árbol de la vida, es decir al Ser. Pero es en la metáfora de la salida de Egipto, donde Dios saca al pueblo de la esclavitud, donde se inventa el concepto de libertad con dos ideas fuerza: la libertad como trabajo diario, constante y persistente. Cuarenta años en el desierto, frente a la terrible tentación del volver al faraón y la seguridad de ser esclavo y la ley como fundadora de la libertad de todos.

El no robar, el no mentir, el no usar al otro, núcleo esencial de los Diez Mandamientos, no son otra cosa que poner la ley donde estaba la fuerza, la prepotencia y el autoritarismo del más fuerte. La idea cristiana del amor al prójimo y de entregar la vida para ganarla es de una visión mucho más cosmopolita, feminista, sin prejuicios raciales y sobre todo con un enorme amor al extranjero, algo no tan presente en el judaísmo. Son los verdaderos fundamentos del humanismo helenístico que puede resumirse en la frase de Cicerón “el Universo es una República de Dioses y de hombres”. Obviamente no se puede olvidar, antes de ello, a la gran Grecia, ni a Platón, ni a Plotino ni a Pitágoras y menos aún a Sócrates que pagó por la búsqueda de la verdad con su propia vida.

Las dos doctrinas emancipadoras que caracterizaron la modernidad no son más que expresiones del humanismo, tanto el liberalismo como el marxismo, pero quizás como lo señala Fromm: “El más importante de todos los pensadores humanistas de los siglos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

XVIII y XIX, fue quizás Johann Wolfgang von Goethe. Citaré unas cuantas ideas suyas. En forma muy parecida a Nicolás de Cusa, muy parecida a Herder y a Lessing, volvemos a encontrar en él la idea de que el hombre encierra, no sólo su individualidad, sino también la humanidad entera, con todas sus potencialidades, aunque por las limitaciones de su existencia sólo puede realizar parte de ellas (...). Para Goethe, el fin de la vida es desarrollarse por la individualidad hacia la universalidad. Quisiera subrayarlo, porque el pensamiento del siglo XVIII hasta el de Goethe y, posteriormente, el de Marx, no entiende que se logre la universalidad mermando la individualidad, igualándonos y, por tanto, haciéndonos sentir uno o el mismo. Entiende, por el contrario, que sólo desarrollando plenamente su individualidad puede el hombre experimentar su propia humanidad, lo cual quiere decir la humanidad de todos. Según esta filosofía, se siente uno con todo precisamente porque ha llegado a ser plenamente él mismo. Y si no llega a ser él mismo y sigue siendo un nacido muerto, mentalmente hablando, ni será él mismo, ni podrá sentir la humanidad que encierra.

La mayor y más significativa manifestación del humanismo de Goethe, importantísima para nuestra época, está en su obra *Ifigenia en Táuride*, basada en la tragedia griega *Ifigenia*, de Eurípides. El argumento de ésta es, en resumen, el siguiente: Ifigenia, hija de Agamenón, iba a ser sacrificada a los dioses para que los barcos griegos tuviesen vientos favorables, pero antes de que la maten, una diosa compasiva la lleva a una isla de bárbaros. Allí, Ifigenia convence a Thoas, el Rey, de que acabe con una costumbre guardada hasta entonces: la de matar a todo extranjero que arribase a la isla. Esta bárbara costumbre puede parecernos extraña, pero en realidad no debiera sorprendernos tanto. El extranjero, como decía antes, era el ajeno a la tribu y, por tanto, aquel que no se veía enteramente humano en el mismo sentido en que vemos enteramente humanos a los que nos son próximos. El rey Thoas nombra a Ifigenia Sacerdotisa del Templo de Artemisa. Es amable con ella. Confía en ella pero, un día, llega su hermano Orestes con un amigo. Le proponen escapar, huir, regresar a Grecia sin conocimiento del rey y robar el ídolo de Artemisa. En la tragedia griega, después de atravesar algunas dificultades, lo consiguen.

En el drama de Goethe, ellos proponen el mismo plan y, primero, Ifigenia asiente, pero después cambia de opinión, por parecerle que no podía traicionar al rey que había confiado en ella. En realidad, encara lo que hoy llamamos “dos males”: el mal mayor, probablemente, que la matasen a ella y matasen a su hermano y al amigo y, el mal menor, traicionar al rey. Pues bien, hoy nos inclinamos normalmente a pensar que, si hemos de escoger entre dos males, debemos optar por el mal menor. Olvidamos que, al escoger el mal menor, lo único que haremos es aplazar el momento en que el mal mayor terminará por ocurrir con tanta más seguridad.

Ifigenia se niega a escoger entre dos males y propone que no ha de haber sólo dos alternativas, sino que pudiera haber una tercera alternativa, una tercera posibilidad, la posibilidad de ser humanos. Lo cual significa en este caso decir la verdad al rey, obrar como persona cabal arriesgándose a que el rey la mate, pero evitando los otros dos males que, desde el punto de vista moral, son inaceptables. Y dice la verdad al rey, y el rey contesta: “¿Crees que el rudo escita, el bárbaro, vas a oír la voz de la verdad, la voz humana, que Atreo, el heleno, desoyera?”. E Ifigenia responde: “Óyela, todo aquel



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

nacido bajo el sol por cuyo pecho puro y libre corre el vital venero”(...).

Y efectivamente, en el drama de Goethe el rey queda conmovido por la voz de la verdad y de la humanidad y devuelve a su país a Ifigenia, junto con su hermano y el amigo. La importancia que tiene este drama de Goethe, en él, obedecer la voz de la humanidad es la única solución que puede salvar al hombre cuando parece que sólo tiene enfrente varias fuerzas del mal. Creo que esta solución que nos ofrece Goethe tiene cierta significación para nuestra época. Parece que estamos cogidos entre varias alternativas, que a veces reciben nombres diferentes, pero que todas son alternativas de destrucción. Y en mi opinión, nos importa mucho reconocer que, si tomamos en serio la tradición humanista de nuestra cultura, pensaremos, en efecto, si no habrá otras posibilidades aparte de estas alternativas típicas y si la posibilidad más importante no serán la humanidad y la verdad.

El nacionalsocialismo significó la utilización de la técnica al servicio de un nacionalismo represor y discriminador y se vio como del humanismo con el que empezó la modernidad se terminó en el Holocausto de millones por ser judíos, comunistas, o extranjeros y el tribalismo volvió con todas sus fuerzas. La mayoría de los gobiernos europeos colaboraron con la acción explícita o con la indiferencia a que lo imposible fuera posible y a mostrar que el hombre, perdida su espiritualidad, no es un animal, es algo mucho más perverso que un animal salvaje. También quedó demostrado después de Auschwitz que muchos buenos padres de familia podían matar a miles como burócratas del terror y de la muerte y el fin de la Segunda Guerra Mundial también demostró que pilotos de la alianza vencedora podían tirar una bomba atómica para matar a miles de civiles indefensos, por eso el Guernica de Picasso, la obra del siglo, marca de qué modo la razón instrumental y el desarrollo tecnológico al servicio del poder sin humanismo, destruyen la humanidad y al planeta. Por eso, es tan importante la obra de Fromm, un profeta de la paradoja moderna, humanista inquebrantable que vio hace sesenta años que si el mundo no se hacía humanista volvería el tribalismo y la barbarie.

A fines del siglo XIX, Durkheim advertía que el desarrollo asimétrico entre la razón instrumental y la razón moral podían hacer fracasar estrepitosamente el mundo moderno. De la misma manera que Max Weber advertía de la cárcel de burocratización en la que podía entrar el Estado moderno. Fue también el escepticismo que mostraron los pensadores de la Escuela de Frankfurt.

3.2. La siquis humana y el humanismo

Fue Carl Jung, discípulo dilecto después alejado de Freud, quien ideó el concepto de inconsciente como parte sustancial de nuestra realidad síquica. Conciencia e inconsciencia son así dos aspectos inseparables de nuestra realidad síquica como humanos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Es característico de la psicología psicoanalítica de Jung la creencia en la existencia del inconsciente colectivo. Sus estudios lo llevaron a postular la existencia de contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. Los elementos más importantes que componen el inconsciente colectivo son los llamados “arquetipos”.

El inconsciente personal opera como el “almacén” de todo lo que le ha sucedido al individuo. Todo ese material consciente previo que en la actualidad no se encuentra disponible en la mente consciente porque ha sido olvidado. En cuanto a lo que Jung llama inconsciente colectivo, el hombre nace con una predisposición del pasado para actuar en ciertas maneras; a medida que el hombre ha evolucionado a lo largo de los siglos, ha acumulado conocimiento y sentimientos.

El hombre acumula, tanto individual como colectivamente, experiencias que no se pierden sino que se retienen y están disponibles para usos posteriores, cuando la oportunidad se presente. Es la base fundamental de toda personalidad o psiquis. Todo lo que el hombre es en el presente está construido sobre el inconsciente colectivo. El hombre transmite y comunica habilidades y costumbres a sus hijos y, a su vez, éstos los transmiten a sus hijos. El hombre hereda la riqueza del pasado de sus antepasados por medio del sistema cerebral. Si no ocurre ningún evento que pueda reforzar esa tendencia, quizá nunca ocurra. El inconsciente colectivo es universal. La universalidad de algunos de los patrones del inconsciente colectivo es el resultado de reforzamientos repetidos en el pasado, desde la vida animal hasta el presente.

En nuestro inconsciente está todo lo bueno y lo malo de la humanidad misma. Las ideas primordiales, la madre nutrizante, la necesidad de justicia. Está lo que ahora se llama la matriz genética de nuestra memoria histórica por siglos. La publicidad, empezando por Hitler, trabajó especialmente las percepciones inconscientes para que el mundo de personas se transforme en gente y la gente en consumidora. Pero no trabajó sobre los mejores ideales humanos, trabajó sobre el lado oscuro de la humanidad también presente en el inconsciente y que cada individualidad lleva su sombra. La sombra son nuestras miserias. La sombra que nos persigue en cada instante depende de cada ser humano, la envidia, la codicia, la ira, la necesidad de dominio, la manipulación y el uso del otro. Por eso, la libertad es un trabajo porque es el duro trabajo de la conciencia para eliminar o debilitar la sombra. A veces a los hombres los gana la sombra, la codicia, el afán de poder, el tribalismo corrupto. Y, muchas veces, cuando las sociedades se vieron frustradas por derrotas en la guerra o ilusiones anegadas en la frustración perpetua y en la traición permanente, también a muchos pueblos los ganó la sombra y cuando gana la sombra, sucede lo impensable, lo que otros seres humanos llaman “locura de un pueblo”. Ahora se explica la frase con que iniciamos esta inserción: un líder dominado por su sombra como fue Hitler, arrastró a un pueblo a identificarse con la sombra, por eso puede verse en el Museo del Holocausto en Berlín, allí donde cayó el Muro, dos fotos de la misma fecha, una con un pueblo fanático pidiendo la solución final y adorando al ídolo y, otra, con la humanidad hambrienta quemada en las cámaras. Pero el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

problema no es ese. No es todo un pueblo el fanático, hay fanáticos pero son minorías. Hay quienes resisten pero son minorías. El mal, que parece tan claro en el ídolo resentido, sin embargo, el mal de ayer, de hoy y de siempre, es la indiferencia. Millones de hombres y mujeres que sienten que si no les toca a ellos no es para preocuparse, millones que no escuchan, que se entretienen, que se ríen, que simplemente existen pero que no descubrieron que el sentido de la vida es, ante todo, formar parte del uno y el uno es el Tao, es Dios o es la humanidad. Cuando se es indiferente a la necesidad de un sentido, cuando uno ni siquiera se pregunta para qué está y para qué vive. Cuando la mentira es mucho más fácil de escuchar que la verdad, porque tranquiliza aunque envenene, esa parte del pueblo lleva una culpa moral y metafísica que sólo se puede revertir si logramos dejar atrás el equipaje del pasado, si encontramos en el fondo de nuestro inconsciente al Dios que nos dice, practica la justicia, practica la equidad y ama al extranjero. Al Tao que nos dice encuentra el sentido, el Ser, el Cosmos. Al Buda que nos dice que en cada uno de nosotros hay un Buda, sólo hay que desarrollarlo. Si encontramos a la humanidad, sin Dios, pero que ama la verdad y la justicia podemos nacer de nuevo. Podemos trabajar nuestra sombra, que la tenemos todos, podemos comprometernos todos, podemos estar atentos y vigilantes para que nunca más sea tarde cuando nos demos cuenta.

4. Conclusión

La Argentina tiene que encontrar la humanidad en su inconsciente. Está en la tradición de nuestros abuelos inmigrantes, está en los mandalas de nuestros ancestrales indígenas, está en la mesa familiar, está en Dios, en Buda, en Goethe. Está en la naturaleza de los árboles que se podan para que demos más frutos. Por eso no podemos participar de crímenes porque esa humanidad nos grita desde el inconsciente Verdad y Justicia perseguirás por siempre.

No es que YPF no sea parte de nuestro corazón; es que están apelando a ese símbolo histórico para tapar los delitos cometidos durante los 90 y el 2000, por los mismos grupos oligárquicos y corporativos que se robaron la Nación.

La señora presidente quiere construir un relato desde la comunicación, usando a través de sus asesores, las verdades científicas comprobadas en torno de la realidad síquica de los sujetos. No la usa para desarrollar la humanidad, la manipula perversamente al servicio del mantenimiento del poder y de los negociados. Esto es la teoría de la comunicación hoy, que vende imbéciles como candidatos, que llama estadistas a los cobardes, que titula de heroicos los llantos interminables, que apela a la necrofilia como cultura de la muerte que está en el inconsciente de los argentinos desde las guerras civiles, pasando por el exterminio indígena en el desierto, siguiendo por las muertes no contadas de nuestros abuelos inmigrantes. Y apela, como gran parte de los partidos políticos, a que los actos simbólicos sean en los cementerios y llevan y traen muertos para escaparle a la vida presente. La Argentina debe salir del thanatos en la que está



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

atrapada, del escepticismo y pasar a la esperanza y a la fe inquebrantable por verdad y la libertad.

No tomemos como ejemplo a Churchill o De Gaulle, tomemos como ejemplo a Santiago Carrillo, a Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado cuando el intento de golpe en España. Todos estaban en el golpe, incluido el rey. Cuando los carabineros entraron al Parlamento español recién nacido, todos hicieron cuerpo a tierra y se escondieron debajo de las bancas; sólo un comunista, un ex franquista y un militar quedaron de pie. No habían sido buenos, no habían sido perfectos, pero eran hombres que adquirieron dignidad como un momento de gracia y salvaron la democracia española. Los tres no tuvieron votos; Carrillo, el gran resistente contra la dictadura de Franco, nunca pudo gobernar España pero le dio a España la democracia que necesitaba. No hay que temerle a las barras ni a las patotas, no hay que temerle a los autoritarismos ni a los fascismos. No hay que temerle a los intelectuales de pseudoizquierda que cobran abultados contratos mensuales. Como dijo Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, cuando “la mediocridad impera, siempre va acompañada de bajeza moral”.

Los partidos de la oposición confunden ideologismos con principios. Los ideologismos son las trampas que llevan a los hombres a violar principios. Las ideologías no son humanistas cuando se petrifican y esclerosan. Un gran poeta y gran comunista como Pablo Neruda, preso de ideologismo, llegó a justificar los crímenes de Stalin. ¡Cuántos de izquierda justificaron los crímenes de Stalin! Los crímenes son crímenes, sean de derecha o de izquierda y el humanismo rechaza todos los crímenes, porque el crimen de un hombre por más culpable que sea, es un crimen contra toda la humanidad.

La ley que se propicia es una trampa basada en un ideologismo menor que embauca por interés, por comodidad o por ignorancia a políticos que nacieron en partidos cuyos fundadores fueron grandes humanistas como Leandro Alem, como Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios o Juan B. Justo. Basta leer sus discursos y sus intervenciones para entender que nada puede quebrar la conciencia humanista de un hombre o de una mujer de Estado. No fuimos cómplices nunca y muchas veces no nos entendieron, pero antes que la opinión pública está el Uno, el Cosmos, Dios o el humanismo. Está la conciencia de que estamos llamados a ser personas y no oportunistas de coyuntura. El oportunista, el tipo ideal que caracteriza al político actual, mediocre, insustancial, cobarde y advenedizo es la bala envenenada que la modernidad a través de la razón instrumental metió con carácter letal en el corazón mismo de la razón moderna.

15. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CASTAÑÓN

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero expresar la profunda emoción y alegría que siento al darme cuenta del momento histórico que estamos viviendo hoy en este Congreso.

Momento que tiene que ver con nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestro progreso, nuestro crecimiento, con darle valor agregado a nuestros recursos; todo pensado a favor de nuestra gente, en la justicia, dignidad y realización de derechos.

Hoy se define el destino de nuestra patria. Es un día especial de compromiso con nuestra patria, nuestra gente, toda la familia argentina.

Es un momento en el que uno puede ilusionarse y soñar con alcanzar definitivamente esa Argentina grande y soberana.

Es un proyecto federal, constitucional, visionario, estratégico, de crecimiento, de protección del progreso y asegurador de las actuales y futuras generaciones. Siempre viviendo y sintiendo la necesidad de seguir fortaleciendo el desarrollo económico con inclusión social.

Siento un profundo agradecimiento a la vida, a nuestro pueblo, a Dios, a mi provincia, a mi familia, al partido político al que pertenezco y presido, como el Bloquismo de San Juan, y al frente que integramos con el gobierno.

Agradecimiento por poder formar parte de este momento histórico, pero más profundamente por coincidir en un proyecto de país que piensa en la protección de todos los sectores sociales y en especial de los más desprotegidos, entendiendo que la vida se hace más fácil si tenemos una mirada solidaria con nuestra gente.

La Argentina vive un proceso de crecimiento sostenido y necesita poder contar con la energía y los recursos necesarios para seguir transitando ese camino. El manejo de nuestros hidrocarburos, como de energías alternativas son fundamentales. La Argentina lo está haciendo.

Siento mucha emoción e ilusión, porque vienen a mi mente los millones de abuelos que hoy tienen protección, las miles de mamás que tienen la asignación universal que abre la puerta al crecimiento y al nacimiento de sus hijos, los millones de chicos que tienen protección, los millones de hombres y mujeres que hoy tienen un trabajo digno, los jóvenes y chicos que hoy pueden estudiar, la mirada inclusiva de nuestros chicos especiales que siempre reclaman una sociedad justa, la gran obra pública, las mas de mil escuelas, el financiamiento educativo y todo aquello que ha hecho que nuestro país sea grande. Hoy, al apoyar este proyecto, siento que estamos aportando esa herramienta necesaria para que este crecimiento siga adelante, y que aquellos derechos todavía no alcanzados puedan alcanzarse.

Es proyecto de justicia e inclusión social.

Vengo de una provincia valiente que vive un momento de crecimiento sostenido, una provincia que todos los días da muestra clara de la lucha por mejorar la calidad de vida



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de todos sus habitantes.

San Juan es pionera en la lucha por la justicia e igualdad social.

En esa historia aparece la Constitución de 1927, donde quedan plasmados todos los derechos sociales de nuestra gente: el voto femenino, los derechos laborales, la protección de los sectores vulnerables, la industria, educación, salud, seguridad; Constitución que tiene origen en el bloquismo de mi provincia.

Hoy traigo la voz de mi querido partido Bloquista, partido que con mucho orgullo me toca presidir. Partido que integra el Frente para la Victoria a nivel provincial y nacional. Partido que ha venido acompañando con mucha convicción todas las políticas del gobierno nacional; acciones vinculadas con la redistribución de la riqueza y la justicia social.

Traigo la voz de mi querida provincia, los sueños y las ilusiones de miles de sanjuaninos. Traigo la voz positiva de nuestra gente, que ve con orgullo como nuestra provincia crece y es tenida en cuenta en el gobierno central.

Por nuestros niños, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, nuestros adultos mayores, por nuestros chicos especiales, por toda nuestra familia, es que le decimos, SI a este proyecto, "SI" a la inclusión, "SI" a la justicia para todos.

16. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CATALÁN MAGNI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

DISCURSO JULIO CATALAN MAGNI S/YPF

La sesión de hoy es una sesión histórica. Por varios motivos. Primero y principal, porque se está dando un paso gigante hacia la recuperación de la soberanía de los hidrocarburos, se está recuperando una de las figuras principales para el desarrollo productivo y energético del país. En segundo lugar, esta fecha es histórica porque esta medida propuesta por el gobierno es apoyada por la mayoría de los partidos, los más amplios y representativos, en lo que significa el apoyo más contundente que se ha visto en los últimos años. Esta es una política de Estado, con todas las palabras y con todas las fuerzas, demostrando que nuestra democracia y consenso plural gozan de buena salud.

Hoy, junto a mis pares, estamos protagonizando un debate que quedará guardado en la historia, como una gran bisagra. La nacionalización de YPF viene a poner orden a un período de desinversión que llevó adelante Repsol. Esta empresa obtuvo ganancia aun



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

en las peores épocas de productividad. La política de esta empresa llevó a que, por primera vez en 17 años, la Argentina tenga que importar gas y petróleo. Los números hablan por sí solos y los datos de la realidad avalan esos números negros de la empresa española.

Ante esta situación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió replantear la política hidrocarburífera y discutir esta privatización claramente desafortunada. Y optó por recuperar este recurso ante una clara política de vaciamiento y de improductividad pocas veces vista.

El pasado lunes 16 de abril el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado el proyecto que establece la expropiación de acciones de YPF, equivalentes al 51% de su capital social.

Mientras tanto dispuso en ese mismo momento la inmediata intervención de Repsol YPF y declaró de interés público nacional la exploración de hidrocarburos.

El proyecto enviado por la presidencia declara la utilidad pública las actividades de YPF Sociedad Anónima y establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, junto con el crecimiento sustentable de las provincias.

La Argentina tiene una obligación con su historia: dejar de ser el único país latinoamericano que no maneja sus recursos naturales. Para eso hoy estamos debatiendo y aprobando la recuperación de nuestra histórica YPF. Vale aclarar estamos discutiendo los manejos equivocados de una empresa española, no de ese país ni de su gobierno.

Quienes confunden a una empresa como Repsol con un país como España, sólo lo hacen para complicar el debate. No debemos permitir que se corra el eje de la discusión, estamos hablando de una empresa, no de un país. Hay que machacar y redundar porque tanto de aquí como de allá hay quienes quieren hacernos creer otra cosa. Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España, no de Repsol. Si tenemos esto en claro podremos avanzar sin distracciones ni chicanas.

Desde el año 1907, cuando se produjo el descubrimiento oficial de petróleo en el país, hecho que derivó en la creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el autoabastecimiento en combustibles se convirtió en la piedra basal del desarrollo económico. Los hidrocarburos son un recurso único y estratégico. El autoabastecimiento de combustibles es condición principal para el desarrollo genuino de un país. Por esta razón, debe ser considerado como una producción de interés público. Los hidrocarburos, y especialmente el gas y el petróleo, son recursos imprescindibles para un crecimiento sólido y continuo del país.

Allá por el año 1992, la estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima. Ese fue el corolario de lo que sucedería en 1997, cuando se inició su desnacionalización. Ya en 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue adquirido por Repsol.

La intervención de YPF no sólo es necesaria sino conveniente para poder encarar una política energética y productiva a mediano y largo plazo. Hay que aprovechar también para darle mayor impulso aún a la industria nacional de insumos para la perforación de pozos petroleros. Esto permitirá no sólo reducir costos innecesarios sino también impulsar la industria nacional en este área. Se trata de una medida estratégica que se desarrolla en múltiples direcciones, todas ellas beneficiosas para los números del país. También como fueguino, como habitante de esta hermosa provincia productora de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

petróleo, me siento involucrado y participe necesario ya que, a partir de la aprobación de esta propuesta, Tierra del Fuego es parte beneficiada de esta empresa nacional llamada YPF. Accionistas y beneficiarios del gran parte del paquete accionario, tal cual lo anunció la presidenta.

Como el resto de las provincias petroleras, Tierra del Fuego fue especialmente considerada y contemplada en el diagrama de esta restructuración de YPF. No sólo el país se constituye como propietario de sus recursos sino que estas provincias se constituyen como parte de la ganancia prevista. Esto de por sí nos llena de orgullo a los fueguinos y nos hace ver con mayor optimismo la realidad que comienza partir de esta nacionalización.

Por todo esto, decía que estamos en una sesión histórica. Por los intereses nacionales que se invocan, por los intereses provinciales que se fortalecen, por la nueva perspectiva que se abre de ahora en más. Porque hace muchos años que los argentinos merecíamos disponer de nuestros recursos hidrocarburíferos, porque hace mucho que hablamos de soberanía en todos los sentidos, porque las acciones en tal sentido son la mejor demostración de la coherencia de este modelo nacional y popular con todas las letras y con todas las fuerzas. Porque en resumidas cuentas nosotros tenemos la posibilidad de administrar lo que nos pertenece y tenemos la obligación de cuidarlo.

Por todo lo expuesto, y en claro apoyo a esta propuesta del Ejecutivo es que mi voto va a acompañar esta iniciativa.

17. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La YPF estatal era desarrollo social.

No es cierto que tras la fiebre del desguace del modelo de Estado anterior se conformó un sector estatal mínimo y ausente. Por el contrario, lo que se hizo fue convertir al Estado en una herramienta destinada a favorecer plenamente a un segmento social altamente concentrado, con el cual se articuló una alianza que perduró hasta mayo de 2003.

Ahora bien, en este nuevo esquema de Estado que estamos profundizando, estamos llenando de contenido términos como: soberanía, desarrollo, federalismo, solidaridad,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

economía social, independencia energética. Estamos recuperando la soberanía energética. Avanzar en esta reforma es sin duda un desafío central para consolidar el desarrollo económico y la estabilidad política en la Argentina, y resulta fundamental la gestión de proyectos de modernización e innovación que se produzca con la obtención de la renta asociada a la actividad de hidrocarburos, para lo cual se necesita que esa YPF que construyó, caminos, pueblos y comunidades sea constructora del desarrollo tecnológico del país y volver al concepto integrador.

Como anunció nuestra presidenta, nuestro país ha recibido unos 890 científicos argentinos que se habían ido por falta de oportunidades y que ahora fueron repatriados, y que antes de fin de año se piensa llegar a los 1000 repatriados. A esto se suman nuestras universidades nacionales, que aportan profesionales que también se deberán adecuar a esta concepción de desarrollo con respeto al ambiente y al cuidado de nuestros recursos, pero aportando valor agregado a los productos derivados.

Es este nuevo paradigma de YPF no ser sólo una empresa que extrae petróleo y gas de la tierra, sino un actor fundamental que aporta al desarrollo tecnológico del país.-

Pero esto no puede hacerse solo. Debemos pensar en la patria grande, en nuestros hermanos latinoamericanos y apoyar y compartir su experiencia en esta materia.

Desde el primer minuto en que nuestra presidenta anunció esta medida sentimos el acompañamiento de los países latinoamericanos. Tengamos en cuenta las palabras del presidente de nuestra hermana uruguayana cuando expresa que: “no nos gusta el prepo de la Europa rica”, y observemos que es fundamental lo que nos están mostrando cotidianamente, el desarrollo de sus empresas con las que debemos compartir una estrategia en común que nos permita poner en acciones la unión latinoamericana que decimos, sentimos y queremos.

El desafío está planteado: tenemos que construir una nueva empresa que no sólo nos autoabastezca, sino que esté comprometida con el desarrollo inclusivo y tecnológico de su pueblo y en comunión con el resto de las naciones de Latinoamérica.

El 16 de abril del 2012 quedará en la historia como el día en el que nuestra presidenta tomó la decisión de recuperar para el país sus recursos naturales estratégicos y hoy es el día en que la pluralidad de los representantes refrendamos como política de Estado esta decisión.

Historia de YPF

Se puede pensar la historia petrolera en 6 momentos directamente relacionados con las estrategias de organización empresarial y laboral y con el impacto de las políticas aplicadas en el ámbito nacional.

Esta recopilación histórica, la hice consultando en algunos temas, el libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri.

Momento I

Descubrimiento del petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia hasta 1922 año de la creación de YPF. En esta primera etapa se organizan las bases de explotación y, por consiguiente, se establecen los primeros asentamientos poblacionales. Se crea la Federación Obrera Petrolera en 1917 en defensa de las reivindicaciones obreras acordes



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

con una de las etapas más combativas del anarco-sindicalismo.

En 1920 se registra una caída coyuntural de los precios internacionales del petróleo. El comportamiento frío de las inversiones privadas se relaciona también con el cambio de la política iniciado por el radicalismo en el poder, que insistió ante el Congreso para modificar la legislación, excesivamente permisiva, alentando la nacionalización y explotación fiscal de los recursos del subsuelo nacional.

Se crea entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se establecían normas estrictas para acceder a las vetas petroleras en las zonas no reservadas, exigiendo a los peticionantes un depósito en dinero y la demostración de la capacidad técnica, económica y financiera para encarar la explotación, con lo que se intentaba frenar la especulación.

Momento II

Bajo la administración del general Mosconi se abre una nueva etapa decisiva en el desarrollo del petróleo nacional. La producción fiscal se duplicó y aumentó la capacidad de almacenamiento y transporte estatal, a la vez que se inició la capacitación de técnicos y geólogos nacionales, consolidándose la integración vertical de la industria petrolera en manos del Estado.

Con la construcción de la gran destilería de La Plata en 1925 se obligó a las empresas privadas, especialmente Standard Oil (estadounidense), a aumentar y modernizar su propio sistema de refinación, a la vez que YPF montaba un sistema de venta de naftas y lubricantes en todo el país. Era la era de la gasolina.

Como forma de asegurar el control y la normal provisión del petróleo al mercado interno, se impuso desde el Estado una estructura de carácter militar a los yacimientos, lo cual caracterizó el período que va de 1922 a 1930. Estas características tenían que ver con la tarea reguladora del mercado interno sumado a un fuerte control de la fuerza de trabajo.

En este período se puso en marcha una política de bienestar y asistencia al trabajador, para asegurar la producción y evitar los conflictos gremiales. La fórmula de gestión empresarial del Estado fue entonces control y contención social, iniciándose una explícita política para homogeneizar y promover la identificación de los trabajadores con la empresa nacional. Nace el trabajador “ypefiano”.

Momento III

Entre 1930 y 1946 se desarrolla el tercer período, caracterizado por la extensión de las explotaciones a nuevas áreas regionales y extrarregionales. La demanda de combustible se intensificó a partir del florecimiento de la industria sustitutiva de importaciones y el aumento del consumo energético en las ciudades.

Con el golpe de 1930 que puso fin a la segunda presidencia de Yrigoyen, el modelo estatal se diluyó y volvió a incrementarse la participación del capital extranjero. No obstante, la regulación laboral aplicada a las explotaciones siguió progresando, a la vez que la vocación de argentinizar los yacimientos también se profundizó.

Momento IV

La cuarta etapa se extiende desde la llegada del peronismo al poder en 1946 hasta su



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

caída en el 55, fecha que coincide con la definitiva provincialización de los territorios nacionales patagónicos, con excepción de Tierra del Fuego.

La expansión del rol estatal en esta etapa favoreció la filiación de los obreros con las políticas peronistas, lo cual derivó en la creación del Sindicato Único de Petroleros del Estado, integrado a la CGT oficial en 1951.

En 1946 se creará la empresa estatal Gas del Estado encargada de la provisión de gas y fluidos para el consumo industrial y domiciliario.

Se podría pensar que la consolidación de la actividad hidrocarburífera habría finalmente profundizado el reemplazo gradual del modelo de desarrollo vigente basado en la explotación ganadera extensiva. Asimismo, reforzó el proceso de caracterización económica y demográfica en otras zonas.

La organización social del espacio impuesto por la nueva actividad generó la aparición de poblaciones muy dependientes del centro productor, donde las empresas estatales cubrían todas las necesidades de los trabajadores dadas las grandes distancias con otros centros poblacionales.

En todos los casos se repetía el esquema del campamento o villa central donde se instalaban las viviendas y otros servicios necesarios, incluidos salud, educación, clubes y otros espacios de sociabilidad, con lo cual se aseguraba la estabilidad de la fuerza de trabajo y se promovía la formación de una identidad comunitaria y de un sentido de pertenencia que se transmitía de una generación a otra, donde los trabajadores se identificaban con la empresa estatal. Se promovía en los obreros una idea de pertenencia colectiva y con ello, el compromiso y el convencimiento de que su trabajo formaba parte sustancial del desarrollo nacional.

Momento V

De 1955 a fines de 1970

Las medidas desarrollistas del gobierno de Frondizi y su interés por incrementar la producción energética nacional, implicaron cambios importantes, modificando el modelo de desarrollo vigente.

Respecto de los nuevos estados provinciales, la obtención de regalías por la explotación del subsuelo permitió sostener un modelo distributivo con amplia cobertura social que fue la base de las políticas de bienestar generadas por los gobiernos locales como el caso del MPN en Neuquén.

Al producirse la provincialización, la propiedad del recurso se convirtió en tema obligado y recurrente de las reivindicaciones provinciales, sobre todo si se tiene en cuenta que las sucesivas leyes nacionales sobre hidrocarburos habían dejado sin efecto la condición de propiedad provincial. Esto permitió que el Estado nacional mantuviese la mayor injerencia en el control y manejo de los recursos energéticos de las provincias patagónicas. Es por esto que a partir de entonces el gobierno federal paga “regalías” a las provincias productoras de petróleo, lo que constituye el 12% del precio de venta de los hidrocarburos en condición comercial – se deduce de la venta del precio pagado por el barril de crudo menos gastos de flete- como forma de participar del producto generado.

Las empresas privadas sólo cumplieron un rol secundario en los primeros años de este



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

período, como prestadoras de servicios a YPF, mientras que la empresa estatal tenía mayoritariamente la producción, lo que a su vez la convirtió en la principal generadora de empleos.

En la última etapa de este período las leyes de hidrocarburos fueron generando una cada vez mayor injerencia del Estado nacional en las decisiones en materia petrolera, a la vez que reafirmaba la participación de agentes privados, sobre todo en las tareas vinculadas con la etapa de exploración. Pero a fines de 1970 este proceso se agudizó con la cesión por parte de la empresa estatal de las mejores áreas productivas a grandes grupos económicos transnacionales.

Hasta 1977 al menos, el Estado nacional, pese a los cambios políticos, siguió ejerciendo una clara direccionalidad interventora a través de sus empresas YPF y Gas del Estado, a las cuales en 1967 se agregó la explotación hidroenergética con una nueva empresa estatal, Hidronor.

Momento VI

En los 80 se inaugura una etapa caracterizada por el progresivo y cada vez más importante alejamiento de la participación estatal en la explotación de los recursos energéticos, producto de la aplicación de políticas neoliberales.

Todavía en 1985 YPF producía el 81% del crudo extraído en la provincia de Neuquén, elaborando en sus destilerías de Plaza Huincul la mayor parte de los combustibles consumidos en la región y fuera de ella. Sin dudas, era una de las mayores generadoras de empleo absorbiendo, según datos de 1987, a más de 6.000 agentes entre personal efectivo y contratado; en tanto que propiciaba la aparición de múltiples actividades vinculadas con servicios especiales de exploración y explotación, provisión y reparación de maquinarias y equipos e incluso de productos químicos.

Estos efectos multiplicadores tuvieron entonces una altísima incidencia socioespacial.

Entre otras cosas, cabe destacar la activa colaboración de la empresa en la creación de la Universidad Nacional del Comahue y de una de sus primeras carreras-Ingeniería con especialidad en petróleo- desarrollada en Challacó.

La profundización de este proceso de privatización durante los 90 agudizó la disminución de la participación estatal y de la posibilidad de apropiación de la renta por parte de un grupo más importante de la sociedad.

El resultado de décadas de vaciamiento trajo como resultado el evidente deterioro del nivel de vida de las poblaciones directamente relacionadas con la explotación del recurso, tal como lo demuestran las jornadas de lucha popular protagonizadas por las comunidades de Plaza Huincul y Cutral Có en 1996 y 1997, entre otras.

Más de 5000 personas salieron a las calles en estas localidades con el apoyo masivo de los diversos sectores sociales inaugurando una nueva modalidad de lucha: los cortes de ruta con instalación de piquetes. Con el asesinato de Teresa Rodríguez producto de la brutal represión, cohesionó a los grupos de lucha enfrentándolos decididamente contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, las empresas y las fuerzas de seguridad.

Todo ello como producto de décadas de descalabro económico nacido en el seno de los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

negocios entre el establishment político y la cúpula empresarial.

El incremento de la injerencia de grandes grupos económicos en la explotación petrolera regional desde fines de los 70, a través de transnacionales como Astra, Bidas y Pérez Companc, alteró las condiciones previamente mencionadas al fijar precios que aseguraban naturalmente sus propios beneficios; empresas que operaban con filiales de personal reducido con un gran margen de inestabilidad laboral sujeto a las condiciones del mercado, lo que conocimos tristemente como “flexibilización laboral”.

El achicamiento evidente de la empresa estatal que incrementó el proceso de privatización en beneficio del grupo español Repsol, tuvo graves consecuencias sociales para las zonas productoras, especialmente golpeadas por la desocupación. Las indemnizaciones pagadas se agotaron rápidamente en el sustento diario ante la falta de alternativas económicas. Y vimos florecer kiosquitos, maxi kioscos, taxis, en un paisaje desolador, donde más temprano que tarde el conjunto de la población tuvo la necesidad de huir.

Ahora bien, es preciso analizar las condiciones en las que se desarrolla el último capítulo de la historia del oro negro, ya que no hubiera sido posible destruir las empresas nacionales de gestión estatal sin la complicidad política y el capital internacional.

La privatización de las empresas públicas instaladas en la Patagonia como YPF, Gas del Estado e Hidronor, alteró de manera radical el modelo de desarrollo vigente. A partir de entonces, diversas compañías privadas, estadounidenses y españolas, mayoritariamente en el caso del petróleo, pudieron licitar nuevas áreas y renegociar los contratos de exclusividad que antes beneficiaban a las empresas argentinas. La importación y exportación se liberaron para estas compañías, que pudieron disponer sin traba alguna de los bienes producidos y de las ganancias generadas. Si bien la producción de petróleo y gas creció notablemente, se generaron importantes efectos negativos en materia socioeconómica, sobre todo en las áreas de influencia de las empresas estatales, allí donde comenzó a reducirse la demanda de empleo.

Este es un nuevo paradigma en la política iniciada en el 2003, queremos tener para las próximas generaciones: más soberanía.

18. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CLERI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El 25 de mayo próximo se cumplirán 9 años del día en que nuestro ex presidente y compañero Néstor Kichner vino a proponernos un sueño. El sueño de una Argentina justa, libre y soberana.

Hoy, estamos ante un día histórico en el camino de cumplir ese sueño propuesto, por la decisión política de nuestra compañera presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, de recuperar YPF para todos los argentinos, a partir de la declaración de utilidad pública del 51% de las acciones de YPF que posee Repsol en la misma.-

Desde 2003 a esta parte, nuestro país lidera uno de los mayores procesos políticos de crecimiento económico con inclusión social de que se tenga memoria en el mundo. Proceso que tuvo como principal desafío abandonar el modelo político, económico y cultural neoliberal para reemplazarlo por un modelo de crecimiento con justicia social. Este nuevo modelo significó el paso a una nueva era de la política argentina donde los sectores populares recuperaron el lugar central en las decisiones gubernamentales. Para ello fuimos restableciendo el rol protagónico del Estado para llevar adelante las transformaciones necesarias y recuperando para el pueblo las instituciones y los instrumentos estratégicos de nuestra economía.

Así, comenzamos un proceso de diversificación de nuestra matriz productiva y energética, impulsando la reindustrialización, la consolidación del mercado interno y el enérgico abandono de las políticas de endeudamiento externo como pilar de la economía. El fin de la administración privada de los fondos previsionales, antes al servicio de la especulación financiera y hoy puesta al servicio del desarrollo nacional, la movilidad jubilatoria, la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, la reciente modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de servicios audiovisuales y la asignación universal por hijo son algunas de las medidas estratégicas tomadas a fin de ponerlos en la buena sintonía con los nuevos paradigmas nacionales de solidaridad, crecimiento y desarrollo que, hasta ahora, y a contrario de augurios apocalípticos, dieron por resultado la expansión de la actividad industrial, el crecimiento sostenido del PBI, la consolidación del mercado interno, inclusión social, el crecimiento del salario real, la disminución del desempleo y el aumento récord de reservas entre otros indicadores macroeconómicos de relevancia. El proyecto de Néstor y Cristina sentó las bases para un nuevo modelo nacional, popular y democrático de liberación y puso fin a décadas de entrega, proyectos antinacionales y antipopulares. Recordemos que desde nuestras luchas por la independencia siempre han estado en pugna dos grandes proyectos antagónicos: el nacional y popular y el oligárquico.

Hoy, tenemos la obligación de garantizar a futuro la continuidad de aquellas conquistas y de este modelo de desarrollo con inclusión, y para ello, es imprescindible asegurar la disponibilidad de los recursos estratégicos para sostener el crecimiento económico. En este marco, los hidrocarburos en general, pero especialmente el petróleo y el gas, se encuentran entre estos recursos aptos para garantizar la continuidad de la expansión económica, el desarrollo industrial y, con ellos, la justicia social. Ya en 1947 Juan Domingo Perón enseñaba: “La política petrolera ha de basarse en los mismos principios



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

en que descansa toda la política económica: conservación absoluta de la soberanía argentina sobre las riquezas de nuestro subsuelo, y explotación racional y científica por parte del Estado; advirtiéndole, que cuando el Estado rescata la dirección inmediata y directa de los bienes que la Nación posee, debe ya despojarse del privilegio de seguir administrándolos, sin compartir funciones con otros intereses que no sean los que correspondan a todos los argentinos”.

Ante esta realidad, no hay ninguna nación a nivel mundial que ignore que el petróleo, disponga de él o no, es un recurso de vital gravitación en su estructura económica. Es por eso que los programas energéticos que se han instrumentado en el mundo reconocen como objetivos principales el incremento de la producción propia con la finalidad de reducir la dependencia del petróleo importado, el diseño de políticas de acumulación de stock de crudo o la implementación de mecanismos que permitan sobrellevar las fluctuaciones de los precios del petróleo e incentivar el uso eficiente del mismo. En este sentido el mismo general Mosconi, haciendo alusión a los recursos petrolíferos, sostenía: “...el precio de costo de éstos (no puede ser) calculado de acuerdo con el precio verdadero del combustible, beneficiándose así solamente al capital de esa industria, sin provecho para el trabajo y el consumidor”.

La visión neoliberal sobre los hidrocarburos y los recursos naturales, visión gestada desde el Consenso de Washington y aplicada por la empresa Repsol, despojó de cualquier valor estratégico a estos recursos para considerarlos commodities. De esta manera y durante varios años, buscaron meramente la ganancia especulativa sin ánimo de reinversión, porque dentro de un modelo económico basado en el desempleo, importaciones, dólar barato y el desguzamiento de la industria nacional, la falta de inversión y producción no ponían en peligro la matriz energética nacional ya que no había demanda alguna. Sin inversiones se podían explotar los yacimientos ya disponibles y vender la producción en el mercado externo a precio internacional por ser commodities dado que, sin demanda interna y sin producción industrial, la producción de petróleo se convertía en saldo exportable automáticamente.

Este paradigma predominó de forma negativa durante varios años en nuestro país y especialmente desde 1989, donde por ley 23.696, de reforma del estado, se integró YPF al paquete de empresas públicas sujetas a privatización. En 1992 cambió su formato legal de sociedad del Estado (S.E.) para pasar a ser una sociedad anónima (S.A), empresa privada y en 1999 YPF pasó definitivamente a manos privadas al ser vendido su paquete accionario al grupo español Repsol, quien pasó a controlar la empresa con una participación casi total de las acciones y con una política de desinversión, falta de exploración y un criterio puramente especulativo. Repsol-YPF multiplicó las importaciones de hidrocarburos por 11 veces entre los años 1995-2011 como consecuencia de la falta de inversión y la creciente demanda propia de un mercado interno en creciente expansión. En 1997, YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la gasífera de nuestro país, participación que se redujo en el 2011 al 34% y 23% respectivamente. Asimismo, también decayeron en forma alarmante las reservas de petróleo y gas, en este último caso al borde de la emergencia. Como este es un gobierno que se hace cargo de los problemas, viendo como se desarrollaba esta política por parte de Repsol, y a fin de incrementar la producción y la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

exploración de hidrocarburos, desde el Estado nacional se diseñaron diversos instrumentos para elevar el nivel de reservas de petróleo y gas natural y destilados y se crearon los programas Petróleo Plus, Refino Plus y Gas Plus. Sin embargo, aun cuando Repsol-YPF fue beneficiaria de estos programas, la oferta de hidrocarburos por parte de la empresa no sólo no ha crecido, sino que continúa exhibiendo una tendencia decreciente, demostrando que la gestión neoliberal de la empresa Repsol en YPF es un enclave neoliberal incompatible con el modelo de desarrollo y recuperación de soberanía implementada por los gobiernos de Néstor y Cristina.

Es importante destacar que los principales estudios estratégicos y geopolíticos consideran innegable que, pese a haber avances tecnológicos de envergadura en materia energética, el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía de los próximos 30 años. Por ello, es imprescindible acompañar la decisión de nuestra presidenta de recuperar la soberanía en materia energética y sobre todo en petróleo y gas. No buscar el autoabastecimiento es mantener un vínculo de dependencia de la economía nacional sometida a los vaivenes de los precios internacionales movidos por intereses especulativos o geopolíticos.

Hoy más que nunca, nos sentimos orgullosos del camino marcado por nuestra compañera presidenta y creemos que el Estado debe intervenir directamente sobre nuestro petróleo y gas protegiendo los intereses de la Nación y jerarquizando la función del Estado, porque tal como ella sostuvo en Rosario, “defender al Estado también es defender nuestra bandera”.

Por último corresponde analizar la expropiación desde un punto de vista jurídico para ponderar las críticas sobre este proyecto de ley. El gran jurista argentino Arturo Sampay sostenía ya en 1949 que “frente al capitalismo moderno, ya no se plantea la disyuntiva entre economía libre o economía dirigida sino que el interrogante versa sobre quién dirigirá la economía, y hacia que fin” y, dado esto, “la intervención del Estado es necesaria para garantizar el bienestar común”. “Así -proseguía- terminó la época en que la política (según el esquema liberal) era considerada como un factor de ‘perturbación’ para la economía libre, y hoy es verdad lo contrario, o sea, que la economía libre es un factor de ‘perturbación’ para la política”. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público asentado en el artículo 17 de nuestra Constitución y en el artículo 2511 de nuestro Código Civil. La ley 21.499 de expropiación es la única que prescribe claramente que “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que ‘la satisfacción del bien común’ y/o ‘el bienestar general’ son conceptos de apreciación política, corresponde plenamente, en tanto se cumplan los demás requisitos normativos, que el Congreso Nacional mediante ley se expida sobre la procedencia de la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Corresponde también diferenciar el concepto jurídico de la expropiación por utilidad pública, que corresponde a este caso, con el de la confiscación. La confiscación refiere al acto de pasar al Estado determinados bienes a causa de una condena penal, fiscal o gubernativa, es decir, una privación de la propiedad por parte del Estado como parte de un castigo o a modo de sanción. La expropiación es un procedimiento de derecho



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

público y regulado legalmente, la confiscación está prohibida por el Art. 17 CN que reza, in fine: “La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”. Vale la aclaración dado que desde algunos medios se ha intentado maliciosamente emparentar este procedimiento legítimo de la expropiación con el de la confiscación, expresamente prohibida en nuestro país y que nada tiene que ver con este caso.

Con respecto al valor a pagar en concepto de indemnización, nuestro Código Civil prevé que debe ser justa, y la ley de expropiaciones, que deben excluirse las ganancias hipotéticas y el lucro cesante.

Es por eso que celebramos la decisión de nuestro gobierno de recuperar una empresa ligada a los valores nacionales como es YPF y votamos con toda convicción este proyecto que sigue en el camino trazado por Néstor Kirchner, devolviéndonos soberanía y dignidad.

Y lo votamos orgullosos porque creemos imprescindible la intervención directa del Estado sobre la producción de petróleo y gas; porque YPF, es un emblema nacional en esta materia; porque inicia definitivamente el camino del autoabastecimiento y porque así el modelo de desarrollo se profundiza y cada vez más compatriotas mejoran su calidad de vida.

YPF vuelve al pueblo argentino y vuelve para que NUNCA MÁS vuelvan a caer en manos extranjeras las decisiones estratégicas sobre el petróleo y el gas argentino. Como sostuvo el presidente fundador de YPF, don Hipólito Yrigoyen: “El subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”. Hoy, en una sesión histórica para nuestra patria es justo y necesario recordar a nuestro eterno Néstor Kirchner, quien nos propuso allá por 2003 la realización de este sueño maravilloso que tiene por principal protagonista al pueblo argentino. Él está presente entre nosotros en cada pequeña gran lucha donde se juega el destino de nuestro pueblo, porque él sembró esta semilla, que hizo imposible apagar tanto fuego, y será defendido por la fuerza militante de una juventud que con alegría y convicción se volcó a la política para realizar sus sueños.

19. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO COSTA

Fundamentos del apoyo en general del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A

Permítame contarle una pequeña anécdota de algo que me sucedió esta semana, cuando estuve recorriendo la zona Norte de mi provincia.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Santa Cruz es una provincia eminentemente hidrocarburífera. Somos los terceros productores de gas y petróleo del país.

Los ingresos más importantes que tenemos son las regalías provenientes de estas explotaciones.

Ciudades como Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike, Cañadón Seco, Caleta Olivia, son el fruto del trabajo de YPF y Gas del Estado, que cuando eran de todos, creaban empleo, exploraban, hacían patria a lo largo de todo el país, creaban hospitales, escuelas, centros deportivos, culturales, cines, teatros y fundaban pueblos.

La mayor parte de la gente que vive en esa zona depende de la actividad petrolera.

Allí un vecino, muy emocionado me dijo la semana pasada: ¡¡¡Qué bueno que recuperamos el petróleo!!!, ¡vamos a tener trabajo!, vamos a vivir mejor!”

Pero yo le expliqué que el petróleo siempre fue nuestro, siempre fue de la provincia. Pero fallamos en la capacidad de control.

Este vecino me miró y me dijo: “¿y entonces por qué vivimos tan mal?, ¿Cómo puede ser que no se puedan pagar los salarios de la administración pública, que no tengamos agua, que los hospitales no tengan médicos y remedios o que no haya dinero para las escuelas; por qué nuestros jóvenes lideran las estadísticas nacionales de alcoholismo y suicidio?”

Yo le expliqué que esto nos pasó porque durante todo este tiempo el gobierno no controló, no exigió a las empresas.

El petróleo fue aprovechado por unos pocos, y hemos transferido riqueza fuera de Santa Cruz y de la Argentina.

Durante este tiempo la inacción del gobierno colaboró con las empresas en contra los intereses del pueblo.

El gobierno no se preocupó por cuidar estos recursos y ponerlos al servicio de todos. Siempre sostuve que los recursos naturales son del pueblo y para el pueblo. Siempre sostuve que YPF debía ser estatal.

No acepté la privatización. No acepte su venta y su desgüace.

Para mí YPF debía ser del Estado para el desarrollo estratégico y sustentable de la Nación.

Nosotros, como organización política, creemos en el futuro, creemos en el Estado y creemos en la política como herramienta para transformar la realidad de nuestras comunidades, recuperando el valor del progreso a través del trabajo genuino y sustentable.

Defendemos la participación del Estado en la economía y por eso queremos una YPF del Estado.

Nosotros propusimos en las dos últimas elecciones de Santa Cruz recuperar la soberanía energética de la provincia, dejar de ser rehenes, socios bobos y cómplices del saqueo de nuestros recursos. Por eso, propusimos de manera concreta crear una empresa estatal para que maneje nuestros recursos hidrocarburíferos.

Por lo tanto, celebramos la iniciativa del gobierno de acompañar nuestra posición



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

histórica.

Luego de dos décadas de desaciertos, este acercamiento, sumado a la gran expectativa y esperanza en el futuro que se ha generado en mi provincia, me lleva a promover la recuperación de YPF.

Señor presidente: sé que es un día muy importante. Que estamos legislando en un tema que resulta trascendental.

Como representante del pueblo de Santa Cruz, sé además que hoy, miles de vecinos de mi provincia siguen este debate con gran expectativa. Para los santacruceños no es un día más.

Por ello hemos presentado varias propuestas para mejorar el rendimiento de YPF

Buscamos un Estado y una YPF transparente, profesional, que rinda cuentas y se deje auditar; una empresa verdaderamente federalizada, no sólo en la tenencia de un porcentaje de las acciones, sino en una administración federal y descentralizada. Que tenga objetivos claros y precisos como el aumento de la producción y la generación de trabajo en todo el país.

Queremos luchar no sólo por recuperar la mayoría accionaria, sino también por la recuperación de las acciones que hoy tiene el grupo Esquenazi. Porque, ¿sabe qué dijo el gobernador de mi provincia? Que Eskenazi es un extorsionador, que nunca hizo las inversiones ni cumplió los compromisos de producción.

Promuevo una mayor participación de las PYMES, de los trabajadores en la toma de decisiones, porque esto implica un mayor compromiso con el recurso, con el lugar, con la actividad, con el cuidado del medio ambiente.

Es preciso que exista un marco nuevo para desarrollar la actividad, reglas claras y objetivos precisos, no como pasa en Santa Cruz, donde se extendieron los contratos a empresas que no han cumplido las pautas de inversión ni de producción, y se privilegio la concesión de nuevas áreas a empresas amigas sin experiencia ni capital para, finalmente, no producir.

Es necesario que se realicen de manera urgente las auditorías integrales e independientes sobre todas las concesiones. Así podremos evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y técnicas.

También es necesario que se utilicen nuestros recursos naturales para un proceso de industrialización que le agregue valor y permita el desarrollo de toda la cadena productiva y más trabajo.

Permítame, señor presidente, señalar que también necesitamos el acompañamiento y el compromiso de todas las provincias para lograr el control efectivo de toda la actividad.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

No puede ser que pase como pasa en mi provincia, donde nadie controla la liquidación de las regalías, el cumplimiento de las inversiones, el estado de cada pozo ni el cumplimiento de la remediación ambiental.

Un gobierno incapaz de controlar y evitar la corrupción está condenado al fracaso. Por eso, proponemos generar un ente único de control unificado, con capacidad de actuar y presencia efectiva. Sin regulación y control esto también va fracasar, de la misma manera que la privatización.

Hay que solucionar los problemas de los damnificados por los continuos zigzagueos de la política energética de estas dos últimas décadas, como los ex trabajadores de YPF. Para ellos espero una respuesta justa por parte del Estado, y que se dé tratamiento a los proyectos que están pendientes aquí en comisiones.

Señor presidente: voy a votar para recuperar YPF para el Estado argentino. Voy a votar a favor de todas las propuestas que son necesarias para el éxito de esta gestión, para lograr el autoabastecimiento hidrocarburífero y para lograr más trabajo y desarrollo.

En Santa Cruz hoy hay miles de vecinos esperanzados en que la situación cambie. Yo también tengo la esperanza de que estemos ante una nueva realidad. De que hayamos aprendido de los errores del pasado y podamos realmente construir una empresa estatal grande. Que invierta y desarrolle. Que explore, que haga grande a la Argentina.

Mi provincia tiene la capacidad, el conocimiento, las ganas y la mano de obra necesaria para ser punta de lanza en esta nueva etapa, pero hasta hoy ha sido desaprovechada. Espero y quiero creer que podamos entre todos cambiar la historia.

Para lograrlo esto no tiene que transformarse en otra oportunidad perdida; tenemos que buscar los puntos de coincidencia para que nuestra prioridad, al menos sé que es la mía, sea generar más y mejor trabajo para los argentinos y los santacruceños y para hacer de YPF una empresa líder en el mundo que sea un orgullo para todos.

Quiero una YPF nueva, que crezca y haga crecer a la Argentina.

Una YPF grande.

Como aquella que hizo grande a Santa Cruz.

La que fundó pueblos y dejó su marca en cada rincón de la Argentina.

La que unió a los argentinos y marcó el camino de una patria entera.

Quiero una YPF como la que suenan nuestros jóvenes, con más trabajo, más oportunidades y más desarrollo.

Quiero una YPF nueva que explore e invierta. Que no sea presa de los especuladores ni rehén del clientelismo político.

Quiero una nueva YPF en manos de todos los argentinos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por eso, voy a votar a favor de YPF para el Estado, para los argentinos, para los santacruceños.

Señor presidente: voto a favor de una YPF que sea de todos y para todos. Que sirva para producir más y generar más trabajo.

No voto para avalar los desastres de la política energética de este gobierno; ni para beneficiar a un grupo particular de empresas amigas o construir una pequeña burocracia de privilegiados.

Voto por la Argentina. Por la esperanza de los vecinos. Para construir una YPF grande, con posibilidades de progreso y un futuro digno. Para ampliar la producción y generar más energía.

Queremos una YPF de todos. Por eso, voto a favor en general.

20. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CREMER DE BUSTI

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero anticipar mi voto afirmativo en general al proyecto de ley en tratamiento. Como militante peronista de toda la vida, no puedo hacerlo de otra manera, porque distingo lo principal de lo secundario.-

Ante las dudas que me despertó este proyecto, busco la mejor solución para mi país y, más allá de las diferencias políticas que cohabitan este recinto, veo la necesidad de más federalismo, diálogo y tolerancia.-

Ya no podemos quedarnos en el recuerdo de la privatización de YPF del 92, ni ofendernos por la llamada “argentinización” de YPF con la incorporación del grupo Eskenazi que comenzó en el 2008.-

Tengo, como muchos otros, las dudas lógicas sobre el cómo se va a instrumentar esta ley, cambiando españoles incumplidores y poco controlados, y que vengan otros inversores que hagan lo mismo, de manera que esta ley debe estar en correlato con una política petrolera en serio, donde se realicen las inversiones necesarias para alcanzar el autoabastecimiento y, por sobre todas las cosas, una conducción profesionalizada y responsable.-

Estas son algunas de las dudas que rondan mi cabeza, pero ante esas dudas, opto por el voto afirmativo en general de este proyecto, y sumo a esta decisión, tanto mi ideología peronista como el mensaje del general Perón a los convencionales constituyentes del 49,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

así como el legado de los convencionales y entre ellos, el entrerriano Arturo Enrique Sampay, que bregaron por la defensa de los derechos de los trabajadores, por un nuevo orden jurídico, social y económico para la Argentina, y se engarza con el artículo 40 de la Constitución del 49, derogada por el golpe de Estado del 55, que en su segundo párrafo dice: "... los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía,... son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias".- Pero, además de todo esto, no puedo dejar de hacer una referencia al tan mencionado federalismo, que no encuentro en el proyecto, ya que sólo se ven beneficiadas con la expropiación del 51% de las acciones de REPSOL un grupo de provincias y no todo el conjunto de ellas.-

Si bien parecería correcto que las provincias beneficiadas sean las propietarias del recurso natural, también es cierto que mi PROVINCIA DE ENTRE RIOS tiene un recurso natural como es la SOJA del que se benefician todas las demás provincias, con el FONDO FEDERAL SOLIDARIO, creado por decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL en 2009, y que coparticipa en 30% de lo obtenido en DERECHOS DE EXPORTACIÓN de la SOJA. Por eso, es que me veo en la necesidad de solicitar que en la reglamentación de esta ley, se tomen los recaudos necesarios tendientes a que los beneficios de la expropiación de YPF sean para todas las provincias.-

Para finalizar, quiero citar una frase de Perón, la que hago mía, "Mantener un principio que ha perdido su virtualidad, equivale a sostener una ficción".-

20. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DÍAZ BANCALARI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero comenzar por señalar que, atento a la detallada ilustración técnica que acompaña a esta iniciativa legislativa y habiéndose realizado pormenorizadas exposiciones por parte de los funcionarios especializados en la materia, mi disertación contará con escasas referencias a cuestiones técnicas, centrándose mi discurso en acentuar las consideraciones políticas que me impulsan, con convicción e inquebrantable determinación, a apoyar este proyecto destinado a recuperar la soberanía hidrocarburífera que nuestro país había extraviado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Para concretar este anhelado fin, resulta ineludible declarar de interés público nacional y determinar como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de combustibles, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones de nuestro país. Esta disposición, que se encuentra contenida en el artículo 1° del proyecto de ley que hoy estamos analizando, junto con la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol S.A., establecida en el artículo 7°, conforman el núcleo medular de la trascendente medida tomada por nuestra presidenta, que viene a confirmar que la iniciativa política del verdadero cambio estructural de nuestra nación sigue estando en cabeza de quienes con incansable esfuerzo e inagotable tesón vienen conduciendo desde el año 2003 los destinos de la patria.

Vaya también nuestro agradecimiento y felicitaciones a los senadores de la Nación, que dejando de lado las legítimas pertenencias partidarias, han priorizado la cuestión nacional por encima de las mezquindades sectoriales, porque el consenso histórico de esta medida se nutre de las grandes mayorías nacionales. Por eso, tres de cada cuatro argentinos acepta que YPF sea conducida por el Estado argentino. Un apoyo masivo a un reclamo largamente esperado. El pueblo sabe lo que quiere: quiere que los recursos energéticos que son estratégicos para la Nación, sean controlados por el Estado que es la herramienta que sintetiza el poder nacional de la patria.

Cuando el poder nacional se reduce, en nombre muchas veces del recorte del gasto público, quedan limitadas y postergadas las posibilidades políticas del pueblo. Y entendemos por pueblo al conjunto de ciudadanos que comparten un mismo proyecto de vida y de bienestar más allá de los estamentos sociales. Para ser pueblo, hay que defender el interés colectivo por encima de las parcialidades de clase o sector.

El sujeto central de la democracia es el pueblo que legitima a sus representantes en las urnas. Los representantes, para cumplir el mandato popular encomendado, se hacen cargo de la conducción del Estado. Es el Estado el recinto natural de la política, porque la política en su fase arquitectónica construye poder en el Estado y se robustece en su fase agonal también desde el Estado. Por eso, decimos que somos militantes, tanto en el llano como en el gobierno. Luchamos por conquistar el gobierno y luchamos desde el gobierno por construir poder popular que se traduce en un Estado dinámico, presente y vigoroso.

Hacemos estas definiciones porque hacer política también implica definir conceptos. Y llegamos a darle tratamiento a este proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de la petrolera Repsol, precisamente, en condiciones favorables a la decisión popular desde un gobierno popular que asume sus responsabilidades en el Estado con voluntad popular.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En esta instancia, no podemos tampoco dejar de remarcar la acertada distribución de las acciones sujetas a expropiación, las que se repartirán entre el Estado nacional, al cual pertenecerá el 51% de las mismas, y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, a las cuales les corresponderá el 49% restante.

Adviértase, que la declaración de interés público establecida en el artículo 1º, abarca a toda la actividad vinculada con los hidrocarburos, por lo que el alcance de esta norma afectará a todas las empresas productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras del sector. En consecuencia, a partir de la vigencia de esta ley, el Estado quedará legitimado para establecer sobre todas ellas normas de actuación ajustadas al interés público, dejando de lado las reglas de mercado que han propiciado una desinversión desmesurada en el área, y el potencial desabastecimiento futuro de recursos fundamentales para la vida de la República como son los combustibles líquidos y gaseosos.

Ningún interés corporativo está de acuerdo con la recuperación de YPF, porque el interés corporativo, el interés verdadero de los grupos económicos trasnacionales, entra en conflicto con el interés nacional que indefectiblemente siempre ha sido y es el interés popular.

Por tanto, la expropiación e intervención de YPF se enmarca dentro de una clara política de ejercicio de la soberanía del Estado. La Argentina hace valer su autodeterminación ante quienes han confundido inversión productiva con saqueo de nuestros recursos energéticos. Muchos ponen el grito en el cielo y zarandean la cantinela de la seguridad jurídica, cuando es precisamente en defensa de la seguridad jurídica que se toman estas medidas de fondo. Porque seguridad jurídica no implica la depredación de nuestros recursos energéticos, y mucho menos el incumplimiento de los contratos de inversión y producción, obligaciones que fueron asumidas por la empresa Repsol. En síntesis, Repsol no cumplió con la ley, no hizo las inversiones pertinentes, y sólo se preocupó por girar las utilidades obtenidas a su casa matriz, dejando de lado toda actividad que estuviera destinada a aumentar la producción de gas y de petróleo, y esto es abiertamente violatorio de la seguridad jurídica, acá en la Argentina y en cualquier lugar del mundo.

La historia nos une al movimiento nacional de las grandes mayorías populares, sea en sus logros como en sus derrotas. A Hipólito Yrigoyen lo derrocaron y se dijo que Uriburu había encabezado un golpe con “olor a petróleo”. A Juan Perón lo derrocaron y se dijo que era por la cuestión del petróleo que, dicho sea de paso, apenas había consistido en el envío de un proyecto de ley para ser tratado en el Congreso. Proyecto que buscaba incorporar inversiones externas para dinamizar la producción y extracción de petróleo. También a Frondizi, que había logrado el autoabastecimiento energético ganando la llamada “batalla del petróleo”, le hicieron pagar cara su osadía. Isabel Perón, que había nacionalizado las bocas de expendio de YPF, fue derrocada por el golpismo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

cívico militar que se mostró proclive al deseo de las trasnacionales petroleras afectadas. Como vemos, la historia de las desestabilizaciones de la democracia posee una fuerte impronta petrolera, por describirla de alguna manera.

Llegamos entonces a la recuperación de YPF tras recorrer un largo camino de marchas y contramarchas en la que suelen cruzarse iguales actores con distintos papeles. Pero el núcleo de acero de la discusión debe focalizarse en lo realmente positivo de la causa nacional que nos trasciende. Tal vez alguno ignore que estamos haciendo historia argentina, dejándose enajenar por el complejo de inferioridad que asoló la conciencia nacional por décadas. No confundamos, por darle cabida al espíritu sectario, lo accidental con lo esencial. Suena a nota de color, a mezquindad, a chicaneo estéril, pasarnos facturas metiendo las manos en el barro por la concesión de la empresa en otra época. Aquí y ahora, mayo de 2012, ¿qué es lo importante? Lo importante es la recuperación de YPF, lo importante es el papel rector que tiene nuevamente el Estado en cuestiones atinentes al destino de los argentinos, lo importante es la centralidad de la política, lo importante es que vamos a proyectar otro país a partir de una nueva conciencia nacional y popular al servicio de una Nación inclusiva, soberana y libre.

¿Alguien puede oscurecer el papel del general San Martín porque fue militar español y combatió en Bailén? San Martín es el padre de la patria por lo que hizo a partir de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, por cruzar Los Andes, por instar a la Declaración de la Independencia en Tucumán, por libertar Chile y Perú y medio continente. Seamos sinceros, ecuanímes, magnánimos en las lecturas del pasado para comprender el presente y asegurarles a nuestros hijos un futuro mejor.

Asimismo, es necesario puntualizar que estas medidas no se decidieron de un día para el otro. Y cuando algunos preguntan por qué no se hizo antes, conviene recordar que desde el año 2003 el Estado viene interviniendo en el sector energético e hidrocarburífero. Primero, se buscó desconectar el precio local de los combustibles del precio vigente a nivel internacional, alentando de ese modo el consumo y la competitividad industrial, y pese a que en los últimos años se han autorizado ajustes en las tarifas, aún se siguen ubicando por debajo de las que rigen en otros países de la región. Luego, se aplicaron retenciones móviles a las exportaciones, y al fijar un techo de 42 dólares por barril de exportación se consiguió que las sumas por encima de ese valor máximo quedaran en las arcas públicas, decisión nada desdeñable, ya que gracias a ella la participación estatal en la renta petrolera ha sido muy importante. A fines del año pasado, también se eliminó el privilegio de las compañías de mantener los dólares de exportación en el exterior, obligándolas a liquidarlos en el mercado único de cambios local.

Pero todas esas medidas no fueron suficientes para desactivar la matriz neoliberal que venía funcionando desde la época de las privatizaciones. Y cuando quedó en evidencia que Repsol sólo se estaba dedicando a devastar los pozos de petróleo en la Argentina para financiar su expansión global, la única e inexorable salida fue articular un proyecto político destinado a expropiar el capital accionario en poder de esta empresa. Y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

tengamos presente que Repsol no sólo recuperó su inversión, sino que además retiró US\$ 8.813 millones de ganancias entre 1999 y 2011. Así mientras al país lo seguía perjudicando esta coyuntura, Repsol continuaba incrementando sus ganancias.

Hay momentos gloriosos en la vida de los hombres y de los pueblos. Hay obras que marcan un derrotero, una dirección de grandeza irreversible, un horizonte, un camino. A veces nuestra pequeñez nos impide dimensionar la inmensidad de ciertos acontecimientos que son una bisagra y posibilitan el advenimiento del cambio con justicia social. Les sucedió a muchos espectadores e intelectuales que ante el 17 de octubre de 1945 hablaron de un cuartelazo de la policía y de la aparición del “aluvión zoológico”. Suele ocurrir y es humano.

Hemos escuchado a los críticos del despertar nacional con suma atención durante todos estos días. Vamos a rebatirlos, con respeto pero con patriotismo. Ciertos expertos económicos que otrora diagnosticaron catástrofes jamás cumplidas, se arrogan el derecho de poner en duda la capacidad de gestión del gobierno, mezclando el papel del gobierno con el del Estado. Sabemos que una corriente ideológica afín a los grupos económicos transnacionales suele incurrir en ese error conceptual. No es lo mismo el Estado que el gobierno. La cosa pública se conduce. GOBERNAR ES CONDUCIR. No nos gusta demasiado el verbo “administrar”, preferimos hablar de “conducir” –Perón fijó la agenda en este sentido- porque el administrativismo tecnocrático de los “apolíticos” bastante desastre cometió en otros tiempos. Se conduce con eficacia y eficiencia en la medida que los funcionarios estén imbuidos de un proyecto político de grandeza.

¿Por qué siembran tantas sospechas sobre la pertenencia al proyecto nacional y popular de nuestros funcionarios? Van a equivocarse como siempre se han equivocado. Son los voceros que responden al interés sectario, al interés corporativo. Nosotros les respondemos que la garantía del éxito es la lealtad a la lógica del interés nacional que es el interés popular. Porque se gobierna haciendo política, elaborando las prioridades, marcando la agenda, tomando la iniciativa. El arte de gobernar es acción política por antonomasia y el Estado es su instrumento de realización, no de obstrucción. El gobierno que conduce el Estado es exitoso. El que se conforma con limitarse al oficinismo poco y nada hará a favor de las mayorías populares y terminará siendo rehén de la razón de mercado, es decir, de las minorías excluyentes. Esta no es nuestra misión. Se habrán dado cuenta.

Asimismo, quiero dejar algo en claro, Repsol no es el pueblo español. Es más, en los últimos días hemos tomado conocimiento de que existen filiales de la empresa en numerosos paraísos fiscales, lo que le habría servido para evadir cargas impositivas que debía tributar ante el propio Estado español, por lo que está en dudas hasta qué punto sus capitales son de inversionistas privados de aquel país, ya que un gran porcentaje de sus acciones pertenecen a grupos económicos de origen no determinado. Por eso, han resultado desmedidas las primeras reacciones del gobierno de Rajoy, poniendo en el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mismo plano al Estado y a la empresa privada. Pero bueno, tampoco debe resultarnos extraño que la “Europa ajustadora” reniegue de las políticas intervencionistas y distribucionistas de América Latina.

El modelo energético de desregulación y privatización inaugurado con el neoliberalismo salvaje que nos azotó en los años 90 está finalmente en crisis terminal. Es impostergable su modificación. No olvidemos a aquella ola neoliberal que arrasó como un tsunami con todos los principios de equidad, inclusión y justicia social, que el peronismo histórico había sabido forjar y defender en nuestra tierra; no la olvidemos porque ante el menor descuido el agua estará otra vez llegándonos al cuello.

Hoy tenemos Estado porque existe un gobierno compenetrado de un proyecto político, que construye poder genuino y real en su ámbito específico que es el Estado. Hemos recuperado YPF porque hemos recuperado la conducción del Estado. Nada se hace de un día para el otro; todo se hace dentro de un diseño de políticas estratégicas que permiten cumplir con lo prometido y de aprovechar la correlación de fuerzas favorables.

Y como el Estado es soberano, las decisiones del gobierno serán soberanas y cada país deberá respetarlas dentro de la convivencia multilateral que ofrece la globalización del siglo XXI. Quienes se dejan subyugar por las amenazas externas nuevamente quedarán en la vereda de enfrente, mientras las avenidas se llenan de pueblo y el gobierno avanza en el progreso social y en la igualdad para todos los argentinos.

Hagamos un esfuerzo por esclarecer a las nuevas generaciones y desmitificar el discurso colonial. Los peronistas estamos cumpliendo con Evita que una vez expresó desgarrada: “nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas”. La patria está dejando de ser colonia con medidas como la recuperación de YPF. De esta manera la bandera azul y blanca, la bandera de la Vuelta de Obligado, flameará sobre un territorio pujante y digno. La Argentina es el hogar y nuestro pueblo acompaña a nuestra presidenta porque sabe que su destino se define con coraje, con acción y con la reivindicación histórica de la causa de la patria.

Con todos los fundamentos expresados, es que hoy concurro decididamente a apoyar este proyecto de ley, con la certeza de que el consenso parlamentario será imponente, como la voluntad popular que respalda a nuestro gobierno ante la toma de determinaciones históricas como la recuperación de YPF. Por eso es que me dispongo a votar por la afirmativa.

22. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DE PEDRO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Como tantos compatriotas, viví con pesar la privatización y enajenación de una empresa que era motivo de orgullo para todos los argentinos. En esa oportunidad, al igual que con otras tantas medidas tomadas durante el predominio del modelo neoliberal, me encontré entre tantos argentinos que resistimos y luchamos en contra de la destrucción del aparato productivo, la entrega a precio vil del patrimonio nacional y la vergonzosa resignación de soberanía que implicó la liquidación de YPF.

Es por ello que para mí es un gran orgullo participar en esta histórica y trascendente sesión en la que daremos sanción a la ley que le permitirá a nuestro país recuperar YPF para beneficio de todos los argentinos. Este orgullo es el mismo que siento por ser parte de un gobierno que con enorme valentía y coraje ha tomado esta decisión que, junto a tantas otras, está logrando desarticular definitivamente los resabios del modelo de sumisión y entrega que signó a nuestro país hasta la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Es en ese preciso momento en el que la historia de la Argentina comenzó a reescribirse de acuerdo con la mejor tradición de los gobiernos nacionales y populares. Por ello, es de estricta justicia que en muchas de las intervenciones mis colegas destaquen a Yrigoyen y Perón como los hombres de Estado que más hicieron por la grandeza de YPF. A partir de hoy, mal que les pese a los obtusos de siempre, se sumará a esas ilustres figuras la de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque si fue difícil hacer de YPF la gran empresa nacional que fue, aún más difícil es tomar la decisión que con gran coraje ha tomado nuestra presidenta desoyendo la presión de poderosos intereses, siempre alertas a la hora de defender el beneficioso status quo que han conseguido a costa de los intereses de nuestra nación.

Asimismo, mucho se ha criticado acerca de la oportunidad de la medida que hoy debatimos. Puntualmente se cuestiona por qué esta decisión no se ha tomado antes. La respuesta es, a mi entender, simple y lógica. Cómo tomar tamaña medida cuando los argentinos habíamos perdido lo más importante que un ser humano posee, la dignidad. La recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos hidrocarburíferos ha tenido como antecedente medidas de enorme significación para nuestro pueblo, como la implementación de políticas de inclusión social: la asignación universal por hijo, la inclusión previsional y, sobre todo, la sustancial disminución del desempleo. A esto debe sumarse la política de derechos humanos, la negociación de la deuda externa, el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la sanción de la ley de medios y la recuperación de los fondos del sistema jubilatorio. Como vemos, desde el 2003 a la fecha el gobierno nacional viene implementando políticas que implican una importante intervención del Estado en la economía, que apuntan a lograr una independencia económica mediante el desarrollo del sistema productivo nacional y la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

expansión del mercado interno. El acierto en el desarrollo de estas políticas se evidencia en los resultados sociales y económicos.

La recuperación no se agota en la justa reivindicación de la soberanía de los hidrocarburos sino que es una medida estatal necesaria para preservar los intereses económicos de todos los argentinos a mediano y largo plazo.

Medidas como ésta son producto del afianzamiento de un Estado capaz de tomar decisiones de manera informada y fundada. Precisamente, la información y argumentos brindados por el gobierno nacional sobre el tema son vastos. Entre estos me gustaría señalar los siguientes: en el año 2011, por primera vez desde 1995, el saldo comercial del país en materia de combustibles fue negativo en algo más de 3.000 millones de dólares. Ello es producto de que la importación de combustibles aumentó de manera exponencial y, al mismo tiempo, de la notable caída de la producción local que tiene como responsable a las políticas de vaciamiento y desinversión de Repsol que determinaron la justa expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la empresa.

Cabe recordar que cuando en 1999 Repsol adquirió el 97,8% del paquete accionario de YPF en 15.168 millones de dólares, la compañía española valía en total 7.000 millones de dólares, bastante menos de la mitad. Para poder pagarla incrementó su endeudamiento de largo plazo en más de un 500% y de corto plazo en casi 300%. Se evidencia con estos datos que Repsol sólo consiguió convertirse en un jugador importante en materia hidrocarburífera a partir de la adquisición de YPF.

En sus inicios el proceso de desindustrialización que experimentó nuestro país le permitió a Repsol destinar el aumento de la producción de los recursos petroleros al mercado extranjero, pero cuando el proceso de destrucción de la industria nacional comenzó a revertirse, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se hizo cada vez más evidente que los objetivos del Repsol y los de nuestro país no estaban alineados.

Mientras los esfuerzos del gobierno nacional apuntaban a lograr el autoabastecimiento energético que permitiera al país continuar por la senda del crecimiento económico, Repsol, después de todos estos años de apropiarse la producción de YPF, apuntaba a obtener rápidas ganancias que le permitieran expandirse en el exterior, a la par que por el proceso de desinversión al que nos sometió se estaba retirando, de facto, de la Argentina.

Por otra parte, y como bien señala el mensaje del Poder Ejecutivo, son tres los elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de decidir esta injerencia directa del Estado en el mercado de combustibles: su impacto sobre la competitividad de la economía, el efecto de su precio sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación de los hidrocarburos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por eso, reitero que recuperar nuestros recursos implica un doble valor, por un lado, significa la recuperación de nuestra soberanía en materia energética y, por el otro, garantiza la preservación de los intereses económicos de todos los argentinos.

Para finalizar, quiero señalar que a fin de asegurar que la inclusión social y el desarrollo económico perduren en el tiempo, resultará necesario que todos los argentinos sostengamos y defendamos los avances logrados por este gobierno en materia social, política y económica, que en esta trascendente ocasión implica, más que nunca, la recuperación de la soberanía nacional.

23. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ELORRIAGA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Señor presidente: la autodeterminación de los pueblos, derecho conquistado y legitimado, es la posibilidad de decidir en función de los intereses propios del pueblo, del pueblo argentino en nuestro caso. Por ello, el resguardo de los intereses nacionales y de los recursos naturales es una cuestión estratégica y una cuestión de Estado, para organizar el presente y cuidar el futuro de las próximas generaciones.

La falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas.

La cuestión de la extranjerización no es novedad en nuestro país ni en América Latina. Representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros. Este fenómeno se ve favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras.

La protección de nuestras tierras y recursos naturales de la extranjerización es el paso posible que podemos dar hoy para seguir superando la dependencia económica que nos legaron gobiernos dictatoriales y neoliberales. Es necesaria una legislación que le dé un reaseguro jurídico a la decisión política. Para que la correlación de fuerzas existente haga posible la sanción de esta ley, avanzamos de a poco, priorizando lo esencial sin perder de vista lo importante. Pero siempre habrá que ir por más, nunca menos. Una vez superado el problema de la extranjerización llegará la hora de enfrentar la concentración



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de la tierra, para poner fin a la que llevan adelante unos pocos argentinos, en detrimento del resto de la población. Y sin perder de vista, nunca, el tema ambiental y la situación de los más desfavorecidos.

Por todo lo expuesto, señor presidente, es que adelanto mi voto afirmativo a la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

24. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FELETTI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

A lo largo de estos casi nueve años de gobierno, se ha avanzado, nítidamente, hacia la recuperación y consolidación de la autonomía nacional, frente a un mundo cada vez más complejo y crítico. El primer paso para recuperar el Estado y tornarlo un instrumento capaz de hacer políticas públicas, en favor de las mayorías populares, fue desendeudarlo. Uno de los legados más importantes de Néstor Kirchner fue restituir el Estado a los gobiernos democráticos, quitando las cadenas de la deuda. Por eso hoy integramos un Congreso que no vota ajustes, sino avances económicos y sociales para el pueblo argentino.

Luego, hubo que acelerar la reparación social, como forma de legitimar a ese Estado recuperado y resituar a la política como algo capaz de cambiar la vida de un pueblo, para el bienestar y la integración social. Las políticas fiscales expansivas, dirigidas a aumentar el consumo popular y la protección social, fueron decisivas a lo largo de estos años, para afirmar un Estado presente. La expansión de la cobertura provisional, el incremento del presupuesto educativo, las políticas sanitarias masivas y la asignación de ingresos a niños y adolescentes desprotegidos, marcaron un rumbo nuevo y opuesto a tres décadas de ajuste.

Por último, el modelo productivo, que colocó al empleo y al salario en un lugar central de la política económica, tras años de descenso del desempleo, hasta ubicarlo en el registro más bajo desde la década del 80, y a la vez, la suba salarial negociada libremente y el crecimiento del salario mínimo, como modo de fijar un piso alto para los sueldos de los trabajadores formales, pero también de los informales, que descendieron de un 51%, de la población económicamente activa al 34%, constituyen conquistas de nuestras autoridades.

Este recorrido exitoso, para la Argentina y su pueblo, fue posible por la autonomía



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

alcanzada desde la solvencia macroeconómica, pero también desde la inversión pública en infraestructura y energía.

La tarea titánica del Ministerio de Planificación Federal, de recuperar la tasa de inversión pública del 0,8%, en el 2003, al 4,2% en el 2011, fue clave para sostener el crecimiento económico, con empleo y salario aumentando año tras año y sin desmadres macroeconómicos.

El logro de una tasa de crecimiento del PBI del 7.7%, a lo largo de casi una década, el aumento de inversión pública y de abastecimiento energético, a tarifas compatibles con la producción competitiva, sólo puede ser elogiado y no sujeto de feroces críticas, como las que realiza la oposición.

En el 2003, se verificaba una desarticulación completa del sistema energético con las necesidades de un modelo productivo, amplio e inclusivo, como el que se construyó en estos años. La Argentina exportaba gas y petróleo, generaba apenas, con 40 millones de habitantes, 18 mil megavatios y tenía desconectadas de las redes de distribución de luz y gas, a vastas zonas de su territorio.

La respuesta en simultáneo de aumento de generación, a casi 24 mil megavatios, la extensión de las redes de transmisión e interconexión, suficientes para sostener incrementos constantes en la producción, el empleo y el consumo, son dignos de elogio, antes que de críticas descarnadas.

Algunos miembros de la oposición, tal vez preferían abruptos saltos en el tipo de cambio, o fuertes aumentos tarifarios, como el ocurrido en los Subterráneos de Buenos Aires, para alcanzar equilibrios económicos que favorezcan al gran capital. No es nuestro caso, la ecuación energética se logra con regulaciones sobre el mercado oligopólico, inversión estatal capaz de aumentar la competitividad y política de tarifas en función de las necesidades de consumo popular.

Quienes critican la política de inversión pública y la política energética, lo primero que deben tener en cuenta es, que hasta el 2003, no había política pública, ni cuantitativa ni cualitativa, de inversión en infraestructura ni de energía. Esos insumos, esenciales para cualquier proyecto de desarrollo, estaban enteramente administrados por mercados concentrados, que definían los recursos que asignaban, exclusivamente en función de renta monopólica. El quiebre en el 2001 del esquema de tipo de cambio convertible, fijado 1 a 1 por ley, implicó la ruptura de la totalidad de los contratos de las empresas oferentes de energía, transporte y comunicaciones, en manos del sector privado, por la inviabilidad de ajustar tarifas que acompañaran el aumento del dólar, y asimismo, por el incumplimiento de todos los compromisos de inversión no ejecutados desde mediados de la década del noventa. En ese escenario, el Ministerio de Planificación Federal debió regular las tarifas para impedir el impacto sobre el bolsillo del pueblo y, a la vez, aplicar recursos públicos y privados a expandir la oferta, en línea con las necesidades de crecimiento económico.

En consecuencia, las críticas centradas en una suerte de “deber ser” de manual, omiten el recorrido que debió hacer nuestro gobierno en todos estos años, tanto en la respuesta macroeconómica de recuperación del Estado y reparación social, como en la microeconómica, invirtiendo en los recursos esenciales que garantizaron el crecimiento sostenido.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En definitiva, este gobierno logró expandir la inversión pública para garantizar un crecimiento sostenido y competitivo, sin hacerlo a expensas de la población. Hemos dejado de hablar del “costo argentino”, pantalla que se usaba en el pasado para plantear la necesidad de rebajar nominalmente salarios y prestaciones sociales, y crear así el mentado “clima de negocios”, que no era otra cosa que la sobre renta de los grandes capitales, para que recuperaran cada dólar invertido en nuestro país, en un tiempo inusualmente rápido respecto del resto del mundo. En esta etapa, al priorizar el consumo interno y la mejora en la distribución del ingreso, la búsqueda de rentas extraordinarias se angosta y el griterío por la falta de “un clima de negocios”, aumenta.

Efectuadas estas precisiones, para adentrarnos en la política energética, es necesario evaluar el desfiladero angosto en que tuvo que desenvolverse el Ministerio de Planificación Federal, demarcado por dos grandes restricciones, aumentar la oferta de energía y hacerlo a precios compatibles con las necesidades argentinas. Si se tiene en cuenta que la presencia de los actores empresariales del sector, presionaban por tarifas similares a las vigentes del mercado internacional, en las que el precio del barril de petróleo, en promedio se ha quintuplicado en un década, sumada a un sistema energético que arrancó, como se señaló precedentemente, delineado en función de las necesidades de renta de esos sectores, y no las del consumo de energía de la economía argentina, se puede comprender acabadamente, el conjunto de avances, frenos y tensiones, que ocurrieron en estos años para modificar esa situación de origen, y cuya culminación es este momento en que se desplaza a un jugador energético, que priorizó la renta por sobre la producción e inversión, de un modo persistente en el último trienio. Sólo si se piensa sin especulaciones políticas de corto plazo, se puede entender que la política energética fue otro de los duros caminos recorridos por este gobierno, para afirmar autonomía frente a los mercados globales.

Este actor español, en los papeles, antes que en la realidad, desde la crisis financiera global, en el 2008, comenzó un agudo proceso de recuperación del capital invertido por dos vías, sobreexplotando los pozos ya existentes y acelerando el retiro de los dividendos generados por esa explotación.

Si se midiera el capital invertido por Repsol en el período 1999-2011, se advertirá que los U\$S 13.158 millones originales, le devengaron dividendos en esos doce años, por U\$S 15.728 millones, recuperando además, por venta al Grupo Petersen, U\$S 3.539 millones y por oferta pública de acciones U\$S 2.704 millones. Con lo cual, en el lapso 99/11, Repsol YPF S.A. recuperó de la empresa U\$S 21.971 millones, es decir, U\$S 8.813 millones en exceso de la inversión original. Es evidente que este modelo de negocios, profundizado en los últimos años, es incompatible con las necesidades energéticas de la Argentina, en la etapa presente.

Es por eso que se decide poner fin al mismo, e iniciar uno nuevo, dirigido completamente por el Estado, pero en la búsqueda de asociaciones público – privadas que garanticen la elevación de la producción de hidrocarburos, con un efecto favorable en el balance de divisas, pero también, en la nueva política industrial, que se ha empezado a aplicar en la presente etapa.

El gran debate hoy deben ser las certezas sobre la existencia de reservas petroleras, presumiblemente conocidas por Repsol, pero no explotadas por especulaciones



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

políticas, en la búsqueda de un régimen más favorable para la rentabilidad que pudiera extraer de las mismas.

Un indicio de esto lo ofrece el yacimiento de Vaca Muerta, que cuenta con diez proyectos de inversión de empresas petroleras, con compromisos cercanos a los U\$S 2.200 millones, que fueron prolijamente archivados por Antonio Brufau, en su carácter de titular de la empresa.

Esta tensión en torno de la necesidad de identificar reservas y ponerlas en explotación lo antes posible, conforma la respuesta del gobierno a las necesidades de la etapa. De nada les sirven a los argentinos reclamos por derecha sobre “climas de negocios” vulnerados, que en realidad demandan más ganancias para las empresas privadas, ni críticas descarnadas por izquierda sobre una política energética, que ha ayudado a sostener un modelo de crecimiento, producción, empleo y salario exitoso durante nueve años.

El debate presente debe centrarse efectivamente en esa capacidad, una vez más del gobierno nacional, de echar por tierra las recetas foráneas, las críticas vacías y los pronósticos agoreros, para dar otro paso firme en la autonomía nacional, que es manejar la política hidrocarburífera.

Y en ese sentido, me veo obligado a teñir este planteo de un barniz coyuntural, pero necesario y elocuente.

A fines del 2011, con el inicio del segundo mandato de nuestra presidenta, nos pronosticaban “el fin de fiesta”, como si el consumo popular y el bienestar social fueran un divertimento pasajero, efímero, sólo para fines electorales. Y en ese pensamiento tan mezquino y corto, pronosticaban el inminente ajuste, “ahora tienen que devaluar”, deteriorando los ingresos del pueblo, “ahora van a tener que tomar deuda”, perdiendo autonomía estatal. Pues bien, ni nos endeudamos ni devaluamos, regulamos las importaciones conforme una política de industrialización sustitutiva de las mismas, regulamos los giros de dividendos al exterior, forzando mayores compromisos de inversión en nuestro país, y avanzamos con esta ley para garantizar el abastecimiento de energía hacia esas políticas industrializadoras.

Las cifras del primer trimestre del 2012 nos han dado la razón en nuestras políticas, buenas noticias para el pueblo argentino y malas nuevas para los profetas del fracaso y los voceros del capital extranjero.

25. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FERNÁNDEZ SAGASTI

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Hay decisiones que toman los gobernantes que producen un quiebre en la historia de un país, decisiones que son un punto de partida, que taján el “antes” y el “después” en la vida de todo un pueblo. El 16 de abril quedará destacado como un día histórico en la reconstrucción de la Argentina.

La recuperación de YPF confirma la continuación y la profundización del modelo de país que comenzó a desarrollarse desde el 25 de mayo de 2003.

Los argentinos sufrimos 30 años de imposición de un modelo neoliberal de sobreendeudamiento con exclusión social, que se instaló en 1976 a sangre y fuego, que se prolongó, ya en democracia, con el plan Austral y se profundizó con la Ley de Convertibilidad y todo lo que pasó en la década de los 90. Tres décadas de vaciamiento de las riquezas, tres décadas de imposiciones externas, de “relaciones carnales”, de aniquilamiento de nuestro sistema productivo, de un sistema excluyente, donde la concentración de la riqueza, el desguace del Estado y la extranjerización de la economía eran la meta... sólo ocho años de decisiones trascendentes, de voluntad inquebrantable han logrado retomar el rumbo democrático y popular de nuestro país, del que nunca el pueblo argentino se quiso apartar.

Néstor Kirchner asumió el restablecimiento de un país económicamente en ruinas, institucionalmente quebrado y emocionalmente devastado. Nos propuso un sueño: la reconstrucción de nuestra patria, y sin esperar más que un día, le pidió a todos los argentinos que lo acompañen en la patriada de la recuperación institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Poco a poco nos fue llevando por el camino de la transformación: recuperamos la soberanía económica, mediante una política de desendeudamiento que tuvo como punto de inflexión la quita histórica de la deuda con el FMI, donde pusimos fin a la auditoría permanente de un organismo internacional perverso. Con el NO al ALCA comenzamos a transitar la recuperación de nuestra soberanía política. La nacionalización de los fondos de las AFJP puso fin al negocio especulativo de los fondos previsionales de los trabajadores, obteniendo seguridad para los sectores más vulnerables, y recuperando de este modo la soberanía fiscal y financiera, que se tradujo en justicia social, con la implementación de la asignación universal por hijo. Con Aerolíneas Argentinas alcanzamos la integración nacional y fortalecimos nuestra soberanía, poniendo nuestra aerolínea de bandera al servicio del pueblo. El reclamo de nuestra presidenta, claro, firme y pacífico por nuestras islas Malvinas, nos hizo comprender que nuestra soberanía territorial todavía no está completa, pero también que su recuperación nunca podrá ser de rodillas. YPF, sin lugar a dudas, sentará los cimientos de nuestra soberanía energética.

Con voluntad de cambiar el destino de la Argentina, Néstor Kirchner primero, y nuestra presidenta después, tomaron decisiones que fueron dando un giro a nuestra historia, giro que tuvo como norte “el cambio cultural que demandaba la hora”, un cambio que lentamente nos fue enseñando el orgullo de ser argentinos, recuperamos la autoestima, y comenzamos a creer que podemos ser los forjadores del destino de nuestra patria. La decisión de recuperar YPF, es una decisión que implica consecuencias económicas y culturales, jurídicas y políticas. YPF no es una empresa más, porque se encuentra en la memoria colectiva del pueblo argentino, porque representó la presencia del Estado en los rincones más remotos de nuestro país, porque significó progreso, unión, trabajo y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sentido de pertenencia. Es por estas razones que, a quienes tildan a este hito histórico con la macabra frase de que “quieren jugar con las emociones de los argentinos” les decimos que YPF emociona, emociona por lo que significa y significó para nuestro país, pero sobre todo porque emociona y llena de esperanzas la idea de un Estado grande, eficaz, que cada día incluye más y que está presente en cada hogar argentino llevando dignidad.

Como dije, esta medida es símbolo de la profundización de un modelo de país, una medida profunda que da en el corazón de la estructura neoliberal resquebrajada, debido al sendero económico de crecimiento con inclusión social comenzado hace ya casi nueve años.

Sabido es que para garantizar la continuidad en el largo plazo de este acelerado crecimiento económico con perfil industrial, es necesario asegurar la disponibilidad de aquellos recursos que resultan estratégicos para sostenerlo, uno de ellos son los hidrocarburos, por supuesto.

En las décadas neoliberales, el modelo se basaba en el desguazamiento de la industria nacional, por lo tanto, la falta de inversión y producción no ponía en peligro la matriz energética nacional ya que, sin industria nacional, no había demanda alguna. Sin inversiones se podía explotar los yacimientos ya disponibles y vender la producción en el mercado externo a precio internacional.

Sin embargo, la Argentina cambió, y el desarrollo económico con inclusión social tiene como uno de sus ejes el autoabastecimiento en materia de combustibles, de lo contrario, su producción y su precio, que influye en la matriz de costos y de consumo de toda la economía, quedarían determinados por la acción de empresas locales y los movimientos internacionales de hidrocarburos, a lo que recientemente se suman elementos distorsivos de carácter especulativo.

Cegados por la codicia el señor Brufau y demás autoridades de Repsol, no pudieron comprender el cambio paradigmático, social, político y económico que se venía gestando en la Argentina. Es por ello, y a pesar de los esfuerzos del Estado nacional por modificar la orientación tomada por la empresa a partir de 1998, que continuaron y profundizaron su estrategia PREDATORIA, CORTOPLASISTA Y ESPECULATIVA, que tuvo serias consecuencias para la economía nacional y que, seguramente, se profundizarían si el Estado no tomara intervención en el funcionamiento de la empresa. Como mendocina, sé del valor que tiene el control de los recursos estratégicos en pos de la generación de empleo y la inclusión social. Para la provincia de Mendoza la actividad petrolera es de vital importancia. La industria del petróleo en 2003 contribuía con el 20% del producto bruto geográfico, aporte que ha caído sistemáticamente en los últimos años hasta llegar a 17,5% en 2010. Esto se debe a la disminución de la producción, lo que nos ha traído nefastas consecuencias en cuanto a la pérdida de recursos genuinos.

Por todas las razones anteriormente expuestas, es que este proyecto es un enorme avance de soberanía política, una muestra más del camino en el que seguimos avanzando. YPF significó trabajo, dignidad y progreso para nuestro pueblo pero también muchas luchas, y hoy tenemos la oportunidad histórica de recuperarla. Hoy, el pueblo argentino nos pide simplemente estar a la altura de las circunstancias,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

dejar de lado las mezquindades políticas que nos hagan perder de vista el objetivo de defender, cuidar y hacer progresar lo que con tanto esfuerzo, y sobre todo, decisión política, ha costado recuperar.

El 16 de abril nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha escrito otra página destacada de nuestra historia. Un paso más para la construcción de una patria cada vez más justa, libre y soberana.

Agradezco a Néstor Kirchner por sacar a nuestra generación de las penurias del individualismo para despertar en el pensamiento colectivo, y agradezco a nuestra presidenta por permitirnos a los jóvenes ser nuevamente parte de la historia de la recuperación de la patria.

26. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FERRÁ DE BARTOL

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

El general Perón, el gran estratega del siglo XX, no fue indiferente al debate sobre la política petrolera que la Argentina debía implementar. Las directrices que dispuso durante la primera y segunda presidencia (1946-1955), confirman el componente realista y pragmático que orientó su accionar en la materia. Perón consideró la explotación de este recurso como estratégica; consideró que las naciones debían hacer dramáticos esfuerzos para hacerse de lo necesario para su crecimiento, y desarrollo en armonía social y sin dependencias con el extranjero, de la forma que la época le indicaba que resultaba más idónea para llegar a los fines que se había planteado. En los primeros dos gobiernos de los tres que encabezó lo demostró. Una primer etapa, de 1946 a 1948, caracterizada por un modelo económico estatista, orientado hacia el consumo interno y de marcado tono nacionalista, restrictivo a la participación del capital extranjero. Rasgos presentes en el texto del Primer Plan Quinquenal para 1947-1951. La segunda etapa -iniciada a partir de la crisis económica de 1949, y que abarcó los años de la segunda presidencia de Perón (1952-1955)- sería de reemplazo del modelo estatista y mercado internista por uno más abierto y con mayor sesgo exportador, que le daba la bienvenida al capital extranjero. Rasgos presentes en el Segundo Plan Quinquenal y en ejemplos como la sanción de la ley de inversiones extranjeras, en agosto de 1953, y la firma del polémico convenio con la California Argentina de Petróleo SA, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California, en mayo de 1955.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El proyecto que tratamos hoy camina por la misma senda de los pioneros Huergo, Mosconi, Yrigoyen, Perón, busca lograr el objetivo prioritario del abastecimiento de hidrocarburos, dinamizando la prospección, exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización del recurso.

El estado interviene, sí, pero no nos creamos que es estatismo en estado puro. Fue la misma presidenta Cristina Fernández la que ha aclarado que “el modelo que hemos elegido no es de estatización sino de recuperación de la soberanía sobre los recursos”.

Con ese designio se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima.

El petróleo y el gas son recursos imprescindibles para el desarrollo de nuestro país, y el hecho de contar con yacimientos de los dos combustibles nos ofrece ventajas competitivas a nivel internacional y una oportunidad para garantizar el desarrollo económico con equidad.

Las acciones que hoy recuperamos para los argentinos no son sólo papeles con algún valor, representan también un avance en la recuperación de nuestra soberanía que imperceptiblemente se fue perdiendo a partir del encuadre jurídico que surgió de leyes que posibilitaron el ingreso de la multinacional Repsol a fines de la década de los noventa. A tres lustros de estas normas el panorama muestra una YPF que nos llevó al fracaso de las metas planteadas en tales circunstancias.

Desde ya que la privatización y la desnacionalización concebidas como el mejor camino hacia el autoabastecimiento no lograron alcanzar, siendo indulgentes, las expectativas mínimas. Es obligación del Estado garantizar el blindaje de los aparatos productivos nacionales respecto de los vaivenes que periódicamente se producen a nivel internacional en la provisión de hidrocarburos; eso es imperioso y la respuesta ensayada por la presidenta ha sido valiente y adecuada a los tiempos que corren.

La iniciativa, cuya presentación celebré, va en busca de recuperar para el Estado el control de la política de hidrocarburos que no debe quedar en manos de las leyes del mercado, a la vez que marca un cambio de paradigma en la materia. Por todos estos motivos, votaré favorablemente el proyecto de ley que, entiendo, acompaña la inmensa mayoría del pueblo sanjuanino al que, con todo orgullo, represento.

27. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FORTE

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En primer lugar, quiero decir que aplaudo que hoy el justicialismo quiera empezar a remediar los errores de los últimos 20 años, sobre todo aquel que se constituyó como uno de los más graves de su gobierno: la privatización de una empresa nacional estratégica como es YPF. En esta terrible decisión fue el justicialismo en su conjunto, diputados, senadores, e incluso la actual presidenta de la Nación y Néstor Kirchner quienes impulsaron y festejaron la medida privatizadora y el desguace de la empresa.

Por eso, es en buena hora que se esté discutiendo hoy en este recinto la nacionalización de YPF, cuya propuesta apoyo. Y apoyo este proyecto no sólo porque una YPF nacional, desde su creación con Yrigoyen y Mosconi, ha sido desde siempre una bandera de la Unión Cívica Radical, y yo soy orgánico y coherente con mi bloque y mi partido, sino también porque estoy convencido de que la Argentina se merece tener una empresa propia de importancia estratégica en materia hidrocarburíferas, como primera medida para comenzar a pensar una política seria y a largo plazo sobre estos recursos tan indispensables para nuestro desarrollo, que ha brillado por su ausencia en estos últimos años y en este gobierno.

Recordemos, que YPF se vendió cuando el barril de petróleo salía 13 dólares. Hoy día el barril vale 106 dólares, y llegó a valer hasta 150. Por eso yo me pregunto, ¿cuántos recursos se perdió la Argentina? ¡Muchísimos! Y nosotros, los que desde nuestra militancia en la juventud radical, militancia que siempre fue por las ideas y no por los contratos, levantamos la bandera de una YPF nacional y nos opusimos a la privatización.

Por eso, estamos de acuerdo con el espíritu de esta medida. Creemos que no existe un país viable sin soberanía energética, y que es necesario tener un control de las reservas hidrocarburíferas y de su uso, como también administrar la renta de un recurso no renovable. No se puede no tener una injerencia directa en el proceso de inversión y exploración hidrocarburíferas; no se puede no intervenir de alguna manera en el proceso de formación de precios y de cobertura de la demanda de productos hidrocarburíferos. Por eso, para garantizar todo esto, el país necesita de una empresa testigo, el país necesita YPF.

Sin embargo, planteamos nuestras diferencias con este proyecto del Ejecutivo, porque creemos que está muy lejos de ser una política de hidrocarburos, y que sólo remedia parte del desastre que se hizo y se dejó hacer durante 20 años. No nos olvidemos que este gobierno fue cómplice, tenía un representante en el directorio que no objetó la descapitalización de la empresa y a su vez, el Poder Ejecutivo motorizó la compra por parte del grupo Eskenazi a cuenta de dividendos de YPF.

Estamos preocupados, porque sabemos que se corre el riesgo de que pase lo mismo que con la administración de Aerolíneas Argentinas. Los funcionarios de este gobierno suelen confundir lo público con lo privado y se enriquecen a costas del Estado; o lo mismo que pasó con la ONCCA, que la destruyeron para que no pueda saberse ni investigarse cómo se manejaba el comercio de granos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Tampoco queremos que se repitan las malas experiencias del pasado, y que YPF sea estafada por algunas empresas proveedoras que se aprovechen del Estado y le vendan más caro.

Por otro lado, proponemos hacer una auditoría, porque creemos que es necesaria para que éste proceso sea serio y responsable, en tanto que la falta de información y la discrecionalidad permitieron otras veces que este tipo de procesos acaben en una mera captura de una caja de recursos que fueron despilfarrados y que se agotaron en el corto plazo.

Hoy el gobierno puede estar tranquilo porque tiene en el Congreso la mayoría automática y puede tener la seguridad de contar con una oposición responsable a la que no le tiembla el pulso a la hora de discutir el rol del Estado, tal como sucedió con la estatización de las AFJP. Esto debería ser un incentivo para discutir otras cuestiones y avanzar en otros aspectos.

Si bien notamos una contradicción entre el proyecto que hoy nos convoca y aquel discurso enunciado por la presidenta de la Nación el primero de marzo, en el que defendió la explotación minera a cielo abierto en manos de empresas extranjeras, hoy le redoblamos la apuesta y desafiamos al gobierno a que pongamos sobre la mesa la discusión por la recuperación de la minería, de los ferrocarriles, de las juntas de carne y de granos, y de la banca pública, como el Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo. Volviendo a lo que hoy nos convoca, esperamos que este paso no quede aislado, que sea el primero hacia una política nacional de hidrocarburos. Que se vean realmente los resultados de una buena instrumentación, que no figure como un titular más en el relato oficial sobre el “modelo” y que, en realidad, se termine repartiendo YPF entre los amigos del gobierno. Nos sobran ejemplos de grandes titulares progresistas que se convirtieron en negociados de amigos y funcionarios oficialistas; nada más terrible que las acusaciones que caen sobre nuestro vicepresidente y sus relaciones con Ciccone.

Ante el riesgo de que la sociedad se confunda por la decisión de este bloque, estamos convencidos de que es preferible construir un Estado activo con las herramientas necesarias, aunque ustedes las dinamiten, antes que haber sido un obstáculo en la recuperación del rol del Estado.

28. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GALLARDO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La lucha que iniciaran el general Mosconi, entre 1922 y 1930 y la política petrolera adoptada durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, constituyen un temprano ejemplo de nacionalismo y confirman el componente realista y pragmático que orientó dichas políticas.

El 21 de octubre de 1946, el general Juan Domingo Perón expuso ante el Congreso los alcances del Primer Plan Quinquenal: abarcaba tareas, construcciones y proyectos sobre petróleo, gas, combustibles, minerales, agua y energía eléctrica, obras sanitarias, navegación y puertos. En otras palabras, Perón manifestaba su interés por la explotación de un recurso estratégico y potencialmente disponible en el territorio y en el mar argentino, preguntándose también, si el Estado argentino estaba capacitado para su explotación en forma eficiente.

No era un nacionalista de medios, sino de fines por lo que entendía, tal como lo plantea el Proyecto que hoy venimos a discutir, de la necesaria asociación con el capital privado nacional o extranjero. De esta forma, se podía concebir la nacionalización de los servicios públicos y, al mismo tiempo, contemplar la participación del capital externo en el sector petrolero.

En este sentido, su política antecedió al nacionalismo de fines que procuró llevar a cabo el desarrollista Rogelio Frigerio, el cerebro económico de la gestión del presidente Arturo Frondizi (1958 - 1962). Las políticas que aplicara allá por los años 60 el gobierno del doctor Arturo Frondizi, en el marco de la ley 14.773 (ley de nacionalización del petróleo), permitió una gran expansión de Y.P.F., y la producción nacional en sólo 4 años llegó a 15.600.000 toneladas de petróleo, llegando por administración a más que duplicar su producción, superando los 10.400.000 toneladas de petróleo. El resto, hasta llegar a las 15.600.000 toneladas, lo logró por medio de contratos de locación de obras y servicios, en especial con tres compañías: Banca Loeb (en Mendoza), Panamericam (en Comodoro Rivadavia) y Tennessee (en Tierra del Fuego). No eran concesiones petroleras, eran contratos de locación de obras donde las compañías no tenían derecho sobre el petróleo, el que debía ser entregado diariamente a Y.P.F.

Esta modalidad contractual era similar a la aplicada por PEMEX, empresa estatal mexicana, después de la nacionalización de su petróleo, que fue luego aplicada con éxito en Indonesia y, posteriormente en el Medio Oriente, extendiéndose más adelante al resto del mundo, incluyendo la ex Unión Soviética y el resto del mundo socialista. Esa metodología adoptada por el gobierno desarrollista en 1958 es la que rigió por más de 30 años, bajo los distintos gobiernos, hasta la década del 90. Y gracias a ella el país mantuvo, con ciertas oscilaciones, el autoabastecimiento petrolero.

La ley 14.773 fue modificada en 1967, en el gobierno militar de Onganía y reemplazada por la ley 17.319, en la que se mantuvo el principio de la propiedad estatal del petróleo, pero se eliminó el monopolio de Y.P.F y se anuló el art. 4º que prohibía otorgar nuevas concesiones.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En 1992, el gobierno de Carlos Menem, mediante la ley 24.145, transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias. La desnacionalización del petróleo fue incorporada en el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994, votada prácticamente a libro cerrado, tras el Pacto de Olivos. Pero esta ley 24.145 no sólo desnacionalizó el petróleo sino que privatizó a Y.P.F., perdiendo el país el poder de decisión sobre su política petrolera.

Las empresas privadas, nacionales y extranjeras, sólo vinieron al “negocio seguro” de extraer petróleo de los yacimientos conocidos que fueron enajenados a la ex Y.P.F. estatal y no se hicieron inversiones de riesgo para explorar nuevos yacimientos.

En 1996, en el 2º Congreso Patagónico de Energía, se denunció que... “mientras la ex YPF estatal explotaba el petróleo en forma moderada y hacía una exploración agresiva,....ahora para algunos medios sucede al revés: es agresiva la explotación, pero la búsqueda de petróleo se tornó moderada”. (Clarín. 6/1/1997).

Y lo que es más grave, se permitió a las empresas la libre disponibilidad del crudo para exportar y la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por dichas exportaciones. La extracción de petróleo para exportar, superó el 50% por encima de las necesidades del mercado interno. De allí la brusca caída de nuestras reservas, que se agravó por la falta de inversión en exploración, desde mediados de la década del 90 hasta nuestros días.

Repsol (Refinería de petróleo y solventes) era una empresa española de poca relevancia en el negocio petrolero que se convirtió en una de las 10 mayores empresas petroleras del mundo usufructuando del vaciamiento de nuestras reservas petroleras y gasíferas.

Diarios del 7 de julio de 2000 decían: “Y.P.F. le aportó a Repsol el petróleo que no tiene en terreno propio. Ahora sí está totalmente integrada desde los pozos de exploración hasta las estaciones de servicio”.....”Cuando compraron las primeras acciones de Y.P.F. el barril de petróleo costaba 11 dólares. La semana pasada rozó los 35 dólares”. (7 / 7 / 2000). Hoy, abril de 2012, el barril está a 120 dólares.

Cuando Repsol compró la totalidad del paquete accionario de Y.P.F. pagó 15.000 millones de dólares. Explotó los yacimientos ya existentes y, al tener libre disponibilidad del crudo, exportó enormes cantidades del mismo al mercado internacional, reinvertiendo las divisas obtenidas para comprar yacimientos más rentables en Bolivia, Trinidad Tobago, Libia y en otros lugares del mundo. Obtuvo ganancias muy por encima de los 2.000 millones de dólares anuales, por lo que en pocos años recuperó con creces lo invertido. Como los yacimientos de nuestro país no eran tan rentables, la inversión en exploración fue muy baja.

Resumiendo, Repsol es el principal responsable de este desastre. Vacío los pozos ya descubiertos, giró utilidades al exterior y utilizó la renta del subsuelo nacional para invertir en otras regiones pero, a la vez, se endeudaba por más de nueve mil millones de dólares, efectivizando con esa política una verdadera expoliación de nuestro patrimonio petrolero y gasífero.

Cuando escucho por ahí que se duda de la eficacia del Estado a la hora de hacerse cargo de la administración de empresas de gran envergadura, inevitablemente viene a modo de ejemplo y es necesario destacar el caso de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas y Austral, que ha modernizado toda su flota de aviones, se incorporó a la elite aerocomercial internacional y cubre destinos del país que otros privados no quieren



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

tomar. Otro ejemplo para destacar es AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) que desde su creación hace seis años ha permitido la incorporación de casi 2 millones de habitantes al servicio de agua potable y de un millón a la red de cloacas. También escucho con mucha frecuencia hablar sobre la falta de políticas en inversiones para la explotación de otras energías, las llamadas energías limpias o alternativas. Permítanme decir que el desarrollo de las energías renovables y limpias en la Argentina se sustenta no sólo en su extraordinaria dotación de recursos naturales y en una importante tradición industrial, sino también en la disponibilidad de recursos humanos altamente calificados en ingeniería y biotecnología, fortalezas que este gobierno kirchnerista ha sabido valorar y aprovechar.

Gracias a estas políticas la Argentina se ha posicionado como el cuarto productor y el primer exportador mundial de biodiésel, concentrando más del 10% de la producción global. El biodiésel se obtiene principalmente a partir del aceite de soja, siendo la Argentina líder mundial en su producción, obteniéndose US\$ 1.219 millones en 2010 en exportaciones, con gran potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo.

La producción de bioetanol en la Argentina realizada por los ingenios azucareros del NOA se ha duplicado en los últimos cinco años. El consumo local creció a una tasa de 34% por año entre 2005 y 2010, impulsado por la legislación nacional que estipula el corte obligatorio de combustibles líquidos con biocombustibles. La gran demanda presenta oportunidades de inversión en el sector para abastecer al mercado nacional, con un gran potencial exportador.

Si hablamos de energía producida por el viento, la eólica, la Argentina es pionera en América Latina, ya que cuenta con 15 parques eólicos, siendo la llanura pampeana la región con mayor concentración de molinos de campo del mundo, encontrándose en construcción nuevos parques eólicos, como Arauco, Vientos del Secano, Malaspina, Santa Cruz y Centrales Eólicas del SUR, que se prevé incorporarán alrededor de 1.000 MW a la producción de energía del país.

La Argentina tiene cuatro puntos de generación potencial de energía eléctrica a partir de la geotermia: Tuzgle (Jujuy), Valle del Cura (San Juan), Copahue y Domuyo (Neuquén), cuya explotación sin dudas requiere grandes inversiones. Además de la generación de energía limpia, los beneficios derivados incluyen el acceso a certificados de reducción de emisiones en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. La provincia de Neuquén ya ha adjudicado a una empresa inversora el proyecto de construcción y explotación de una planta de energía eléctrica geotérmica en Copahue

Once provincias argentinas tienen alto potencial para la instalación de paneles fotovoltaicos. Las inversiones en este tipo de energía, la solar, están siendo promovidas, entre otros, en el marco del Programa GENREN. En la provincia de San Juan,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

recientemente se inauguró el primer parque solar de Sudamérica. La presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, señaló que con el desarrollo del parque de energía solar en San Juan se están “completando 117 megavatios de energías alternativas en el país”.

En la Argentina también se están desarrollando proyectos destinados a la generación de electricidad con biomasa y generación de biogas, a partir de fuentes agro-foresto-industriales, entre ellas, cáscaras de arroz, de maní, residuos de la actividad forestal y de las industrias azucarera y aceitera, en el primer caso y en base a deyecciones animales y residuos sólidos urbanos (RSU), en el segundo.

La hidroelectricidad es la principal fuente de energía renovable en el país representando más de un tercio de la electricidad generada anualmente. Las oportunidades actuales en esta área se concentran especialmente en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de hasta 30 MW.

Cabe destacar que la implementación de los proyectos antes mencionados demandará inversiones por US\$ 2.280 millones, generando más de 7.000 puestos de trabajo. Creo que los ejemplos en política energética alternativa que lleva adelante este modelo de gestión de gobierno están a la vista, pero es necesario ser coherentes y realistas; aún nos falta un largo camino por recorrer, sin dejar de reconocer que las reservas de petróleo y gas deben ser exploradas, explotadas y aprovechadas a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, como reza esta ley que hoy venimos a aprobar mayoritariamente en este Parlamento. Es una deuda que peronistas, radicales y todos aquellos que integramos el gran Movimiento Nacional y Popular, tenemos con Yrigoyen, Mosconi, Perón, y fundamentalmente con las futuras generaciones de argentinos.

19. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GARCÍA (A. F.)

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la Argentina es un indicador indiscutido e indispensable del modelo de construcción económica de acumulación y de inclusión social que se lleva adelante en nuestro país desde que asumiera la Presidencia Néstor Kirchner, y que en beneficio del pueblo argentino puso fin al modelo económico



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de transferencia de recursos y riquezas que tuvo su expresión de fracaso mas reciente en la dolorosa crisis del año 2000.

Aunque el largo devenir histórico de nuestra patria sufrió recurrentes y aviesas políticas que frustraron el despegue de procesos de acumulación de capital y desarrollo tecnológico esenciales, y desarticulaban aquellos ya existentes: cuando renunciamos a nuestra capacidad de conducir la política cambiaria y se reformó la Carta Orgánica del Banco Central a principios de la convertibilidad. Cuando se dismantelaron instrumentos esenciales de la conducción económica tales como los institutos reguladores de sectores claves de la producción agropecuaria, la Junta Nacional de Granos o Carnes. Y más aún, cuando se favoreció la transferencia de los núcleos de rentabilidad del país (petróleo, telecomunicaciones, industria agroalimentaria) a la propiedad de empresas extranjeras, y fundamentalmente subordinando a la decisión de agentes transnacionales la inversión de los excedentes, de los que la mayor parte se transfirió a los países de origen.

La historia es maravillosa cuando la escribimos todos. Aquí están los que crearon YPF y no la entregaron, los que no la privatizaron ni la vaciaron, los preocupados por Repsol y por el grupo Petersen y sus deudas, y también los que hacen bicisendas porque no se pueden hacer cargo del tren en la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.) Están todos y estamos nosotros, que somos los que otra vez venimos a hacernos cargo. Vamos a hacerlo con De Vido, con Cameron, con Kiciloff y con cada uno de los que acompañaron a Néstor Kirchner el día en que tuvo que hacerse cargo de la Argentina cuando se desangraban los trabajadores.

La presidenta dijo que dos grandes problemas atraviesan este siglo: el de la energía y el de los alimentos. En ese sentido, nos convocó para dejar de ser el granero del mundo y atrevernos a ser los proveedores de alimentos para el mundo, garantizándolos también para el consumo interno. También nos pidió legislar para limitar la venta de tierras a los extranjeros.

El cambio de época está caracterizado por el crecimiento poblacional, la intensificación en el proceso de urbanización y el aumento de la demanda de alimentos proveniente del mejoramiento de las condiciones de vida y de las pautas de consumo, producto del incremento en el ingreso per cápita de los países emergentes.

En lo que se refiere a la producción de alimentos, nuestro país asiste entonces a la gran oportunidad de constituirse como uno de los principales proveedores mundiales al tiempo que puede garantizar el abastecimiento interno, si transformamos la matriz productiva y se logra más valor agregado en la producción y en la primera industrialización.

El Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial, Participativo y Federal 2010/2020 expresa metas factibles de lograr en el futuro, poniendo la tecnología y la innovación al



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

servicio del desarrollo para alcanzar los 157 millones de TN de granos, aumentando la superficie sembrada y los rindes y para lograr por eficiencia productiva un mayor tonelaje en carne bovina y el incremento de producción de carnes alternativas, de manera que el pasaje de proteínas verdes a rojas permita que los granos adquieran un valor mucho más importante.

Esta oportunidad de ser proveedores de alimentos del mundo nos exige igualmente identificar las amenazas a las que estamos expuestos:

- El cambio climático que pone un elemento de alerta entre las expectativas y las realidades de siembras y cosechas.
- Los costos del petróleo en particular y de las fuentes de energía en general.
- La volatilidad de los precios.
- Y la tendencia de los países de maximizar la seguridad alimentaria tomando decisiones para garantizar el abastecimiento con stocks o adquisiciones a través de empresas estatales o paraestatales de grandes extensiones en países con reservas de tierra y agua.

En este recinto hemos votado leyes fundamentales para este nuevo giro en la historia de nuestro país.

La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central donde le devolvimos al mismo las funciones que le permiten impactar positivamente en el crecimiento y el desarrollo de la economía.

La ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que limita su extranjerización pero, fundamentalmente, resalta que la tierra no es un bien transable, no es una mercancía, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable, sujeto al derecho irrenunciable del gobierno nacional de ejercer en él su soberanía para que los alimentos se produzcan en tierras que pertenezcan a productores argentinos. La inversión extranjera sí hará su aporte en innovación tecnológica para darle valor agregado a las producciones agropecuarias.

Finalmente, hoy nos permite recuperar la dirección soberana de nuestras reservas de petróleo y de gas.

Estas leyes las votamos los partidos mayoritarios y la mayoría de los partidos con raíces nacionales y populares, más allá de las contradicciones, de los reproches, de la historia, de las visiones distintas, pero lo hacemos porque hemos podido comprender en una dura lección que es absolutamente necesario administrar nuestros recursos naturales para no condicionar el crecimiento de nuestro país.

Queda claro que tanto el valor proteico de los alimentos como el agua, la tierra y la energía constituyen elementos estratégicos y fundamentales para la vida de un pueblo, por lo que deben ser objeto de políticas de Estado. En consecuencia, el trigo, la carne y el petróleo no pueden dejar de tener una intervención del gobierno nacional y popular. (Aplausos.)

Pero, además, mal que les pese a aquellos que siguen tributando a un modelo de transferencia, pareciendo que sus intereses son absolutamente extraños a los del pueblo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

argentino, les decimos que estamos convocados por la presidenta para crear una nueva matriz productiva y para tener una nueva participación en la matriz de la energía.

Es claro que la energía y los alimentos son planificados por decisiones globales indirectas, por lo tanto la opción en esta política de planificación es “el desarrollo lo hace la Nación o lo hacen las transnacionales”. HOY decidimos que lo hace la Nación, aunque aún algunos legisladores que rechazan la iniciativa del Poder Ejecutivo, evidentemente tienen compromisos extraños a los intereses y a las necesidades del pueblo argentino. Eso sí lo hacen en nombre de las instituciones, de la seguridad jurídica y las inversiones....transnacionales.

La recuperación de la conducción en la política sobre nuestros recursos hidrocarburíferos, significa entonces

- Afirmar la soberanía del país y ejercer cabalmente la propiedad de este recurso sobreponiendo los intereses nacionales a los intereses de orden particular.
- Colocar en manos del Estado las decisiones estratégicas y fundamentales relacionadas con nuestra industria petrolera para integrarla con los demás sectores productivos, propiciando así un efectivo y real fortalecimiento del sector público como mecanismo de distribución del ingreso. Asimismo, la desvinculación de los precios internacionales del petróleo de los precios internos es clave para hacer más competitiva a la industria, al agro y al transporte.
- Conservar los recursos naturales y ampliar el potencial de reservas, para optimizar el abastecimiento interno y el aumento del valor agregado nacional.

Sostenemos que la explotación de los recursos minerales de energía es indisoluble de la soberanía nacional, y que el nivel de su producción es decisivo en la renta nacional. La Argentina debe hacer un esfuerzo sostenido para recrear su matriz energética nacional; las decisiones de hoy son el escenario de mañana.

Asimismo, el desarrollo de esta política energética no puede estar desvinculada del desarrollo regional.

Las redes de interconexión energética del Cono Sur, impactan sensiblemente en las relaciones geopolíticas de nuestros países y, como tal, son uno de los factores básicos de integración, desarrollo y progreso.

La cooperación de las grandes empresas estatales de energía es un aspecto clave de la integración regional sudamericana.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El anillo energético en el Cono Sur debe ser prioridad en la agenda regional; los bancos Interamericano de Desarrollo y el Banco del Sur están llamados a tener un rol estratégico en esta materia.

Se terminó el tiempo del diagnóstico. Es tiempo de hacerse cargo y por eso venimos acá. El desarrollo de un país necesita que nos hagamos cargo de lo más estratégico, que también es lo más primario en la vida de un sujeto, que es nacer, sobrevivir, crecer, estudiar, trabajar y ser feliz.

Es el momento de decidir si el futuro va a estar en penumbras o vamos a tener un futuro venturoso. Es el momento de elegir si el límite del crecimiento lo ponen los de afuera o solamente depende de la capacidad, del trabajo, del esfuerzo y del coraje de cada uno de los argentinos.

Es momento de decidir si enlazamos a la Argentina con la Europa prepotente, desafiante y colonizante o si la enlazamos con nuestra Latinoamérica, que tiene el mismo color de piel que nosotros, que tiene las mismas ilusiones, que tiene la misma esperanza. Que late, que espera y que empieza a resurgir.

Quiero decir que acompañamos este proyecto porque estamos convencidos de que esta herramienta de planificación, que queremos que la haga la Nación, es algo así como cerrar una de las venas abiertas de la América grande, y por eso apoyamos este proyecto.

Para finalizar, quiero que el 16 de abril se transforme en el día nacional de la recuperación de la soberanía energética. Esto ha hecho nuestra presidenta, como decía José Martí

“El Pueblo que compra manda, el Pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la Libertad” muchas gracias.

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GARCÍA LARRABURU

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En el día de hoy nos encontramos tratando el proyecto de ley mediante el cual se propone declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización. Este proyecto ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores y hoy probablemente se convierta en ley.

En esta oportunidad no voy a ahondar en la historia de YPF, ya que mucho se ha dicho ya al respecto, sino que voy referirme a algunas situaciones concretas que se han vivido en el interior de nuestro país.

Yo vengo de la ciudad de Bariloche, una ciudad turística que el pasado 4 de junio fue afectada por la erupción del volcán Puyehue y que, como consecuencia de ello, perdió la conectividad aérea, quedando prácticamente aislada y desconectada del resto del país y del mundo. Es una ciudad que, como todos saben, depende principalmente del turismo y ha asistido a una situación realmente complicada a lo largo de muchos meses.

En ese difícil contexto, y en el marco de la lenta recuperación que con mucho esfuerzo se ha ido produciendo en la zona, los turistas que decidieron visitar Bariloche durante la última temporada estival por vía terrestre, tuvieron que lidiar con las dificultades que se presentaban para conseguir combustible; ello producto del desabastecimiento existente en muchas estaciones de servicio de la región. Como todos ustedes recordarán, la falta de combustible afectó seriamente a distintas zonas de nuestro país, situación que probablemente podría haberse evitado.

En el caso concreto de Bariloche, la escasez de nafta y de gasoil en un contexto de crisis fue doblemente perjudicial, tanto para la economía de la ciudad como para los turistas que habían decidido visitar la zona. La gente temía no poder llegar a destino por la falta de combustible; las filas de autos eran asombrosas y los automovilistas pasaban horas y horas esperando en los surtidores.

A esto hay que sumarle que los mayores problemas de provisión de nafta ocurrían en el recambio de quincena o al acercarse un fin de semana largo. Incluso, se llegó al extremo de que, ante la imposibilidad de cargar combustible, turistas que se dirigían a Bariloche tuvieran que pasar la noche en la localidad neuquina de Piedra del Águila.

En ese contexto, inevitablemente, los turistas dudaban si visitar la región o no porque no sabían si iban a poder llegar a destino, recorrer la zona libremente y regresar a sus hogares, lo cual obviamente trajo consecuencias negativas para la economía de una ciudad que depende de la actividad turística, y que además todavía se encuentra atravesando una situación crítica.

Con este ejemplo queremos reflejar la importancia de asegurar la disponibilidad de nuestros recursos estratégicos para la continuidad del crecimiento y progreso de las economías regionales. En ese sentido, mediante esta ley que prevé declarar de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, podrán evitarse estas situaciones que tanto perjuicio causan al país. La provisión de hidrocarburos, como vemos, es una herramienta clave que debe acompañar el desarrollo de la Argentina en todas sus actividades, ya sea el agro, la industria o los servicios, como es el caso del turismo, un fuerte generador de empleo.

Otra de las situaciones a la que quiero referirme particularmente, ya que he podido verla muy cerca en mi ciudad, tiene que ver con el ahogo al que han sido sometidas muchas estaciones de servicio. Y al respecto, quiero mencionar la política discrecional de la empresa YPF para distribuir combustible así como la arbitrariedad en lo que respecta a



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la renovación o anulación de los contratos de concesión. Se trata de graves situaciones que podríamos llamar de extorsión que han sido vividas por muchos agencieros y que han producido el cierre de una gran cantidad de estaciones de servicio.

Incluso hoy en día, en la línea sur de la provincia de Río Negro, hay localidades que ya no cuentan con una estación de servicio, con el grave perjuicio que esto representa para el desarrollo de las economías locales y para la vida cotidiana de su gente.

En esta línea, quiero mencionar brevemente algunos datos provistos por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) sobre la situación a nivel nacional. Entre enero y noviembre del año 2011, 360 estaciones de servicio cerraron sus puertas, lo que representa la desaparición de casi un local de expendio de combustibles por día, con la consecuente pérdida de empleos.

En el año 2001 había 6.157 estaciones para abastecer a unos 6 millones de automóviles mientras que hacia fines de 2010, eran poco más de 4.300 las bocas de expendio distribuidas por toda la Argentina para 9 millones de vehículos.

Nosotros estamos convencidos de que YPF, al igual que otras empresas que brindan un servicio público que debe llegar a todos los argentinos, no puede regirse solamente por la lógica del mercado. Por eso creemos firmemente que el control de esta empresa debe estar en manos del Estado, porque de esa manera se logrará poner este recurso estratégico al servicio del país y de su gente, del crecimiento con inclusión social, del desarrollo de las economías locales, de la industria, del turismo y de los servicios.

A su vez, queremos destacar que la sanción de esta ley supone un beneficio concreto para las provincias petroleras, ya que contarán con una participación accionaria. Esta medida no sólo contribuirá al federalismo, sino que también convertirá a YPF en un motor del desarrollo regional que impulsará nuevas inversiones que contribuirán a revertir el desmantelamiento y vaciamiento al cual Repsol ha llevado a YPF.

Desde el año 2003, primero el entonces presidente Néstor Kirchner y luego la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner, han tomado una serie de medidas tendientes a volver a poner al Estado en un lugar protagónico y con un rol activo. En especial, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) han puesto en manos del Estado servicios públicos esenciales para el país, que dejaron de estar regidos solamente por la lógica de la maximización de beneficios y pasaron a estar puestos al servicio de la gente.

Afortunadamente, el gobierno nacional ha logrado, mediante sus políticas, desmitificar esa idea tan arraigada en la década del 90 vinculada con la ineficiencia y deficiencia de las empresas públicas.

Con esta serie de medidas, podemos decir que el Estado argentino continúa recuperado su lugar como agente estratégico para el desarrollo del país.

En esta jornada histórica, quiero expresar que me llena de orgullo ser parte de este gobierno. Esta decisión nos vuelve a señalar el compromiso de nuestra presidenta con la defensa de los intereses de la Nación, demostrando una vez más su valor y coraje para continuar profundizando el modelo iniciado por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2003.

Antes de terminar, no quiero dejar de señalar que, desde que la presidenta anunció que



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

iba a enviar este proyecto al Parlamento, los medios hegemónicos han hablado hasta el hartazgo de las supuestas represalias que tomaría el gobierno español en venganza por la expropiación de las acciones de Repsol. Más allá del respeto que me merecen mis antepasados, yo les quiero decir que estas medidas se toman en defensa y priorizando los intereses de la Argentina.

Nuestra presidenta está pensando en un modelo de país sustentable para las próximas generaciones, teniendo en cuenta no sólo la coyuntura sino un proyecto a largo plazo. Tal vez ahora no podemos avizorar las vastas implicancias de esta decisión, pero seguramente con el paso de tiempo podremos ver sus frutos.

31. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GARRIDO

Fundamentos del apoyo en general del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Existen en la actualidad importantes indicadores de crisis energética que demuestran la necesidad de que se produzca un cambio en la conducción de la empresa y la importancia de que el Estado pueda fijar las metas y lineamientos de la política energética. De esta forma, nuestro bloque entiende que la gestión estatal de YPF es esencial para la implementación de dicha política, independientemente de quién ocupe ocasionalmente el gobierno. Por eso, apoyamos el sentido de la iniciativa en discusión. Desde 1998 a la fecha, la producción de petróleo decayó un 32% y la de gas natural un 11%. Esta caída de la producción como consecuencia de la falta de inversión exploratoria, derivó en una merma de las reservas de hidrocarburos. Por otra parte, en 2011 la importación de combustibles fue de 10 mil millones de dólares, dejando un saldo negativo en la balanza comercial energética, que de no revertirse seguirá en aumento.

Al mismo tiempo, nos encontramos frente a una situación de vaciamiento –mayor endeudamiento e importaciones de combustible- que el propio gobierno afirma que existe. En los fundamentos del proyecto oficial se puede leer que “desde el año 2007 Repsol-YPF expandió significativamente su nivel de endeudamiento como forma de coronar una estrategia de virtual vaciamiento de la empresa.”

Nuestro apoyo en general a la iniciativa no implica que ignoremos la responsabilidad que el gobierno nacional –y muchos de sus funcionarios- tienen en la gestión de la política energética que se ha desarrollado en los últimos años y que ha producido la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

situación de crisis energética antes mencionada.

A nuestro juicio, el vaciamiento importa responsabilidades. Si hubo tal vaciamiento el gobierno es responsable por acción u omisión. Por esta razón, hemos hecho la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue los hechos que desde el propio Poder Ejecutivo se denuncian públicamente. Se trata de la causa 4.244/04 contra Julio De Vido y otros que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Entendemos que el rol del Congreso excede el de tal denuncia y que la función esencial de este órgano es la de discutir las leyes y políticas de Estado que luego implementará el Poder Ejecutivo. Entendemos que nada encubrimos ni sancionamos, y que se halla en nuestras manos la decisión trascendente sobre el futuro de YPF, que trasciende las responsabilidades que deberán igualmente determinarse a través de los mecanismos estatales que fija la ley.

Se ha hablado también sobre si estamos votando una expropiación o una confiscación. Es importante aclarar las diferencias de estos dos conceptos, en tanto suponen situaciones muy diferentes. En este sentido, estamos de acuerdo con la expropiación que se somete al Congreso, que no es una confiscación, como se ha pretendido por algunos. No estamos violando la Constitución sino echando mano de un instituto de derecho público expresamente admitido en ella: hay una ley, está fundada en razones de utilidad pública –y hasta diría de emergencia- y habrá indemnización previa a la transferencia del dominio (que no debe confundirse con la toma de posesión). El rol del Congreso, en este caso en particular, es el de evaluar la pertinencia de la decisión política de declarar de utilidad pública la mayoría de las acciones de una empresa petrolera. Estamos haciendo efectivo un instituto constitucional previsto también por las convenciones internacionales de derechos humanos de las que el Estado argentino es parte. Finalmente, y llegado el caso, serán los tribunales del Estado de derecho los que determinarán la existencia de algún interés afectado.

El proyecto que hoy se está sometiendo a discusión es un punto de partida para revertir una situación crítica en materia energética, signada por malas decisiones de política pública y graves hechos de corrupción que comenzaron con la venta de YPF a Repsol y continuaron con la incorporación del grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi. La operación de venta a Repsol significó venderle la empresa a una compañía con escasa experiencia en exploración y producción de hidrocarburos. El Estado argentino no cumplió con el estatuto de la empresa que establecía la imposibilidad del Estado de vender su 20% de las acciones, sino que vendió su “acción de oro”: aquella que le permitía vetar cualquier cambio de control de la compañía.

Repsol logró primero comprar el 14,99% de las acciones para luego quedarse con el control de YPF. El monto que debió pagar le implicó adquirir deuda. Este endeudamiento condicionó todo el accionar posterior de la empresa y puede explicar la falta de inversión durante los 13 años en que la compañía estuvo al frente de YPF.

La incorporación del grupo Petersen –propiedad de la familia Eskenazi- como accionista de YPF fue también irregular. El 14,99% de las acciones que adquirió le fue fondeado en su totalidad por crédito, incluso de la propia Repsol, que le prestó 1.051 millones de dólares. El resto fue un crédito otorgado por un consorcio de bancos liderado por Credit Suisse. La entrada de los Eskenazi a Repsol-YPF se produjo durante



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la actual administración. Llama la atención que, teniendo en cuenta el diagnóstico que el Poder Ejecutivo realiza de la gestión de la empresa durante los últimos años, no se haya removido a ningún funcionario público. Es el caso del secretario de Energía, Cameron que, sin lugar a dudas, conocía la falta de inversión y accionar de la empresa.

Asimismo, el debate que plantea el gobierno es insuficiente y poco claro. No estamos considerando una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, a pesar de que la actual está desfasada y es anticuada. Tampoco el gobierno ni el oficialismo en el Parlamento han mostrado planes de acción, metas de inversión y demás cuestiones vinculadas a la nacionalización de YPF que también es necesario que el Congreso discuta.

El proyecto enviado por el gobierno no garantiza la transparencia ni de la operación de compra ni de la futura gestión de la empresa. Los proyectos que aquí sancionamos son el inicio de una política pública. Por eso, la importancia del debate y de la calidad del contenido que votamos.

Es alarmante que la iniciativa oficial establezca explícitamente que YPF no estará sujeta a auditorías, incumpliendo, incluso, los artículos 8 y 116 de la Ley de Administración Financiera.

El inciso b) del artículo 8° establece será aplicable dicha ley a “[...] las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria [...]”. La nueva empresa estatal está sujeta, por tanto, a la aplicación de la ley 24.156 de Administración Financiera, al margen de que el dictamen de mayoría sostenga que YPF tendrá la forma de sociedad anónima, sin aclarar la composición accionaria. Sin embargo, en virtud de que será mayoritariamente estatal –recordemos que el Estado expropia el 51% de las acciones– no hay lugar a dudas de la aplicación de la normativa vigente en materia de administración financiera y en consecuencia de los sistemas de control del sector público nacional.

Asimismo, la nueva YPF debe estar sometida también al control externo de la Auditoría General de la Nación, de acuerdo con los artículos 116 y 120 de la Ley de Administración Financiera y al artículo 85 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, es falso que la sujeción a los controles de la AGN sea una aberración jurídica, como han sostenido muchos representantes del oficialismo y del gobierno nacional. Como lo demuestran los artículos anteriormente mencionados, estos controles están previstos en la propia Ley de Administración Financiera y funcionan en casos similares, como Aerolíneas Argentinas, Banco Hipotecario, Arsat, Correo Argentino, AySA, Nucleoeléctrica, Tandanor, BICE y Dioxitec.

Lo que es una aberración, por el contrario, es que la actividad estatal, los recursos públicos y los antecedentes de corrupción que existen en este caso no basten para corroborar la necesidad de mayores controles, o mejor dicho, los controles públicos propios de la actividad estatal. El propio interventor Kicillof sostuvo en su intervención en el Senado que no era posible acceder a los números de la empresa mientras era propiedad de Repsol, porque se trataba de una compañía privada y que buena parte de la información sólo se conoce cuando se tiene ocasión de ponerse al frente de la conducción.

Habría que aclararle al señor viceministro de economía, Kicillof, que no es necesario estar en la conducción de la empresa si funcionan los controles adecuados y los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mecanismos para acceder a la información pública. Este proyecto expresamente excluye dichos controles. Excluye también la tutela del Estado so pretexto de la necesidad de no trabar los negocios. Un argumento que haría las delicias del tan denostado neoliberalismo. La exclusión de la AGN sólo puede fundarse en neoliberalismo o vista gorda a la corrupción. Y, además, luce desactualizado, porque ya el menemismo, es decir la misma fuerza pero con otro líder, se encargó de dismantelar los controles previos. Lo que el gobierno está vedando actualmente es la posibilidad de controles posteriores a los actos, que no trabarían la gestión pero seguramente obstaculizarían las maniobras poco transparentes que pudieran existir.

Pero hay una contradicción mayor: los exponentes de lo que llaman un proyecto nacional y popular sustraen a YPF del control de la Auditoría General de la Nación, que depende de este Congreso y de los representantes del pueblo pero, gracias a la forma societaria que mantienen, admiten controles foráneos que exigen informes periódicos y estados patrimoniales y financieros veraces, como las normas SOX (Ley Sarbanes Oxley) y la SEC (US Securities and Exchange Commission). Gran incongruencia si lo que se quiere, como muchos dicen, es revertir los pasos del neoliberalismo.

El proyecto oficial tampoco prevé una Agencia Federal de Hidrocarburos como sí lo hace la disidencia parcial del bloque de la UCR. El Estado nacional debe coordinar la actividad de las provincias y garantizarse para sí la facultad de diseñar, implementar y controlar las políticas energéticas.

Desde ya que esta agencia no es un invento argentino: existen organismos similares en muchos países en donde la política petrolífera es esencial para el desarrollo productivo del país. Un ejemplo es Brasil.

Esa agencia debe contrabalancear las políticas corruptas y suicidas cuyas consecuencias estamos viendo hoy. Gracias a la llamada “Ley Corta” las provincias están facultadas para entregar nuevas áreas de exploración. Desde el 2006 se han otorgado casi la totalidad de los pozos explorables a empresarios amigos inexpertos en materia energética. Neopetroleros como el grupo Vila-Manzano, Eurnekian, Lázaro Baez, Raúl Moneta, Daniel Lalín o Cristóbal López. Alrededor del 43% de 180 permisos de exploración de nuevos pozos se otorgaron a empresas sin experiencia en la explotación de hidrocarburos. Sin miedo a equivocarme entiendo que se están haciendo importantes negocios con la cuestión energética.

El otorgamiento de más acciones a las provincias petroleras que ya poseen parte del paquete accionario lo único que provoca es la acentuación del statu quo actual y la falta de incentivos para que nuevas provincias exploren el subsuelo. Esta facultad debería ser del Estado argentino y, de crearse, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como garante del federalismo.

Para terminar, quiero decir que, como sostuve al comienzo de mi intervención, apoyamos este paso porque consideramos que es de interés público nacional el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, pero no nos engañemos ni engañemos a la gente. Hacen falta políticas de largo plazo, eficacia y controles para que YPF no sea un caballo de Troya para el capitalismo de amigos.

No queremos que se repita lo de ENARSA y de ahí nuestras disidencias con el proyecto oficial.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por eso, este paso sólo tendrá sentido si la toma de control de YPF por parte del Estado es para fortalecer la empresa, capitalizarla y darle recursos para que desarrolle todo el potencial exploratorio del país.

Hoy es un día histórico. Estamos recuperando una empresa que nunca debió cederse a manos privadas. Esperemos realmente lograr el objetivo.

32. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GIACCONE

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Hoy señor presidente es un día de esos que uno nunca soñó que iba a vivir, un día histórico para la Argentina y un día de extrema felicidad para este Congreso Nacional, a pesar de lo que algunos de los diputados nos pidan que no mezclamos las emociones. Un día en el que tenemos que agradecer ser militantes políticos y tener el honor de haber sido elegidos por la voluntad popular para integrar este Congreso.

Hoy vamos a sancionar la recuperación de la soberanía nacional sobre nuestros hidrocarburos y a volver a poner como meta el autoabastecimiento de combustibles, insumos estratégicos para mantener la matriz de crecimiento con inclusión social que nuestro gobierno nacional, primero con Néstor Kirchner y ahora con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, viene implementando desde el 2003 en nuestro país. Crecimiento incontrastable, industrial, comercial, en comercio exterior, en mercado interno, en reindustrialización de nuestras exportaciones, en producción agropecuaria y especialmente en puestos de trabajo, que no hubiera sido posible si el gobierno nacional no hubiera invertido en energía que acompañara esa actividad productiva y económica. Indicadores, por otro lado, de crecimiento con inclusión social que ninguna otra fuerza política puede mostrar en el período que le ha tocado gobernar.

No hubiera sido posible triplicar las áreas industriales, ni lanzar el Plan Estratégico Industrial 2020, con las mayores cadenas productivas de nuestro país, ni el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, - con nuestro presidente Julián Domínguez como ministro de Agricultura -, si no hubiera habido un Estado y un gobierno presentes acompañando con inversiones y obras en el área energética, como lo explicaran muy bien muchos de mis compañeros diputados en este recinto.

Este crecimiento es el que se puso en riesgo este último tiempo al no tener el control sobre nuestros recursos hidrocarburíferos, situación que hoy queremos modificar con esta ley.

Provengo de una provincia que no produce petróleo pero que se vio sumamente afectada



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

por la política de desinversión de YPF. Esta política selectiva de priorizar productos de mayor calidad y precio, perjudicó a nuestra producción y afectó a todos los consumidores especialmente del interior. En nuestros pueblos del interior, de la región “chacarera” del sur de Santa Fe, donde vivo, veíamos este último tiempo cómo se ponía en riesgo la producción agropecuaria y su transporte a puertos por la falta de combustibles ligados a ella. Había nafta premium pero no gasoil para mover tractores, maquinaria agrícola y camiones. Recuerdo haber realizado arduas gestiones junto a estacioneros por la ampliación de cupos o búsquedas de otros proveedores por no llegar a abastecer a los productores, maquinistas rurales y transportistas.

Hoy tenemos la oportunidad de revertir esa situación, de empezar un camino que nos lleve al autoabastecimiento, con una mirada federal, donde participan el Estado nacional y las provincias y donde el primer objetivo es el mencionado autoabastecimiento. Y lo hacemos desde aquí, desde este Congreso nacional, desde la política, como decía excelentemente ayer mi compañero diputado riojano Javier Tineo, y discutiendo soberanía nacional.

Ayer ponía en duda un diputado de la oposición si el debate que hoy tenemos es sobre soberanía. Yo estoy convencida de que no es otra cosa lo que discutimos hoy, que nuestra soberanía política, y lo hacemos desde este Congreso, al que orgullosamente me incorporé acompañando a nuestra presidenta hace pocos meses, meses que bastaron para demostrar que es un nuevo Congreso que toma decisiones soberanas, como lo hicimos con la ley de tierras, limitando la extranjerización; como lo hicimos con Malvinas, manifestándonos por unanimidad en defensa de nuestra soberanía territorial; como lo hicimos con el papel, insumo estratégico que declaramos de interés público para garantizar el acceso a todos y la libertad de información; como lo vamos hacer hoy, por amplia mayoría, volviendo a nacionalizar YPF, y volviendo a tener soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Con un agregado: el de volver a poner énfasis en las mayorías porque también vamos a votar la imposibilidad de enajenar estas acciones si no es con la mayoría calificada de los dos tercios de este Congreso. ¡SI ESTO NO ES SOBERANIA DEL PUEBLO DIGANME ENTONCES QUÉ ES!

No recuerdo otro período de la democracia reciente en el que este Congreso haya tomado decisiones tan importantes, que refuerzan nuestra soberanía política y fortalecen nuestra independencia económica de los capitales especulativos externos y del interés desmedido de las corporaciones.

Ayer escuché de una diputada de la oposición, que a menudo descalifica las mayorías y el voto popular, algo así como que “un error, aunque sea apoyado por muchos, no deja de ser un error”, y yo quiero responderle que en el campo de la política, para los que venimos de movimientos nacionales y populares, de partidos mayoritarios, para los que venimos del peronismo, para los que vivimos el tremendo orgullo de haber acompañado la elección de una presidenta con el 54% de adhesión popular, para los que nos emocionamos el viernes en Vélez con la impactante participación de cientos de miles de argentinos que apoyan la renacionalización de YPF, quiero decirle, repito, que hoy estamos felices de pertenecer a este Congreso, que por voluntad popular va fortalecer



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

nuestra soberanía política y energética, va a defender nuestros intereses nacionales y tiene muy en claro, más que nunca, ¡QUE EL PUEBLO NO SE EQUIVOCA!

33. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GIANNETTASIO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Veo con agrado y celebro el tratamiento del proyecto mediante el cual se propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. tomado del paquete accionario de Repsol, en pos del interés público nacional y, en consecuencia, definir como objetivo prioritario de esta República el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, toda vez que la presente iniciativa resulta coherente con las políticas públicas desarrolladas por este gobierno en materia de desarrollo económico.

Con carácter previo a realizar un análisis del contenido del proyecto bajo análisis creo necesario realizar un racconto de los antecedentes y la filosofía que inspiran esta importante iniciativa.

I.- Antecedentes y filosofía del proyecto:

Entiendo que para entender la situación a la que llegamos en el tema YPF cabe remontarse a fines de los años 80, cuando, tras la sanción de la Ley de Reforma del Estado 23.696, se forjaron las bases legales que permitieron ejecutar una vasta operación privatizadora, al declararse sujetas a privatización las principales empresas de servicios públicos y actividades industriales o comerciales que explotaba el Estado y al dictarse normas que establecieron los procedimientos de transferencia de la propiedad y de la gestión al sector privado, delegándose en el Poder Ejecutivo la potestad de derogar privilegios, cláusulas monopólicas y condiciones discriminatorias y, al propio tiempo, la potestad de desregular actividades.

Fue así como, obedeciendo a una decisión política y en respuesta a la profunda crisis que afectaba al Estado, se proyectó, se puso en marcha y se concretó un programa de reestructuración de las empresas públicas. Esta determinación gubernamental se fundó en la imperiosa necesidad de proporcionar una vía válida de solución a la situación crítica por la que atravesaba la administración pública estatal y no estatal. La respuesta a estos “males” se orientó hacia la reforma del Estado. Una de las manifestaciones que coadyuvaron a la reestructuración del Estado fue la aplicación de un sistema de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

privatizaciones, en el convencimiento de que era el único camino viable para la reducción del gasto público y para el ofrecimiento de mejores y eficaces servicios a toda la sociedad argentina.

En ese marco, el día 18 de agosto de 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.696 por medio de la cual se declaró “en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias.”

El artículo 8° de la norma preveía que: “Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley.”

El artículo 9 preveía que “La declaración de "sujeta a privatización" será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso” asignándose trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza.

Sin perjuicio de ello, la propia ley 23.696 declara "sujeta a privatización" a los entes que se enumeran en los listados anexos encontrándose en el Anexo I, entre los casos de privatizaciones y concesiones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales para la cual se preveía como procedimientos la “concesión, asociación y/o contrato de locación en áreas de exploración y explotación” o bien “sociedades mixtas para áreas de recuperación asistidas”.

El artículo 11 facultó al Poder Ejecutivo nacional “para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" conforme con las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta facultad se establecerán, en cada caso, las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán.”

Por su parte, el artículo 15 reguló las “Alternativas de procedimiento” y estableció que “Para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación o en forma directa en su caso, podrá:

- 1) Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización".
- 2) Constituir sociedades: transformar, escindir o fusionar los entes mencionados en el inciso anterior.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- 3) Reformar los estatutos societarios de los entes mencionados en el inciso 1 de este artículo.
- 4) Disolver los entes jurídicos preexistentes en los casos en que por transformación, escisión, fusión o liquidación, corresponda.
- 5) Negociar retrocesiones y acordar la extinción o modificación de contratos y concesiones, formulando los arreglos necesarios para ello.
- 6) Efectuar las enajenaciones aun cuando se refieran a bienes, activos o haciendas productivas en litigio, en cuyo caso el adquirente subrogará al Estado nacional en las cuestiones, litigios y obligaciones.
- 7) Otorgar permisos, licencias o concesiones para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales, así como las que aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convenga para facilitar la operación. En el otorgamiento de las concesiones, cuando medien razones de defensa nacional o seguridad interior, a criterio de la autoridad de aplicación, se dará preferencia al capital nacional. En todos los casos se exigirán una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad.
- 8) Acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en ningún caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción industrial, regional o sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el tipo de actividad que aquélla desarrolle o para la región donde se encuentra radicada.
- 9) Autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen por aplicación de esta ley. Los diferimientos referidos alcanzarán a todos los créditos, cualquiera sea su naturaleza, de los que sean titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado nacional. Las sumas cuyo cobro se difiera, quedarán comprendidas en el régimen de actualización correspondiente a cada crédito de acuerdo a su naturaleza y origen y, en ausencia del régimen aplicable, al que determine el Poder Ejecutivo nacional. En todos los casos las quitas, remisiones o diferimientos a otorgar, así como su régimen de actualización deberán formar parte de los pliegos y bases de licitación cualesquiera fueran las alternativas empleadas para ello.
- 10) Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y/o de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la presente, puedan capitalizar sus créditos.
- 11) Dejar sin efecto disposiciones estatutarias o convencionales que prevean plazos, procedimientos o condiciones especiales para la venta de acciones o cuotas de capital, en razón de ser titular de éstas el Estado o sus organismos.
- 12) Disponer para cada caso de privatización y/o concesión de obras y servicios públicos que el Estado nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de la contratación.
- 13) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento necesario o conveniente para cumplir con los objetivos de la presente ley.”

El artículo 17 reguló las modalidades a adoptar en el proceso y estableció que: “Las privatizaciones reguladas por esa ley podrán materializarse por alguna de las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:

- 1) Venta de los activos de las empresas, como unidad o en forma separada.
- 2) Venta de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.
- 3) Locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.
- 4) Administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.
- 5) Concesión, licencia o permiso.”

El artículo 18 reguló los procedimientos de selección, incluyéndose entre los viables 1) Licitación Pública, con base o sin ella. 2) Concurso Público, con base o sin ella. 3) Remate Público, con base o sin ella. 4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País. 5) Contratación Directa, únicamente en los supuestos previstos en la norma.

Establece la norma que: “En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificado en cada caso por la autoridad de aplicación, mediante acto administrativo motivado.”

Y agrega: “La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad.”

En el marco de dicho proceso, a través del decreto 2.778 del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 31 de diciembre de 1990, se transformó a la entonces “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima”, regida por la ley 19.550, estableciéndose que, previo cumplimiento de la ley 23.696, sus acciones serán ofrecidas en bolsas y mercados bursátiles y también en licitaciones. Según la norma YPF SOCIEDAD ANONIMA iniciaría, inmediatamente, los trámites a tales fines.

Al respecto, uno de sus considerandos establecía que: “Que, a estos efectos, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO se transformará en una sociedad anónima de capital abierto en la que podrá participar el capital estatal junto con el privado, incluyendo a su personal, estableciendo la condición de que cotice sus acciones en las bolsas de valores con el objeto de obtener la mayor apertura e integración privada en el capital de la nueva sociedad”.

Por su parte, y en línea con todo el proceso de emergencia y privatizador, se sancionó la ley 24.145, que posibilitó el inicio de la privatización de su capital y que, en su artículo 7, dispuso la ampliación del listado que figura en el anexo I de la ley 23.696 respecto de YPF Sociedad Anónima, autorizándola a efectuar los actos jurídicos que se mencionan en el anexo V que integra la presente ley.

Entre los muchos defectos que tuvo dicha ley debe reconocerse que hubo un tinte positivo entre su articulado, toda vez que el artículo 1° se ocupó de transferir el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, situación que más tarde tendría recepción en el artículo 124 in fine de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Pese a ello, originó un grave inconveniente a los gobiernos provinciales, ya que si bien tenían el recurso, no podían explotarlo porque no tenían una empresa estatal para lograrlo.

Así, el artículo 9° de la referida ley 24.145 aprobó la declaración de “sujeto a privatización” del capital social de YPF Sociedad Anónima

El artículo 10 preveía que: “Ejecutados los actos mencionados en el anexo I de la ley 23.696, con la ampliación dispuesta en el artículo 7° de la presente y cumplido lo dispuesto en el artículo precedente, las acciones clase "D" representativas del capital social de YPF Sociedad Anónima, serán vendidas en bolsas y mercados bursátiles nacionales y/o internacionales.”

Se establecía que “EL ESTADO NACIONAL asumirá todos los créditos y deudas originadas en causa, título o compensación existente al 31 de diciembre de 1990, que no se encuentren reconocidos como tales en los estados contables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado a dicha fecha, que fueran auditados por la Sindicatura General de Empresas Públicas, como también toda contingencia, reconocida o no en dichos estados contables, generada por hechos ocurridos y/o en operaciones celebradas a dicha fecha, siempre que exista decisión firme de autoridad jurisdiccional competente, debiendo mantener indemne a YPF Sociedad Anónima de todo reclamo que se realice por estas cuestiones. Por su parte, YPF Sociedad Anónima deberá absorber los resultados acumulados negativos de los estados contables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado al 31 de diciembre de 1990, en los estados contables al 31 de diciembre de 1991, en moneda de dicha fecha, hasta agotar el saldo de ajuste de capital existente a la fecha precitada.”

Por otra parte, mediante el artículo 8° de la ley 24.145, que se ocupó de definir las acciones a través de las cuales estaría representado el capital de la sociedad, se dejó a salvo un 20% de las acciones en manos del Estado, estableciendo que: “La reducción de la tenencia del paquete accionario de la Clase "A" por debajo del VEINTE POR CIENTO (20 %) del Capital Social de YPF SOCIEDAD ANONIMA requerirá la previa aprobación por Ley”.

Pese a ello, esa ley no tardó en llegar. En 1995, con el dictado de la ley 24.474, se modificó la última parte del artículo 8° y se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a reducir su tenencia del paquete accionario de la clase "A" hasta una sola acción.

Posteriormente, por el decreto 286 del 27 de febrero de 1995 se constituyó el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL y el ESTADO NACIONAL suscribió con el BANCO DE LA NACION ARGENTINA un Contrato de Fideicomiso mediante el cual el ESTADO NACIONAL cedió, en propiedad fiduciaria, SETENTA MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (70.599.999) acciones clase "A" de YPF SOCIEDAD ANONIMA al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en su carácter de agente fiduciario, a efectos de integrar el patrimonio del referido FONDO.

Complementariamente el artículo 2° de la Ley 24.623 dispuso que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en su carácter de agente fiduciario del mencionado FONDO, no tiene restricción alguna para vender, recomprar, gravar, dar en garantía o disponer de cualquier forma las acciones de YPF SOCIEDAD ANONIMA recibidas en propiedad



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

fiduciaria.

Este escenario dio lugar a que entre los años 1998 y 1999, Repsol adquiriera casi la totalidad de las acciones de la sociedad anónima YPF, pasando a llamarse REPSOL YPF S.A.

Para quien quiera mirar la realidad hoy, ignorando por su edad o falta de memoria, la etapa histórica en la que se inscribe la ley de Reforma del Estado, basta con recabar en la biblioteca de este Honorable Congreso el Diario de Sesiones que corresponde a agosto 16 y 17 de 1989, para advertir donde nos encontrábamos y en consecuencia la confusión respecto del rumbo a seguir. Como dato ilustrativo, recojo en la página 2470 un párrafo que me parece puede aproximarnos a la situación de emergencia

...”el país está hoy mucho peor que en 1983. La deuda creció mucho; se pagó mucho; los activos argentinos bajaron mucho; el producto bruto bajó mucho; la inflación llegó a ser un récord mundial; la desocupación es demasiado alta; el número de pobres es excesivo; los estallidos sociales se sucedieron y la Argentina bajó en el ránking de las naciones, todo eso por obra y gracia de nuestra incapacidad para convivir y de una manifiesta incapacidad para gobernar...”.

... ”la política radical en materia de deuda externa incrementó su monto de 46 mil millones de dólares a 60 mil millones, no obstante haberse pagado 14 mil millones de dólares, con lo cual el producto bruto bajó 1,2 puntos por año durante 5 años y la desocupación aumentó de 1.200.000 a 1.700.000 trabajadores.....”

Como ocurre generalmente en las crisis, algunos legisladores votaron confundidos, otros obstinados, otros pensando que el dogma para resolver la dura emergencia se caracterizaba por las 3 E: economía, eficacia y eficiencia, ó por las 5 R: reinención, reingeniería, reconceptualización, reestructuración y realineación, todos estos conceptos que fundaban el New Public Management, aconsejando normas del mercado para resolver los problemas del Estado.

La Ley de Reforma del Estado y su posterior derrotero de la 24.145 y la 24.623, signaron, -entonces parecía que era para siempre- los servicios públicos como cometido estatal específico.

Pero seguramente todos no eran inocentes. Había uno o varios que sabían cuántos quedaban en la calle cuando se apagara el primer horno de SOMISA, cuántos terminaban para siempre su vida laboral porque tenían 45 años, cuántos -de una vez y en muchos casos para siempre- iban a dejar la escuela, a perder la obra social y a tratar de abandonar este suelo para buscar esperanza en otro rumbo.

La Argentina de la hiperinflación, sumada a la Argentina de la modernización, dejaron un saldo que este momento histórico no puede regalarle a sus autores más que oprobios. Así como en la actualidad los medios, no rescataron como valiosa la actitud del presidente Kirchner cuando rompía con el Fondo, el odio y los intereses en ese momento como antes, pesaban más que la patria.

Cuando le pagamos al Fondo, abandonamos el New Public Management que en nuestra lengua definiríamos como “argentina a la acuarela” o “a la deriva” para los más ilustrados.

El desastre permitió el breve análisis normativo con el que empecé mi discurso, pero si se lee con atención podemos entender por qué hoy es un día trascendente.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

YPF SE VENDIÓ EN LA BOLSA, queda claro? No se concesionó; sencillamente se entregó.

El proyecto que analizamos, llamado por algunos periodistas interesados –sabrán ellos la razón- pero fundamentalmente hipócritas y mentirosos: CONFISCACIÓN, por el contrario, es un proyecto de expropiación. Contiene los elementos constitucionales que fija el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Requiere del pleno la declaración de utilidad pública y reconoce la previa indemnización a cuyos efectos enerva la norma –ley 21.499- y fija la atribución en el marco de las competencias del Tribunal de Tasaciones. Ahora bien, ¿qué dicen los pícaros periodistas de la prensa cipaya? ¿Qué ha existido ocupación previa o desapoderamiento? MENTIRA.

YPF fue intervenida en virtud de un decreto de necesidad y urgencia sobre cuya validez ya se expidió la comisión bicameral, pero que sin perjuicio de ello, está previsto en la ocupación temporaria de la propia ley de expropiaciones y constituye un acto dictado en protección de los recursos estratégicos que tienen un interés superior y cuya administración había ocasionado ya perjuicios en materia de desabastecimiento, desinversión y vaciamiento creciente.

No es cierto, como dice el miembro informante de la oposición, que el proyecto que se pretende sancionar resulte ilegal, discriminatorio y que la institución que correspondía era el rescate y no la expropiación. La argumentación opositora parece más bien fundar el escrito de demanda de Repsol contra el Estado argentino, que una apelación a la vigencia del estado de derecho y protección de la propiedad privada.

Es más, en su afán de sostener la hipotética posición de Repsol en conflicto con el Estado nacional por la expropiación, no advierte que para demostrar la ilegalidad establece como procedimiento adecuado el rescate previsto para el supuesto de las concesiones de servicios públicos o que la discriminación proviene de haber elegido ese grupo empresario y no haber optado por otros titulares de acciones. Casualmente recoge los términos que en el “Acuerdo con España para la protección y promoción recíproca de inversiones, ley 24.118”, en su artículo 5° establecen como excepciones a la declaración de utilidad pública conjuntamente con el trato discriminatorio

Analicemos ahora las opciones que tenía el Gobierno nacional:

- expropiar al grupo Petersen cuyas acciones están gravadas, y son al menos litigiosas.

- expropiar a los que compraron las bolsas, New York, Argentina, ¿cómo serían? Los busca de a uno y espera reunir entre todos estos el 51? No puede porque más del 51 está en manos de Repsol y lo que quiere la Argentina es recuperar la posibilidad de decidir la política hidrocarburífera para garantizar el autoabastecimiento de hidrocarburos así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. La historia que sigue ya la conocemos todos, y no creo necesario ahondar en este punto, ya que se ha tratado sobradamente. Lo que sí quiero recalcar es que en dicho contexto entiendo que el proyecto bajo análisis va de la mano con una nueva concepción de las funciones del Estado y del rol que le cabe en la regulación económica.

Cabe recordar aquí que en la Asamblea Legislativa del día 1° de marzo de 2012, la señora presidente de la Nación, refiriéndose a este tema expresaba:

...“Uno de los temas que también deberá abordar el Poder Ejecutivo es el incremento exponencial que ha tenido la importación de combustibles en la República Argentina,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

producto de la terrible caída de la producción de los últimos años. Hay gráficos que realmente impactan porque marcan puntos de inflexión. El punto de inflexión de mayor producción de YPF se dio en 1999; el año anterior había sido desnacionalizada. Quiero detenerme un poco en este tema porque lo conozco muy de cerca por lo que tuvo que afrontar Santa Cruz, como provincia productora de hidrocarburos, al igual que el resto de las otras nueve provincias cuando se sancionó la ley de privatización y federalización de los hidrocarburos. Cuando dirigió la empresa el señor José Estenssoro, pese a estar en mis antípodas ideológicas, debo reconocer que hizo una tarea en materia de producción que llevó a YPF a la producción más alta en 1998. Nunca se supo claramente a qué se debió su muerte. Tengo mis propias teorías que, como son teorías, no las puedo comprobar y no las voy a decir...”

– La señora presidenta de la Nación exhibe un gráfico.

...”Si se puede ver, éste es el gráfico y ésta es la Argentina de 1970. Porque también vamos a decir la verdad, cuando se federalizó y privatizó, YPF no era de los argentinos porque ya había sido vaciada durante la dictadura con préstamos, además luego terminó presa de las empresas contratistas y de los partidos políticos de turno. Así fue cayendo totalmente su producción. (Aplausos.) Lo recuerdo muy bien porque a la provincia de Santa Cruz, con motivo de las regalías hidrocarburíferas, le tocaron 600 millones de dólares, que constituyeron el fondo con el cual compramos 3,50 ó 3,60 por ciento de las acciones. Entre todas las provincias llegamos a tener, además de la acción de oro de YPF, el poder de decidir en la compañía. Las provincias teníamos un sillón en el directorio. Me acuerdo que Kirchner quería llegar al cinco por ciento. ¿Por qué? Porque quien llegara al cinco por ciento de las acciones tenía un director, con lo cual él pensaba que iba a tener un director por las provincias y otro con lo que estaba comprando. Llegamos a comprar casi el cuatro por ciento de las acciones en la Bolsa de Nueva York. Mientras que otras provincias las vendían por necesidad, él juntaba y así conformó el fondo de 600 millones de dólares, que ya no existe más, por supuesto. Iba en camino del cinco por ciento cuando Roque Fernández decidió la desnacionalización de YPF, que es otro tema totalmente diferente. Hasta ese momento las provincias tuvimos participación, Santa Cruz llegó a tener el cuatro por ciento, Neuquén tenía más producción que nosotros, la producción de Mendoza era igual, y también estaban las provincias de Chubut, Tierra del Fuego y Salta, que fue la pionera en materia de juicios por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas. De ella copiamos, el resto de las provincias, los juicios que luego acordamos por mucha menor cantidad que la que demandábamos en la Nación. Esta es la verdadera historia. Y no la cuento ahora, hay un librito de diálogos de Néstor Kirchner con Torcuato Di Tella, cuando era candidato en 2003, donde cuenta exactamente esto que estoy diciendo ahora.

Precisamente, la curva de caída del crudo comienza a partir de 1999 para descender en forma vertiginosa, a punto tal que el año pasado tuvimos el mayor aumento de importaciones. Si no hubiéramos tenido el aumento de importaciones en combustibles que tuvimos, la balanza superavitaria comercial hubiera llegado a 15.000 millones de dólares. Porque pasamos en el año 2010 de importar, aproximadamente, entre 300 o 400 millones de dólares, a más de 1.000 millones de dólares, únicamente en uno de los rubros de los combustibles, creciendo un 179 por ciento todo el rubro combustibles: gas,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

petróleo, gasoil...”.

... “Por otra parte, vamos a tomar como Poder Ejecutivo todas las medidas que siempre hemos tomado, para asegurar el abastecimiento de combustible a los argentinos. Y cuando hablo de los argentinos, no estoy hablando solamente de los argentinos que viajan en tren, en auto o en micro. Estoy hablando de dar también competitividad a la economía argentina, en cuanto a los costos de producción. Porque se tienen que enterar de una buena vez por todas las grandes empresas, que parte de sus utilidades se deben a los subsidios energéticos que reciben. Si no, vayan a preguntar el precio de la energía en los países colindantes. O sea, esto no lo aprovechan únicamente los usuarios residenciales, sino que también la competitividad de nuestra industria es una cuestión de defensa de la competencia, de defensa de la ley de abastecimiento y del interés de los argentinos. Y lo vamos a ejercitar con todas las armas que nos brindan la Constitución y la legislación vigentes. (Aplausos.)... ”.

II.- El proyecto en cuestión

En el marco de los antecedentes reseñados, trataré de ahondar en el proyecto en cuestión, puntualmente en el título III, referente a la recuperación del control de YPF. Al respecto, el artículo 7º, puntualmente propone que a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase “D” de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta.

Quiero detenerme en este punto, porque mucho se ha dicho en los últimos días sobre el instituto de la expropiación, como si éste fuera un proceso inventado o se hubiera creado a los fines del presente proyecto, como si estuviéramos hablando de un proceso sui generis.

En este punto, me parece oportuno recordar que el instituto de la expropiación tiene raigambre constitucional. Al respecto, el artículo 17 establece: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

En consecuencia, pone en cabeza de este poder del Estado la atribución y en consecuencia, la responsabilidad de iniciar el proceso expropiatorio, a través del dictado de la ley que establezca la utilidad pública y el bien sujeto a expropiar.

Lo trascendente de la declaración de utilidad pública es que esta constituye la causa jurídica que torna admisible el proceso expropiatorio, haciendo constar que el bien que se pretende transferir es necesario para la satisfacción de la utilidad general. Asimismo, la existencia de razones de utilidad pública, constituye la garantía legal necesaria para resguardar la inviolabilidad de la propiedad privada y torna legítima la restricción de los derechos particulares, si así lo requiere el bienestar general.

En este lineamiento, la ley 21.499, desarrollando el concepto constitucional, dice que “utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual”; es decir, que se dota a la noción de utilidad pública de un enriquecido sentido y de tal modo comprende todo aquello que tiende a la promoción integral de la persona humana y al efectivo goce de sus derechos constitucionales; siendo las condiciones de cada época las que determinan su concreto contenido.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por su parte, el artículo 4° fija que pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.

Asimismo, establece en los artículos que comprenden el título IV, todo aquello referente a la indemnización que deberá abonar, a la que alude el artículo 17 de la Constitución Nacional, ya referido.

Es en este marco, en el cual el presente proyecto propone la expropiación del paquete accionario, dando cumplimiento a la normativa detallada, tal como se desprende de los artículos 7°, 11 y 12 del proyecto.

Quiero dejar en claro en este punto que no hay otro remedio constitucional que permita recuperar el control de las políticas sobre hidrocarburos, y llevar adelante la nacionalización de los recursos, más que el propuesto por el presente proyecto.

Ello así, toda vez que si bien se ha dicho que debería efectuarse por medio del rescate, o como sugirió el diputado Tonelli que el Poder Ejecutivo debería haber "revocado las concesiones y, luego, adjudicar (esas acciones) a otras empresas que sí garantizaran una explotación productiva y regular", no resulta técnicamente posible toda vez que no estamos frente a la concesión de un servicio público que pueda ser susceptible de rescate de parte del Estado concedente, sino que la situación planteada es totalmente diferente.

Cabe dejar recordar aquí que, tal como se señala en forma explícita en el decreto 666/99 por medio del cual se autorizó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al Comité Directivo del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL a adoptar todos los actos que resulten necesarios para la venta de acciones clase "A" y acciones clase "B" de YPF SOCIEDAD ANONIMA de propiedad del ESTADO NACIONAL y del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, en el marco del proceso de oferta pública de adquisición de acciones de YPF SOCIEDAD ANONIMA realizada por REPSOL, S.A., el proceso de privatización de YPF se llevó a cabo mediante la modalidad prevista en el inciso 2 del artículo 17 de la ley 23.696, es decir mediante la venta de las acciones de la sociedad y, específicamente, bajo el procedimiento previsto en el inciso 4 del artículo 18, es decir la venta de acciones en bolsas y mercados del país.

Asimismo cabe destacar que los motivos que fundamentan la declaración de interés público nacional y en consecuencia la declaración de utilidad pública que fundamenta la expropiación aludida, están sobradamente expuestos en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, sobre los que redundaré.

Finalmente, y en materia de indemnización, el proyecto prevé en forma expresa, en su artículo 12, la aplicación del título IV de la ley 21.499 por lo que no se comprenden los reparos que se pretenden en el punto ya que la norma prevé en forma expresa la posibilidad de revisión judicial de cualquier desavenencia que se plantee al respecto. Es más, anticipa la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación prevista por la norma recién mencionada para esa instancia.

Lo cierto es que pretender invocar una violación constitucional del artículo 17 de la Constitución Nacional con sustento en las medidas requeridas para la continuidad



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

operativa, jurídica y de la gestión de la empresa como fundamento implica un claro desconocimiento de las facultades que surgen de la propia ley 21.499 y del Código Civil.

Por todo ello considero necesaria la aprobación del presente proyecto, que desde ya acompaño con mi voto afirmativo.

34. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GONZÁLEZ (N. S.)

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Si bien los diputados nacionales representamos al pueblo como un todo y no a las provincias en particular, no puede negarse el origen de cada uno de los legisladores que componemos esta Cámara.

En mi caso, soy orgullosamente patagónica, por nacimiento y por convicción. Por esta razón, tanto para mí como para todos los patagónicos, el problema de YPF es mucho más profundo que las colas en las estaciones de servicio, o los precios de la nafta. Para nosotros, YPF siempre se relacionó con conceptos mucho más importantes, tales como “soberanía”, “poblamiento del territorio”, y “desarrollo regional”. Por eso, me alegra que hoy se trate en esos términos y me parece importante abordar este tema desde sus comienzos.

Con la creación de YPF en 1922, el Estado argentino logró, con su empresa estatal, regular el mercado de combustibles, unificar el precio de la nafta, instalar agencias y estaciones de servicio en todo el país, llegando a las zonas más alejadas, colocar plantas de almacenaje y construir destilerías. En los años 30, la empresa se expandió en materia de explotación, exploración e industrialización del recurso.

Esta expansión tuvo como correlato el meteórico crecimiento demográfico de todas las provincias patagónicas prácticamente deshabitadas hasta los primeros años del siglo XX.

Con idas y vueltas la empresa fue logrando capear los temporales políticos que azotaron al país luego de la revolución fusiladora del 55. Pero ni siquiera la vieja empresa estatal pudo resistirse al proceso de reorganización nacional, que la obligó a ceder a las compañías privadas, gratuitamente, yacimientos con reservas descubiertas y con todo el aparato productivo instalado y en funcionamiento, debiendo comprarles luego a esas empresas el crudo mucho más caro de lo que le costaba a la compañía fiscal producirlo.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Así se inició un proceso de endeudamiento que para el año 83 ya alcanzaba los 4.300 millones de dólares.

En 1989, la idea predominante era que nada funcionaba. Se decía que la empresa estaba inflada con 50 mil empleados y que la acumulación de activos (escuelas, supermercados, cines, hospitales, aviones y la flota) no tenían sentido y había que venderlos. Así, mediante distintos mecanismos, entre 1991 y 1992 la empresa se deshizo de más de 30 mil empleados y se vendieron activos, reduciendo su capacidad de producción en un 50% y su capacidad de exploración en un 90%. Los fondos que estas maniobras produjeron fueron utilizados en gastos corrientes de la empresa, y también para solventar los gastos de la reestructuración del Estado y sostener el sistema de convertibilidad.

Casi está de más (no sólo porque pueden deducirse fácilmente, sino porque todos las conocemos) referirse a las tremendas consecuencias sociales que este proceso produjo en la sociedad toda, pero más que nada en el interior del país, en las provincias productoras de petróleo, con localidades pequeñas que dependían de YPF y que rápidamente quedaron convertidas en pueblos fantasma. Sólo en Comodoro Rivadavia hubo 4.402 personas que quedaron sin trabajo.

En este contexto, en 1992 la empresa se federalizaba, las provincias obtenían acciones y el Estado nacional conservaba el control de la compañía. Pero en 1998 las acciones se vendieron a Repsol y lo que sigue ya todos los sabemos de memoria.

Hoy en día, Chubut produce cerca del 30% del petróleo de la República Argentina, seguida por Neuquén (22%) y Santa Cruz (20%). En toda la provincia, cerca de 5 mil personas están empleadas por la industria del petróleo.

El petróleo representa un 60% de todo lo que exporta la provincia (superando a la lana, el aluminio y el pescado), con el consecuente efecto que las regalías tienen en la balanza fiscal, ya que más de la mitad de lo producido por la provincia se exporta al exterior (el resto es destilado en la provincia de Buenos Aires). Asimismo, asociada a la producción del petróleo, también se desarrolla en la provincia la fabricación de maquinarias y repuestos para la industria petrolera, principalmente destinada al consumo interno.

En el año 2007, el gobernador Das Neves firmó la prórroga de la concesión del área Cerro Dragón (el yacimiento es considerado el más productivo del país), en la cuenca del golfo San Jorge, dada a la empresa Pan American Energy por otros cuarenta años. Por eso, no podemos más que celebrar la iniciativa y el coraje de nuestra presidenta al enviar este proyecto al Congreso, con el objeto de recuperar nuestra soberanía energética, revirtiendo así un proceso de entrega de recursos que se viene desarrollando desde hace más de 36 años.

No podemos más que celebrar, además, el hecho de que la oposición nos acompañe en esta iniciativa, porque eso es un reconocimiento. Este bloque estuvo solo cuando estatizamos Aerolíneas Argentinas, estuvo solo cuando estatizamos las jubilaciones, cuando tratamos la ley de movilidad. Ésas eran apuestas fuertes, arriesgadas, que hicimos en soledad y que ahora, pasado el tiempo, están dando sus frutos. El pueblo argentino lo sabe, por eso nos acompañó con tanta contundencia en octubre. Por eso, nos acompaña hoy.

Asimismo, me parece importante resaltar que, días atrás, hemos participado de la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, un organismo multinacional con más de 50 años de actuación en el ámbito regional y que nuclea a representantes de los cuerpos legislativos de 22 países de nuestra América Latina. En dicha reunión la Junta Directiva emitió una resolución cuya parte resolutive dice lo siguiente:

“El Parlamento Latinoamericano resuelve:

1- Respalda la decisión del gobierno de la República Argentina de nacionalizar a la empresa Repsol-YPF, como un acto de soberanía energética para el bienestar del pueblo argentino, contribuyendo al autoabastecimiento, satisfacción de la demanda nacional, disminución del precio de este rubro, aumento de inversiones del sector del crudo y preservación del medio ambiente.

2- Rechazar categóricamente la posición tomada por el gobierno español y la Unión Europea en amenazar al Estado argentino con represalias en el campo comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia y entendimiento y con una justa indemnización.

3- Sumarnos a la posición de los gobiernos de América Latina y el Caribe que mayoritariamente se han solidarizado con esta decisión, orientada a beneficiar no sólo al crecimiento y desarrollo del pueblo argentino, sino también a la promoción de la integración energética de la región.

Por todo lo expuesto, acompañaré con mi voto positivo, la sanción del presente proyecto de ley.

35. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GROSSO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La historia se empecina en darnos otra oportunidad.

Una vez más el gobierno nacional nos propone un nuevo paso en el camino a la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

Una vez más el proyecto nacional y popular que encabeza hoy nuestra presidenta, Cristina Kirchner, nos pone ante la posibilidad de pensar en el futuro que tantos compañeros soñaron y por el que tantos dieron su vida.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Si algo ha caracterizado a este gobierno es la reparación histórica como base fundante de esta nueva Argentina que estamos construyendo.

Quizás, si se me permite una digresión, esto haga que gran cantidad de trabajadores y jóvenes seamos parte hoy de este proyecto.

Desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 25 de mayo del 2003, el modelo económico que imperó fue el de la desindustrialización, el de la exclusión de las mayorías populares, el del achicamiento del Estado.

En este contexto YPF era un estorbo.

En este contexto YPF debía desaparecer o venderse al mejor postor.

Y eso fue lo que pasó: se entregó.

¿Sabe una cosa presidente? En la historia NO hay ejemplos de países que sin haber perdido una guerra entreguen el control total de sus recursos energéticos como pasó en la Argentina en plena democracia

YPF hoy vuelve a tener sentido porque desde el 25 de mayo de 2003, con Néstor y Cristina Kirchner, el modelo argentino es de desarrollo industrial, con inclusión social.

Por eso, ahora necesitamos el petróleo y la energía, para abastecer nuestro mercado interno que no para de crecer. Por eso el petróleo ya no debe ser pensado como un commodity regido por el mercado, sino como un bien estratégico para el desarrollo nacional, y por lo tanto de interés nacional.

Pero YPF no es sólo una cuestión económica, sino un emblema de nuestra nacionalidad. YPF, después de los Ferrocarriles, es la empresa que más pueblos fundó en la Argentina: construía las rutas, las casas, las escuelas. Expresó el modelo de Estado de bienestar que se cristalizó en el peronismo.

Y traigo estos datos porque quiero hablar del COSTO SOCIAL del que nadie se hace cargo, y donde tanto los cómplices de la DICTADURA, los MENEMISTAS Y LOS RADICALES DE LA ALIANZA tienen a mi entender las mismas responsabilidades, porque administraron y construyeron el mismo MODELO DE AJUSTE Y REPRESION.

¿¿¿¿Esto quieren defender los que hoy se oponen a este proyecto?????

¡¡¡¡Por suerte el pueblo argentino siempre se caracterizó por su capacidad de Lucha!!!!

Tenemos ejemplos emblemáticos de la resistencia que presentaron nuestros trabajadores ante el remate de nuestros recursos: Tartagal, General Mosconi, Cutral Có y Plaza Huincul. Por nombrar algunos. Allí nacen los primeros cortes de ruta, EL PIQUETE como herramienta de lucha que tenían aquellos que ya no tenían voz, que ya no tenían



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

trabajo ni sindicato.

¿Y sabe qué presidente? Yo me inicié en la política haciendo piquetes, participando en un movimiento de trabajadores desocupados, el MTD Evita, resistiendo al menemismo en las calles, usando el mismo método de lucha, mientras algunos que hoy se rasgan las vestiduras hablando de su honestidad intelectual, durante los 90 pactaban en Olivos, de espaldas al pueblo, la entrega de la PATRIA.

Porque señor presidente lo que no se defendió en este recinto, se defendió en la calle, y voy a poner un ejemplo

Tartagal se hizo famosa, no por su pozo de petróleo, Tartagal se hizo famosa por sus puebladas, por los cortes en la ruta 34 y, lamentablemente, por la muerte.

El 10 de Noviembre del año 2000, se reprimió un piquete que llevaba algunos días en la ruta, el saldo fue un obrero de 37 años, con 5 hijos a cargo, MUERTO SOBRE LA RUTA CON UN TIRO EN LA CARA, se llamaba Aníbal Veron.

A quien hoy le estamos rindiendo homenaje con este proyecto.

Estos altos costos sociales son los que hoy nuestro gobierno viene a reparar. Como lo hizo con Aysa, las AFJP, Aerolíneas Argentinas, la Auxh., y tantas otras medidas que se han tomado

Vaya si no es esto un acto reparatorio para Aníbal Verón, pero también a Teresa Rodríguez, a Víctor Choque, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, el Oso Cisneros y tantos otros que salieron a jugarse la vida para luchar por la dignidad y el trabajo.

Vaya si no es reparatorio con todos los ex trabajadores de YPF que supieron construir con tremendo esfuerzo y trabajo esa empresa que tanto orgullo nos generó.

Por esta historia es que fuimos orgullosamente piqueteros, y por esta historia hoy somos soldados de este proyecto.

Y para terminar, señor presidente déjeme citar a alguien que quiero traer a este recinto, que esta mas presente que nunca, alguien que ha permitido que confluyan estas historias de lucha, resistencia y patriotismo en una nueva oportunidad histórica

Ese hombre que decía sentado en ese mismo sillón donde esta usted hoy: “Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, ésta es la oportunidad de la transformación, cambio es el nombre del futuro”

Ese hombre se llama NESTOR KIRCHNER.

Pido permiso para insertar, ya que mi posición esta fundamentada en una revisión de la historia reciente que hice a través de algunos estudios que quiero poner a disposición, porque creo nos permiten entender más la complejidad de los costos sociales a los que llegamos con la privatización de YPF y que a mi entender esta medida hoy viene a reparar.

El primero es un estudio minucioso de los efectos en el Sur de nuestro país, ahí donde nació el piquete como método de lucha. Aporta datos económicos, políticos y sociales que le dan contexto al surgimiento de las puebladas y los piquetes, se titula “Efectos de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la privatización de YPF en Cutral Có y Plaza Huincul” realizado por el “Equipo de Investigación de Neuquén”

El segundo documento que adjunto es una Declaración de las Organizaciones Piqueteras Nacionales más importantes para el año 2004 y creo expone el espíritu de la época y el por qué la confluencia de las mismas a un proyecto político de gobierno a cargo de Néstor Kirchner.

1. 21 de junio- El Movimiento está en marcha:
es La HORA DE LOS PUEBLOS
Acto Público- 21 de junio- 17 hs- Parque Norte

El 21 de junio se reúne en Parque Norte la 1ª. Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, bajo el lema: “POR UNA PATRIA PARA TODOS”.

2100 delegados de más de quince provincias compartiremos una jornada de solidaridad y debate que puede cambiar para siempre el curso del proceso de Liberación en Argentina.

La convocatoria, así como el borrador de Declaración que transcribimos, fue iniciativa de cuatro organizaciones: Barrios de Pie - Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) - Frente Transversal Nacional y Popular - MTD Evita, quienes produjeron el lanzamiento en una Conferencia de prensa en el hotel Castelar, el 4 de junio.

Esta convocatoria tiene precedentes: la coalición que hizo posible la recuperación de la ESMA, los Encuentros por la Liberación I y II, en Capital, el Acto del 2 de abril en Federación de Box y el Encuentro de Organizaciones realizado en Córdoba por el MPSOL.

Por eso, en la primera reunión de una Mesa Ampliada, el 15 de junio, nos sumamos el Movimiento 26 de julio, el MPSOL (Córdoba), El Movimiento por la Victoria del Pueblo, el MP20, el PC Congreso Extraordinario, el POR Posadista y la Mesa Kirchner Presidente.

Las primeras decisiones consensuadas por la Mesa Ampliada fueron:

- Ratificar la convocatoria a Parque Norte y la Declaración “la hora de los pueblos” como borrador a ser enriquecido en la Jornada

- que el Movimiento es el espacio autónomo y exclusivo de construcción de unidad de las fuerzas que lo integramos. Esto implica que, sin desmerecer otras acciones de unidad que se están produciendo, cada organización asume como compromiso excluyente la construcción de ESTA iniciativa común.

En la reunión, Luis D’Elía planteó: “el presidente Kirchner ha tomado medidas que van mucho más allá de lo que la correlación de fuerzas parecía permitirle”. Y es así.

Por eso, la primer tarea es intervenir directamente en esa correlación de fuerzas aportando a la unidad de las organizaciones que trabajamos para que el reclamo popular se convierta en políticas de Estado, para que la movilización del pueblo guíe y sostenga las acciones del gobierno.

El 21 damos el primer paso. Habrá que seguir, provincia por provincia, localidad por localidad, extendiendo este Movimiento que aún no tiene nombre, pero ya se plantea el objetivo de disputar poder en todos los terrenos, con organización y capacidad de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

decisión por abajo y con dirigentes surgidos y referenciados en la acción cotidiana del pueblo.

DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN

La Hora de los Pueblos

La inviabilidad y el ocaso del modelo neoliberal, el surgimiento de nuevos movimientos sociales protagonistas del cambio, el avance simultáneo de muchos pueblos hermanos del continente y la profunda crisis del imperio, nos dicen que estamos viviendo un tiempo histórico diferente. Y para nosotros en particular, en Argentina, no se trata simplemente de "un buen momento político", sino de una nueva oportunidad histórica que tiene el campo popular, comparable a la que vivimos en los años 40, al finalizar la primera década infame del siglo XX. Se trata de una oportunidad que nos trasciende y bulle en las entrañas de Latinoamérica; lo que nos permite afirmar que hay razones para evocar la gesta de Bolívar y San Martín y tomar conciencia que podemos volver a intentar la construcción de la Patria Grande.

En este contexto, entendemos que el gobierno del presidente Kirchner no es una concesión graciosa de nadie sino la consecuencia de la profundización de las luchas populares contra el modelo neoconservador, nutridas de paros, marchas, piquetes y cacerolazos, que coronaron en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por lo tanto lo asumimos como una conquista del pueblo e intérprete de muchos de sus reclamos. Algunos de los cuales fueron sostenidos por nuestras organizaciones durante años y convertidos en respuesta política efectiva en el primer tramo de su gestión. Y frente al retroceso operado en casi todos los terrenos en los 20 años transcurridos desde la recuperación de la democracia, ahora no sería honesto pasar por alto las acciones emprendidas por este gobierno a poco más de un año de su instalación.

De todos modos, a la hora de caracterizar el proceso político en marcha, consideramos que la cuestión principal no pasa por cuánto se hizo o falta hacer en tal o cual política sectorial, sino por el hecho trascendente del cambio de rumbo, que encarna un verdadero punto de inflexión en el derrotero de las últimas décadas. A esto se suma la integración en un Bloque Regional de Poder con otros gobiernos y pueblos del continente junto a Brasil, Venezuela y Cuba, para enfrentar la estrategia de dominación norteamericana y conjurar la amenaza del ALCA en la región. Por eso entendemos que no estamos solamente ante un gobierno mejor que los anteriores, sino cualitativamente diferente. Asumimos, no obstante, que es un gobierno cargado de tensiones y en disputa



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

y vamos a luchar para que se consoliden y profundicen las medidas a favor del pueblo y la nación y sean desplazadas las posturas regresivas que se oponen al cambio. En este sentido, creemos que el compromiso y la participación masiva de las mayorías populares, será la clave que permita alcanzar estos objetivos.

Nuestras organizaciones son parte de un vasto movimiento social forjado al calor de las luchas de resistencia al modelo de concentración de riqueza y exclusión, que se instauró a partir de 1976 y se profundizó hasta límites insoportables durante la década del 90. En este último período, desde los barrios, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, los jubilados, las asambleas y la universidad, hemos impulsado nuevas formas de organización social, que dieron cuenta del profundo retroceso operado en las condiciones de vida de nuestro pueblo y que las estructuras corporativas tradicionales habían dejado de representar. Junto a las reivindicaciones originales de nuestras respectivas organizaciones, asumimos las demandas de importantes sectores de desocupados, así como la de muchos trabajadores pobres y empobrecidos. Lo hicimos desde la práctica social y comunitaria, con el trabajo esforzado de miles de militantes y la conciencia creciente que la solución de fondo a las penurias de tantos compatriotas desamparados, es eminentemente política.

Por eso sabemos que es muy grande la responsabilidad que tenemos los dirigentes sociales del campo popular frente al momento que nos toca vivir. No nos cabe actuar como observadores ni fiscales, sino que nos asumimos como constructores de la acumulación de fuerzas sociales y políticas a favor del nuevo rumbo emprendido. No queremos ocupar un lugar aséptico y equidistante del oficialismo y la oposición, sino profundizar nuestro compromiso con las políticas a favor del pueblo y la defensa del interés nacional, para enfrentar al único hegemonismo peligroso: el de los grupos de poder económico que manejaron durante décadas el destino del país, en contra del pueblo y la nación. Porque somos concientes, que el rumbo emprendido se inscribe en la confrontación histórica con el imperialismo y las clases dominantes que sustentan sus intereses en nuestro país. En esta contienda, hoy como ayer, coincidimos con Evita que a la fuerza brutal de la antipatria, le opondremos la fuerza popular organizada.

Desde todas nuestras organizaciones hemos resistido durante años, pero hoy ya no se trata tan solo de resistir sino de utilizar toda la experiencia y la fuerza que hemos acumulado a lo largo de tantas luchas, para construir una Nueva Argentina. Es una tarea ardua pero posible y desde el gobierno del presidente Kirchner se han empezado a dar los primeros pasos. Pasos que a algunos pueden parecerles pocos, pero que son muy importantes para millones de argentinos que vuelven a recuperar la esperanza y la dignidad en nuestra patria.

Creemos en la gradualidad de los logros a alcanzar y no suscribimos la pretensión de cambios instantáneos y rotundos. Porque hemos aprendido que cada decisión política para cambiar la realidad injusta que nos dejó un cuarto de siglo de políticas neoliberales, requiere de fuerza social organizada que la pueda sostener. Y ninguna transformación profunda de nuestra sociedad será posible, si no somos capaces de cambiar la relación de fuerzas existente.

Con ese propósito, concientes de la necesidad de construir unidad en el campo popular, apoyados en nuestras coincidencias y respetuosos de la diversidad de nuestras



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

experiencias, hemos decidido empezar a confluir y complementar esfuerzos para afrontar los desafíos de la etapa política que estamos transitando.

Porque no se nos escapa que consolidar este rumbo es necesariamente profundizarlo. Y quienes especulan con el fracaso de esta experiencia política, deberían saber que semejante perspectiva abriría las puertas a mayores sufrimientos para nuestro pueblo, con autoritarismo y represión. Sabemos que son grandes los desafíos que tenemos por delante, es mucho lo que falta hacer y son poderosas las fuerzas que se oponen a que ciertas cosas se hagan...

Se oponen los sectores del poder económico que saquearon nuestras riquezas y sumieron en la pobreza a la mitad de nuestros compatriotas; se opone buena parte de la vieja corporación política y sindical que fueron cómplices y beneficiarios de la entrega; se oponen el gobierno de Bush y el FMI. Pero el camino ineludible para profundizar el rumbo es distribuir el ingreso y terminar con la pobreza. Esto implica introducir profundos cambios en la actual estructura económica, y además, como dice el Comandante Hugo Chávez, para terminar con la pobreza hay que darle poder a los pobres. Pero tal cosa no será posible sin abrir nuevos canales de participación y protagonismo popular, como la única forma eficaz de enfrentar con éxito a los que quieren abortar este proceso de cambio que está en marcha en La Argentina.

Esta decisión que hoy tomamos y que surge del debate interno de nuestras organizaciones, es también una convocatoria al debate, la participación y la unidad en la diversidad con otras fuerzas sociales y políticas con las que compartimos las luchas de resistencia. Nos anima el propósito de poner la movilización y la organización popular en función de impulsar con éxito cambios económicos y sociales más profundos y duraderos. Cambios que solo podremos alcanzar si somos capaces de construir unidad de concepto y acción entre el gobierno y las fuerzas populares y avanzar en la construcción de una nueva coalición política y social capaz de amalgamar las reivindicaciones de los distintos sectores sociales dañados por el modelo neoconservador.

La lucha y entrega de tantos compañeros que nos precedieron y soñaron con un país más justo y solidario y las penurias a la que están sometidos hoy millones de compatriotas, nos empujan sin más demora a dar pasos concretos en pos de la unidad, como único camino para hacer efectivas las transformaciones que reclama nuestro pueblo, hasta alcanzar la definitiva liberación nacional y social, en una patria que nos cobije a todos.

2. Los efectos de la privatización de YPF
en Cutral Co y Plaza Huinul.

Equipo de Investigación de Neuquén

1. Las comarcas petroleras: progreso económico y organización política

Antes de que Neuquén fuera reconocida por el Estado nacional como provincia, las exploraciones llevadas adelante en la meseta patagónica a 108 Km de la confluencia de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

los ríos Limay y Neuquén, arrojaban como resultado la existencia de petróleo en esa zona. Un 29 de octubre de 1918 surgió por primera vez este recurso natural en lo que hoy es el ejido de la ciudad de Plaza Huincul. El lugar de afloración fue denominado “Pozo N°1”. A su alrededor fue construido el Barrio Uno, ambos, Pozo y Barrio, se erigirán como el emblema del progreso y la prosperidad en medio de un paisaje dominado por la aridez, el frío y el viento.

Cuando se iniciaron las explotaciones petrolíferas en la zona nace la ciudad de Plaza Huincul. La cantidad de gente que arribaba a la región por la oferta de trabajo y las posibilidades de prosperidad económica llevó a la ciudad a crecer lo suficiente como para que, 15 años más tarde, tal crecimiento poblacional diera origen a la ciudad de Cutral Co, llamado por los pobladores de entonces cotidianamente como “Pueblo Nuevo” (UBICACIÓN GEOGRÁFICA). Ambas ciudades desarrollaron no solo su vida económica sino también su vida política, social y cultural en el marco de la explotación petrolera que le otorgaba sentido a su existencia. Así, los centros educativos y sanitarios, las proveedurías y talleres, la actividad del comercio y la industria estaban asociadas directa e indirectamente al petróleo.

Junto al bienestar y la organización social, se destacó la organización política de los habitantes del lugar. Felipe Sapag fue el primer intendente de Cutral Co, su mandato se extendió desde 1945 hasta 1955, coincidiendo con el segundo gobierno de Perón a nivel nacional; durante su gestión (entre los años 1953 y 1955) la ciudad pasó a llamarse “Eva Perón”. Con la caída del gobierno peronista, y la proscripción del partido, se retoma la denominación “Cutral Co” para la ciudad y se comienza a organizar allí mismo una fuerza política que retomara los principios justicialistas.

Las primeras reuniones que congregaron a militantes peronistas y ex - funcionarios de la última etapa territorial, tuvieron lugar precisamente en Cutral Co. Allí se encontraban el mayor número de obreros sindicalizados que trabajaban en los campamentos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)¹, entre las personalidades de esta ciudad que participaron en este movimiento comienza a tener una actuación destacada Felipe Sapag, quien se erigirá como el referente principal de la mayor fuerza política local. Como resultado de estas reuniones se lleva a cabo el 4 de junio de 1961 la “Asamblea Provincial Peronista”. En aquella Asamblea se decide crear un partido

1 “En efecto la localidad de Cutral Co es el núcleo de desarrollo de la actividad petrolera que genera mayor dinamismo y concentra más población obrera sindicalizada. Por esa razón es en Cutral Co donde se dan los encuentros que nuclean a mayor cantidad de adherentes” (Bandieri, 1993, 351).

provincial que permita presentarse a los comicios². El mismo permitiría también preservar la doctrina nacional justicialista; nace entonces el “Movimiento Popular Neuquino” (MPN). En relación al acta fundacional, es relevante el reconocimiento de Perón como único jefe y el compromiso de disolver el incipiente partido provincial y retornar al Movimiento Justicialista cuando se levantara la proscripción³, lo cual nunca ocurrió.

Así las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul se constituyeron en uno de los polos más significativos a nivel provincial, ya que concentraban tanto importantes niveles de recursos económicos como de organización política.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

2. El impacto de la privatización de YPF en Cutral Co y Plaza Huincul

Entre los años 1991 y 1992 se llevaba a cabo el proceso de privatización de YPF, quedando la mayor parte del capital en manos de la empresa Repsol-YPF⁴. Esta privatización se realizó en el marco del proceso de desestructuración del Estado llevado adelante por el menemato, que contemplaba la venta de las empresas estatales. En el caso de YPF no solo afectó negativamente a las poblaciones de Cutral Co y Plaza Huincul, en Neuquén, sino que al mismo tiempo desarticuló la vida económica, social y política de todas aquellas ciudades y pueblos del interior del país en los cuales se asientan las explotaciones petroleras. El caso de los movimientos de protesta en Tartagal (provincia de Salta, en el extremo norte del país) son también producto de los efectos nocivos para la sociedad local de una decisión tomada por el gobierno nacional. Las similitudes entre Tartagal y Cutral Co⁵, en relación al grado de virulencia y de espontaneidad de las protestas, son una muestra de la importancia medular de esta actividad en la constitución de las vidas cotidianas de los pobladores. Ellos vieron desecho, no solo su modo de subsistencia, sino también el punto referencial de sus construcciones de pertenencia. Paralelamente las diferencias significativas entre Cutral

2 Superando así el problema de la proscripción del movimiento justicialista, instaurada por el gobierno de facto de aquel momento.

3 Para más detalles sobre este proceso ver Bandieri, 1993. En relación a la declaración de principios del MPN, la autora explica: “La información a la comunidad sobre la creación del nuevo partido se realiza a través de una solicitada publicada en Ecos Cordilleranos el 10 de abril de 1961, en la que se anuncia la “declaración de principios del MPN”. De su análisis se desprende un sentido democrático y pluralista, el compromiso a exigir el cumplimiento de la Constitución Provincial y la intención de asegurar el progreso material e implantar la justicia social. El partido se enmarca en una concepción humanista y cristiana, aspira a convertirse en principio en el canal en el que se exprese la ciudadanía en su conjunto y a proyectarse como fuerza política de alcance nacional.” (Bandieri, 1993, 352)

4 Para mayores referencias sobre el proceso de privatización de empresas estatales en general y de YPF en particular, se puede consultar entre otros: Kliksberg, B. Comp. “El rediseño del Estado: Una perspectiva internacional”; Thwaites Rey, M. “La política de privatizaciones en la Argentina. Consideraciones a partir del caso Aerolíneas Argentinas”, Revista Realidad Económica N° 116; Colantuono, M. R. - Vives, Graciela: “Impactos territoriales del proceso de ajuste en una provincia argentina”. Ponencia presentada en el “6° Encuentro de Geógrafos de América Latina”, FFyL, UBA, 1997; Abeles, M. “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los ’90. ¿reforma estructural o consolidación hegemónica?”, s/f.; Muscar Benasayagan, F. “La privatización como innovación: privación y exclusión social en Argentina”, Scripta Nova, Universidad de Barcelona, N° 69 (79), 2000.

5 Aunque debemos recordar que las manifestaciones de protesta no fueron simultáneas, en primer lugar se dieron las puebladas en las ciudades neuquinas y con posterioridad estalla el conflicto en Salta.

Co y Tartagal en el modo en que se buscó la salida al conflicto puntual de la protesta y el devenir (re)organizativo de ambas poblaciones, muestra claramente cómo a pesar de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

tratarse de una empresa nacional que se privatiza desde el centro ejecutivo del país, las repuestas o inminentes soluciones a los problemas están permeadas por la relación de estas poblaciones con los Estados provinciales de referencia y, por lo tanto, con las trayectorias diferenciadas de tales Estados. Es decir con determinados modos de construcciones locales de hegemonía y a su vez con las prácticas específicas que hacen al ejercicio de la ciudadanía de las poblaciones de cada localidad.

En el caso específico de Cutral Co y Plaza Huincul la privatización de YPF trajo como consecuencia directa la reducción de personal, que pasó de 4000 empleados a 400. De los empleados cesanteados e indemnizados alrededor de 1700 inician micro emprendimientos que en general fracasan⁶. Como consecuencia indirecta, pero no menos desestructurante, mermó drásticamente la actividad comercial y la demanda de servicios de la cual subsistía el resto de la población local en directa relación con los ypefeanos. Así en un muy corto lapso de tiempo el número de desempleados en ambas localidades alcanza a 5000 personas, esto es, casi el 20 % de la población económicamente activa.

Los efectos de las indemnizaciones, que no en pocos casos rondaron los \$200.000, en tiempos de auge de la convertibilidad, amortiguó en lo inmediato los efectos devastadores de semejante golpe a la economía local. Así la crisis se dejó sentir con toda su crudeza recién cinco años más tarde, allí comenzaron a cerrar una cantidad importante de locales y la población subsidiaria de los ex-ypefeanos (servicio doméstico, changarines, maestros de oficios) se vio rápidamente sumida dentro de la población de desocupados.

El quiebre en la vida económica se hace sentir entonces en primera instancia en el devenir de los ex -ypefeanos acostumbrados a recibir ingresos superiores a la media provincial y nacional. Al mismo tiempo la actividad comercial preparada para un público consumidor con un alto poder adquisitivo experimenta una brusca caída de la actividad. Se estima que, al dejar de circular por el mercado local los ingresos mensuales provenientes de los sueldos de los empleados de YPF, alrededor de un millón de pesos dejaron de ingresar al circuito comercial. Esto se tradujo directamente en los puestos de trabajo que este sector dejó de ofrecer pasando de 1.200 trabajadores a 480 personas afectadas a la actividad comercial en 1995⁷.

Sin embargo la dimensión económica de la vida local no fue la única que se vio desarticulada a partir de la privatización de YPF. La empresa petrolera del Estado Nacional resultó determinante a la hora de definir el perfil productivo de Neuquén en la medida que “creó las condiciones de ocupación y puso en marcha desde la etapa territorial (1884-1955), los recursos básicos que sostendrán la economía de la futura provincia hasta la década del ‘80: petróleo y gas”⁸. Así YPF puso en marcha un plan de desarrollo de los lugares en los cuales se asentaban los barrios petroleros.

Dedicándose a desarrollar toda la infraestructura necesaria para transformar a estos lugares inhóspitos en los cuales se instalaba, en espacios posibles para llevar a cabo el ritmo propio de la vida cotidiana. La construcción de barrios con sus correspondientes tendidos de

⁶ Sobre este tema se pueda consultar: Favaro, O. y Bucciarelli, M. (1994) “Efectos de la privatización de YPF. La desagregación territorial del espacio neuquino”. En: Realidad



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Económica. Bs. As. IADE, 127.

7 Los datos fueron publicados por el diario “La mañana del Sur”, 30 de marzo de 1996.

8 Favaro, O. y Vaccarisi, M. (s/f) “Poder político y políticas sociales en Neuquén, 1983-1999”. UNCo.

electricidad, redes cloacales y de gas, servicios brindados en forma gratuita a sus empleados hacía que Cutral Co y Plaza Huincul, lugares poco atractivos debido al paisaje desértico y el clima riguroso, se convirtieran en un polo de interés para la gente. Sin embargo la organización de la vida no se limitaba a crear condiciones de confort, muy por el contrario, aspectos tales como la salud, la educación y la recreación también eran atendidas y garantizadas por la empresa YPF a sus empleados. La construcción del cine teatro y el club deportivo YPF no son más que una muestra del grado de penetración que tenía el accionar de la empresa en la vida de estas comunidades. El alto grado de impacto producido por el proceso de privatización es comprensible, si se tiene en cuenta que se terminó en menos de dos años con un sistema que se definió y se asentó a lo largo de casi setenta años.

Las empresas privadas que se han hecho cargo de la extracción petrolera en la zona se rigen por principio de eficiencia que no contemplan el rol social que jugó YPF en épocas anteriores. Las mismas adoptan una forma de funcionamiento del tipo “enclave”, lo cual implica una baja retención del excedente en la zona producido por la explotación petrolera, ya que las empresas a cargo son privadas y/o extranjeras y sus casas matrices se encuentran en Buenos Aires o el exterior. En cuanto al régimen de contratación suelen ocupar mano de obra que mayoritariamente no es del lugar, el mismo además tiene un alto nivel de rotación por lo cual no se generan asentamientos poblacionales importantes y duraderos, lo que promueve un escaso arraigo de capitales y de redistribución de ingresos a nivel local.

Ante esta situación el gobierno provincial intenta generar un proceso de desarrollo productivo alternativo, nace así el proyecto COMINCO destinado a la industrialización del gas. Tal como señala Costallat, durante el período en que YPF comenzó su re-estructuración y cesión de áreas secundarias, la provincia de Neuquén consigue que se le transfieran nueve yacimientos no explotados, del cual el llamado “El Mangrullo” es el de mayor importancia con reservas de gas comprobadas de casi 6.000 millones de m³ y con un valor aproximado de 12 millones de dólares. Durante el gobierno emepenista del período 1991-1995 a cargo de la línea blanca⁹ del partido¹⁰, El Mangrullo fue afectado al proyecto de Planta de Fertilizantes, entregándosele a la empresa COMINCO-AGRIUM¹¹.

Las negociaciones con COMINCO FERTILIZARS LTD. comienzan durante 1992, ya que la empresa había manifestado su intención de radicarse en la zona para fabricar urea, su objetivo era ingresar al MERCOSUR. Así, como resultado de estas tratativas, se termina promulgando tres leyes que avalan los respectivos acuerdos firmados entre junio de 1992 y septiembre de 1995. Allí se dejaba constancia de que COMINCO llevaría a cabo un proyecto de un costo aproximado de 350 millones de dólares. Por su parte la provincia de Neuquén se comprometía entre otras cosas a entregar a COMINCO el yacimiento gasífero El Mangrullo por 24 años; a ser garante de la empresa depositando 100 millones de dólares en una cuenta fiduciaria; a garantizar el 100% del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

proyecto si la planta se instalara en Cutral Co - Plaza Huincul; y a renunciar a percibir regalías por El Mangrullo. A su vez COMINCO se obligaba a reconocerle a la 9 Para una referencia sobre las diferencias entre las líneas internas del MPN ver DOCUMENTO 1.

10 Recordemos que este es el período en que también es privatizada YPF.

11 A través de la Ley N° 2134.

provincia una participación accionaria mínima; a ofrecer garantías para respaldar los avales comprometidos por Neuquén ante los organismos internacionales; y a radicar la Planta en Cutral Co - Plaza Huincul.

En 1995 termina el mandato la línea blanca del MPN y asume la gobernación el mismo partido, pero ahora de la mano de la opositora línea amarilla. Su líder, el entonces gobernador Felipe Sapag, afirma que la provincia no está en condiciones de poder dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno anterior para con la empresa COMINCO, empezando por no poder afrontar el depósito de los 100 millones de garantía. Por lo tanto decide dejar sin efecto las negociaciones y cancelar el proyecto, esto genera un descontento generalizado en las comarcas petroleras que había depositado su esperanza de trabajo en este proyecto.

Este descontento es capitalizado por la línea opositora interna del MPN que impulsa la idea de realizar una movilización de protesta. Sin embargo la movilización popular supera ampliamente las expectativas de la oposición, al tiempo que desconoce a los dirigentes de esta línea y también de cualquier otra organización social, como representantes de sus reclamos. Diluido todo liderazgo y con más de 20.000 personas cortando las rutas de acceso a los pueblos de Cutral Co y Plaza Huincul, tiene lugar la que se denominó luego, la primera pueblada.

Así las políticas de ajuste y las reformas del Estado, tanto nacional como provincial, generan en la región una significativa merma de la actividad económica, con un alto nivel de desempleo y con escasas posibilidades de actividades productivas alternativas con beneficios a corto plazo. Situación que genera un alto nivel de conflicto social.

3. Las Puebladas como interfase

Jueves 20 de junio de 1996 (CRONOLOGÍA DE LA PRIMERA PUEBLADA), en las comarcas petroleras del interior neuquino se da a conocer la noticia del fracaso del emplazamiento de la planta de fertilizantes. Desde la radio local FM Victoria se convoca a la gente a cortar la ruta en señal de protesta, la organización inicial es apoyada por un dirigente local de la línea blanca emepenista. En pocas horas todos los accesos a los pueblos de Cutral Co y Plaza Huincul habían sido interrumpidos, también se obstruyeron las “picadas”¹² internas dentro de los campos.

Ambas ciudades entonces permanecieron sitiadas por los propios habitantes del lugar durante una semana.

La gente permaneció en la ruta, la primera medida fue re-organizarse para poder “aguantar”¹³ la medida de fuerza, ya que la primera reacción tan masiva como espontánea fue la de desconocer la autoridad de los dirigentes partidarios (tanto la de los 12 Las picadas son caminos de tierra abiertos en plena meseta por las mismas empresas petroleras para circular entre los pozos y demás instalaciones propias de la explotación. Así, si por cualquier motivo las rutas quedan inutilizadas, existen una cantidad de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

picadas que ocasionalmente pueden funcionar como caminos alternativos.

13 De aquí en adelante todo texto entrecomillado y en bastardilla corresponde a expresiones de los actores tomadas en situaciones de entrevistas actuales, y a entrevistas y notas de campo obtenidas durante el '96 y '97, en las Puebladas.

de la línea blanca, que habían instigado la movilización, como la de los de la amarilla), sindicales o de cualquier otro tipo de organización con algún grado de institucionalidad. Nace así la figura de “los piqueteros”, en referencia a aquellos que se apostaban en los diferentes puntos de intersección de caminos, detrás de los neumáticos encendidos.

Por cada corte realizado había un grupo de piqueteros que se hacía cargo de sostenerlo, por cada piquete también había un representante que se desplaza hasta la “Torre Uno”, emplazada en la entrada principal a las ciudades, para participar de las asambleas a cielo abierto que allí se realizaban. Estos delegados iban llevando “el mandato”, esto es el resultado de lo acordado en cada piquete. En las asambleas se discutía los problemas de las localidades, las posibles soluciones, las demandas que se visualizaban como más urgentes, las acciones a seguir en caso de represión.

En aquellas asambleas participaban los piqueteros, pero también la mayoría del pueblo que se congregaba en la Torre Uno y que estaba compuesta por un conjunto heterogéneo del que participaban ex – ypefeanos y empleadas domésticas, comerciantes y empleados estatales, jóvenes y ancianos, oriundos del lugar y advenedizos. Lo significativo de este conflicto fue que se constituyó en una verdadera Pueblada que reunió masivamente a gente de distintas trayectorias, clases sociales, y pertenencias. Lo cual permite afirmar junto con Farge y Revel que si tantos participantes venidos de horizontes tan diversos se sintieron convocados por la Pueblada, esto no puede deberse solamente a la incitación producida por algunos agitadores interesados. Por el contrario se trata de que la Pueblada proponía a aquellos que se reunían “cierta cosa en común, un objetivo, sin duda, pero todavía más un lenguaje que se elabora en el corazón del acontecimiento y que da a cada uno las razones de su propia acción”¹⁴.

Desde la ciudad de Neuquén se organizaron diversas medidas de apoyo al corte, entre las que se cuenta la presencia de los gremios estatales, los organismos de derechos humanos y de la Iglesia católica, que se hizo presente a través de la asistencia del Obispo en apoyo a la medida de los lugareños. El peso de la Iglesia católica en Neuquén, específicamente de la figura del Obispo, es muy importante, en tanto fue históricamente un actor social que dominó el escenario político local apareciendo como referente de ética y justicia (DOCUMENTO 2).

A partir de las discusiones que se generaban en las asambleas y ante la diversidad de demandas, y la cantidad y disparidad de necesidades que expresaban los diferentes participantes, comienza a tomar fuerza la idea de convocar al gobernador para comunicarle a él personalmente el estado de la situación local y las diferentes demandas que circulaban entre la gente. Así se consensuó un reclamo básico, que unificó a los presentes: “Que venga Don Felipe!”. La figura del gobernador aparecía como el vehículo más apropiado para canalizar los reclamos por varios motivos: en principio se trataba del líder histórico del Movimiento, que había construido su legitimidad sobre la base del discurso federalista, lo cual implica la defensa de lo local frente a los intereses de la Nación (DOCUMENTO 1). Pero también se trataba de un personaje cercano ya



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que, como ha sido mencionado, fue el primer intendente de Cutral Co, fue vecino y comerciante del lugar con anterioridad a su gestión política, y luego ya como dirigente político a cargo de la función pública, desarrolló fuertes vínculos clientelares con los habitantes.

14 Farge, A. y Revel, J. (1998) “Lógica de las multitudes. Secuestro infantil en París, 1750”. Rosario. Homo Sapiens.

Así al tiempo que se desarticulaban viejas concepciones sobre las formas de representación política, desconociendo a dirigentes intermedios, se recuperaban los repertorios históricos acerca de los modos más personalizados de concebir la política y lo político¹⁵. De hecho “Don Felipe” representaba (de alguna forma encarnaba para los lugareños) el Estado de Bienestar perdido, había sido la persona que, en los '70 y '80, llevó adelante los proyectos político-económicos que consolidaron y sostuvieron la calidad de vida de los neuquinos, defendía los intereses propios y “efectivamente” aparecía como quien en otros tiempos había dado soluciones a los problemas de la gente (a partir de prácticas clientelares).

Durante la Pueblada se encontraba otra vez a cargo del gobierno y se esperaba de él (y no de sus ministros, ni de los dirigentes partidarios o gremiales) que resolviera la situación. Sapag se construyó a sí mismo como un caudillo, ahora la gente esperaba de él que se comportara como tal, y esto implicaba, primero ir a verlos a su lugar, escucharlos y tomar las decisiones necesarias para resolver los problemas. Se esperaba también que volviera a asumir el papel de defensor de los intereses locales frente a la Nación, porque al fin y al cabo lo que había sumido a la comarca petrolera en el estado actual de depresión, pobreza y desocupación, había sido la decisión tomada desde Buenos Aires de privatizar YPF.

En este contexto la participación de los mismos integrantes del MPN en el proceso de privatización parecía invisible para los participantes de la Pueblada. Se trataba en ese momento de recomponer el vínculo con el líder y de reconstruir el bienestar perdido. Estas eran las urgencias.

De hecho ante la primera actitud de Sapag de negarse a llegar hasta Cutral Co, los manifestantes expresaban a viva voz “nos vamos a desafiliar en masa” (del MPN); esta “amenaza” corrió por los piquetes con tanta fuerza como lo hizo por los medios de comunicación. Por fin el gobernador se hizo presente en la ruta y comunicó a los presentes que se instalaría en la Municipalidad de Cutral Co durante el tiempo que fuera necesario para atender los reclamos de los vecinos. Esta decisión fue recibida con aplausos por los presentes y descomprimió el conflicto.

De allí en adelante una gran cantidad de gente desfiló por el despacho del gobernador, instalado en Cutral Co, presentando sus demandas. Si bien durante las asambleas se había acordado algunos reclamos colectivos (PETITORIO DE LA PRIMERA PUEBLADA), lo cierto es que a la hora del encuentro personal con Sapag, la gente reclamaba por sus necesidades más inmediatas y acuciantes, como por ejemplo, la re - conexión del suministro del gas, una bolsa de alimentos, los medicamentos necesarios para sortear alguna dolencia.

Sin embargo algunos de los pedidos colectivos fueron atendidos, la ley 1821 que otorga subsidios a desocupados, es resultado de esta Primera Pueblada y fue creada para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

contener la conflictividad social en Cutral Co (DOCUMENTO 3).

15 Mouffe Ch. (1996) “Por una política de la identidad nómada”. En: Debate Feminista, año 7, vol. 14, octubre, pp. 3-13.

Esta Primera Pueblada aparece como emblemática para la población local y también para la opinión pública a nivel país. Es la que se recuerda y a la cual se hace referencia cuando en los medios y en otras localidades se toma a Cutral Co como punto de partida del movimiento piquetero. Es a partir de este acontecimiento que se inaugura una forma de protesta con la metodología de corte de rutas. Esta logra establecer un importante elemento de presión para el Estado, y al mismo tiempo, produce un efecto mediático importante, garantizando la instalación del problema en el espacio público no solo local sino también provincial y nacional, y hasta internacional.

A pesar del alto nivel de impacto y de repercusión que tuvo la Pueblada la situación de la comarca petrolera no varió significativamente. Desde el Estado Provincial y Nacional se tomaron medidas de urgencia con el fin de desactivar el conflicto, sin embargo tales medidas se agotaron en el corto plazo y tendieron a paliar las necesidades inmediatas en forma individual. Ninguna política pública sería que apuntara a la reactivación y al desarrollo de la zona fue diseñada, ninguna red de contención social a largo plazo fue implementada.

El resultado de esta falta de previsión por parte de los distintos niveles del Estado se manifestó un año después de la Pueblada, cuando las rutas volvieron a ocuparse. Esta segunda manifestación de protesta se dio en el marco de una situación coyuntural muy específica, la medida de fuerza que ATEN16, el gremio docente neuquino, venía sosteniendo desde hacía un tiempo. Sin embargo el encuadre estructural de la protesta en Cutral Co – Plaza Huincul seguía siendo el mismo del año anterior: la desocupación, la falta de perspectiva a futuro y una economía paralizada.

A estos factores se sumaron dos nuevos componentes: la desilusión y el enojo por la falta de cumplimiento de los puntos acordados por el gobierno provincial durante la Primera Pueblada, y la sensación general de que algunos piqueteros de entonces habían abandonado los reclamos colectivos una vez que lograron mejorar su situación individual a través de sus negociaciones con Sapag. En este contexto ATEN desarrolla un plan de lucha con el fin de frenar una serie de medidas del gobierno que socavaban las condiciones de trabajo del sector docente. La seccional Cutral Co fue una gran protagonista de la lucha docente “los profes de Cutral Co, llevaban a cabo la movida, se hicieron reuniones con los supervisores, se viajó a Neuquén para informar a los directivos de las escuelas acerca de la resolución 075, lo que implicaba para nosotros, la gravedad de lo que estaba sucediendo...”. Es importante destacar que durante los días de huelga desde Cutral Co se enviaban entre 8 y 9 colectivos repletos de docentes que llegaban a la ciudad de Neuquén para mantener la lucha.

En Cutral Co la seccional local de ATEN realizó numerosas asambleas con los padres de los alumnos, informando de la situación, explicando cuáles eran los alcances de esta resolución inscripta, según el gremio, en el marco de la Ley Federal de Educación¹⁷. En estas asambleas se debatía con los padres qué era la Ley Federal, cómo impactaba en las escuelas, los alcances y limitaciones que imponía. Se formaron comisiones de padres y coordinadoras de estudiantes secundarios. Finalmente ATEN convoca a cortar las rutas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

provinciales más importantes y hacer Puebladas contra la disposición gubernamental que implicaba más de 1000 despidos encubiertos.

16 Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén.

17 Esta Ley, también obra del gobierno menemista, implica la aplicación de la política neoliberal, con su carga de ajuste y desligamiento del Estado, al campo educativo.

Posteriormente 250 personas reunidas en asamblea deciden cortar la ruta Nacional 22 , a la altura de la Torre Uno por tiempo indeterminado en solidaridad con el reclamo docente.

Comienzan enseguida las intimidaciones judiciales para desalojar la ruta. Si bien esta medida de corte de ruta es impulsada en primer instancia por el gremio docente, éste decide retirarse como gremio, en palabras de un dirigente de ATEN cutralquense: “los docentes acompañamos a los padres y a los estudiantes a la Torre, realizamos una asamblea ahí, los padres proponen cortar ...los maestros no queríamos, nos arrastraron... nos quedamos en el corte no como gremio ATEN, sino como ciudadanos... nos suscitó un gran conflicto interno por un lado habíamos concientizado a la gente para participar y reclamar por la educación de sus hijos y por otro lado corríamos el riesgo de perder nuestra personería jurídica...”.

Simultáneamente el gremio ATEN no acepta la conciliación obligatoria convocada por la Subsecretaría de Trabajo, las negociaciones con el gobierno provincial siguen siendo nulas.

En la comarca petrolera mientras tanto (CRONOLOGÍA SEGUNDA PUEBLADA), las rutas seguían cortadas, sin embargo los grupos que mantenían los cortes, en su mayoría jóvenes, no contaban con el apoyo masivo de los habitantes de la zona. Esta vez los lugareños se mantuvieron en sus casas expectantes hasta que el sonido de las sirenas de los bomberos los estremeció y los llevó a las calles. Las sirenas de los bomberos habían jugado ya un papel importante en la Primera Pueblada, su aparición en el aire del desierto indicaba el inminente peligro de la represión, la cercanía amenazante de las fuerzas de seguridad. Efectivamente se desató sobre el grupo de pobladores que estaban allí una represión indiscriminada por parte de gendarmería y de la policía provincial. Las acciones represivas persiguieron a la gente hasta los barrios, en donde finalmente matan a Teresa Rodríguez, una lugareña que desafortunadamente caminaba por su barrio en ese momento. Esta muerte injustificada, la fuerza utilizada para desalojar la ruta, indignó a los pobladores que salieron masivamente a la calle, a cortar las rutas. Ante la gravedad de los acontecimientos ATEN y el gobierno firmaron un acta acuerdo para destrabar el conflicto. Esta firma es vista por los pobladores como una traición, “firmaron con la sangre de Teresa”, repetía una multitud de manifestantes que rodeaba la casa de gobierno neuquina. Posteriormente se realizaron sucesivas asambleas con el propósito de reafirmar el acta acuerdo, finalmente los docentes levantan la huelga consiguiendo los puntos que se solicitaban. Los dirigentes gremiales de ATEN Cutral Co afirman que la lucha dada fue para mantener las conquistas anteriormente obtenidas, por lo que numerosos afiliados a esta entidad gremial no vivieron lo conseguido como un triunfo “se vivieron momentos de mucha presión , de amenazas personales, el clima estaba enrarecido”.

Si bien el conflicto docente había logrado destrabarse, la situación en Cutral Co estaba



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

lejos de encontrar la calma, muy por el contrario, los ánimos estaban más que agitados, en esta localidad los acontecimientos siguieron otro curso. La manifestación de protesta en defensa de la educación pública se transformó en la Segunda Pueblada de Cutral Co – Plaza Huincul, quedando a un costado el reclamo original y centrándose una vez más en las necesidades locales. Aparece entonces la figura de “los fogoneros”, quienes ocupan los primeros piquetes. El protagonismo pasa de manos de la coordinadora de padres, que hasta la represión habían liderado la protesta junto a la coordinadora de estudiantes secundarios, a los “fogoneros”. Esta nueva denominación surge desde los protagonistas como forma de diferenciarse de los “piqueteros que negociaron con Sapag”.

Esta vez el reclamo claro, contundente, estaba dirigido al Estado provincial y ya no al caudillo. Lo que se le demandaba era que se hiciera cargo de gestionar el desarrollo económico del lugar y que solucionara en lo inmediato el problema de la desocupación. En relación a este problema social también apuntaron directamente a la empresa trasnacional Repsol-YPF a cargo de la explotación petrolera en ese lugar. Dentro de las exigencias dirigidas directamente a la empresa se encontraba la demanda de 500 puestos de trabajo para los desocupados de la zona (PETITORIO DE LA SEGUNDA PUEBLADA).

Si bien en esta Segunda Pueblada también se negó a los dirigentes tradicionales representación, legitimidad y autoridad, se exigía al mismo tiempo que las instituciones (el Consejo Deliberante, el Municipio, el Estado neuquino y el Estado Nacional) tomaran los reclamos, y funcionaran proyectando y gestionando las vías de solución al problema de fondo: la falta de trabajo y el desarrollo productivo de la localidad. En esta segunda protesta los fogoneros negociaban directamente con los distintos niveles del Estado aquellas demandas que se habían consensuado en las asambleas populares de la ruta. Una comisión representante de los fogoneros, constituida por los propios actores, se trasladó desde Cutral Co hacia la ciudad capital, para encontrarse con los representantes del gobierno provincial, los intendentes municipales y los representantes del gobierno nacional que se encontraban en Neuquén. Estos últimos habían llegado a la provincia para cumplir con una de las exigencias de los fogoneros, la presencia del gobierno nacional en Neuquén para que garantizara el cumplimiento de lo que se acordara con la provincia. Pero también para que se hiciera cargo de dar respuesta al problema de la desocupación en Cutral Co, que la decisión del gobierno central de privatizar YPF, había causado.

Allí se acuerda dar respuesta a las demandas más inmediatas y trabajar en conjunto los distintos estamentos del Estado para diseñar políticas que puedan dar respuesta a los planteos de fondo, esto es la creación de empleo en Cutral Co. Con este acuerdo se levanta el corte de ruta.

Si analizamos estos acontecimientos desde una perspectiva centrada en el concepto de interfase¹⁸, ambos acontecimientos pueden ser considerados como “situaciones de interfase”, en la medida que distintos sectores de la sociedad local se encontraron entre sí, y buscaron negociar en forma directa con el Estado provincial.

Durante la Primera Pueblada el representante del gobierno local aparecía ante estos grupos como un mediador capaz de vehiculizar soluciones a los conflictos planteados en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la zona. Pero además el Estado provincial encarnado en la figura del gobernador, era considerado también como el intermediario más apto para interpretar los distintos intereses y articularlos ente sí. Evidentemente resultó gravitante el hecho de que se tratara de un dirigente histórico que había construido su discurso sobre la base 18 Long, N. (1999) "The multiple optic of interface analysis". UNESCO Background Paper on Interface analysis.

del federalismo y de la defensa de la autonomía de la provincia en relación al poder central de la nación. Por otro lado las prácticas clientelares establecidas con la población en general lo ubicaban como alguien cercano a los códigos culturales del pueblo y con los recursos necesarios y el poder de decisión suficiente para dar respuestas a la gente. Así esta Pueblada conceptualizada como situación de interfase hizo posible la articulación entre distintos grupos de la sociedad local (piqueteros, comerciantes, empleados del estado), a partir de esta articulación se abrieron las instancias de negociación con el poder local. Con él se entreteje una alianza estratégica en virtud de ser considerado como próximo a los mundos de vida de los distintos sectores involucrados. Por otra parte se le exige al gobernador que asuma un nivel de confrontación con el Estado nacional y con la empresa privatizada a fin de canalizar las urgencias de la gente.

La figura del "piquetero" que emerge en la situación de interfase de la Pueblada puede ser considerada al mismo tiempo como un nuevo modo de ejercicio de ciudadanía, en la medida que se representan a sí mismos como sujetos en defensa del ejercicio de derechos, específicamente de su derecho al trabajo y al bienestar.

En cambio el ejercicio de "ciudadanía fogonera", busca reubicar al Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional) en el lugar central de regulación de la vida social, y por lo tanto epicentro de las demandas, del cual ha sido desplazado. Se le exige al gobierno provincial y al gobierno nacional que regule, controle y exija a YPF (hoy en manos de capitales transnacionales) que "devuelva" en puestos de trabajo y en inversión para el desarrollo de la zona, la "riqueza" que de allí se extrae¹⁹.

Las Puebladas, como situaciones de interfase, producen condiciones de empoderamiento para los piqueteros y fogoneros en la medida que (aunque el nivel de fracaso en conseguir respuestas concretas a sus demandas es significativo) tienen algún grado de logros y por lo mismo recuperan cierto nivel de agencia que la desocupación y la marginalidad que conlleva, les niega.

Entre los logros quizás el más importante sea el alto nivel alcanzado de visibilidad pública de la problemática local. En la Primera Pueblada se capitaliza la experiencia del corte de ruta a través del cual se logra una capacidad de maniobra, de negociación y de agencia importante e inédita hasta ese momento para esta franja de la población. Por otra parte una serie de conocimientos acerca de cómo relacionarse con el poder local eran manejados por los participantes de la protesta, el clientelismo actuó en la primera instancia como un repertorio de experiencias previas. Éstas se capitalizaron apelando precisamente a los códigos de la relación patrón-cliente, para lograr así ser escuchados por el referente político local. Ya en la Segunda Pueblada se apela a las instituciones como modo de garantizar soluciones colectivas y a largo plazo. De alguna manera se vuelve por medio de una acción inédita (los cortes de ruta) y de la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

19 En las conversaciones y entrevistas con piqueteros es recurrente la argumentación acerca de cómo Repsol-YPF “se lleva nuestras riquezas y no nos deja nada a cambio”. Existe un sentido de pertenencia al lugar que de alguna manera se extiende a los recursos que se encuentran en el subsuelo, se siente la explotación petrolera como una expropiación de una riqueza que ellos consideran que les pertenece y de la cual “disfrutaron” mientras la explotación estuvo en manos del Estado Nacional. Por parte de la empresa parece haber algún grado de asunción de estos argumentos, en la medida que destinan recursos económicos, mediante acuerdos con el gobierno provincial y municipal, para “ayudar” a la región.

construcción de un nuevo sujeto social (los fogoneros) a posicionarse como ciudadanos y desde allí legitimar sus reclamos, tal como lo expresó en su momento un protagonista: “Nosotros somos fogoneros por las circunstancias de la vida: somos ciudadanos comunes, padres de familia en lucha.”

4. La interfase como entidad organizada: el Municipio

La segunda pueblada deja como saldo una crisis institucional a nivel del Estado municipal y, paralelamente, el compromiso de los niveles provinciales y nacionales del Estado de proveer los recursos necesarios para descomprimir la situación. En Cutral Co el intendente de entonces es destituido, producto del conflicto, y después de una corta gestión de transición, asume por primera vez en la historia un gobierno no emepenista. En el año de la pueblada, la Alianza (conformada por el Frente País Solidario (FREPASO) y la Unión Cívica Radical (UCR)), es la fórmula elegida para hacerse cargo del Municipio de Cutral Co. Dos años después, en las elecciones del '99, el electorado local renueva su confianza en la gestión, que es reelegida por el 58% de los votantes.

Junto con el cambio de gestión comienza a llegar a Cutral Co una gran cantidad de recursos erogados tanto desde Nación como desde Provincia, a los cuales se sumaron también los aportados por la empresa Repsol-YPF. Dentro de los recursos financiados por Nación se destacaban los “Planes Trabajar”, subsidios para desocupados que son creados para atender una de las demandas más inmediatas de los fogoneros (DOCUMENTO 3).

Del '97 en adelante la centralidad del Municipio se transformó en crucial para la vida de la comunidad local, ya que se convirtió en el gestor y administrador de una extendida red de planes sociales destinados a subsidiar a la población desocupada. También se constituyó en el interlocutor privilegiado a la hora de expresar las demandas relacionadas con las necesidades más inmediata de los pobladores: alimento, medicamentos, problemas relacionados con el suministro de los servicios básicos. Al mismo tiempo se ocupó de organizar una serie de micro-emprendimientos tendientes a generar fuentes de trabajo más estables, con la intención (al menos la intención declarada desde el Municipio) de apuntar a la reconversión económica y productiva de la comarca (DOCUMENTO 3).

El Municipio se presenta así como una interfase en tanto entidad organizada de enclave de relaciones e intencionalidades. De esta manera la instancia municipal del Estado, en virtud de su capacidad organizacional y constituido en una “entidad de interfase”²⁰, involucra tanto a funcionarios públicos como a trabajadores desocupados y dirigentes



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

gremiales que, en ciertas ocasiones, se ocupan también de gestionar los subsidios en el ámbito de la Municipalidad. Así se constituyó en un verdadero “territorio del medio normativo” (otro modo de definir a una entidad de interfase), espacio en el cual se establecen las reglas del juego que permiten negociar a la población más directamente afectada por la desestructuración de YPF (piqueteros y fogoneros en las puebladas), con los funcionarios locales²¹. Este espacio también se

20 Long, N. (1999) “The multiple optic of interface analysis”. UNESCO Background Paper on Interface analysis.

21 Idem.

convierte ocasionalmente en una plataforma eficaz para confrontar con otros niveles del Estado y con entidades privadas, como la empresa Repsol.

Este desplazamiento de la interfase, de las puebladas al Municipio, se ve acentuado y reforzado en la medida que tiene directa relación con el proceso de descentralización por el cual la Municipalidad se ve obligada a asumir funciones delegadas por el Estado provincial y nacional. Además, por su cercanía con la vida cotidiana de la gente, el estado municipal es mucho más permeable y accesible para la sociedad civil. En tanto entidad de interfase el Municipio de Cutral Co aparece tal como lo señala García Delgado “como un punto de condensación de la fragmentación social, de la protesta, de las crisis de las mediaciones, de la falta de recursos” ²².

En el particular caso de Cutral Co, se trata de un Municipio que se encuentra con el desafío de desactivar la conflictividad social imperante y sostener, al mismo tiempo, su capacidad de gestión en medio de una marcada oposición política al interior de la provincia²³. Es una intendencia “arrebataada” al MPN por primera vez desde la creación de la ciudad. Sin embargo se trata también de uno de los Municipios que mayor cantidad de recursos recibió en estos años, lo cual le permitió a la gestión en curso mantener una aceiteada red de contención social. Por su parte el recuerdo de las puebladas hace su trabajo, presionando a las instancias superiores del Estado que se ocupan de procurar las erogaciones necesarias para la mantenimiento de la paz social. Las puebladas actúan hoy como un fantasma con connotaciones contradictorias. Por un lado los funcionarios del lugar expresan que el principal objetivo y el mérito de esta gestión fue precisamente haber logrado la “pacificación” de la ciudad y mantenerla, evitando cualquier corte de ruta y medida de protesta de envergadura del ‘97 a la fecha. Por otro lado las puebladas son el fantasma que se suele agitar desde los mismos funcionarios municipales a la hora de demandar al Estado nacional y provincial el aumento y/o la permanencia del flujo de recursos hacia la comarca. Cuando las gestiones del Municipio fracasan, desde el mismo Estado municipal se incita a los afectados directos a tomar una medida de fuerza. Un corte de ruta menor²⁴, la quema de cubiertas frente a la Municipalidad y el emplazamiento de ollas populares en la vía pública, aunque sean medidas llevadas adelante por un número escaso de personas, son suficiente motivo para provocar el estado de alerta. Estas acciones que evocan las puebladas, activan rápidamente los mecanismos que a nivel nacional y/o provincial permiten alcanzar las soluciones para las demandas locales.

22 García Delgado, D. (1994). “Estado & Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural”. FLACSO, Tesis Grupo Editorial Norma.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

23 Cuando esta gestión municipal asume en el '97, se encontraba a cargo del ejecutivo nacional el presidente Menem del Partido Justicialista, por lo tanto la intendencia tenía un signo político contrario tanto al gobierno Nacional como al Provincial. Mientras que en el '99 gana las elecciones nacionales la Alianza, asumiendo la presidencia De La Rúa, en este contexto la intendencia local mantenía la oposición con el gobierno provincial pero gozaba de cierta llegada en el gobierno nacional. De hecho muchas gestiones hechas desde el Municipio se realizaban directamente con Nación en Buenos Aires, puenteando a la gestión provincial.

Con la caída de De La Rúa se pierden muchas intendencias a nivel país, y la Alianza se deshace como oposición política volviendo las facciones que las constituían a abroquelarse en sus respectivas proyecciones electorales. Sin embargo en Cutral Co es en uno de los pocos puntos del país en el cual la Alianza perdura, mantiene una gestión de gobierno y goza de cierta proyección política a futuro.

24 Esto es un corte en la ruta provincial 22 a la altura de la Torre Uno, llevado a cabo por un número escaso de participantes. El carácter simbólico se relaciona con que aquel punto fue el epicentro de las puebladas, y con que no se cortan todos los accesos a la ciudad y se mantiene el corte por pocas horas.

Así el Municipio no solo es el que administra los recursos; media entre la población y los estamentos superiores del Estado; articula a distintos sectores sociales locales, como empresas intermedias, comercios y micro emprendimientos; sino también es la entidad que “administra” discrecionalmente las representaciones de Cutral Co, tensionadas entre la imagen construida a partir de las puebladas, como el lugar del conflicto, y la imagen actual de pueblo sosegado, obediente del orden instituido. El Municipio, por lo tanto, actúa como la entidad encargada de mantener y explotar el delicado equilibrio entre la “anarquía” y la “pacificación”.

En cuanto al juego de representaciones, en Cutral Co existe también una actitud colectiva contradictoria en relación a las figuras de los piqueteros y a los sucesos de las puebladas. Por un lado quienes participaron de los eventos, reivindican las puebladas con orgullo, tanto por la participación colectiva en ellas: “allí estuvimos todos, era todo el pueblo”, como por los motivos que en general se les asigna: “salimos a defender lo nuestro”. Por otro lado se les adjudica a estos mismos eventos la responsabilidad de haber “deteriorado la imagen de Cutral Co”, de haber mostrado hacia fuera (especialmente por los medios de comunicación) a Cutral Co como un lugar “violento”, o “de violentos”, lo cual se presupone, ahuyenta a los posibles emprendimientos privados que podrían instalarse en la zona, generando fuentes de trabajo.

En situación de entrevista tanto los funcionarios como dirigentes de distintas organizaciones y personas que participaron de las puebladas y se auto identifican como fogoneros o piqueteros, narran la situación posterior a las puebladas como caótica. Expresiones tales como “acá lo que quedó de las puebladas fue una situación anárquica, donde no se respetaba a nadie. No se respetaba a los políticos, ni al intendente, ni al policía, ni al maestro. Esto era tierra de nadie” han sido recurrentes. Este imaginario de anarquía y conflicto asociado fuertemente con la localidad de referencia, llevó a los pobladores a establecer estrategias que les permitieran deshacerse de la carga estigmatizante que implica asumirse como cutralquense. Así el efectuar el trámite de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

cambio de domicilio en el documento nacional de identidad es una práctica muy extendida entre la población desocupada en busca de trabajo. Suponen que ocultar la pertenencia a Cutral Co es una forma de aumentar las posibilidades de ser contratado, especialmente si se trata de empresas petroleras o afines.

Dentro de estos parámetros significativos la misma población que se enorgullece de las puebladas, y aún las personas que se identifican como piqueteros o fogoneros por haber participado como tales en su momento, se enorgullecen también de que en Cutral Co no exista un movimiento piquetero organizado como en otros puntos del país. La representación más extendida es que los piqueteros, tanto como los fogoneros, fueron producto de las circunstancias, pero que no se trata de un sector definido de la población, ni de un movimiento que deba mantenerse en el tiempo. Por el contrario la opinión generalizada es que estos movimientos son perjudiciales, radicalizados y agresivos. Por lo tanto, la inexistencia de movimientos de trabajadores desocupados en Cutral Co, no solo debe ser explicada desde la distribución de los planes y subsidios desde el Municipio y de los demás recursos a partir de la red clientelar, sino también hay que tener en cuenta esta representación negativa que la gente del lugar tiene acerca de los movimientos de desocupados, y de la necesidad de escapar de las estigmatizaciones que vienen aparejada con ella: “Antes venían a Cutral Co buscando indios, ahora vienen buscando piqueteros y yo les explico que no es una raza la de los piqueteros”(…) “Salimos cuando teníamos que salir, pero ahora estamos trabajando o buscando trabajo, no somos vándalos”.

En esta situación la centralidad del Municipio se refuerza, porque de él se espera también que ocupe ese lugar que la falta de auto organización comunitaria dejó vacante. De allí que desde la Municipalidad se asuma también la tarea de “organizar a la gente, capacitarla, volverla a poner en el circuito laboral”, tal como lo señalara un funcionario. Y lo hace fundamentalmente armando, gestionando, y sosteniendo (tanto con recursos materiales como humanos) los proyectos de micro emprendimientos.

5. Las interfases y la redefinición del Estado

Las puebladas en Cutral Co y Plaza Huincul se constituyeron en una situación de interfase a distintos niveles:

En primer lugar estas protestas aparecen como la manifestación explícita del drama que representó para la comarca la desestructuración de YPF. Este drama tuvo a sus vez implicancias de distinto tipo. Por un lado significó la drástica merma de los ingresos de los pobladores, tanto de los directamente afectados por la desocupación como de todos aquellos (comerciantes, subempleados y demás) cuyas actividades económicas dependían de los ingresos de los empleados. Pero por otro lado afectó también los niveles de organización política y de reconocimiento ciudadano, tal como señala Svampa²⁵, YPF no era solamente una empresa estatal de explotación petrolera, sino que funcionaba como un Estado dentro del Estado. De allí que no solo el mundo laboral, sino y sobre todo, el entorno social de la zona de explotación estuvieran estructurada en torno a YPF. En relación a este punto la autora expresa: “el modelo implementado por esta empresa comportaba dos ejes mayores: por un lado, YPF sintetizaba, como ninguna otra empresa productiva del Estado, las garantías y oportunidades del estado social argentino (derechos sociales, protección social, bienestar general). Tal es así, que los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

trabajadores de YPF eran considerados como una suerte de “aristocracia” dentro de las empresas productivas que administraba el Estado nacional. Así, la condición de “ser o no ser ypefeano” marcaba claras fronteras al interior de la sociedad local. Por el otro lado, YPF estableció un modelo de relaciones sociales fuertemente jerárquico al interior de la propia empresa, calcado de las fábricas inglesas del siglo XIX y caracterizado por la separación espacial entre los diferentes sectores del mundo del trabajo (en barrios claramente diferenciados). Por último, el elemento articulador de los dos ejes del modelo ypefeano (bienestar material y jerarquía social) lo constituye sin duda la marcada internalización de un discurso nacionalista que colocaba el acento en el control estratégico de los recursos naturales como pilar de la soberanía nacional.”

En las puebladas se manifiesta con crudeza tanto la crisis económica como la crisis de identidad y de soberanía. Los tres ejes que señala la autora encontraron en las puebladas por primera vez la forma de ser expresados ante la sociedad, ante el gobierno de la provincia, de la Nación y ante la empresa transnacional, entidad que para los pobladores locales encarna la usurpación extranjera. Cuando recurrentemente se expresa

25 Svampa, M. (2002) “Segunda Parte: organizaciones de trabajadores desocupados. Un estudio de caso: el modelo Moscón”. Cedes.

que se participó de las puebladas para “defender lo nuestro” y por eso “estuvimos todos”, lo que se está afirmando es que lo que se intentaba defender no solo era el bienestar económico perdido, sino que al mismo tiempo se estaba asumiendo la defensa del patrimonio nacional ante lo que se vive como una expoliación de las empresas extranjeras.

En cuanto a la identidad ypefeana es importante destacar que en Cutral Co y Plaza Huincul, a diferencia de cómo se desarrollaron los sistemas de jerarquización en otras zonas de explotación, si bien existe la diferencia entre ypefeanos y no ypefeanos, las relaciones se han horizontalizado más. Por lo tanto el sentimiento nacional expresado como defensa de la soberanía y de la identidad ypefeana se asimiló a la identidad local, de allí que el grito que unía a los pobladores en las protestas era “Cutral Co, Cutral Co!!”. Esta expresión condensaba algo más que un sentimiento localista, se trataba de un modo de recuperar el sentido de pertenencia ypefeana y soberana.

En segundo lugar las controversias que se plantean en la relación entre los pobladores y los dirigentes, encontraron también en las puebladas un espacio de mediación para ser dirimidas. En este sentido las diferencias planteadas entre la primera y la segunda pueblada son reveladoras de las tensiones establecidas, tanto por la crisis de representación imperante a nivel nacional, como por los quiebres que se producen al intentar articular el clientelismo y la ciudadanía²⁶. Como ya señalamos, durante la primera pueblada el reclamo unánime estaba centrado en la presencia del Gobernador en la localidad petrolera. El rescate de este dirigente sin embargo no escapaba al nivel de cuestionamiento en el que se encontraba ya en aquel entonces el sistema de representación²⁷, así en la expresión “que venga Don Felipe”, quedaron encerradas una serie de contradicciones. Éstas dan cuenta de la incidencia negativa de una democracia de baja intensidad en la construcción de prácticas ciudadanas. Concretamente esta expresión condensa sentimientos y sentidos encontrados en relación a los vínculos que los pobladores habían establecido históricamente con la política, la dirigencia y el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

partido gobernante en Neuquén (DOCUMENTO 1). Como observamos, la cercanía en términos simbólicos del líder local con los pobladores resultó determinante para la resolución de la manifestación de protesta. Esto estuvo fuertemente condicionado por la lectura que los cutralquenses hacían del modo en que se había tejido esa relación entre ellos, fundada en la pertenencia común a determinadas redes como la vecindad, la amistad y la familiaridad, estas pertenencias otorgan cierto nivel de estabilidad a la relación entre los pobladores y el dirigente más allá de las circunstancias coyunturales. Este tipo de vínculo se inscribe en las relaciones clientelares imperantes en la provincia (DOCUMENTO 1).

La importancia de las relaciones clientelares determinaron las prácticas consensuadas por la multitud en aquella ocasión. Sin embargo esto no implicó necesariamente poner en suspenso la crisis de representación dominante, el hecho de que para lograr una acción organizada sea necesario compartir ciertos significados no

26 Retomamos este concepto de Roberts, B. (2001) “Las nuevas políticas sociales en América Latina y el desarrollo de ciudadanía: una perspectiva de interfaz”. Documento elaborado para el Taller Agencia, Conocimiento y Poder. Nuevas direcciones. Wageningen.

27 La crisis de representación se extendió en la Argentina en los '90 y terminó de eclosionar el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando este proceso se plasmó en la consigna “que se vayan todos”. Para un detalle de las implicancias de estos acontecimientos a nivel local puede verse Mombello, L. (2002) “Crisis nacional y prácticas locales de ciudadanía”. Presentado en Iº Jornadas de Interfase entre Cultura y Política en Argentina, IDES.

implica que la interpretación que hagan los participantes de esa acción sea homogénea. De hecho el dirigente estaba fuertemente cuestionando, existía entre los presentes un alto nivel de descontento con su líder y al mismo tiempo la relación directa con él aparecía como la manera “posible” de reconstituir la relación con el poder. En este sentido el vínculo clientelar fue el repertorio a partir del cual se logró canalizar y reactivar el proceso de negociación de significados y recursos entre partes con intereses encontrados. Así el clientelismo actuó como un capital social²⁸ que se activó como modo operativo de resolución de problemas sociales y de conflictos políticos. En esta primera pueblada los modos históricos de relacionarse con la dirigencia eclesial (DOCUMENTO 2) también formaron parte del capital social con el que contaron y al cual recurrieron los cutralquenses; teniendo un grado importante de impacto en el devenir de los acontecimientos.

Durante la segunda pueblada los capitales sociales a los que se apeló fueron otros, se tomó distancia de las relaciones históricas tanto con la dirigencia política como con los demás actores sociales, específicamente con la iglesia (DOCUMENTO 2). Esta vez se tomó como punto de partida el orden institucional como parámetro para la negociación de las demandas. Se requirió al Estado Nacional, Provincial y Municipal que se hicieran cargo de los reclamos, más allá de las personas que circunstancialmente ocuparan la función pública. Desprendiéndose de las relaciones personales, los fogoneros del '97 plantearon con claridad meridiana la necesidad de que el Estado se reubicara como organizador de la organización política y regulador de vida económica. En todo caso lo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que se intenta reconstruir es la relación con el Estado desde el ejercicio directo de la ciudadanía, a partir del capital social acumulado a lo largo de los años de consolidación del Estado de Bienestar.

Una tercera instancia, íntimamente vinculada a la anterior, relacionada con las puebladas como situación de interfase, se desprende de la forma en que se busca descomprimir la masiva protesta del '97. Se trata de la crisis institucional que deriva de la protesta y tiene su epicentro en el Municipio de Cutral Co. La destitución del intendente y el reemplazo del MPN por la Alianza es en realidad nada más que la punta del ovillo; lo que se estaba intentando tejer de nuevo era el entramado socioeconómico local, lo cual desde la perspectiva de los pobladores no podía desprenderse de la necesidad de una presencia fuerte del Estado en sus vidas. Ya que la historia ypefeana del lugar marca indefectiblemente los parámetros dentro de los cuales es posible imaginar y proyectar la relaciones entre Estado y ciudadanía en Cutral Co.

Esta demanda de los pobladores se imbrica conflictivamente con el proceso de descentralización del Estado, que implica la delegación de funciones específicas hacia niveles subestatales y distintas organizaciones de la sociedad civil²⁹. Así la presencia del Estado termina siendo asumida por el Municipio básicamente impulsado por dos circunstancias. Por un lado porque lo estatal deja de asimilarse como lo nacional y se

28 Retomamos este concepto de Bourdieu, P. (1985) *¿Qué significa hablar?*. Ed. Akal, Madrid, España. El autor hace referencia con él al conjunto de recursos cuyo acceso se encuentra vinculado a un red duradera de relaciones de conocimiento o reconocimiento mutuo.

29 Al respecto García Delgado (op.cit) señala cómo desde el punto de vista de las relaciones Estado-sociedad parece debilitarse la matriz estadocéntrica y el Estado devuelve a la sociedad fragmentos de competencias anteriormente estatizadas. Lo público deja de ser sinónimo de estatal y aparece lo que algunos autores denominan lo “público-societal”.

transfieren competencias a unidades públicas menores; el Municipio, anteriormente desjerarquizado comienza a tener mayor relevancia. Y por otro lado porque se ve presionado por la población no solo a dar respuestas coyunturales (subsidios, ración de alimentos, medicamentos, pago de servicios) sino a constituirse en un nuevo Estado dentro del Estado, a la manera de un reflejo lastimoso (por empobrecido) de lo que fuera YPF. Esto es, constituirse como la entidad organizadora de la vida social, política y económica de la comarca petrolera.

6. Final abierto: Clientelismo y ciudadanía

En términos generales el Estado puede ser considerado como “una instancia de articulación y dominación de la sociedad que condensa y refleja sus conflictos y contradicciones”³⁰. Desde esta perspectiva podemos dar cuenta de las relaciones que en Neuquén se han venido dando a lo largo del tiempo entre la población de la comarca petrolera y los niveles nacionales, provinciales y municipales del Estado. Esta forma específica de relación, marcada tanto por el afianzamiento de la ciudadanía como por las redes clientelares, se inscribe a su vez en una red de relaciones sociales desde una doble perspectiva. Por un lado, como trama que estructura tanto las subjetividades como las formas organizacionales más sedimentadas y por otro, como usina que genera acciones



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

(coyunturales y/o contingentes) que interpelan tanto la estructura que las contienen como las propias inter-subjetividades desde las cuales se opera. Este es el caso de las puebladas que se presentan como “situaciones de interfase” en la medida que resultaron el escenario propicio para replantear la relación entre el Estado y los ciudadanos en el contexto local. La organización comunitaria que se funda para llevar adelante un micro emprendimiento productivo o para reclamar un “plan trabajar” tiene que ver con modos específicos de re-significar las vías de participación ciudadana y, al mismo tiempo, el sentido de las políticas públicas. Sin embargo este tipo de organización (sea para la protesta o la producción) no llega a interpelar a los distintos niveles del Estado sino es a través de algún tipo de mediación que, en nuestro caso, es protagonizada por el Municipio de Cutral Co, el que, como ya observamos, se constituye como una “entidad de interfase”. Son estas interfases las que dan cuenta de las articulaciones y tensiones entre actores sociales que, con niveles desiguales de capital social y, por lo tanto, con desiguales niveles de agencia³¹ disputan proyectos diferentes de construcción de ciudadanía y por lo tanto pugnan por distintos modelos de Estado.

La ciudadanía históricamente fue caracterizada por tres dimensiones que hacen referencia a la ciudadanía civil, política y social³², donde la dimensión civil hace alusión a los derechos de la libertad individual, la dimensión política a los derechos a la participación en las contiendas electorales asociadas a las democracias liberales y la dimensión social a los derechos referidos a educación, salud, vivienda y seguridad. Esta última dimensión fue a partir de la cual el llamado Estado de Bienestar, se desarrolló en occidente. Una experiencia de este tipo tuvo lugar en la Argentina de los 40' y dentro del marco de esta experiencia nacional se conformó y expandió una experiencia similar en el Neuquén de los 60' (DOCUMENTO 1).

30 Oszlak, O. (1982) “La formación del Estado argentino”. Ed. Manantial, Buenos Aires.

31 Bourdieu, P. (1989) op.cit.

32 Marshall, T. (1950) “Citizenship and social class, and other essays”. University of Cambridge.

Las puebladas de Cutral Co (1996 y 1997), donde surgen los primeros piqueteros (y se acuña el término), son el producto de la desarticulación vertiginosa de una economía de enclave (en donde el rol de YPF fue fundamental) en el marco más amplio de la desarticulación del Estado. Desarmado el modelo del Estado de Bienestar fue puesta simultáneamente en suspenso la representación acerca de la ciudadanía que se tenía hasta el momento. Al respecto Svampa observa que “puebladas y piquetes convergen, por primera vez, ahí donde la experiencia de la desocupación se expresa abruptamente en el más crudo y abierto desarraigo, afectando a trabajadores que contaban con carreras laborales estables que, en algunos casos incluían hasta tres generaciones, mucho de ellos trabajadores calificados, en todo caso, los mejores pagos dentro del Estado nacional. Estas experiencias se inician con cortes multisectoriales, en los cuales convergen distintos sectores sociales. Es sin duda el encuentro entre diferentes sectores sociales, todos ellos afectados por un inédito proceso de descolectivización, frente a un Estado nacional en retirada, lo que constituye el punto de partida de una experiencia unificadora, en medio del desarraigo social”³³.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Evidentemente la urgencia económica que impulsa las puebladas envuelve otras dimensiones de la vida social y política. Específicamente la redefinición de los parámetros a partir de los cuales se configurarán las prácticas ciudadanas es uno de los ejes más importantes. En este sentido, si bien la descentralización del Estado acompañada por los sucesivos procesos de ajuste afectó al conjunto de los ciudadanos argentinos, las respuestas y los modos de reconstitución del entramado sociopolítico están fuertemente localizados.

En el marco de estos procesos, las acciones de protesta y las dinámicas a partir de las cuales se demanda al Estado y se buscan alternativas de reorganización económica y social, se instituyen como nuevos modos de ejercicio de ciudadanía. Podemos considerar que estos nuevos modos de ejercicio ciudadano, si bien se asientan básicamente en la dimensión de los derechos sociales, incide e interpela la dimensión política al menos tal como ha sido planteada hasta el momento. Sin embargo tales planteos no representan un programa amplio y global de redefinición del Estado, más bien el planteo de estas construcciones “originales” de ciudadanía son posibles a partir de experiencias comunitarias muy específicas. El devenir de tales experiencias y la posibilidad (o no) de articulación entre la distintas organizaciones comunitarias gestadas en entramados históricos y territoriales diferentes y específicos resulta, efectivamente, impredecible. Sin embargo lo que parece altamente significativo en el contexto actual en Argentina, es que tal como señala Ziccardi, “es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayores posibilidad de ser efectivo; en el barrio, la colonia, los Municipios...”³⁴.

Esto implica una amplia heterogeneidad en cuanto a las formas de reposicionarse ante el Estado de referencia por parte de los distintos sectores sociales en diferentes puntos del país. Los movimientos de desocupados en Buenos Aires o Tartagal, la toma de fábricas, las organizaciones comunitarias y solidarias de diversos tipos, son muestras de cómo la ciudadanía se empeña en recuperar su espacio y su capacidad de agencia como tal. Del mismo modo en Cutral Co, la recurrencia al Municipio como modo de canalizar la participación ciudadana persigue el mismo fin. En todo caso la diversidad

33 Svampa, M. (2002) op.cit.

34 Ziccardi (2001) “Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina” . CLACSO, Buenos Aires.

de acciones y posiciones parecería estar marcando modos distintos de conceptualizar el Estado, que derivan en reconocerlo e intentar “recuperarlo” como referente social, económico y político (este el caso de Cutral Co) o desconocerlo e intentar la construcción de un Estado paralelo (el caso de algunas experiencias bonaerenses podría encuadrarse en este tipo de respuesta y quizás también la salteña).

En el caso neuquino, por su entramado histórico y sociopolítico, resulta complicado reconocer al Estado como una entidad diferenciada del partido provincial. Del mismo modo las prácticas ciudadanas y la militancia partidaria se yuxtaponen, tal como lo hacen las prácticas clientelares y las políticas sociales. Si nos propusiéramos hacer un estudio local sobre el clientelismo estaríamos obligadas a incluir al Estado y sus programas redistributivos en el centro del análisis. Del mismo modo al enfocar el estudio sobre las políticas sociales no podemos dejar de lado el clientelismo como



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sistema de relación social y política. Esto se debe fundamentalmente a dos cuestiones, la primera, y por demás relevante, es que los bienes y servicios que asignan los políticos tienen origen público. La segunda es que ante la falta de planificación y marcos previos, reconocidos y estrictamente regulados, la implementación de planes sociales hacen que el campo asistencial se transforme en un terreno favorable para la continuidad y profundización de la prácticas clientelares.

En términos teóricos sabemos que ciudadanía y clientelismo político se contradicen entre sí. Es decir que en la medida que el clientelismo se expande, el margen para el ejercicio de los derechos ciudadanos se estrecha. Y a la inversa, cuando existe un ejercicio extenso de la ciudadanía, el clientelismo pierde terreno, ya que tal como señala O'Donell "una ciudadanía efectiva no consiste únicamente en votar sin coacción; es también un modo de relación entre los ciudadanos y el Estado, y de los ciudadanos entre sí. Es una modalidad continua de relación, antes, durante y después de las elecciones, entre individuos protegidos y potenciados por su condición de ciudadanos"³⁵.

Sin embargo en términos empíricos ciudadanía y clientelismo aparecen más como prácticas articuladas que en términos de oposición. Efectivamente cuando los derechos de los sectores más débiles son continuamente vulnerados, y la representación de los políticos en tanto portadores de proyectos colectivos se encuentra fuertemente fracturada, como ocurre en Cutral Co y en el resto del país, la forma privilegiada que toma la relación entre los ciudadanos y el Estado es la del clientelismo. Especialmente a través del Municipio por encontrarse más cerca de las necesidades y de la posibilidad de interacción con los pobladores. Así en Cutral Co, históricamente el Estado ha llegado a la población a través de las acciones asistenciales del Municipio y de la mano de patrones y mediadores.

Hemos dado cuenta de que actualmente el Municipio se encuentra administrado por un partido que no es el provincial. En el marco de esta gestión se vienen desarrollando las políticas sociales desde el '97 (cuando finaliza la segunda pueblada) a la fecha. ¿Implica este cambio una modificación sustancial del modo de hacer política por parte de los responsables de la gestión y a su vez de relacionarse la población con el Estado? ¿Son los planes de asistencia efectivos a la hora de garantizar la equidad en la

35 O'Donell, G. (1997) "Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización". Paidós, Buenos Aires.

redistribución de los recursos públicos y la participación activa en la vida comunitaria?

La organización de emprendimientos productivos por parte del Municipio, ¿tienden a generar niveles de autonomía y autogestión a nivel comunitario? ¿qué tipo de expectativas y experiencia de organización generan en la comunidad esta clase de emprendimientos organizados, dirigidos y controlados por el Municipio?.

Estos son algunos de los interrogantes que quedan abiertos a partir de estas aproximaciones a las problemáticas desatadas en Cutral Co como consecuencia de la desestructuración de YPF. Junto con ellos surge la inquietud acerca de si son los planes sociales el vehículo apropiado y suficiente para reducir el clientelismo en favor de fortalecer los derechos ciudadanos, y qué relación hay entre las políticas sociales y la necesidad de establecer un sistema democrático más profundo. Quizás el seguimiento de los emprendimientos y otras formas de organización comunitaria permitan encontrar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

pistas para repensar desde los contextos locales estos dilemas que afectan al conjunto de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ABELES, M. “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los ’90. ¿reforma estructural o consolidación hegemónica?”. s/f.
- ACUÑA, C. KESSLER, G. REPETTO, F. (2002) “Evolución de la Política Social argentina en al década de los 90’s: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer la política social”. Proyecto Self-Sustaining Community Development in Comparative Perspective. CLASPO.
- AUYERO (1996) “¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo”. Losada. Buenos Aires.
- AUYERO, J. (2002) “Fuego y barricada. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática”. Versión policopiado
- AUYERO, J. (2002) “La vida en un piquete. Biografía y protesta en el sur argentino”. Versión policopiado.
- BANDIERI, S. y otros (1993) “Historia de Neuquén”. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires.
- BILDER, E., ZAMBÓN, H. y GIULIANI, G.(1998) “Las políticas neoliberales y la crisis de la Provincia del Neuquén”. En: Realidad Económica N° 157, julio-agosto. Buenos Aires.
- BONIFACIO, J.L. (2001) “Análisis de clase del proceso de exclusión social en Argentina. El caso de los cortes de ruta.”. Presentado en Pre Congreso ASET 2001, Neuquén, versión policopiado.
- BOURDIEU, P. (1985) “¿Qué significa hablar?”. Ed. Akal, Madrid, España.
- BOURDIEU, P. (1988). “Cosas dichas”. Gedisa Editores. Buenos Aires
- BOURDIEU, P. y LOÏC J. D. Wacquant. (1995) “Respuestas. Por una antropología reflexiva”. Ed. Grijalbo, México.
- CAÑABATE, J. (s/f) “Desarrollo local y Municipios. Una alianza indispensable”. Servicio Social en Comunidad, Universidad Nacional del Comahue, versión policopiado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- COLANTUONO, M. R. - VIVES, Graciela. "Impactos territoriales del proceso de ajuste en una provincia argentina". Ponencia presentada en el "6º Encuentro de Geógrafos de América Latina", FFyL, UBA, 1997.
- COSTALLAT, K. "Efectos de las privatizaciones y la relación del estado social en la instancia provincial y local: el caso de Cutral Co y Plaza Huincul". En Cuaderno CEPAS N°7.
- DE MATTO, C. (1989) "La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?". En: Cuadernos del Claeh, N° 51, Montevideo.
- DE NEVARES, J. (1994). "La verdad nos hará libres, Jaime de Nevares Obispo de Neuquén". Compilador: Centro Nueva Tierra. Bs. As
- Documento del Vaticano II. La Editorial Católica, S.A. Madrid, Enero 1972.
- FARGE, A. y REVEL, J. (1998) "Lógica de las multitudes. Secuestro infantil en París, 1750". Rosario. Homo Sapiens.
- FAVARO, O. (1999) "Neuquén. La construcción de un orden estatal." CEHEPYC, Neuquén.
- FAVARO, O. y BUCCIARELLI, M. (1994) "Efectos de la privatización de YPF. La desagregación territorial del espacio neuquino". En: Realidad Económica. Buenos Aires IADE, 127.
- FAVARO, O. y IUORNO, G. (1999) "Entre territorio y provincia. Libaneses y sirios. Comercio y política en el Neuquén". UNCo.
- FAVARO, O. y otros (1997) "La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales". En: Realidad Económica 148: 13-27.
- FAVARO, O. y VACCARISI, M. (s/f) "Poder político y políticas sociales en Neuquén, 1983-1999".
- GARCÍA DELGADO, D. (1994). "Estado & Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural". FLACSO, Tesis Grupo Editorial Norma.
- GARCÍA DELGADO, D. (1998) "Estado-nación y Globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer milenio". Ed.Ariel. Buenos Aires



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- GORZ, A. (2000). "Miserias del presente, riqueza de lo posible". Paidós. Buenos Aires, Barcelona, México.
- GRASSI, E., HINTZE, H. y NEUFELD, M. (1996) "Políticas sociales. Crisis y ajuste estructural". Editorial Espacio. Buenos Aires.
- GUARINI, C.; CÉSPEDES, M. (s/f). "Jaime de Nevares, Último viaje". Documentos Página/12. La Página SA. Buenos Aires
- HEIN, W. (1994) "El fin del Estado Nación y el Nuevo orden Mundial". En: Nueva Sociedad, N° 132, julio-agosto.
- III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (1979). "La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Documento de Puebla". Edición de la Conferencia Episcopal Argentina autorizada por el CELAM. Buenos Aires Mayo 1979.
- IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, República Dominicana 12-28 Octubre de 1992. "Nueva Evangelización. Promoción humana. Cultura cristiana". Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal Argentina con autorización del CELAM. Buenos Aires Diciembre 1992.
- JELIN, E. (1989) "Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea: una introducción a su estudio". En: Los nuevos movimientos sociales. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- JELIN, E. (1996) "La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad". En: Jelin, E. (comp.) Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los '90. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
- KLACHKO, P. (1999) "Cutral Co y Plaza Huincul. El primer corte de ruta." En: PIMSA N.III Año 3.
- KLACHKO, P. (2000) "La conflictividad social en la Argentina de los 90': el caso de las sociedades petroleras de Cutral Co –Plaza Huincul"
- KLIKSBURG, B. Comp. "El rediseño del Estado: Una perspectiva internacional".
- KOZULJ, R. (1997) "Los instrumentos normativos y medidas generales de la nueva política petrolera". Documento de Trabajo. Fundación Bariloche. San Carlos de Bariloche.
- LINS RIBEIRO, G. (1991) "Empresas transnacionais. Um grande projeto por dentro". Editora Marco Zero e Anpocs, Sao Paulo.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- LO VUOLO, R, BARBEITO, A. (1996) “La modernización excluyente”.
- LONG, N. (1999) “The multiple optic of interface analysis”. UNESCO Background Paper on Interface analysis.
- LONG, N. y VILLARREAL, M., (1996), “Exploring Development Interfaces: From the Transfer of Knowledge to the Transformation of Meaning”, en Schuurman, Frans (ed.), Beyond the impasse. New Directions in Development Theory, Londres, Zed Books.
- MANSILLA, S.A. (2000) “Las políticas sociales en la época de la globalización”. Ponencia presentada en II Encuentro Internacional de Trabajo Social. La Habana.
- MARCUS, G. (1989) "Imagining the Whole. Ethnography's Contemporary Efforts to Situate Itself". Critique of Anthropology 9(3):7-30.
- MARSHALL, T. (1950) “Citizenship and social class, and other essays”. University of Cambridge.
- MARSIGLIA, J. (1996) “Organizaciones populares urbanas. ¿Qué lugar ocupan en la democracia?”. Ponencia presentada en Conferencia-Jornada A 30 años de la Reconceptualización. Departamento de Servicio Social, Universidad Nacional del Comahue.
- MOMBELLO, L. (2002) “Crisis nacional y prácticas locales de ciudadanía”. Presentado en Iº Jornadas de Interfase entre Cultura y Política en Argentina, IDES.
- MOMBELLO, L. y NICOLETTI, M.A. “Representación y Legitimación. Tensiones y dilemas alrededor de la construcción de la figura de Jaime De Nevares”. VI Congreso Argentino de Antropología Social "Identidad disciplinaria y campos de aplicación". Mar del Plata, 14 al 16 de septiembre del año 2000.
- MOUFFE, Ch. (1996) “Por una política de la identidad nómada”. En: Debate Feminista, año 7, vol. 14, octubre, pp. 3-13.
- MUSCAR BENASAYAGAN, F. “La privatización como innovación: privación y exclusión social en Argentina”, Scripta Nova, Universidad de Barcelona , Nº 69 (79), 2000.
- NICOLETTI, M. A. CONICET/Neuquén. “Antecedentes y formación de la pastoral de migraciones en el Neuquén (fines del siglo XIX hasta la actualidad)”. VI Seminario sobre Iglesia e inmigración. CEMLA.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- NICOLETTI, M.A. CONICET/Neuquén, Cátedra Libre “Don Jaime De Nevares” Pastoral de Migraciones y Universidad Nacional del Comahue. “Lo contingente y lo permanente en la atención Pastoral de los migrantes chilenos en Neuquen”. VII Seminario sobre Iglesia e Inmigración. Buenos Aires, 1-2 junio de 2001.
- Nueva Mayoría (2000) “Corte de ruta desde 1997. 681 cortes de ruta desde 1997 en Argentina”. En: www.nuevamayoria.com
- Nueva Mayoría (2000) “los cortes de ruta desplazaron a los paros y los saqueos como expresión de protesta social en Argentina”. En: www.nuevamayoria.com
- NUN, J. (2001) Marginalidad y exclusión social. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- O’DONELL, G. (1997) “Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización”. Piados. Buenos Aires.
- OSZLAK, O. (1982) “La formación del Estado argentino”. Ed. Manantial, Buenos Aires.
- PORTES, A. (s/f). “El capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”. Departamento de sociología, Universidad de Princeton, New Jersey
- RADOVICH, J.C. y BALAZOTE, A. (s/f) “Efectos sociales de la privatización de YPF en la provincia del Neuquén.” Versión policopiado.
- ROBERTS, B. (2001) “Las nuevas políticas sociales en América Latina y el desarrollo de ciudadanía: una perspectiva de interfaz”. Documento elaborado para el Taller Agencia, Conocimiento y Poder. Nuevas direcciones. Wageningen.
- ROZITCHNER, L. (2002) “¿Cómo pensar la crisis argentina?”. En: Actualidad Psicológica, mayo 2002, pg. 2-5..
- SÁNCHEZ, P. (1997) “El Cutralcazo. La pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul”. Agora, Buenos Aires.
- SANTOS, R. (1997). “Tres años de combate de clase en Neuquén”. www.po.org.ar revista, edm, Número 17, julio 1997 año 6, pág. 24 a 45.
- SCHUSTER, F. (1999) “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectiva de una forma de acción política”. Buenos Aires, versión policopiado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- SCRIBANO, A. (1999) “Argentina “cortada”: corte de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste”. En: Lucha popular, democracia, neoliberalismo: Protesta popular en América Latina en los años del ajuste. Ed. Nueva Sociedad, Venezuela.
- SHAIKH, H. (1996) “Argentina Privatization Program. A Review of Five Cases.” The World Bank. Washington.
- SVAMPA, M. (2002) “Segunda Parte: organizaciones de trabajadores desocupados. Un estudio de caso: el modelo Moscón”. Cedes.
- THWAITES REY, M. “La política de privatizaciones en la Argentina. Consideraciones a partir del caso Aerolíneas Argentinas”. Revista Realidad Económica N° 116.
- TORRES, P. (2002). “Votos, chapas y fideos. Clientelismo político y ayuda social”. Ed. de la Campana. La Plata, Buenos Aires.
- ZICCARDI, A. (2001) “Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. CLACSO, Argentina.

37. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO HERRERA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Lo primero que quiero remarcar es que el proyecto en consideración es la clase de iniciativa en la que necesariamente un militante y un dirigente político desean expresar a viva voz su posición política.

En este marco, todos los diputados nos sentimos con el compromiso y la necesidad de decir que estamos en un día histórico, importante, trascendente, que sin lugar a dudas tiene que ver con lo que profundamente sentimos respecto de la oportunidad que nos dio nuestra presidenta con el envío de este proyecto de ley para que avancemos en la soberanía energética, en la nacionalización de YPF, en la estrategia de desarrollo y crecimiento del país.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El desarrollo de la Argentina está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados, como el que venimos manteniendo desde hace 9 años, como no se producía en toda nuestra historia como país. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo, en el caso argentino es fundamental el autoabastecimiento. Para lograrlo es imperiosa la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera nacional YPF en manos de la española Repsol, como la declaración de interés público autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.

Es indispensable una ley que pase a integrar el podio de las principales iniciativas de reparación de los efectos devastadores de la reestructuración neoliberal de los noventa. Sin lugar a dudas, esta ley se inscribe en algunos aspectos centrales que desde 2003 fueron llevados adelante. Esta ley se inscribe en la renegociación de la deuda externa, que bajó de 160 por ciento del PBI al 41 por ciento; se inscribe en la posibilidad que tuvimos después de saldar la deuda con el Fondo Monetario y de tener una política económica autónoma; se inscribe en la nacionalización de numerosas empresas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del país; se inscribe en la nacionalización de los fondos de las AFJP que puso fin al negocio especulativo de bancos y compañías de seguros con el dinero y aportes previsionales de los trabajadores y jubilados y con la cobertura social de los sectores más vulnerables. Sin lugar a dudas, esa norma también fue tan importante como ésta, porque posibilitó tanto la movilidad jubilatoria como la asignación universal por hijo. Esta ley se inscribe en el camino que recientemente hemos votado, de acotar la extranjerización de las tierras. También se inscribe en dos columnas vertebrales de este modelo: sin primero, el de la integración latinoamericana a partir del “No al ALCA” del 2005, y la segunda, la integración a un orden global a partir de una mirada nacional y regional.

Así podríamos continuar. Durante años, hemos apuntado principalmente a garantizar el acceso de los usuarios a precios accesibles en medio de un contexto socio político diferente (salida de la crisis); ahora, es el turno de profundizar los esfuerzos para retomar un mandato histórico: la búsqueda de soberanía hidrocarburífera, justo cuando el mundo nos recuerda su rol estratégico todos los días con las guerras por los recursos naturales.

Más que dialéctica, entonces, se trata del mandato histórico de la tradición nacional popular argentina, cuyo hilo conceptual une al primer peronismo con Cristina Fernández de Kirchner. Un cruce dialéctico cuyo principales respaldos son el artículo 40 de la Constitución de 1949 (“la propiedad inalienable e imprescriptible” de los recursos naturales) y este proyecto de ley.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Para terminar, como militante político encuadrado en este proyecto nacional y popular que conduce la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, deseo expresar mi orgullo y agradecimiento, al permitirme ser parte de la construcción de una Argentina más justa, más libre y más soberana.

38. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO IBARRA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Tengo el honor de ser parte, como diputado de la Nación, de este importante debate que hoy estamos dando respecto de la SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Digo que tengo el honor, porque más allá del contenido del texto específico del proyecto que estamos tratando, lo que hoy debemos reafirmar, es la convicción de que no se puede pensar y planificar el desarrollo del país, sin tener el control de la producción de los hidrocarburos entre otros recursos estratégicos.

No es posible soñar con mayor desarrollo, más crecimiento, más fuentes de trabajo, más distribución sin manejar cuidadosamente, patrióticamente, los recursos necesarios para ello.

No es posible construir un país con identidad sin poner todos los recursos de los argentinos al servicio de los argentinos.

Y aquí propongo detenerme en lo que considero la centralidad de este debate, después de muchas horas de imputaciones cruzadas entre los promotores de una YPF privada vergonzante y los de una YPF estatal vergonzante en la década de los 90.

Sí, somos nosotros como sociedad el motivo, mejor dicho, el fracaso; somos nosotros, no es lo privado y lo estatal el motivo de nuestras frustraciones.

Somos nosotros los que nunca estamos dispuestos a oír.

Somos nosotros los que nunca estamos dispuestos a estudiar.

Somos nosotros los que nunca estamos dispuestos a proyectar.

Somos nosotros los que nunca estamos dispuestos a planificar.

Son las encuestas las que nos terminan gobernando. Para ello sólo hay que leer un libro de Mora y Araujo titulado *Por ensayo y error*.

¿Saben qué decían las encuestas de opinión pública en la década del 90? El 85 % de la sociedad argentina apoyaba las privatizaciones: ¡Qué casualidad, los mismos guarismos de las encuestas, ahora, en la actualidad, que apoyan la estatización!

Por eso, pretendo formar parte de la generación de la responsabilidad. La generación de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la responsabilidad es la que veinte años después no se tenga que desdecir de lo que hoy estamos votando aquí, en este Parlamento nacional.

Es imperdonable lo hecho durante la década del 90, pero también lo es el desmanejo, la falta de celo en la política de hidrocarburos en la Argentina actual.

Nadie vio durante estos años la caída en la producción de crudo.

Nadie vio cómo retrocedíamos en el posicionamiento de producción de hidrocarburos.

Nadie cotejó el incremento de las importaciones; nadie observó cómo liquidaban dividendos. Es fácil la respuesta; nadie es el personaje más famoso de la Argentina.

Los problemas planteados por la falta de energía, en general y su impacto negativo en el crecimiento de la producción, deben ser tomados con seriedad. El debate no debe agotarse en Repsol; el debate debe seguir para asegurar que la situación a la que llegó la empresa YPF, en manos privadas, no vuelva a pasar en otros sectores productores y distribuidores de energía de otro origen, como la hidroeléctrica, la eólica y la nuclear.

Claro que comparto el concepto de que el Estado debe tener el control de la producción de hidrocarburos, pero también debe tenerlo sobre toda la matriz energética, en todas las áreas, y debe tener capacidad, además, para ejercer todos los controles: de inversiones, de mantenimiento de reservas, de distribución, de impacto ambiental, etc. Todos los que sean necesarios para asegurar la provisión de todo tipo de energía a un valor equilibrado, que haga competitiva la industria nacional y asegure calidad de vida para todo el pueblo argentino.

Este proyecto nos pone un dilema votar por lo que vemos o por lo que creemos. Porque Creo en un país que maneje sus recursos hidrocarburíferos, creo en un país que maneje las energías necesarias para construir la Argentina que viene, No me perdonaría, no sería yo si votara en contra de lo que creo, creo en un país comprometido con sus recursos. Creo en una gran empresa nacional de hidrocarburos con participación privada, creo en una gran empresa nacional minera con participación privada, creo en un gran banco de desarrollo que financie los sueños de los argentinos.

Creo que hoy, en esta iniciativa, el Gobierno cuenta con mucho más que, solo, los votos. Cuenta con el compromiso de los legisladores opositores que hoy estamos aquí, para discutir seriamente, sin palos en la rueda, y sin especulaciones electorales, una política energética integral, seria, estratégica, que sea claramente y sin confusiones, una verdadera política de Estado.

39. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO JUNIO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La historia reciente demostró que en la gestión de los servicios públicos estratégicos, tanto en la explotación de las riquezas naturales como en la prestación de servicios, el sector privado tiene una contradicción insalvable: sus planes de negocio son absolutamente opuestos a los objetivos sociales y políticos de un servicio para la comunidad y los intereses de una Nación, porque tanto las empresas multinacionales como las locales persiguen la maximización de ganancias.

Obviamente hablamos de grandes corporaciones, ya que las PYMES no tienen el volumen suficiente para abordar estos emprendimientos mayúsculos.

Consecuentemente con este rasgo inevitable, la corporación multinacional Repsol tuvo una estrategia de reducción de la producción y las reservas. Es clarísimo que la producción se realizó a costa de las reservas descubiertas antes de que Repsol compre la mayoría; es decir aquellos reservorios que fueran hallados por la YPF del Estado argentino.

Les pido a mis pares que razonemos juntos: si se pierden reservas, una empresa petrolera se descapitaliza, en consecuencia marcharía hacia el abismo.

Por eso cabe preguntarse, como empresa, Repsol, ¿estaba errando el rumbo? ¡No! No fue un error. Su conducta fue el seguimiento de un plan deliberado y estratégico que consistía en la extracción de las reservas existentes, el aprovechamiento del gran precio internacional y, posteriormente, el retiro de las utilidades, las que extraídas desde las entrañas de nuestro suelo con el esfuerzo de nuestros trabajadores, eran llevadas a su matriz ultramarina para expandirse en otros lugares.

O sea, el más clásico saqueo del coloniaje. Aplicaron una línea muy parecida a la del imperio durante el Virreinato en relación con los minerales: extractivismo colonial y remisión a la metrópolis. En la colonia, fue el oro de Zacatecos y la plata del cerro Potosí, y ahora es el Oro Negro del Petróleo.

Por eso hoy, con esta gran decisión política, estamos generando un trascendente acto de reparación, que rompe definitivamente uno de los nudos gordianos del dogma neoliberal y del rol del poder neoliberal. Se comprende entonces la razón que motiva a los neoliberales derechistas a oponerse frontalmente a la decisión de expropiación. Mediante este acto de soberanía estamos restituyendo un patrimonio económico decisivo para el futuro de nuestro pueblo, y recuperando un símbolo esencial, identitario de los argentinos. Cobra sentido nuevamente el símbolo de YPF como expresión colectiva de nuestra nacionalidad.

A esta altura, es justo agregar que el comportamiento de la empresa Repsol, no es sólo un afán exclusivo de los españoles y sus socios, como actitudes circunstanciales de otras nacionalidades. Aquí también hay que incluir a los socios locales de la empresa.

Con el mismo sentido actúan los grandes oligopolios del agronegocio, de la minería, de los grandes exportadores de nuestros granos, de las corporaciones que controlan la producción de alimentos y de los monopolios comerciales, que controlan lo sustancial del abastecimiento para el consumo de nuestro pueblo.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Es imposible no asociar a este planteo que involucra a los oligopolios, el hecho de que son esos mismos grupos concentrados los formadores de precios, que confiscan a los trabajadores los ingresos que logran en paritarias o mediante los planes sociales que aporta el Estado. Son esos mismos grupos los verdaderos fabricantes de la inflación. Por eso creo que la trascendente decisión que hoy tomará este Parlamento, nos fortalece para ir por más transformaciones.

Desde su inicio, la batalla por el petróleo fue una lucha entre los defensores de la explotación estatal y los partidarios de las compañías extranjeras. Antes y después de Mosconi. Ese fue desde hace un siglo el principal dilema político que se dirime en esta batalla.

Silenzi de Stagni en su prólogo al libro de Raúl Larra, Mosconi general del petróleo, escribe que la discrepancia o escaramuza inicial sucedió cuando se enviaron desde Comodoro Rivadavia las primeras muestras de petróleo para su análisis a dos laboratorios.

Uno era de la Compañía Nacional de Aceites de Campana, subsidiaria de la Standard Oil, y el otro era el Laboratorio Químico del Ministerio de Agricultura de la Nación. Mientras el primero, ligado a capitales extranjeros, dijo que se trataba “de un asfalto de calidad inferior, no sirviendo de combustible y que la explotación de esa materia prima por medio de la destilación y comercialización no será provechosa”, el laboratorio estatal expresaba que era “un excelente combustible mineral, tanto por su valor calórico como por la ausencia de sustancias nocivas”.

Está claro entonces que, desde el inicio de esta crucial batalla, los oligopolios mintieron como lo hacen siempre.

La mentira y su falta de moral están insalvablemente ligadas a su objeto social: la maximización de las ganancias. Su único Dios es el lucro.

Como decíamos al inicio, la contradicción es insalvable y este ejemplo es contundente. YPF nació en lucha contra los monopolios; en esa lucha, tuvo un extraordinario desarrollo, transformándose en la empresa más grande y útil de la Nación.

Otro mojón interesante para tener en cuenta en nuestro debate es el conocido históricamente como el tema de “la WICO”.

“La WICO, empresa norteamericana, filial de la Standard Oil, única expendedora en el país de nafta de aviación, se negó a suministrarla si el servicio aeronáutico del Ejército Argentino no le pagaba el combustible por adelantado”

Años después, nos cuenta el mismo Mosconi en sus memorias: “Allí, ese mismo día, en el mismo escritorio del gerente de aquella compañía, me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales para romper los trusts”.

Es que en ese instante, Mosconi comprendió la situación de peligro e inferioridad del país. Nuestra producción dependía de producción económica de una empresa extranjera, que ejercía un poder autónomo del propio Estado nacional.

Por eso, en esa crucial circunstancia, tomó un compromiso que marcó su vida y la de nuestra patria. Esta actitud le hace decir a Larra que: “Allí Mosconi ve la patria inerme, desvalida y a merced de los mercaderes.”

Desde ese impulso nacerá YPF. Desde la pulsión del que se niega a la sumisión ante los poderosos y se afirma en la idea de la soberanía nacional.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Ciertamente, en los 90 sufrimos una gran derrota: la empresa fue privatizada a favor de un nuevo y advenedizo grupo privado que obviamente saqueó nuestra riqueza petrolera. Hoy, este Parlamento reparará ese grave daño, y decidirá su retorno a la órbita de la Nación. Sin embargo, no podemos desconocer que habrá que enfrentar un bloque de poder económico, político, mediático y cultural de los grandes capitales locales y extranjeros, ni que ese bloque recibirá el aliento de un mundo capitalista en crisis y que, por lo tanto, irá adquiriendo ribetes impensados, cada vez más agresivos, en su afán por mantener y acrecentar sus riquezas y privilegios.

Una vez más, la Nación recupera su acervo y patrimonio. Lo hace confrontando con los grandes poderes mundiales y locales, pero como nos legó José de San Martín: “Para los hombres y mujeres de coraje se han hecho las empresas”.

La Academia de Historia admitirá mi licencia de adaptar la famosa frase Sanmartiniana, incorporando a las mujeres, ya que en esta circunstancia histórica, la valentía le corresponde principalmente a una mujer: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para ir terminando, quisiera hacer una observación desde los ojos de la historia. De la historia con esperanza, aquella que mira el pasado desde los compromisos y dilemas del presente y tiene al futuro como perspectiva y sueños a realizar.

En esta búsqueda, sigo al gran Cervantes: “la historia es madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir...”.

Y así como en la historia de los pueblos existen fracturas, también hay continuidades y consecuentemente herencias culturales.

Hoy, este hecho se ve reflejado entre nosotros, ya que por un lado y a través de diversas expresiones políticas partidarias, con los más variados matices, una gran mayoría de representantes del pueblo en sintonía con su historia le dice “sí” a YPF. Y, por otro lado, una minoría adoptará posiciones opuestas, expresando la visión política de derecha. Algunos votarán en contra, otros se retirarán, pero ambos expresan una posición tendiente a construir un nuevo polo conservador tras la candidatura de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.

Se genera así una interesante y novedosa divisoria de aguas, propia de los momentos cruciales de la historia.

Hoy, votan a favor de esta doctrina nacional los continuadores de Yrigoyen que crearon YPF bajo la dirección emblemática de aquel general del petróleo que fue Enrique Mosconi.

Votamos los herederos de quienes al final de la década del 20 formaron distintas organizaciones para defender el petróleo argentino. Una de ellas fue la Alianza Continental, donde militaban el general Alonso Baldrich, Arturo Orzábal Quintana, Moisés Lebensohn, Diego Luis Molinari y Arturo Orgaz; mientras que otros argentinos como José Ingenieros, Alfredo Palacios, Gabriel Del Mazo y Julio V. González crearon la Unión Latinoamericana, y otros hicieron lo propio con la Liga Antiimperialista Argentina.

Y hoy aquí también votan por lo nacional quienes se sienten orgullosos herederos del 40 de la Constitución Nacional de 1949, cuando afirmaba que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación...”.

Y también hoy impulsamos lo nacional que crece, quienes rescatamos la figura de aquel miembro informante que fue Arturo Sampay, cuando expresaba: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma` y cuya deposición, que impidió nacionalizar la ley que nacionalizaba el petróleo, fue festejada `por los ricos terratenientes`-según acota Waldo Frank, testigo del 6 de septiembre-sacando de sus bodegas el champagne de las mejores vendimias para acompañar el menú de los petroleros americanos”.

Señor Presidente, hoy esta continuidad histórica contribuye en parte, a sanear las fracturas hechas por los golpes con olor a petróleo o las del vendaval noventista impuesto por el “Consenso de Washington”.

De esta manera se comprueba una vez más que “La historia no es una suma de hechos aislados sino un conjunto de procesos sociales”

Por eso hoy festejamos que llegaron nuevos tiempos. Y arribaron rescatando las mejores tradiciones y continuidades nacionales y populares de nuestra historia que, en definitiva, son el sostén de nuestro viaje emancipador.

¡Claro! No somos ingenuos. Sabemos que el trayecto entre este hoy y el mañana es un largo y difícil camino, pero hoy damos otro paso para poder festejar el futuro. Porque como dijo alguien éticamente intachable: “Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad”.

Y en ese camino es que alertamos sobre las más diversas y perversas técnicas que utilizan los enemigos de los intereses de la Patria, los que se declaman liberales pero cuando les interesa se disfrazan de estadistas.

Estas conductas las realizan sobre la base de un andamiaje apoyado en las multinacionales ligadas a sus voceras corporaciones mediáticas.

Y por supuesto que no lo hacen sólo en Argentina. También América padece esa cultura invasora. Con ello persiguen tirar abajo las conquistas y avances sociales que han logrado nuestros pueblos de la mano de gobiernos nacionales y populares.

Sobre esa falsa defensa de ideas liberales esconden agazapados su peor designio: Esmerilar la fortaleza de los Estados para que una vez inermes éstos se arrodillen ante las corporaciones.

Recordemos aquel apotegma propagandístico del neoliberalismo de Neustadt: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Es que a esa cultura, en definitiva, lo que le perturba es la disputa de la renta, ya sea material o simbólica. Por eso, están siempre en contra del fortalecimiento del Estado.

Y por supuesto que no hablamos de un Estado ineficiente.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que es fundamental que la democracia tenga PODER, es decir capacidad para actuar de manera efectiva frente a los problemas sociales a fin de expandir ciudadanía.

Para enfrentar el déficit de nuestras democracias hace falta poder democrático y éste se constituye en la estabilidad y con un Estado que garantice democratizar a las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

instituciones y a la sociedad.

En América Latina, las grandes mayorías populares y sus gobiernos están construyendo un nuevo futuro, a partir del reconocimiento de las derrotas pasadas sobre la Gran Patria Americana.

Por eso, a quienes minoritariamente no piensan acompañar con su voto la expropiación del 51% de YPF, les hablamos con las palabras de Mosconi: "Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a este con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtienen, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera".

Y antes de terminar, quiero rendir homenaje al presidente Kirchner, quien ya en el 2003 enfrentó a los grandes bonetes de la Cámara de Comercio y de la Confederación Española de Empresas. El choque fue tan fuerte que su presidente, José Cuevas, se vio obligado a decir el ya famoso: "Usted nos ha puesto a parir".

Y por supuesto que es mi deseo también expresar que, con esta gran decisión, rendimos nuestro homenaje al General Enrique Mosconi, un auténtico General Sanmartiniano, a poco de que se cumplan 90 años de la fundación de YPF, durante el gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen.

Por estos motivos, Señor Presidente es que adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento; muchas gracias.

40. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LANDAU

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

He escuchado las manifestaciones de algunos miembros de este cuerpo que corresponden a la oposición. He leído también lo que muchos de ellos han expresado a los medios de comunicación, y advierto que una vez más pierden de vista lo principal y rebuscan en las formas para encontrar observaciones que formular a un proyecto de ley que se ajusta totalmente a la normativa constitucional, artículo 17, y a la normativa legal, ley 21.459 y artículo 2.511 del Código Civil.

La expropiación, en nuestro derecho, prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional significa, al decir de Joaquín V. González "... tomar la propiedad del particular para ser empleada en provecho, comodidad o progreso de la comunidad." El



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

requisito constitucional establecido en el artículo 17 de la CN es que la expropiación debe ser “por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”. Por allí se ha escuchado la palabra “confiscación”. Se ha pretendido que el proyecto no trata de una expropiación sino de una confiscación, o sea que se pretende tomar la propiedad sin contraprestación alguna ni indemnización al particular titular de dicha propiedad.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación es claro: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de las acciones de Repsol en YPF. No confisca, declara que el patrimonio está sujeto a expropiación por causa de utilidad pública y que, consecuentemente deben cumplirse todos los extremos constitucionales y legales para tal expropiación.

La utilidad pública que se declara en el proyecto y que es presupuesto de la expropiación, es el interés social y comunitario que tienen las acciones de la empresa por su vinculación con la necesidad de gestión tendiente al autoabastecimiento de hidrocarburos para el desarrollo nacional.

¿Va a pagar el Estado Argentino a Repsol el 51 % de las acciones que posee en YPF? Por supuesto que sí; va a pagar el valor de su patrimonio. ¿Va a recibir Repsol la totalidad de ese valor? Repsol va a recibir el valor de su patrimonio al que se le descontarán los pasivos que el Estado deberá afrontar luego de la expropiación.

¿Entonces es una confiscación como han dicho algunos medios y se han hecho eco algunos políticos opositores?

De ninguna manera, es una expropiación absolutamente constitucional y una compensación absolutamente legal. Cualquier diferencia de criterios entre el valor patrimonial de las acciones y la compensación por deudas será zanjada por la Justicia.

¿Se ha producido ya la expropiación? No. Una vez que se sanciona la ley que declara la utilidad pública, el Tribunal de Tasaciones fijará el valor del patrimonio a expropiar, como establecen los artículos 11 y 12 del proyecto, y al hacerse efectivo el pago de tal valor se producirá la expropiación. Se cumplirán así todos los pasos previos constitucionales y legales del instituto de la expropiación.

Quiero hacer una especial referencia a la intervención dictada por decreto de necesidad y urgencia 530/2012.

Mientras dura el trámite legislativo resulta indispensable que la empresa sea transitoriamente “ocupada” para develar lo que se encontraba oculto por el secreto empresario: lo que no figura en los balances, los resultados de las prospecciones, los nuevos yacimientos, las investigaciones, etc. La propia ley de expropiaciones prevé este instituto: es la “ocupación temporánea”. Si nos atenemos a la propia ley de expropiaciones, no era necesario dictar tal decreto, era suficiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59, aplicar el instituto de la ocupación temporánea que confiere la “potestad a la autoridad administrativa, por causa de utilidad pública, en caso de necesidad, de ocupar o usar transitoriamente un bien o cosas determinadas, muebles o inmuebles, o bien una universalidad determinada de ellos”. Este instituto se encuentra previsto también en el artículo 2.512 del Código Civil. Que quede claro: para ocupar la empresa no era necesario como pretendieron algunos solicitar la intervención judicial de la misma. Era suficiente un decreto presidencial para realizar la ocupación; sin embargo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la señora presidenta de la Nación prefirió dictar un DNU para dar intervención al Congreso de la Nación, para otorgar al acto mayor transparencia. El decreto 530 ha obtenido dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo quedando así también legitimados sus interventores.

Por ello, tampoco se han violado las formas, como pretenden algunos. La intervención se funda en una figura legal y el proyecto de ley tiene todos los requisitos constitucionales y legales para su sanción. Creo que no hay dudas de la causa de utilidad pública que fundamenta el proyecto y se encuentra extensamente desarrollada en el mensaje que lo acompaña. La expropiación recién se consolidará una vez pagado el justo precio que corresponda de acuerdo al trámite previsto en la ley.

Párrafo aparte merece la mentada falta de “seguridad jurídica”. La seguridad jurídica es la certeza que da el Estado que el estatus jurídico de una persona no será modificado sino por los procedimientos previa y debidamente publicados.

El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscripto hace 20 años entre la Argentina y España, contempla el instituto de la expropiación por causa de utilidad pública, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional, al igual que la ley de expropiaciones 21.459 y el artículo 2511 del Código Civil estaban vigentes al momento de suscribirse el acuerdo y al momento de la privatización de YPF. ¿Qué pretenden, que en aras de una “seguridad jurídica” especial para el inversor se deje de lado toda la legislación nacional vigente al momento de la firma del acuerdo y se establezca un estatus jurídico diferente y sin normativa nacional? Pero, además, la expropiación se encuentra expresamente prevista en el artículo V del acuerdo suscripto en 1992.

El artículo 17 de la Constitución Nacional no ha modificado su redacción en lo atinente a la expropiación, desde su texto originario de 1853. El mismo es análogo al artículo 33, inciso 3, de la Constitución española.

También se ha hablado de la supuesta competencia de tribunales internacionales en este tema. Nada más erróneo. El artículo X del acuerdo, ratificado por ley 24.118, establece para la SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE E INVERSORES DE LA OTRA PARTE que si no pudieran ser dirimidas amigablemente “será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión.” Recién en caso de que los tribunales nacionales no se pronuncien en un plazo de 18 meses desde planteada la controversia, se podrá recurrir a tribunales arbitrales. No cabe duda pues de que si en la Argentina se produjo la inversión, o desinversión en este caso, los tribunales competentes en primer término son los argentinos.

Advierto que la estrategia jurídica de la empresa y de los medios de comunicación de difusión nacional, aunque muy poco nacionales, que la apoyan, apunta a instalar la idea de la arbitrariedad y de la confiscación para soslayar al Tribunal de Tasaciones, a los tribunales argentinos y recurrir a un arbitraje sin esperar los plazos que el propio acuerdo establece.

Queda claro que la estrategia jurídica de la empresa Repsol apunta a instalar la idea de la arbitrariedad y la confiscación, de modo de demostrar que en la Argentina no existe el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Estado de derecho y que el gobierno la ha discriminado apartándose de lo determinado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Para terminar ES MENTIRA QUE NO SE VAYA A INDEMNIZAR. ES MENTIRA QUE NO SE RESPETE LA CONSTITUCIÓN. ES MENTIRA QUE NO SE RESPETE LA LEY. ES MENTIRA QUE SE HAYA INTERVENIDO LA EMPRESA ILEGALMENTE. ES MENTIRA QUE NO EXISTA UTILIDAD PÚBLICA. ES MENTIRA QUE SE CONFISQUE. ES MENTIRA QUE SE DISCRIMINE A REPSOL.

La única verdad es que la expropiación de YPF significa la recuperación por un Estado soberano de la explotación de sus recursos naturales para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos.

Finalmente, quiero expresar mi profundo reconocimiento a la valentía de este gobierno que quiere revertir los errores en que incurrieron gobiernos anteriores, aunque fueran del mismo signo político que el partido gobernante.

La cuestión de fondo es primordial: el autoabastecimiento de hidrocarburos es un derecho inalienable del Estado argentino y de su pueblo. Celebro que esta decisión se encuentre apoyada por tantas voluntades opositoras. Esto demuestra que se trata de una cuestión de estado que va más allá de oficialismos y oposiciones transitorias.

Durante años fuimos pacientes esperando que una empresa privada cumpliera este objetivo. La realidad ha demostrado que su único interés era obtener beneficios para desarrollar su actividad en otros países e importar lo que no extraía a valores más caros. La presidenta ha dado muestras, una vez más (y van...) que tiene la voluntad política de incorporar a nuestro país en el contexto mundial no como productor de materias primas solamente, sino como un país que busca afianzar su desarrollo, y que ello se traduzca en mayor bienestar e inclusión social para nuestro pueblo.

41. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LEDESMA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero expresar mi satisfacción por este día, un día histórico, donde YPF ha vuelto a manos de los argentinos, de donde nunca debió irse. Festejo con mucha alegría la decisión que el Congreso de la Nación ha tomado y también me produce un tremendo orgullo que se haya entonado la marcha peronista en este recinto.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Mas allá de la alegría que me produce la sanción de esta ley quiero dejar asentada una aclaración con respecto a este artículo.

En este proyecto de ley se expropián las acciones de Repsol pero no las del grupo Petersen. Esto le puede servir de argumento a Repsol en el juicio que probablemente le haga a la Argentina.

No se puede discriminar entre la empresa argentina y la empresa española ya que el tratado bilateral de inversión, firmado entre los dos países, garantiza la igualdad entre inversores españoles e inversores argentinos, de acuerdo con los artículos 3° y 5° de dicho tratado.

El artículo 3° establece que cada país “protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, o inversores de la otra parte y no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones”

Y el artículo 5° establece que: “La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una parte contra las inversiones de inversores de la otra parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derechohabiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”. Con lo cual seguramente los españoles se escuden en este tratado para justificar su denuncia frente al CIADI u organismo que efectúe la denuncia.

Pero además considero que los Eskenazy también son responsables de la mala administración de YPF, porque ellos lo único que hicieron fue retirar utilidades, sin poner un solo peso en la empresa, con lo cual me hubiera gustado que también se expropien las acciones del grupo Petersen.

Espero que esta ley sea el primer paso para que el Estado nacional y las provincias tengan en su poder el 100 % de las acciones de YPF.

42. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LINARES

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Retomando parte de los conceptos emitidos en la sesión del día de ayer, miércoles 2 de mayo de 2012, y profundizando otros que me resulta indispensable desarrollar, es que quería comenzar diciendo que la recuperación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y el autoabastecimiento energético que permita superar la crisis en la que se encuentra el sector, resulta una tarea prioritaria y urgente en la Argentina.

Para ello debemos revisar todas las concesiones y derogar todo el esquema jurídico vigente. Sólo de esa manera el Estado nacional podrá retomar el control de la política hidrocarburífera.

Debemos poner fin a un sistema perverso que permite que las empresas privatizadas sigan transfiriendo enormes ganancias a sus países de origen para sus colocaciones financieras, sobre la base de la depredación de nuestros recursos naturales. Ganancias derivadas de marcos regulatorios y regímenes tarifarios o de libertad de precios que las favorecen, además de desgravaciones, exenciones, subsidios y prebendas de todo tipo.

Una YPF 100% estatal será necesaria para recuperar la soberanía sobre la totalidad del sector, así como avanzar sobre el 49% restante de las acciones de la empresa y el 70% de la extracción y producción que no controla YPF y sigue en manos privadas.

Para esto, y como paso previo, debemos realizar una auditoría integral de todas las áreas hidrocarburíferas, revirtiendo las concesiones en las que se verifique una subexplotación de las mismas. Reservas que por cierto nadie conoce, ni siquiera el propio gobierno nacional, siendo que no se han realizado auditorías y las empresas extraen los recursos a través de una simple declaración jurada, es decir, sin ningún tipo de control estatal.

Con todo esto en mente es que consideramos indispensable un debate amplio en torno de las condiciones en que se realizará la compra por parte del Estado nacional del 51% de las acciones del total de la compañía, si corresponde o no el pago de indemnización, y cómo avanzar en las necesarias auditorías sobre el patrimonio de la empresa, las cuales seguramente pondrán en evidencia la depredación realizada en los pozos concesionados, la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante el tiempo que Repsol estuvo a cargo de YPF, así como los pasivos ambientales que ha dejado.

También debemos discutir la estrategia de gestión que asumirá la nueva empresa, el rol del Estado nacional y los gobiernos provinciales en el mercado energético, así como el de los organismos de control y el Parlamento.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Vale también la pena destacar, como expresaron mis compañeras/os de bloque, que el artículo 15 del anunciado proyecto sustrae a la sociedad mixta con participación mayoritaria estatal -es decir, la nueva YPF- de los controles de organismos públicos como la Auditoría General de la Nación -AGN- o la Sindicatura General de la Nación -SIGEN-.

Por supuesto, la medida anunciada es un paso que nadie que defienda los intereses nacionales puede estar en contra, y menos los que nos opusimos a la privatización de YPF, que llevó adelante Menem y que Néstor Kirchner y Cristina Fernández avalaron e impulsaron, aunque ahora nieguen su responsabilidad. Pero esta medida no alcanza para recuperar la soberanía energética perdida.

Aquí hay dos grandes responsables de la pérdida de soberanía energética. Por un lado, el gobierno que avaló y garantizó los millonarios negociados privados. En efecto, la actual situación no puede explicarse más que por la ausencia de control estatal y de un plan integral de mediano plazo, junto con la participación -a través de empresarios amigos y testaferros- en fabulosos negociados.

El otro gran responsable es Repsol, que desde que se hizo cargo de YPF viene saqueando nuestros recursos, llevándose la riqueza nacional para financiar la expansión multinacional de su empresa -incluidos otros países de la región-, obteniendo desde el año 1999 a la fecha una ganancia neta de 16.450 millones de dólares, de los cuales 13.246 millones fueron distribuidos como dividendos, lo que significa que más del 80% de las ganancias de Repsol fueron sacados del país para financiar la expansión de la empresa en otras partes del mundo.

Luego de más de 10 años, el balance de la privatización de YPF y de la continuidad -y evidente fracaso- del modelo energético neoliberal nos deja como resultado la consolidación de un oligopolio privado, integrado verticalmente, que sobreexplotó los recursos naturales no renovables, subexploró y en consecuencia redujo el actual horizonte de reservas, imposibilitado de garantizar la provisión interna frente al crecimiento de la demanda y la reorientación hacia el mercado externo, consolidando de tal forma la pérdida del autoabastecimiento energético nacional, la necesidad de importación de combustibles, todo esto acompañado y financiado por un aumento exponencial de los subsidios y las tarifas de los servicios de gas y electricidad (que se genera principalmente a través del gas), así como de los precios de las garrafas que consumen los sectores más necesitados.

Vale aclarar que Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999, y a la fecha, considerando las ganancias obtenidas y acciones vendidas, la empresa española no solo recuperó su inversión inicial sino que se retiraría con un saldo positivo de 8.813 millones de dólares.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Para decirlo más claro aún: Repsol se ha dedicado durante todos estos años a aplicar una feroz política extractiva de corto plazo y sin invertir en reposición de reserva, maximizando ganancias y distribuyendo la mayor cantidad de ganancias posible.

Esta falta de reinversión de utilidades en nuestro país explica la caída sistemática de reservas y producción que obligó a la Argentina a importar combustibles (gas natural, fuel oil y gasoil), llegando el año pasado a la suma de 9.400 millones de dólares, el doble que en el 2010, y generando por primera vez en 17 años un saldo negativo en la balanza comercial en esta materia, déficit que alcanzó los 3.029 millones de dólares.

Esta importación de combustibles se dio, en el caso del gas, a través de los famosos y peligrosos buques metaneros que descargan en mi ciudad, Bahía Blanca, así como en Escobar. ENARSA es la responsable del proyecto, contratando, entre otras empresas, a Repsol YPF, quien se encontraba hasta hace poco a cargo de la ejecución técnica de la operación (desconocemos cuál es la situación actual con todos los cambios recientes). Hasta hace poco Repsol compraba el gas a Atlantic LNG de Trinidad y Tobago, la mayor planta de licuefacción de gas (de gas natural a GNL) del mundo, en la que Repsol participa con aproximadamente un 23%, junto a la British Petroleum que posee un 37,78% y British Gas, con un 28,89%. El gas que alimenta a Atlantic LNG proviene en su mayoría de los pozos 'off-shore' de bpTT, compañía en donde tiene una participación del 30%. Para su transporte utiliza los buques de la compañía Stream, en donde Repsol tiene una participación del 50%, junto con Gas Natural-SDG que tiene el otro 50%. De esta manera Repsol se aseguró los últimos años la provisión de gas natural a las empresas instaladas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, entre otras a las compañías Mega S.A., en la cual YPF S.A. tiene una participación del 38%, y Profértil, de la que posee el 50%.

En vista de lo anterior, la importación de gas en barcos se parece más a una operación intrafirma que a un intercambio comercial internacional. Desde ningún punto de vista, podemos aceptar la continuidad de un mecanismo que utiliza los recursos públicos - provenientes de los bolsillos de los propios consumidores- para ser destinados a ganancias privadas.

En este punto, y considerando todo lo anterior, nos preguntamos: ¿debemos indemnizar a los accionistas de Repsol, como anunció la señora presidenta? ¿Aceptará el pueblo argentino premiar el vaciamiento que significó la gestión de Repsol? ¿De dónde saldrá la plata para ello? ¿De los fondos de la ANSES, cuando el 80% de los jubilados cobra la mínima? ¿De los fondos del Banco Central, tan necesarios para desarrollar las economías provinciales, una política de vivienda, salud y educación integradora? Aún hay demasiados interrogantes; esperamos encontrar las respuestas en estos días de discusión parlamentaria.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Aquí también debemos ser claros: una recompra de la compañía con fondos públicos no sólo sería una estafa a todo el pueblo argentino, también dilapidaría el dinero que se necesita para realizar las inversiones necesarias para revertir esta desastrosa situación. En el mismo sentido, la mención hecha por la señora presidenta de que la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo de reservas de gas no convencional nos obliga a observar que la extracción de estos hidrocarburos tiene un altísimo costo económico, y que por el gran impacto ecológico y las cantidades de agua que exige, ya ha sido prohibida en países como Francia, y se encuentra en discusión en países como Irlanda del Norte, Bulgaria, Canadá y Suiza.

YPF debe ser una empresa 100% estatal, con participación plena de todas las provincias a partir de un criterio realmente federal, redistributivo, equitativo y solidario, y no sólo de aquellas que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI-.

Las eventuales ganancias que surjan de la gestión de YPF deben ser reinvertidas en la ampliación de la red de gas natural a todo el territorio nacional, de puntos de venta de garrafas a precios accesibles y justos, así como a diversificar la matriz energética a través de energías alternativas, renovables y no contaminantes.

Vale la pena recordar que casi el 40 por ciento de los hogares del país, es decir más de 15 millones de ciudadanos, no tiene acceso a las redes de gas natural, concentrándose la gran mayoría de ellos en algunas de las provincias más pobres del país, ubicadas en las regiones del Noroeste –NOA- y Noreste –NEA-, siendo que en ésta última casi el 100 por ciento de los hogares carece del servicio. Esto implica que la gran mayoría de esos hogares de escasos recursos tengan que abastecerse de ese servicio tan elemental como es el gas a través de garrafas.

YPF Gas, que es el principal distribuidor minorista de garrafas, y que fuera incluida en el proyecto de expropiación del gobierno, posee una clara posición dominante en lo que se refiere a producción y capacidad de transporte y almacenamiento. En numerosas oportunidades hemos denunciado que esta situación que presenta el mercado del gas licuado es resultado y consecuencia directa de la desregulación del sector, que dejó de considerar la comercialización de garrafas como un ‘servicio público’ para definirla ‘de interés público’, dejando así a criterio del mercado la formación de precios, profundizando de tal forma el proceso de concentración iniciado en los 90. El negocio de las garrafas queda evidenciado de esta manera como un claro ejemplo de cómo lucrar con los pobres, y es este el momento para revertir esta injusticia.

Por último, pero no por ello menos importante, resulta más que pertinente destacar la necesidad de saldar la deuda histórica que tiene el Estado nacional con los ex trabajadores de YPF y de Gas del Estado, que resistieron y sufrieron como nadie los terribles efectos de la entrega de nuestras empresas de bandera, y que después de tantos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

años de lucha siguen sin obtener el justo y legítimo reconocimiento de sus derechos de propiedad participada sobre las mismas. Vale la pena recordar que en esta Honorable Cámara se encuentra a la espera de ser tratado un proyecto de ley que prevé tal resarcimiento económico, que cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, y que esperamos será tratado y aprobado en breve por el pleno del cuerpo, teniendo en cuenta que siempre hubo un amplio consenso sobre el tema por parte de todas las fuerzas políticas.

Estamos convencidos que, llegado el inevitable fin del insostenible modelo de mercado, debe ser el energético el sector que encabece el cambio de las condiciones socioeconómicas que nos permitan, de una vez por todas, romper con la situación de dependencia en que nos encontramos, afianzando de tal manera una nación socialmente equitativa, geográficamente equilibrada y, esencialmente en lo político, soberana.

Para ello, la Argentina debe recuperar, a través del Estado, el autoabastecimiento energético perdido, además de recuperar una renta anual de 8.750 millones de dólares para ponerla al servicio de la industrialización del país con energía barata y para todos, revitalización de las economías provinciales, inversión en viviendas, salud y educación, así como en el desarrollo de energías renovables que permitan modificar la matriz energética actual, sumamente dependiente de los hidrocarburos -y en especial del gas-, todo enmarcado en una estratégica articulación energética sudamericana.

Si la actual gestión pretende mejorar el nivel de vida del pueblo, no sólo debe excluir de su gabinete a quienes adhieran a las mismas ideas neoliberales que guiaron a las administraciones anteriores, sino que también deberá dejar de compartir el poder con los grupos empresarios beneficiados por la aplicación de tales políticas. Nos genera algunas dudas si efectivamente es ésta la visión del gobierno nacional y sus consejeros, entre los que se destaca la figura de Roberto Dromi, uno de los grandes responsables de organizar la estructura jurídica del saqueo que significaron las privatizaciones menemistas.-

43. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MALDONADO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

A esta altura del debate no voy a reiterar todas las objeciones que se han planteado al proyecto de ley en examen.

Solamente, quiero expresar la voz de mi provincia, el Chaco, que como otras es privada de participar en la gestión y de todos los demás derechos sobre YPF.

Desde que se anunció este proyecto, hay una gran expectativa provincial para que la expropiación de Repsol nos incluya, junto a la totalidad de las provincias, en la distribución de la mitad del 51% del paquete accionario de control. No solamente a las 10 provincias actualmente productoras.

El Chaco cuenta con importantes reservas de petróleo y de gas. Hay 12 áreas factibles de exploración en el centro de la cuenca Noreste del país, hoy solo explotada en la vecina Formosa.

Por eso, en mi provincia aguardamos se active, a partir de ahora, la exploración que confirme los yacimientos de gas y de petróleo que nos auguran los antecedentes, la geología y todas las proyecciones realizadas por expertos.

La participación que espera tener el Chaco en YPF debería asegurarnos mayores recursos para la exploración petrolera. Ya no vamos a tener que tratar con una empresa privada, sino con una mixta de mayoría accionaria estatal.

Recientemente, la legislatura chaqueña aprobó por unanimidad una autorización para invertir 20 millones de pesos en el proceso de exploración petrolera en la provincia.

La nacionalización del paquete accionario de control de YPF, junto a la declaración del objetivo estratégico prioritario de autoabastecimiento de hidrocarburos, deben representar en los hechos un nuevo marco para el desarrollo regional.

Nuestro reclamo de participación en YPF debería encontrar razonablemente su fuente de financiamiento en parte de la rentabilidad que produzcan las acciones en manos de las provincias.

No aceptamos que pueda imaginarse la soberanía energética del país sin convertir a la nueva YPF en una empresa federal, con la participación de todas las provincias y de la Nación.

Las reservas y el patrimonio de YPF como empresa del Estado se ganaron durante años con impuestos que pagamos todos los argentinos, y los chaqueños debemos tener lugar donde se decida el futuro energético de nuestra provincia y de nuestra región.

Voy a apoyar este proyecto como un paso para recuperar el control de una parte de la renta petrolera nacional.

Pero quiero dejar planteado el precedente de mi más categórico reclamo por los derechos de mi provincia en YPF.

El Chaco quiere sentarse en el directorio de YPF y creo que le estamos negando



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

injustamente ese derecho.

Es una cuestión que hoy no quedará saldada, porque el oficialismo no va a cambiarle ni una coma a este proyecto de ley.

Pero juro ante todos ustedes que seguiremos legislando sobre YPF hasta llegar a una propuesta auténticamente federal, en resguardo de los derechos de mi provincia y de todas las demás que han sido marginadas. DOY MI VOTO BAJO ESE JURAMENTO.

De ninguna manera vamos a apostar al fracaso de recuperar YPF, pero queremos recuperarla para todos los argentinos.

Tanto en el reparto de las acciones y utilidades como en los asientos que corresponden en el directorio de la empresa.

No creemos que puedan garantizarse nuestros derechos con un Consejo Federal de Hidrocarburos de carácter meramente consultivo, que sólo podrá expedirse sobre las cuestiones, que el Poder Ejecutivo someta a su consideración.

Tampoco es aceptable que se pretenda subordinar a las provincias productoras, a través del voto sindicado en YPF, a las decisiones de la Casa Rosada.

En términos de coparticipación de la renta, se discrimina a las provincias cuando el fondo sojero se distribuye entre todas, -incluso en las provincias donde no se siembra- criterio que comparto, aunque pueda comprender algunas voces dirigidas a defender estos recursos para quienes los producen.

Sin embargo, ahora no se ha dispuesto distribuir de igual manera las retenciones y ganancias que provengan de YPF como empresa nacional.

Para terminar, quiero dejar planteado mi reclamo al gobierno nacional para que asuma la necesidad de acompañar esta iniciativa, con un verdadero cambio de nuestra política energética y una gestión eficiente de la empresa estatal, porque sólo así cobra sentido renacionalizar YPF.

De lo contrario, vamos a defraudar toda la expectativa petrolera que se ha abierto en nuestras provincias y en una mayoría de la sociedad argentina.

Sepan asumir que estamos frente a una decisión que exige coherencia para superar graves retrocesos y que hace falta un cambio de política, porque la recuperación parcial de YPF no alcanza, ni resuelve la crisis energética que atraviesa el país.

Pero temo que la razón de recuperar YPF puede desperdiciarse si esta decisión no se apoya en una gestión eficiente, responsable y transparente de YPF.

Si en cambio va a apoyarse en la arbitrariedad para favorecer a amigos del poder, en la manipulación de los estados contables y financieros, o en la sujeción a una burocracia



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

inexperta y desvalorizada, que venga a imponer una administración oscura, ineficaz, e inmediateista, va a resultar totalmente ajena a los objetivos prioritarios de garantizar nuestro desarrollo.

Sabemos que existe una creencia muy arraigada en la sociedad, que se renueva de manera permanente, sobre la capacidad del país para ser reorganizado desde el Estado, toda vez que tengamos voluntad de hacerlo.

Es una reducción de lo político a lo estatal. Es el mito autoritario, que confiere al Estado la misión de construir el país esperado y que justifica cada paso a cumplir por la voluntad del hombre o la mujer que va a conducirnos a los argentinos a una suerte de tierra prometida.

Es en definitiva la razón populista, capaz de apelar a un golpe de mano en cualquier momento, para recurrir a lo que Ernesto Laclau, su conocido teórico, denomina un “significante vacío”.

Se trata de algo que carece de un significado preciso, pero que le ayuda a la sociedad a representarse a sí misma, y resulta tan imposible como necesario en la lógica de construcción política del populismo.

En esa lógica, frente a la escasez y la incertidumbre sobre el abastecimiento, el exceso de gastos de importación de combustibles y en general, ante la imposibilidad de resolver a corto plazo el colapso de la crisis energética, nada mejor que apelar a la renacionalización de YPF, que se instala de pronto en el escenario público sin un significado preciso, - porque no hay política y nadie sabe para donde vamos en materia energética- , pero en torno al cual se cifra una esperanza superadora, que le otorga centralidad al afecto y a la emoción popular.

Está muy claro que se ha buscado más que nada el rédito político con este proyecto. Por ello, nos cabe advertir con absoluta certeza que sin una buena gestión, la estatización de YPF pierde sentido y no va a representar más que un significativo vacío.

Retomando mi experiencia provinciana, no deseo para el país que tengamos que sufrir los padecimientos y privaciones de combustibles que se pagan mucho más caro o directamente no se consiguen.

Hago un llamado a la realidad. Y la realidad nos impone ahora explorar y producir más, con una verdadera política de Estado en materia energética.

Será impostergable aumentar la producción de gas y petróleo con un modelo estatal de gestión de YPF que debe ser eficaz y transparente, con políticas de integración y con un contenido auténticamente federal. Espero que así sea.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

44. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MARTÍNEZ

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero dejar, en estos pocos minutos que tengo, algunas consideraciones sobre el proyecto y debate que hoy estamos dando en esta Honorable Cámara.

En primer lugar, quiero decir que confiamos en el rol del Estado como actor responsable del crecimiento, como ejecutor de políticas públicas, y que confiamos en el Estado como garante máximo de la soberanía nacional.

Pero los hechos tienen matices, y la realidad no es dicotómica. Sólo en muy pocos casos podemos asegurar que algo es bueno o malo con total certeza. En este caso, lo sabremos mas adelante. Lo sabrán nuestro hijos, nuestros nietos.

Estamos obligados, como representantes elegidos por los argentinos, a legislar sobre la totalidad del asunto, sin dejar de lado ninguna cuestión.

Creemos en el diálogo, creemos en el debate y el intercambio de las opiniones. Lo evidenciamos estando presentes en el día de la fecha y asumiendo una postura de bloque. Siempre nos hicimos cargo y siempre nos haremos cargo de nuestras decisiones y confiamos en que esto sea entendido como un aporte a la sociedad argentina, como un aporte al pensamiento y a la reflexión.

El gobierno ha equivocado su política energética en los últimos años llevándonos hoy a la dependencia extranjera para el abastecimiento. Si votamos a favor esta tarde, estamos tapando un hecho que debería ser motivo de discusión, debate y búsqueda de soluciones. Por esta razón, votamos en contra este proyecto.

El gobierno ha formado parte del directorio de YPF, firmando y avalando sus balances hasta diciembre de 2011. Repito: hasta diciembre de 2011. Si votamos a favor de este proyecto, estamos negando su exclusiva responsabilidad. Por esta razón, votamos en contra de este proyecto.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El gobierno ha formulado esta ley en soledad, sin las opiniones del resto de las bancadas. Si votamos a favor esta tarde, estamos aceptando una forma de hacer las cosas que va contra nuestra idea de gobierno plural, democrático, abierto. Por esta razón votamos en contra de este proyecto.

No votaremos este proyecto bajo estas condiciones. Sentimos que votándolo estamos votando una amnistía para todos aquellos que fueron y son responsables del vaciamiento y saqueo de YPF. Y avalando las tremendas consecuencias que esto ha traído a miles de argentinos.

Por esta razón votamos en contra de este proyecto.

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MENDOZA (M. S.)

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero comenzar compartiendo con Uds. el profundo honor que me invade por el hecho de ser diputada de la Nación en un momento histórico como el presente, y la inmensa responsabilidad que esta función pública me genera a la hora de defender el proyecto de ley enviado ni más ni menos que por la presidenta de la República, de quien también me enorgullezco, por todo lo que nos enseña a diario y a quien además admiro profundamente.

Para adentrarnos en la cuestión de YPF y del proyecto de ley que hoy hemos de tratar, quiero señalar que estamos hablando de un recurso natural, estratégico y escaso como lo es el PETROLEO a nivel mundial; un recurso que ha provocado en las últimas décadas gran cantidad de guerras de las que siempre han sido víctimas los pueblos dueños de ese petróleo.

En tal sentido vale recordar que a comienzos de la década del 90, mientras aquí en nuestro país el entonces presidente Carlos Menem, con la complicidad de ambas Cámaras de este Congreso, remataba nuestro patrimonio hidrocarburífero, Estados Unidos, la principal potencia militar del planeta, intervenía en Medio Oriente en busca de este preciado recurso a los fines de expandir su economía a nivel global y de saciar un modelo económico que años más tarde mostraría sus grietas y entraría en crisis, arrastrando a ella a todas las naciones del mundo.

Afortunadamente, en el año 2003 y por la voluntad manifiesta y la decisión política del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

eterno Néstor Kirchner nuestro país tomó otro rumbo; supo cambiar de paradigma y empezó a proteger sus recursos naturales.

Aquí quiero remarcar que esta obra no fue para nada sencilla, debido al perjudicial desprendimiento de recursos nacionales que se consumió durante toda la década neoliberal, y también quiero rescatar que tampoco la emprendimos en soledad sino dentro de un genuino marco de integración latinoamericana.

Tanto es así que al tiempo que se le decía que “NO” al ALCA, se iniciaba un proceso de hermandad latinoamericana signado por la protección de los recursos naturales del continente entero, y una muestra cabal de ello es el reciente apoyo de 32 de los 34 países de la OEA al reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas.

Dentro de este bloque de países latinoamericanos que a través del MERCOSUR, la UNASUR y otros organismos de cooperación e integración regional han sabido poner las necesidades de sus pueblos por encima de los intereses foráneos, la Argentina ha tenido un rol protagónico.

Este rol protagónico lo hemos alcanzado mediante la concreción de políticas públicas claves y relevantes, a las cuales hemos podido arribar democráticamente, haciendo primar las decisiones políticas por sobre los postulados e intereses económicos.

De la infinidad de políticas públicas que se han implementado desde 2003, podemos destacar: la renegociación de una deuda externa magnificada por la dictadura militar y el menemismo; la reestatización de otro recurso de significativa trascendencia como es el AGUA; la reestatización del Correo, la recuperación de los fondos de la Seguridad Social que durante muchos años fueron usufructuados por bancos y compañías de seguros extranjeras, la restauración de una Aerolínea de Bandera que fuera exprimida hasta el vaciamiento por capitales españoles, el establecimiento de una política cambiaria que nos torne competitivos a nivel mundial, la instauración de una seria política fiscal y otras tantas medidas que en los últimos 9 años han puesto en marcha un país pujante en donde el desarrollo de la industria nacional ya no es un sueño inalcanzable sino que se ha convertido en una realidad efectiva que esta alcance de la mano.

Porque de esto estamos hablando hoy Sr. Presidente; de abastecer a una industria que en 9 años ha multiplicado su actividad y nos ha llevado a un crecimiento anual promedio del 7 % en un mundo en donde incluso las economías mas sólidas se derrumbaron.

Para alimentar a esa industria pujante, ha llegado el momento de ponerle fin a la importación de combustibles.

Para ejemplificar, sólo en 2011, la Argentina se vio obligada a importar más de 9 mil millones de dólares en combustibles, casi 20 veces más de lo que importaba en 2003. Además, en la última década, las reservas de petróleo de Repsol-YPF disminuyeron a la mitad: de 1.343 a 666 millones de barriles.

En este mismo período, las utilidades netas de Repsol-YPF fueron de 16.450 millones de dólares y sólo en 2011 fueron de 1.300 millones de dólares.

Esto nos evidencia una manifiesta descapitalización de la compañía perpetrada a través de la disminución de las inversiones y la producción y, en consecuencia, de las reservas de crudo y gas.

La presidenta ha detectado estas falencias y con su inmensa claridad política, corrige



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

errores del pasado para afianzar el presente y entregar un país más digno a las generaciones venideras.

En cuanto al futuro, creo que vendrán tiempos de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio.

Tiempos en donde los argentinos tenemos que estar unidos para sacar adelante a esta empresa que hoy vuelve a ser de todos y que por ende todos debemos cuidar y cooperar para su progreso.

Creo que es tiempo de cambiar de visión de dejar de ver al petróleo como una materia prima para comenzar a verlo como un recurso estratégico. De poner al autoabastecimiento por encima de la rentabilidad. De invertir en la infraestructura, planificación, administración y comercialización del petróleo. De declarar de interés público nacional a este recurso y abrir una nueva etapa en la historia hidrocarburífera argentina.

Como joven y representante de una gran parte de la juventud argentina, les digo a todos ustedes pero principalmente a la presidenta de la Nación, que cuenten con la juventud a la hora de afrontar esta faraónica empresa. Que daremos lo mejor de nosotros por hacer de YPF una empresa modelo del siglo XXI, como lo estamos haciendo en Aerolíneas Argentinas, donde otro joven de este proyecto político asume la responsabilidad de sanear una compañía que fue devastada en los 90 y que hoy vuelve a levantar vuelo. Porque recordemos que mientras los designios de Aerolíneas Argentinas estuvieron en manos del grupo Marsans, la compañía llegó a la quiebra como consecuencia de la especulación financiera y de la falta de inversiones.

Y también recordemos que con compromiso y haciéndonos cargo de los problemas de todos los argentinos, sin echarle la culpa a nadie y en medio de la más grande crisis económica a escala mundial, pudimos reconvertir una empresa devastada, vaciada y sin aviones, en una aerolínea de bandera digna del pueblo argentino.

Una aerolínea de bandera que hoy mantiene conectado a todo el país, que aumentó sus destinos hacia el interior del país y en toda la región, que adquirió más de 20 aviones de última generación, que incrementó sus inversiones en materia de vehículos, infraestructura, rampas, sistemas, material aeronáutico e instrucción de pilotos.

Por todo esto, señoras y señores diputados, y al igual que con Aerolíneas Argentinas, militemos por una YPF para los 40 millones de argentinos.

46. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO METAZA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En primer lugar, quiero mencionar que todavía siento la emoción por haber participado el viernes pasado en el estadio de Vélez Sarsfield de ese masivo acto, en el que la presidenta de la Nación recibió el respaldo de más de cien mil personas adentro de la cancha y de más de treinta mil afuera de ella, recordando aquel 27 de abril donde las urnas posicionaron a Néstor Carlos Kirchner para la segunda vuelta electoral, que luego lo catapultara a la Presidencia de la Nación en virtud del abandono de su contendiente, el ex presidente Menem.

Siento emoción pero también un profundo orgullo de pertenecer a este movimiento político que se llama Frente para la Victoria, que hoy tiene la iniciativa política y conduce los destinos del país, que ha tomado medidas trascendentales que han cambiado el rumbo a la Argentina y que ha devuelto la felicidad a nuestro pueblo. Entre esas medidas está el proyecto de ley que hoy estamos considerando.

Es para mí un honor ser parte de esta Honorable Cámara de Diputados en representación de la provincia de Santa Cruz, en estos días memorables. La historia y el futuro de nuestro país nos convocan a ser partícipes de una medida que cambia el rumbo de la Argentina en materia de soberanía energética.

También traemos a este recinto el legado de nuestra población que confía en que la recuperación de la mayor empresa hidrocarburífera del país devolverá la esencia al trabajador del petróleo, ese recurso tan valioso con el que cuenta nuestro país y que ningún empresario puede comprar ni vender como acciones.

Este proceso de transformación sólo puede concretarse porque tuvimos un presidente llamado Néstor Kirchner y tenemos esta “presidenta coraje”, que siempre tuvieron muy claro lo que necesitaban el país y nuestra provincia, y marcaron el camino de la recuperación de la independencia económica y de la soberanía política, promoviendo la equidad con inclusión y el bienestar del pueblo argentino.

Estoy firmemente convencido de que la voluntad política que derivó en la decisión de nacionalizar YPF y así recuperar la soberanía energética no hace más que ratificar el rumbo de un modelo de país que tiene como pilares el crecimiento de la industria y el trabajo nacional, la inclusión y la justicia social.

De esta manera, la Argentina vuelve a reposicionarse como productor de hidrocarburos, teniendo en su poder las decisiones sobre sus recursos, para poder explorar, extraer y refinar de acuerdo con las necesidades de nuestra población, acorde con los requerimientos de la industria, al servicio del crecimiento nacional. Ese crecimiento que marca récords consecutivamente, un ciclo de crecimiento de una magnitud y duración inusitadas en nuestros 200 años de historia. Contra todos los pronósticos y frente a todos los augurios que presagiaban catástrofes y recesiones, este proyecto de crecimiento con inclusión social nunca abandonó la expansión a niveles del 7,7% de promedio anual.

Esos índices obligaban a que la producción hidrocarburífera acompañara ese crecimiento, respaldara ese envión que había tomado la industria nacional; y resultó ser que aquella empresa que había sido el orgullo de nuestra nación, ahora en manos extranjeras, no tuvo la menor intención de acompañar tal proceso. Los objetivos financieros de los dueños trasnacionales se distanciaron de nuestras necesidades.

Y comenzó el proceso de desaceleración que hoy padecemos, obligándonos a importar combustibles por más de 9 mil millones de dólares, como bien se deja expresado en los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

fundamentos de este proyecto de ley, equiparando prácticamente al saldo comercial total del país.

Santa Cruz fue una de las principales víctimas de esa estrategia de reducción de producción que encaró Repsol. Poco a poco fue deteniendo la exploración de nuevos yacimientos, levantando los equipamientos y abandonando los pozos, repercutiendo no sólo en los ingresos o regalías para las arcas provinciales, sino sumando incertidumbre a la población que veía amenazados sus puestos de trabajo.

Quisieron hacernos creer que los pozos en nuestra provincia, y por consiguiente en todo el país, se iban agotando; cuando los geólogos y técnicos expertos en la zona, algunos de ellos ex empleados de la YPF estatal, aseguraban que la recuperación era cuestión de inversión. Era destinar los dividendos que obtenían de la venta de nuestro petróleo a precios magistrales en nuestra tierra para que siga generando.

La desigual pelea que llevó a cabo Santa Cruz en los últimos años reclamando a la empresa de capitales españoles un plan de inversión acorde con la realidad de la provincia y del país sólo provocaba más dilaciones. Para presionar, Repsol urgió las más viles amenazas: una y otra vez desafiaban con “retirarse” de la provincia, generando malestar e inseguridad. Sometiendo, además, a la administración provincial a gestionar sin parte de los recursos presupuestados.

Claro, Repsol nunca manifestó verdaderas intenciones, más allá de la innumerable cantidad de reuniones que se realizaron, de cumplimentar la ley 3.117 de marco regulatorio para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas, sancionada en 2010.

Mientras la actividad de Repsol YPF se desmoronaba casi un millón de metros cúbicos (de 4.491.000 metros cúbicos cayó a 3.404.000 metros cúbicos entre 2006 y 2011), la compañía Sinopec, por ejemplo, creció más de un 200% luego de la firma del acuerdo establecido por el mencionado marco regulatorio.

No me quiero extender en repetir números que confirman sobrados motivos para hablar del vaciamiento al que Repsol estaba sometiendo a YPF. A nosotros, los santacruceños no nos la contaron, nosotros vivimos esta realidad. Tenemos muy claro lo que significó la mirada rentística de la compañía española, una empresa que no dudó en dejar en la calle a miles de trabajadores de nuestra provincia cuando se derrumbó el precio del barril y decidieron ajustar por el sector más desprotegido. Y ahí tuvo que intervenir el Estado provincial dando contención a esos sectores.

Además, esta situación se contradecía con la transformación que vive la provincia de Santa Cruz en cuanto a su matriz energética. Será un antes y un después para la vida de la provincia y de sus pobladores, cumpliendo sueños de nuestros pioneros. Por fin vamos a poder contar con la energía necesaria para la radicación de industrias, la transformación de las materias primas, darles valor agregado y generar trabajo para nuestra gente.

La semana pasada asistíamos a nuevo proceso licitatorio para las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, pero para que esto fuera posible antes hubo que avanzar con el interconectado que no llegaba hasta el sur de la Patagonia. Dos medidas de una dimensión política extraordinaria para la región que no sólo nos permitirán recibir energía sino generarla e incorporarla al sistema nacional.

Esa diversificación de la matriz energética amplía el abanico de opciones para solventar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

el crecimiento de nuestro país. La usina termoeléctrica para producir energía a partir del carbón que hay en los Yacimientos mineros de Río Turbio, además de los emprendimientos eólicos para utilizar la fuerza de los vientos patagónicos, o el desnivel de las mareas que permitirán llevar adelante proyectos mareomotrices.

Estos avances nos auguran un futuro promisorio, sientan las bases de un proceso sostenido de crecimiento productivo e industrial, pero de eso también hablamos cuando se reclama política en materia energética.

Necesitamos todos nuestros recursos al servicio de este proceso de crecimiento con inclusión social; no podemos permitir que los intereses de un conjunto de accionistas nos lleve a tal reducción en el horizonte de las reservas que comprometa la soberanía energética del país.

De la mano de la Nación, las provincias recuperarán el verdadero control de sus recursos y serán puestas a producir para garantizar la expansión de la producción que requiere la demanda en el marco de un proceso de expansión económico histórico para nuestro país.

Claramente, no existirían estas demandas si no hubiera un incremento productivo de tal magnitud. Si no hay fábricas produciendo, si no hay cosechas récords, no hay “crisis energética”; no faltaría combustible si no hubiera ventas impresionantes de autos 0 km año tras año, por ejemplo.

Nuestra realidad, tan distinta a la que padecen las economías centrales, inmersas en profundas crisis recesivas nos obliga a repensar nuestra perspectiva. El petróleo, recurso estratégico para el mundo entero, es una ventaja competitiva que nos reposiciona en el tablero internacional. Se han desatado guerras y crueles matanzas por dominar el mercado petrolero. No podemos dejar en manos de señores que no piensan la empresa desde las necesidades de la Argentina profunda, que sólo han optado por conducir a la mayor empresa nacional a una sistemática pérdida de relevancia en el mercado hidrocarburífero local.

Basta tener en cuenta que el país tuvo que importar petróleo en el último año por más de 9 mil millones de dólares para sostener el ritmo de la actividad económica, mientras la empresa repartía dividendos entre sus accionistas en vez de reinvertir esas ganancias para asegurar las reservas, aumentar la producción y generar fuentes de trabajo. Sin olvidar, además que mientras tanto otras empresas expandían sus inversiones y su producción dejando en claro que el problema no afecta al sector. No es que los yacimientos estén secos, no es que escasee el petróleo y el gas, como querían hacernos creer, es que abandonaron la tarea de exploración.

Con esta declaración de interés público nacional, en la que el Estado se hace cargo de nuestras riquezas hidrocarburíferas, porque son de todos los argentinos y de nadie más que de los argentinos, estamos resarcido este tiempo de aniquilamiento de la empresa, para encarar una nueva etapa en la que se restituyan las reservas dilapidadas en la última década, se pueda recuperar el rol de jugador estratégico en el esquema internacional, y de esta manera asociarse a capitales públicos y privados, nacionales e internacionales para lograr el autoabastecimiento y para cumplir con la función social que YPF nunca debió perder.

Cuando hablamos de función social también incluye recuperar el valor de los recursos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

humanos, que son el principal capital accionario de la empresa. Operarios, técnicos, profesionales; tantos que hicieron de YPF su vida, familias que se formaron al calor de la empresa.

Pero la recuperación de la producción implica mucho más: hace revivir a todos los pequeños y medianos prestadores de servicios que subyacen a la explotación de los yacimientos. Todos ellos también se vieron perjudicados por la política impuesta en la compañía. Se vieron reducidos a su mínima expresión, e incluso muchos han desaparecido, de la mano de la disminución operativa a la que Repsol sometió a YPF. Esta medida que valientemente toma nuestra presidenta es mucho más profunda que la recuperación del 51% del patrimonio de la empresa. Es tomar la iniciativa para la promoción de una política hidrocarburífera que abarque la explotación del recurso pero también para que cumpla la FUNCIÓN ESTRATÉGICA que le tiene reservada el modelo de crecimiento con inclusión social, y produzca en sintonía con las necesidades de los argentinos y de los diversos sectores productivos. Para que la exploración, extracción y comercialización de los hidrocarburos tengan como objetivo ser un resorte del crecimiento y bienestar de la población, y no un simple commodity de exportación. Estamos ante la posibilidad histórica de sentar las bases para la profundización de este proceso de transformación y profundización iniciado en 2003. Tenemos la enorme responsabilidad como representantes del pueblo argentino de defender nuestros recursos con esta ley, y tenemos la enorme responsabilidad de no permitir que se mancille la legitimidad de esta medida a través de la permanente necesidad de desprestigiar esta decisión en la que han caído algunos representantes de la oposición y ciertos medios de comunicación.

Esa permanente necesidad de preponderar sus intereses empresariales por sobre el bienestar del país, olvidándose la responsabilidad social que tienen. Por eso no pueden admitir que este proyecto es fundamental para la realidad nacional. No pueden concebirlo porque su lógica es la misma que la de Repsol: exprimir al máximo sus ganancias sin importar el perjuicio que generen, sin importar el daño causado aunque pueda resultar irreparable. Si en ese proceso para proteger sus intereses hay que socavar la estabilidad de un gobierno, un gobierno legitimado por el pueblo argentino hace tan solo 6 meses, no van a dudar en hablar de “confiscación”, de “tiranía”, de “fascismo” y de cualquier otro adjetivo que encuentren y hacen repetir a sus voceros de turno: cualquiera que se preste a repetir sus argumentos con tal de tener medio minuto de pantalla.

Gracias al crecimiento político y social que hemos experimentado como sociedad, y especialmente a la ley de servicios de comunicación audiovisual, es que ya no pueden imponernos esas construcciones de significados a las que estaban acostumbrados. No hay mayor “seguridad jurídica” que un país cuidando sus recursos, que un país defendiendo sus trabajadores y sus fuentes de trabajo; que un país asegurándole a su población gas y combustibles a precios argentinos, que un país que resguarde sus fábricas y sus productores protegiéndolos de los intereses trasnacionales.

Son muchas las cosas que tendríamos para decir los santacruceños que vivimos esta realidad petrolera de nuestra provincia, una de las principales productoras de hidrocarburos, pero en función del tiempo que me resta finalizaré mi intervención con



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

algo muy personal.

Quiero decir a los diputados y las diputadas que acompañarán este proyecto que estoy absolutamente convencido de que desde el cielo Néstor Kirchner nos está mirando, nos está sonriendo y diciendo: “Tengan fuerza. ¡Fuerza todos para seguir acompañando a esta “presidenta coraje”! ¡Fuerza todos para seguir acompañando este modelo y seguir profundizando estas políticas!”

Finalmente, quiero decirle a aquel diputado del peronismo disidente que en este momento no está en su banca, que acusó diciendo que se entregaba YPF a La Cámpora - que lo hizo solamente para denostar a esta juventud maravillosa que está acá sentada-, que no tengo ninguna duda de que esta juventud es el principal sostén de Cristina, y que la acompaña y seguirá acompañando bajo cualquier circunstancia. (Aplausos.)

Y a aquellos diputados y diputadas que no nos acompañarán con su voto les digo que estoy absolutamente convencido de que algún día los 40 millones de argentinos, la patria, los hijos, y los hijos de sus hijos, se lo van a demandar. (Aplausos.)

47, INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOLINA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

“Iniciar una etapa de grandeza” es la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a los desafíos que asumió con la toma del control de YPF por parte del Estado.

El 16 de abril de 2012 pasará a la historia. Las generaciones por venir vincularán esta fecha con la recuperación de la soberanía energética, como sucedió con la recuperación del sistema jubilatorio para el sector público.

En consecuencia, la presidenta Cristina Kirchner reafirma definitivamente su papel de conducción del movimiento nacional en la presente etapa y se orienta con mayor nitidez a un proceso transformador de las políticas de un gobierno que va profundizando su proyecto nacional y popular, lo que le permitirá avanzar en materia energética y afirmarse en términos geopolíticos.

Las grandes empresas y capitales internacionales necesitan clima de negocios. Nosotros necesitamos profundizar los cambios para que haya clima de justicia social. La Argentina “es el único país de América Latina que no administra este recurso estratégico”. La relevancia actual de los hidrocarburos es, en efecto, geopolítica. Las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mayores reservas se concentran en pocos países, mientras que los mayores consumidores no poseen el recurso, indispensable para sostener procesos económicos de crecimiento y desarrollo. Por esta razón, el 90 por ciento de las reservas mundiales están en manos de petroleras estatales. En la región, las mayores reservas se ubican en Venezuela, México y Brasil, donde actúan, respectivamente, Pdvsa, Pemex y Petrobras. Podrán hacerse muchas afirmaciones respecto de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero jamás podrá decirse que no es coherente con los principios, la ideología y el modelo formulado por el Frente para la Victoria. Esta decisión constituye la continuidad de ideas fundamentales en torno de la concepción de la función y el rol del Estado. Frente a esta iniciativa que asume los desafíos, toma riesgo y se compromete con el fortalecimiento y expansión de la soberanía nacional, observamos la actitud de quien huye de la oportunidad de demostrar lo que predica administrando el sistema de transporte en el Estado más próspero de la República Argentina: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por sus consecuencias presentes y futuras, por su incidencia en la evolución del aparato productivo y en la vida cotidiana de los argentinos, porque el mundo ya comienza a dividirse entre los países que cuentan con energía y alimentos y los que no disponen de estos recursos estratégicos, la decisión de declarar de interés público la explotación de hidrocarburos y de expropiar YPF es la decisión político económica más importante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Hoy tenemos la responsabilidad de profundizar el modelo que ha generado crecimiento económico con inclusión social y distribución del ingreso. En consecuencia, reivindicamos la necesidad de mantener el rumbo económico para crecer, promover inversión pública y generar las condiciones para una mayor transformación. Nuestro país se encamina hacia la consolidación del modelo a través de políticas públicas que expresan la voluntad del conjunto del pueblo argentino.

Este proceso de transformación se desarrolla en un clima político y social de paz y de libertad de expresión que promueve la participación de las organizaciones sociales, de la juventud y de los trabajadores que garanticen la sustentabilidad política de un proyecto nacional que contiene a todos los argentinos.

Después de recibir un país devastado, quebrado, con una profunda depresión económica y moral, con la pérdida de la autoestima y de nuestra propia dignidad hemos sabido emerger como uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial. Crecimos hasta alcanzar un ingreso per cápita de casi el doble de toda América Latina. Renegociamos la deuda pública con una reducción neta de más de 70.000 millones de dólares.

Terminamos con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Abrimos nuevos mercados y aumentamos casi tres veces nuestras exportaciones.

Logramos incrementar a 100 millones de toneladas la producción de cereales y oleaginosas. Invertimos 6,47 % del PIB en educación. Repatriamos más de 800 científicos y creamos un ministerio específico para garantizar mayor inversión en ciencia y tecnología. Pudimos generar 5 millones de empleos. Protegimos la industria local e incentivamos la industrialización de nuestros productos, agregando valor y defendiendo la producción nacional. Recuperamos las convenciones colectivas de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

trabajo como herramienta de diálogo, negociación y consenso.

Durante los 9 años de gestión, hemos gozado de todas las libertades y garantías constitucionales, consolidando un país sin impunidad, con memoria, verdad y justicia.

Fuimos capaces de promover la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hemos recuperado el empleo, la productividad, el poder adquisitivo del salario y la institucionalidad para la administración de los conflictos sociales.

Fuimos capaces de lograr una reducción de los parámetros de desigualdad, con una importante disminución del empleo informal. Conseguimos reducir las asimetrías del ingreso mediante la asignación universal. Gozamos la mayor tasa de cobertura previsional en América Latina. Sancionamos la ley de movilidad jubilatoria.

Ampliamos los derechos sociales con la ley de matrimonio igualitario.

Modificamos la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Convertibilidad que implicó la disolución de base jurídica fundamental del modelo neoliberal.

El país nos exige responsabilidad. Una responsabilidad que no implica arriar banderas sino que debe inducir a la racionalidad para expresar ideas e intereses en aras de la construcción de nuestro destino colectivo. El legado de Néstor Kirchner requiere hoy la continuidad de este proyecto político que ha transformado al país.

No se trata de un punto de llegada, muy por el contrario es el punto de partida. Será tarea de todos luchar por lo que nos falta. Será el esfuerzo común de todos los argentinos y en lo que a nosotros respecta, será finalmente cumplir con nuestro mandato popular, fortalecer el Estado para construir la liberación nacional y social en la República Argentina.

48. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MORENO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Voy a insertar, atento la cantidad de diputados que están anotados en el uso de la palabra y la decisión de otorgar cinco minutos a cada uno de ellos.

Aclarando que esta posición trata de refutar los argumentos de diputados que no pertenecen a nuestro bloque, aun de aquellos que apoyan en general, hacen imprescindible la presentación, agradeciendo a un compañero y amigo Carlos Negri, que sin él no hubiera sido posible, y que los compañeros saben de los años en que viene planteando la necesidad de recuperar para el Estado YPF; seguramente no todo lo que estamos haciendo es lo que esperaba, pero coincide en que es un paso importante.

Voy a abordar algunos puntos, varios de los cuales están incluidos en los discursos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

precedentes en esta sesión, sobre los que, es mi intención, contribuir al esclarecimiento y ampliación argumental y a la refutación de ciertas afirmaciones críticas, en el camino de despejar aspectos que pudieran ser materia de hipotética controversia. Entiendo que la trascendencia de la materia en tratamiento amerita un esfuerzo expositivo dentro de las limitaciones temporales y materiales en las que se desarrolla el proceso que inicia el Estado nacional en coherente accionar con sus políticas antecedentes. Quiero decir que hay aquí una de esas circunstancias que se suelen denominar “bisagras” de la historia, en el camino de profundizar el proyecto en marcha de crecimiento con inclusión en el que estamos empeñados.

Comienzo por señalar que el derecho a expropiar la propiedad privada de los particulares por parte del Estado está definido en la totalidad de los ordenamientos del mundo, de todos los tiempos y de todos los signos ideológicos.

Este derecho que se encuentra reglado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 17, fue tomado por Alberdi del último párrafo de la quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, y de allí se incorporó en nuestro orden institucional en la Asamblea Constituyente de 1853.

Se trata de un derecho que no es ilimitado sino que está condicionado a la declaración de utilidad pública y a la correspondiente y oportuna reparación. Nuestra Constitución dice que debe ser previamente indemnizada, sobre este punto volveremos.

El derecho a la propiedad privada de los particulares no es absoluto; está sometido y condicionado, “gravado por una hipoteca social” según lo expresa el Documento de Puebla, de 1979. Su fundamento, según el Concilio Vaticano II, tiene una índole social que se afirma en el destino común de los bienes. Este concepto de función social de la propiedad se encuentra implícito o explícito en las garantías constitucionales de todos los sistemas que la identifican como un derecho o atributo de la personalidad.

El titular de ese derecho no puede usarlo en forma disfuncional o contraria a los principios de la moral social media o al interés común, esto es así aquí desde 1922 cuando la Corte Suprema convalidó la primera ley de prórroga de locaciones y rebaja de alquileres.

La Constitución Española, por ejemplo, establece expresamente la función social del derecho a la propiedad privada en su artículo 33, apartado 2º, y el derecho del Estado a la expropiación por causa de utilidad pública o interés social está reglado por el mismo artículo en el apartado tercero.

Se ha definido jurisprudencial y doctrinariamente a la expropiación como una compraventa forzosa de carácter administrativo. Aunque está prevista por los artículos 1.324 y concordantes del Código Civil, su carácter es considerado de derecho público (Fallos:308:2359), venta forzosa que se impone a favor de la comunidad, específicamente de su interés (Fallos: 312:2444).

En nuestro sistema jurídico, que nada tiene de original en el particular, la declaración de utilidad pública no es materia sujeta al control judicial (Fallos:85:327, caso “Casado”). Requiere sí ser fundada razonablemente en hechos verificables y derecho aplicable vigente, y el mensaje del Poder Ejecutivo abunda en la exposición de esas razones, fundamentos con los que coincido y a los que me remito en honor a la brevedad de esta exposición.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Volviendo a la cuestión de la indemnización previa que ha sido invocada aquí como causal de eventual inconstitucionalidad, cabe delimitar aquí dos cuestiones: la primera es que los derechos constitucionales se ejercen en nuestro sistema “conforme a la leyes que reglamenten su ejercicio”, según la expresión textual del artículo 14 de la Constitución, y este derecho de expropiación está hoy reglado en la Argentina por la ley 21.499, de pacífica aplicación desde la época de su sanción en 1977.

Vamos al punto de la oportunidad del pago de la indemnización. La ley reglamentaria establece un mecanismo para la forma de llevar adelante la expropiación que establece, primero, la posibilidad de la existencia de acuerdo entre expropiante y expropiado acerca del monto de la indemnización, o la adquisición por el valor máximo que se estime por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Para el caso de no llegarse a un avenimiento se abren dos caminos, la demanda judicial por parte del Estado expropiante, o el de expropiación irregular que se regula en el título 8° de la ley 21.499. En este caso, la acción le corresponde al expropiado si, como ocurriría en este caso, antes o después de la ley que declara la utilidad pública, el Estado expropiante estableció restricciones o limitaciones al uso de la propiedad, como se ha ejecutado en este caso mediante los decretos de necesidad y urgencia 530/12 y 557/2012 disponiendo la intervención transitoria de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., normas éstas cuyo dictado está en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo, en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución, normas cuya legitimidad es presunción legal según el artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos de la Nación, 19.549, y que por fin encuadran dentro del concepto más amplio de ocupación temporánea anormal prevista en los artículos 59 y 60 de la citada ley general de expropiaciones 21.499.

La mecánica de la ley no es una creación original del derecho argentino. Así por ejemplo, la ley de expropiaciones forzosas española de 1954, en su artículo 52, habilita la toma de posesión del bien a expropiarse mediante la simple confección de un acta con citación del expropiado, y este procedimiento en la práctica se ejecuta en el 90% de los casos según se ha expuesto en el VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, realizado en febrero de 2012. No es que estemos abogando por esta mecánica, pero no siempre se trata de expropiar sin premura un predio de mayor o menor valor para la ejecución de obras en un futuro. En este caso se abordan las complejidades que presenta la recuperación del control de la empresa que ostenta posición dominante en el mercado argentino en materia de producción, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, y la necesidad y urgencia son materias que, una vez que fundadas razonablemente, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, pasan para su evaluación por parte del Congreso y, hasta aquí, ese procedimiento se ha seguido con la regularidad que exige la ley. Cabe tener en cuenta que el 19 de abril de 2012 la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo-Ley 26.122, emitió un dictamen de mayoría declarando la validez de los decretos que disponen la intervención.

Por otra parte, una vez aprobada la ley, quedará expedito el trámite que viabilice la determinación del precio del paquete accionario expropiado y su pertinente indemnización. En esta materia nuestra Corte ha definido que el dictamen del Tribunal de Tasaciones es de importancia decisiva; sólo el error o la arbitrariedad manifiesta son



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

judicialmente revisables (Fallos:305:407 y 1897). Este será el órgano que se abocará a la determinación del valor de la expropiación y sobre esa base, si existe acuerdo de parte del expropiado, se liquidarán esos créditos. Nada indica en la ley que no vaya a ocurrir así, y en caso contrario tendrá expedito el expropiado el camino de los tribunales.

En todo y cualquier caso vamos a convenir en que la determinación del monto de la indemnización no es materia simple, desde que existen criterios múltiples de valuación posible, y no sólo lo creemos nosotros sino que la oposición ha sido unánime en esta materia. Habrá que tener cuidado en no pagar de más, y corresponderá no pagar de menos.

No hay entonces ni confiscación ni expolio. Se está aplicando la legislación argentina en la materia, que en poco y nada difiere de los regímenes vigentes en la materia en prácticamente todos los países de Occidente.

El Estado nacional cumplirá en término con todas las obligaciones a partir del momento en que estas sean exigibles: se pagará el precio justo, ni más ni menos, y este proyecto de ley, ya con media sanción, no plantea otra cosa.

Cabe aquí una digresión.

Nosotros seguimos creyendo en la fórmula que acuñara Arturo Sampay en cuanto a que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”, que “sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”, y que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”, como rezaban los artículos 39 y 40 de la Constitución de 1949, y siguiendo los criterios de esa doctrina es que estamos actuando. En esa línea creemos que debemos abandonar definitivamente el criterio Alberdiano de la justificación y protección de la usura del capital extranjero expuesta en el primer tratado de derecho constitucional de la Argentina, su Sistema Económico y rentístico de la República Argentina, de 1854, para avanzar a reformular y actualizar los criterios que ilustraron aquella reforma constitucional de 1949 en cuanto a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, y no sólo limitarnos al control de los monopolios, naturales o legales, y a la simple vigilancia sobre el uso de los servicios públicos y manejo de nuestros recursos naturales, para que el conjunto de la actividad económica quede efectivamente subordinada a los intereses de los argentinos y para que la explotación de los bienes tenga como objeto principal el bienestar social, filosofía cuyo abandono tanta tragedia y dolor ha desencadenado.

Volvamos a nuestro tema.

El Estado Nacional propone la expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase “Desde” de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. y lo propio respecto de Repsol YPF Gas S.A.

Hagamos un poco de historia.

La adquisición de YPF S.A. por parte de Repsol S.A. lo fue mediante una oferta pública de adquisición, OPA en términos usuales, operación de perfiles definidamente hostiles, con presiones directas e indirectas variadas, esto en 1999. No pudo escapar entonces a su criterio que sometía su inversión a la legislación interna de la República Argentina, y que debería navegar entre las tensiones inevitables que arrastra nuestro país en un



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mundo cambiante; ese fue y es su riesgo.

Sabía Repsol en particular que, además de a la legislación específica en materia de hidrocarburos, cuyo marco general sigue siendo la ley 17.319 de 1967, se sometía a la Constitución Nacional, a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Desde que se trata de una sociedad abierta, la alcanza la normativa específica y supervisión de la Comisión Nacional de Valores, así como los criterios de exposición contable aceptados en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, desde que YPF S.A. cotiza sus acciones en el NYSE en Nueva York, a la legislación vigente en materia de defensa de la competencia ley 25.156, de derechos del consumidor ley 24.240, a la ley de abastecimiento 20.680, a la regulación y contralor de las autoridades de aplicación, y, por supuesto, para la hipótesis nunca improbable en materia de recursos naturales estratégicos, y su abastecimiento, materia en la que tomaba posición dominante en el mercado argentino en forma automática al tomar el control de YPF, al sistema vigente en materia de expropiaciones, ley 21.499.

Pero muy especialmente no podía ignorar Repsol que su accionar debía ser concurrente con los intereses de la sociedad argentina, que mantuvo la “acción de oro” que impedía actos de disposición sin la previa conformidad del Estado nacional y, según el caso, el consentimiento por ley de acuerdo con lo establecido por la ley 24.474, desde que como se dijo asumía al adquirir YPF S.A. posición dominante en nuestro mercado interno.

En última instancia y si correspondiera, lo que será materia de debate si se plantea, Repsol podría haber supuesto que su inversión quedaba al amparo del tratado de protección recíproca de inversiones firmado entre la Republica Argentina y el Reino de España, ratificado por ley 24.118, norma posterior a las enunciadas, y que prevé, como todos los tratados de su tipo, la hipótesis de expropiación o nacionalización en su artículo quinto, y las formas de resolución de potenciales controversias, previa negociación y mediante el arbitraje en su artículo noveno. Esto último, insistimos, sólo si correspondiera, y porque se ha aludido en forma reiterada en el debate, ya que la cuestión de la nacionalidad de la expropiada es materia dudosa que trataremos mas adelante.

Concretamente, la posibilidad de recuperación por parte del Estado nacional de la empresa que ocupa posición dominante en su mercado interno de hidrocarburos, no puede haber sido una hipótesis descartada, desde que desde allí se condiciona el funcionamiento del conjunto de la economía, mas aún en un mundo en que la mayor parte de las naciones mantienen participación estatal de control en sus empresas líderes de hidrocarburos. Nunca puede haber escapado a su análisis que un sinnúmero de voces de las más variadas posiciones políticas se levantaron una y otra vez proponiendo la reestatización de YPF. Nadie se puede dar por sorprendido, menos por estafado, en el momento en que tal alternativa ocurra aunque fuera por una simple decisión política y en función de resolver materias que hacen desde las más elementales cuestiones de abastecimiento, ventajas competitivas de la economía argentina que debían haber sido sopesadas en la administración de la empresa, hasta cuestiones de defensa y seguridad nacional.

Pero no se trata aquí de una simple decisión política, que sería perfectamente legítima, no tanto de la utilidad pública sino de la urgente necesidad de recuperar la empresa por



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

las razones que expone el proyecto del Poder Ejecutivo ya aprobado por el Senado. De acuerdo con la exposición de motivos que acompaña al proyecto tenemos que frente a las necesidades crecientes de la efectiva demanda interna de energía, efecto del proceso de desarrollo económico con equidad e inclusión social, la empresa no sólo no acompañó este proceso con aumento de las inversiones necesarias, sino que las redujo en forma substancial respecto de los períodos anteriores a los de su administración, en particular en materia de exploración.

Esto se observa de manera flagrante a partir de los desequilibrios generados en la balanza comercial del sector, desequilibrios que son responsabilidad directa y producto directo de la premeditada acción de la controlante Repsol sobre YPF, y esto según se demuestra con profusión de cuadros comparativos que acompañan el mensaje, como efecto de una estrategia de carácter predatorio ejercida por la controlante desde el mismo momento en que se hizo cargo de YPF, y que nos llevaron en 2011 a tener por primera vez en la historia saldo negativo en la balanza comercial en materia de combustibles, grave y dramáticamente negativo correspondería decir porque amenaza con frenar el conjunto de la actividad económica.

Esta estrategia predatoria tuvo como elementos probados una serie de movimientos convergentes que allí se describen: falta de inversiones, reducción de la exploración, reducción de la producción, caída de reservas, segmentación del mercado para optimización de ganancias, aumento inexplicado en materia de endeudamiento y remisión de dividendos más allá no sólo de los estándares del sector, sino más allá de toda y cualquier lógica.

Señalándose en el mensaje la paradoja de una empresa, YPF, que retrocede en activos y actividad pero, simultáneamente, aumenta sus ganancias y remesas a Repsol su casa matriz y controlante, sociedad ésta cuyos dividendos distribuidos resultan casi equivalentes a los beneficios que extrae de la controlada, es decir que Repsol distribuye lo que recibe desde YPF, desde la Argentina para ser más precisos, y no otras ganancias orientando su política a “reducir su exposición a la dependencia de la Argentina”, situación ésta que, lo muestran los cuadros incluidos en el mensaje, no deviene de un trastorno circunstancial ni mucho menos, sino de una política perseverante que se define probadamente como estrategia predatoria por su continuidad y persistencia en el tiempo. Así las cosas los intereses y prácticas de Repsol no coincidieron ni coinciden con las necesidades de la Nación, y su continuidad en la dirección de la empresa más importante del sector comprometen la soberanía energética de la Argentina. Este último concepto, el de soberanía energética, que incluye como se ha dicho desde las cuestiones de abastecimiento primario hasta la más severas que hacen a la seguridad nacional y a la paz pública.

Incluido en el mensaje y reiterado por la presidente de la Nación en el discurso de presentación, está en el núcleo del conflicto de intereses que torna materialmente imposible seguir en el camino de apostar a que el sector privado comprenda que debe excluir prácticas predatorias no sólo porque lo dicen las leyes, no sólo porque así se asumieron los compromisos, ni siquiera porque para que sus beneficios sean legítimos toda actividad económica debe ser congruente y convergente con los intereses generales de la comunidad en la que actúa, que no es lo que ha ocurrido en este caso, y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

difícilmente ocurra si dejamos en manos y lógicas privadas, y peor extranjeras o transnacionales, resortes e instrumentos que hacen a la estrategia de construir la Nación desde los aspectos macroeconómicos.

Nadie lo hace si puede evitarlo. Es más, en el mundo se hace la guerra desde hace más de un siglo, por todo el planeta, para plantar el borceguí de la infantería en la boca de pozo. Nosotros no seguimos ese camino y este es un paso en ese sentido, sólo un paso porque no es la expropiación que tratamos la solución de todo el problema al que nos han llevado nuestros errores, y las prácticas perversas que se aprovecharon de los mismos, sino que tratamos sólo de la recuperación de la herramienta que nos devuelve el control de parte esencial del sistema.

Se ha dicho en discursos que parecen calcados de las protestas de Repsol, y que preparan no creo que ingenuamente acciones futuras, sembrando aquí argumentos que se utilizarán luego imagino que judicialmente, que no se resuelven los problemas de la crisis de energía con la expropiación de YPF desde que ésta representa sólo el 30% de la actividad. Esto no es verdadero, se refiere sólo a la participación en la producción local de petróleo, pero si nos referimos a la actividad total de YPF en el conjunto de la actividad esa participación trepa a más del 50%. Así lo determinó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al analizar conductas de abuso de posición dominante varias, y castigar incluso con severas multas a la empresa que fueron ratificadas por la Corte Suprema, es decir que estamos hablando de tomar la posición dominante desde el pozo y, pasando por la distribución y comercialización, hasta la hornalla, el surtidor y la garrafa, de allí la trascendencia de la medida.

Hay en realidad más argumentaciones en el caso de Repsol que no se han expuesto. Se verifica el estancamiento en la infraestructura y actividad de refinación. Así Repsol publicita en estos días la instalación y ampliación de sus plantas de refinación en Cartagena, España, en tanto los planes anunciados y reiterados desde hace años para la ampliación de las refinerías en La Plata y Luján de Cuyo son postergados sin explicación.

En este proceso Repsol produjo el innecesario desmantelamiento y deslocalización de las actividades de investigación, química y comercialización; actividades que se clausuraron en el país.

Además, surge de sus propias memorias, Repsol transfirió de la controlada YPF a la controlante, ella misma, varios activos, empresas enteras en algunos casos. Recuerdo por ejemplo que en julio de 2002 YPF S.A. transfirió a su controlante Repsol YPF S.A. una sociedad que se llama o llamaba Repsol YPF Santa Cruz S.A. en 883 millones de dólares de cuyo destino se perdió el rastro, y operaciones de este tipo se realizaron varias sin contralor efectivo de las implicancias que tenían para los socios de la controlada.

Vamos a tener que hacernos cargo de reconstruir buena parte de la empresa, que fue parcialmente vaciada, literalmente vaciada, para que vuelva a ser una empresa integrada a la economía nacional y regional.

Aquí quedan expuestas entonces la causa de utilidad pública y la necesidad y urgencia de revertir el cuadro de irracionalidad a la que nos llevó el accionar depredatorio de Repsol, paradoja sobre paradoja, menor actividad y mayores ganancias, exportar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

hidrocarburos, gas y petróleo crudo, a costo interno en beneficio de las transnacionales y pérdida de competitividad de la economía argentina, e importar gas licuado, gasoil, fuel oil y naftas, a precio internacional más comisiones, para abastecer el mercado interno con precios y subsidios crecientes y más beneficios para las transnacionales. Se dijo que no hay antecedentes para este tipo de operación. Pues bien, éste será el primero. Pero hay que rescatar que el Estado nacional siempre ha estado al frente de la política nacional en materia de hidrocarburos. Así fue desde el descubrimiento de los yacimientos de Chubut en 1907, cuando se apartó de la prohibición de intervención estatal del Código de Minería de 1896, declarando, primero por decreto, reserva fiscal el área de 5 kilómetros alrededor del pozo hallado, radio ampliado mediante las leyes 4.167 de 1908 y 7.059 de 1909, hasta el artículo 2° de la ley 26.197 que reza textualmente en su último párrafo que “El diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional”, y esto en nada afecta la legalidad de esta ley, ni los derechos de las provincias, como se ha pretendido. Volviendo a la expropiación.

Resulta insostenible seguir admitiendo esas prácticas depredatorias, de allí la utilidad pública y la necesidad y urgencia; sólo no lo verá quien no lo quiera ver.

Pongo un ejemplo irrefutable, por lo menos para Repsol. Según su Informe de Gestión Consolidado de 2007 el precio medio de venta de la cesta de líquidos fue de 49,84 U\$S/barril contra un costo de extracción de 3,82 U\$S/barril, y un costo promedio de descubrimiento entre 2003-2007, 6,78 U\$S/barril, es decir que lo que venden a casi 50 les cuesta menos de 4 producirlo y menos de 7 reponerlo, y aun así no lo hacen. Además, bueno es recordarlo, sólo liquidaban aquí el 30% de las divisas que obtenían de las exportaciones de crudo. Es decir que teniendo en cuenta que el recurso no es renovable se llevaban todo, el recurso y la renta. A eso no se puede llamar comercio internacional porque este presume el equilibrio de prestaciones bilaterales. Se va el petróleo y a cambio recibo las divisas. Eso era saqueo puro y duro, y duró hasta que el Poder Ejecutivo terminó con esta prebenda mediante decreto 1.722/11 del 25 octubre de 2011.

Esta estrategia depredatoria que lo fue y lo seguirá siendo si no se aprueba la expropiación que aquí se propone, implica responsabilidad directa para el socio controlante, según la ley argentina, y es a la ley argentina a la que está sujeta la dinámica y funcionamiento de YPF S.A..

Demostrada como está a partir de la exposición de motivos la ejecución de la estrategia depredatoria de la controlante de YPF, se torna de aplicación entonces la previsión de lo dispuesto en el art. 54 de la ley 19.550 de sociedades comerciales que dice textualmente:

“Dolo o culpa del socio o del controlante.

“ARTICULO 54. — El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios.

“El socio o controlante que aplicara los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva.”

Esto significa que cualquier socio, y el Estado nacional lo es en cuanto titular de las acciones clase “A”, que suman según los estados contables de YPF 3.764 acciones, tendrá expedita la vía judicial para accionar por estas causales. Incluso entiendo que desde que existe verosimilitud del derecho y peligro en la demora resultaría razonable intentar que el juez competente decidiera sobre medidas cautelares en esta materia, para evitar que se torne ilusoria una decisión en una controversia que, a estar por los tonos que se utilizan en las declaraciones públicas, puede llegar a ser extendido en el tiempo. Hay aquí, a partir de mensurar cuál es el daño efectivo que le causó Repsol a YPF desviando su interés en el propio beneficio, una vía que puede permitir recuperar para YPF todo o parte de los perjuicios sufridos. En todo caso se abre la posibilidad de reconvenir y compensar ante algunos de los hipotéticos ataques que se anuncian con bombos y platillos.

Otro de los temas expuestos críticamente contra el proyecto en tratamiento es el cuestionamiento de por qué la expropiación se dirige solamente contra los activos de Repsol, y no en forma proporcional contra todos los accionistas en general, y contra el grupo Petersen en particular.

El proyecto, al dirigir la expropiación solamente al socio controlante, trata de proteger, excluir del potencial conflicto, a los accionistas minoritarios, quizás atraídos, quizás engañados, quizás tentados, por resultados excepcionales sin sustento y a costo del vaciamiento ostensible de la sociedad, vaciamiento que se podía observar de una comparación interanual de la documentación que emite la misma sociedad, pero en fin, el acto de la expropiación, desde que se trata como se dijo de una venta forzada, es un acto de consecuencias traumáticas, y la lógica y los principios de la buena fe indican que la opción del proyecto es la más benigna y la menos onerosa.

Por otra parte, aun cuando no se trata de punir a Repsol, de lo que sí se trata es de excluirla de la conducción de la empresa desde que fue ese grupo el que con su estrategia depredatoria la llevó a la crisis, a YPF y a la balanza comercial en materia de combustibles de la Argentina; lógico resulta entonces que nos dirijamos al controlante para sustituirlo en el control de manera cierta y definitiva.

Ahora, respecto del grupo Petersen, la cuestión de su exclusión de la expropiación tiene otro origen.

Vayamos a lo que conocemos.

De acuerdo con la información relevada directamente de la página de Repsol y comunicada a la Comisión Nacional de Valores y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Repsol celebró el 21 de febrero de 2008 una serie de convenios con Petersen Energía S.A..

Los contratos tienen por objeto la transferencia escalonada en el tiempo de hasta el 25% del capital accionario de YPF, convenios que están en trámite de ejecución por los movimientos que se informan en memorias y balances.

Petersen Energía S.A. es una sociedad española, fue inscrita el 20/08/2007 en el Registro Mercantil de Madrid por Deloitte Abogados SL, su situación actual se puede rastrear ingresando en la página del Registro www.rmc.es.

Petersen Energía S.A. es una sociedad de socio único, lo que es admitido por la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

legislación española, es decir que está a su vez controlada “íntegramente participada” dicen los contratos, porque los socios de ambas son las mismas personas físicas, por Petersen Energía PTY Ltd. sociedad que está constituida e inscripta en Australia, tiene domicilio en Level 23, Rialto Towers 525, Collins Street, Melbourne, sus socios son o eran Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eskenazi, esto lo informa la parte conocida de los convenios publicados por Repsol.

Los contratos informados refieren otros contratos y anexos de carácter confidencial entre comprador y vendedor, contratos a los que, al menos desde esta instancia no podemos acceder.

El pago de esta transferencia fue financiado en parte por el vendedor, Repsol, y en parte mediante un crédito sindicado entre varios Bancos: Credit Suisse International, Goldman Sachs International Bank, BNP Paribas, Banco Itau Europa S.A., y aparentemente fuera de la sindicación Credit Suisse London Branch y HSBC Plc.

De acuerdo con lo que surge de lo conocido entonces, las acciones que se fueron transfiriendo quedaron sometidas a un sistema de restricciones que incluyen desde un férreo acuerdo de sindicación accionaria de bloqueo y control, es decir que básicamente se establece la prohibición de transferir las acciones vendidas y se establece la obligación de votar previo acuerdo en los órganos societarios, se agrega el mantenimiento en toda y cualquier hipótesis de mínimos de participación, del más del 50% en el caso de Repsol, se fijan las formas y magnitudes de distribución de dividendos a futuro y, lo más importante en lo que aquí se trata, las acciones transferidas quedaban gravadas con garantías reales hasta el pago final, tanto a favor del vendedor, Repsol, como del pool de bancos prestamistas.

Esto es lo que conocemos, pero desconocemos el estado actual de esos acuerdos en cuanto a su ejecución y vigencia, convenios que reiteramos son confidenciales en sus cláusulas substanciales, luego, desde que de lo que se trata es de tomar sin más el control de YPF, no resulta ni útil, ni razonable, ni sensato, expropiar un paquete accionario cuya real condición jurídica se ignora, una acción de este tipo podría hacer fracasar el objeto de la ley que es tomar el control de YPF sin más demora.

Concretamente, podría ocurrir que al tomar acciones proporcionales del grupo Petersen no se consiguiera la adquisición plena del 51% del accionario de YPF, o que esa expropiación se torne incierta por oposición de Repsol o de los bancos prestamistas en defensa de sus derechos sobre las mismas, es razonable, por vía de hipótesis, que las acciones de la familia Eskenazi, bien las impagas bien todas, puedan revertir al dominio de Repsol, o de los bancos prestamistas. Es posible imaginar que de aprobarse este proyecto de expropiación esos contratos entren en crisis o se generen conflictos o diferencias entre los contratantes, no lo sabemos, por ello es que se opta por dirigirse directamente sólo al socio mayoritario y controlante que es Repsol. Esa es la solución no sólo razonable, sino correcta en función del objeto de la ley.

Se ha acusado que, en todo caso, los socios del grupo Petersen, la familia Eskenazi, son tan responsables desde 2008 como la conducción de Repsol de la estrategia depredatoria en la que se funda la expropiación, lo que aparentemente podría ser cierto desde que ocuparon cargos de relevancia en YPF S.A. y han votado de acuerdo en el directorio y asambleas, pero este razonamiento no toma en cuenta que la expropiación no es una



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sanción ni una penalidad contra Repsol, sino una decisión política de cambio hacia la profundización del rumbo por el que opta el Estado nacional. Si el grupo Petersen es o no corresponsable de la estrategia ruinosa de Repsol será materia a dilucidar en la oportunidad en la que se accione por la vía de la reparación, por el desvío del interés de YPF en favor de Repsol y sus socios, materia que aun concomitante con la expropiación le es substancialmente ajena.

Sigamos adelante.

Aunque parece evidente que, al día de hoy, 3 de mayo de 2012, en el mundo han tomado ya cuenta de que la expropiación de YPF por parte del Estado argentino es una decisión irreversible, decisión que responde a las necesidades y conveniencias del país, tan evidentes como los efectos devastadores que produjeron las prácticas empresarias de Repsol, que la inmensa mayoría de los argentinos está de acuerdo con el contenido de la medida, que sólo existen diferencias sobre cuestiones de método que no resultan en todo caso relevantes, y que en definitiva lo que resta es solamente debatir acerca de la procedencia de la reparación y de sus montos, aun así hay algunos puntos que quedan por analizar.

La página web de Repsol acusa la expropiación de ilícita y discriminatoria.

En cuanto a la licitud de la decisión del Estado nacional no pueden haber dudas. Se están cumpliendo aquí, y se cumplirán en todo el trámite a seguir con las normas de derecho vigentes. Por otra parte, quedan en la Argentina abiertas todas las instancias de reclamo en el marco de la legislación en la que los expropiados resolvieron invertir con ventajas más que notables.

Una digresión en este punto: tomando como fuente los estados contables consolidados de YPF S.A., y cruzando los datos de la nota 2 c) “Otros créditos. Créditos de impuestos, reembolsos por exportaciones e incentivos a la producción”, se trata en lo fundamental de los beneficios de los programas “gas plus”, “refinación plus” y “petróleo plus”, como decía, cruzando esos datos entre 2007 y 2011 con la utilidades netas de la sociedad, tenemos que de los 22.744 millones de pesos de utilidades 7.157 millones provienen de aquellos subsidios, es decir que el 32% de la rentabilidad de YPF, que prácticamente es toda la que distribuye Repsol, son subsidios por incentivos a una producción que decreció. Luego habrá que revisar los informes y declaraciones juradas sobre las que se liquidaron esos beneficios. Y la fuente es irrefutable, por lo menos para Repsol, ella misma es quien confeccionó esos documentos.

Volviendo a la materia de la expropiación.

Lo que queda entiendo, a los fines de este análisis, es hacer una breve referencia a la imputación de discriminación en la operación de expropiación.

Difícil es expedirse frente a una acusación que no se explicita en fundamentos. En todo caso la carga de la prueba de la hipotética discriminación quedará a su costa, pero es esencial señalar que Repsol no es excluida de YPF desde que mantendrá sus acciones remanentes, es decir que no se trata de la exclusión absoluta de un socio determinado, sino de la toma de control de una sociedad por razones de utilidad pública, mediante el uso de la herramienta de la expropiación en la esfera del derecho público, donde las partes no son iguales desde que una expresa el interés general, es decir que la expropiación no está dirigida contra Repsol sino a favor del interés general. No se lo ha



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

discriminado sino desplazado de la conducción de YPF, y esto no en razón de ninguna condición inherente al grupo sino a su estrategia en la conducción de la empresa que resultó perjudicial al punto que merece la calificación de accionar depredatorio.

Pero hagamos un ejercicio de imaginación.

No se trata de una exclusión por razones de nacionalidad.

En el tema de la nacionalidad de las sociedades, grupos de sociedades, empresas, compañías, grupos inversores, confluyen elementos políticos, jurídicos y económicos. Ya ha pasado la época en la que se discutía la posibilidad misma de la atribución de nacionalidad a las personas jurídicas o de existencia ideal. Las doctrinas en la materia se remontan al siglo XVII cuando las potencias coloniales intervenían donde quiera que fuera en la protección de los intereses de sus nacionales, en general al amparo de sus cañones no siempre acompañados de teorías jurídicas que las legitimaran. Ya en el siglo XX desde el derecho de la guerra, se hizo necesaria la identificación de la propiedad y de la acción enemiga que puede enmascararse tras el funcionamiento de personas jurídicas de apariencia aliada o neutral.

Esta doctrina en evolución identifica varios criterios de atribución de nacionalidad de las sociedades, las empresas y los grupos inversores: primero se utiliza el criterio de la sede de la actividad, el lugar de constitución, la nacionalidad de los socios, sea de todos, de la mayoría o de aquellos que disponen de capacidad decisiva, sea por cantidad de capital, de votos, y/o por relaciones económicas que impliquen subordinación o control. Otro criterio es la radicación de las actividades económicas, o la más compleja doctrina de la preeminencia de la realidad, incluyendo en este concepto un análisis de todas las variables anteriores consideradas dinámicamente, en su relación con el o los polos de decisión y acumulación. En la más reciente técnica de formulación de los Acuerdos de Protección de Inversiones se aconseja que la nacionalidad de la sociedad inversora sea declarada expresamente. Así surge el criterio de la autoatribución de nacionalidad, con el fin de evitar conflictos evitables.

¿Qué podemos decir de Repsol, según la información que ella misma provee en su página web?

Que el lugar de constitución y sede de administración es España.

Que más del 50% de sus accionistas no son españoles: el 9,49% de su capital accionario es propiedad de Pemex, petrolera estatal mexicana. A ello se agrega un 42% que se califica como “institucional extranjero”, luego el 52% de los accionistas no son españoles.

Que indiciariamente sus controlantes podrían ser españoles, lo son sus directores, aunque el estatuto de Repsol impide que cualquier socio no pueda votar más allá del 10% del total accionario, independientemente del volumen de sus tenencias. Así CaixaBank quien se supone controlante es una financiera y aseguradora con domicilio en Barcelona, España, que detenta el 12,83% de las acciones, por lo que confirmar su condición de controlante es tarea imposible.

Que aun históricamente, decreciendo por el desvío de las inversiones producto de las ganancias en la Argentina, más del 50% por ciento de su fondo de comercio lo constituye YPF, que es una sociedad argentina.

Que más del 65 % del petróleo y del gas que extrae, procesa y comercializa, porque no



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

explora, y de las reservas que computa como propias, aunque sólo tiene concesiones, provienen de la Argentina, aunque tiene actividades en España, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, Marruecos, Sierra Leona, Libia, Argelia, y algún otro paraje, por lo que su actividad principal es aquí, en la Argentina.

Que las utilidades se producen en la Argentina, y que de aquí se van, que entre 2000 y 2010 se contabilizaron utilidades por 41 mil millones de pesos, y se giraron a los accionistas 47 mil millones de pesos, lo que demuestra el vaciamiento, y esta información es de Clarín del 15/04/12, nuestros cálculos dan más en contra de Repsol. Estamos entonces ante un grupo económico transnacional que si podemos identificar como español es sólo por su sede y la nacionalidad aparente de sus aparentes controlantes, y por el barullo que intentó hacer el gobierno español respecto de este proyecto de expropiación.

¿Se plantea acaso que se expropien las acciones de Repsol necesarias para tomar el control de YPF porque es española?

YPF S.A. es una sociedad constituida, con sede y actividad en la Argentina. Sean quienes fueren sus socios, la sociedad y los socios están bajo la jurisdicción de las leyes y los tribunales de la Argentina.

Esto de la discriminación, en su simple enunciación, se muestra como un disparate insostenible. Como lo señaló la presidente hay aquí inversiones españolas en los mas diversos sectores de la economía, comunicaciones, telefonía, medios, bancos, etc., y han recibido y reciben el trato de cualquier hijo de vecino.

La razón expuesta y objetiva de la elección del expropiado no se afinsa en la hipotética nacionalidad de los controlantes de la controlante, o en su sede, sino en su estrategia depredatoria y enfrentada con el interés nacional y, esto es lo esencial, en la profundización de la estrategia del Estado nacional en materia de soberanía energética, como lo comprendió el señor ministro de Relaciones Exteriores de España, García Margallo según declaraciones públicas, y esa estrategia requiere como herramienta primaria la toma de control de la empresa que ocupa posición dominante en el mercado interno de hidrocarburos de la Argentina que es YPF, fuera quien fuere su titular.

No hay entonces ni el más mínimo rastro de cualquier tipo de discriminación posible ni imaginable.

En fin, como se ha dicho, quedará a cargo de quien acuse lo que acuse probar materialmente lo que sostiene, pero no se advierte ni ilicitud, ni discriminación, ni incumplimiento alguno, en cuanto al concepto adverso y eventual de los inversores extranjeros. Queremos aquí recordar, junto a Aldo Ferrer en su *La Economía Argentina*, que todo crecimiento se dio aquí a base de ahorro interno, y específicamente Repsol sigue explotando los pozos que encontró costosa y vigorosamente la YPF estatal.

En cuanto a la preocupación expresada por varios senadores y diputados, relativas a que se deben considerar los pasivos reales y no pagar lo que no se debe, estamos de acuerdo, pero esa será tarea del Tribunal de Tasaciones, no corresponde ni sería posible que lo establezca la ley de expropiación, y coincidimos en que se debe realizar una auditoría precisa no sólo en materia contable, por el salto visible en el endeudamiento de YPF entre otras incongruencias ostensibles, sino que se deberán relevar al detalle los pasivos ambientales que, se sabe, no se limitan a los declarados en memorias y balances.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Veamos la cuestión planteada respecto del artículo 15° del proyecto. El objeto del artículo es el de no alterar los derechos y situación jurídica de los socios no expropiados, ya que en tal hipótesis habría que hacerse cargo en caso de que tal alteración produjera daño. La sociedad sigue siendo en este punto exactamente la misma, lo que no significa un grado absoluto de autonomía ya que nada impediría la posibilidad de un contralor a cargo de la Sindicatura General de la Nación, a través de los funcionarios designados en virtud de los derechos que al Estado nacional le otorga su tenencia de las acciones de la clase “A”, o a través de la autoridad de aplicación, y no advierto por qué estarían excluidos de tales responsabilidades quienes fueran designados por el Estado nacional en el directorio de la sociedad.

Por fin, se adujo que la designación de funcionarios públicos en la intervención transitoria lo es contradiciendo lo establecido por la ley de ética 25.188, que sus actos estarían viciados de nulidad, incluso, jugando a asustar a los tontos con el cuco, se dijo que quienes contrataran con YPF durante la intervención transitoria serían responsables solidarios por el daño causado por aquellos actos nulos.

La finalidad del art. 13, inc. a), de la ley 25.188 es específicamente evitar los denominados conflictos de intereses generados por la confrontación entre el deber público de los funcionarios y sus intereses particulares. Se establece un régimen general de restricciones que no es aplicable al caso, porque los funcionarios actúan en su calidad de tales en esa función transitoria, y siempre en representación del Estado. Lo previamente expuesto se concilia con el art. 8°, inc. 5, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que considera que los denominados conflictos de intereses se configuran por las actividades “externas” de los funcionarios y no por el ejercicio de su función como se da en el caso.

Es el mismo poder público que los designó mediante un decreto de necesidad y urgencia en aras de preservar exclusivamente intereses públicos tales: continuidad de la empresa, el abastecimiento de combustibles y la cobertura de las necesidades del país. En esta situación de emergencia planteada surgió la necesidad de efectuar en forma rápida estas designaciones. ¿O se está proponiendo que se llame a un concurso de títulos y antecedentes para hacerse cargo de ese directorio de emergencia?

Ratificando lo reiterado por mis colegas de bancada en cuanto a la trascendencia histórica de la iniciativa en trámite, quiero expresar mi fervoroso apoyo a la misma.

49. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOYANO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La aprobación de la Ley de Hidrocarburos es un paso trascendental para la soberanía energética de la Argentina. En ese sentido, tenemos que decir que este hecho histórico se encuentra contextualizado en la mejor tradición de nuestro país, donde cabe mencionar a Mosconi, Yrigoyen, Perón y, por qué no, también a ciertas ideas que supo enarbolar por períodos el doctor Frondizi en términos de autoabastecimiento. Decía Mosconi, quizás el primero en enunciar la conciencia nacional en términos de política hidrocarburífera: “resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtienen, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera” Este es el espíritu que estamos retomando y del cual nos nutrimos como jóvenes consustanciados con la política.

Con YPF los argentinos recuperamos un símbolo de nuestra soberanía política e instrumento central en la construcción de la independencia económica, porque permite al Estado el control estratégico y operativo del uso de la energía, esencial para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. La nueva ley cambia el paradigma de exploración y explotación de hidrocarburos en la Argentina, al declararlos de interés público, retomando el espíritu del constitucionalismo social que supo plasmar el justicialismo en el año 1949 y que comprende el rol social de la economía. YPF significa en nuestra historia trabajo digno, prosperidad de los pueblos, desarrollo industrial, construcción de escuelas y viviendas, pero también la lucha de miles de trabajadores argentinos que se resistieron a su saqueo. Por eso, en esta oportunidad queremos destacar el rol de los trabajadores organizados que resistieron su saqueo. Es desde ese lugar que surgió el fenómeno de los piquetes; allí donde se habían destruido los lazos sociales que las organizaciones profesionales de trabajadores representaban; y ellas fueron principalmente quienes primero supieron ver la gravedad de los hechos que acarrearía su privatización en los 90.

Pero no podemos ser mezquinos en un momento como éste, sobre todo teniendo en cuenta el enorme consenso que se ha generado a partir de la bandera de YPF. Son muy pocas las voces que se ponen en contra y en esto también debemos reconocer el nivel de conciencia alcanzado por nuestro pueblo. Cuando se escuchan algunos pocos y pobres argumentos en contra que se refieren a la “seguridad jurídica”, uno no deja de sorprenderse por la falta de memoria histórica, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años. La Argentina es un país que ha sido un ejemplo para el mundo. Basta recordar lo que se decía cuando desde el gobierno de Néstor Kirchner se propuso pagarle al FMI o estatizar los fondos de los trabajadores que administraban las entidades financieras internacionales, ya en la gestión de Cristina



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Fernández. En esos momentos, con coraje, se tomó una decisión política, que ponía por sobre todo la soberanía nacional y la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Es ese el marco en el cual hoy se está debatiendo y no podemos dejar de reconocérselo a esta gestión. No son menores los principios de la política de hidrocarburos que se esgrimen en el artículo 3° de la ley que estamos votando. Por supuesto que la sanción de una ley no resuelve por sí misma la cuestión energética, sino que es una herramienta para que a través de su cumplimiento que es responsabilidad de todos, iniciemos un camino a recorrer teniendo como fin el bienestar de nuestro pueblo. Por eso, no dejan de sorprender algunos discursos que en lugar de ver el bosque, se centran en el árbol, construyendo argumentaciones cargadas de subjetividad.

Claro que esto no implica correrse del rol que nos compete como diputados, poniendo siempre en primer plano la envergadura histórica de esta decisión, pero intentando también profundizar en sus razones. Es importante repasar cuáles son las causas que llevaron al Poder Ejecutivo a enviar este proyecto de ley, sobre todo de cara al futuro y resaltando la responsabilidad que nos cabe como jóvenes proyectándonos. Todas las críticas son válidas para poner en debate, si partimos del reconocimiento del acierto de una decisión política del Ejecutivo que hoy nos encontramos revisando. Y lo digo, insisto, como peronista y en representación de un sector del sindicalismo que siempre se opuso a las privatizaciones, pero admitiendo también que esa resistencia no alcanzó. Para modificar la realidad todos sabemos que no alcanza con tener razón, sino que se deben construir las correlaciones de fuerzas suficientes.

Hay que reconocer que Repsol, durante estos años, se apropió de una renta financiera extraordinaria a costa de no invertir, bajar la producción, comerse las reservas exploradas por el Estado y exportar todo lo que se podía, en función únicamente de su rentabilidad. Depredaron lo conquistado por el Estado argentino con recursos de los trabajadores argentinos. A partir del crecimiento industrial sostenido desde el 2003, pasamos de ser exportadores a tener la necesidad de importar combustible, con la consiguiente pérdida de divisas para nuestro país, en unos pocos años. “Perder divisas” no significa otra cosa que dejar el trabajo argentino a merced de los mercados internacionales, y sabemos lo que sucede cuando esto pasa, porque los trabajadores lo hemos sufrido en carne propia. La independencia económica, la soberanía política y la justicia social se encuentran indisolublemente ligadas, y la historia de YPF lo refleja. Por eso, su nacionalización representa un hito en la historia de nuestro país. Permite dar vuelta la triste página de la década del 90 en la cual se privatizó una empresa en un sector que nunca debió ser privatizado en momentos en los cuales el precio del petróleo se encontraba en mínimos históricos en términos reales. Pero permite, aún más profundamente, proponernos a darle una vuelta de página a la trágica historia que comenzó el 24 de marzo del 76, y se propuso destruir un país en donde el trabajo era contemplado en su función social. Esta es la verdadera relevancia que implica pensar este tiempo histórico en clave de un profundo cambio cultural en nuestra sociedad. Y claro que esta situación puede generar muchísimas críticas, pero la realidad no se modifica con diagnósticos sino con la articulación de una fuerza política que es necesario construir, y no podemos entonces soslayar el rol de este gobierno, que en estos años ha reconstruido una política de soberanía nacional de cara a la sociedad. Por



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

eso, los argumentos que esgrimen la seguridad jurídica y el capital extranjero suenan a oportunismo político, sobre todo teniendo en cuenta algunos que han ocupado lugares con altas responsabilidades en gobiernos anteriores a 2003. Al capital extranjero le resulta fundamental el precio del combustible y cuidar estos recursos implica cuidar esas inversiones. Mejorar la administración de la explotación hidrocarburífera es también generar las condiciones necesarias para un mayor desarrollo, mas empleo y mejores salarios. En esto no podemos caer en falsos dogmatismos. La importancia de lo que puede significar esta ley para las próximas generaciones nos obliga a dejar de lado falsas antinomias. Bien cerca tenemos el ejemplo de Petrobras, en Brasil, de cómo una empresa con mayoría estatal y administrada adecuadamente ha logrado tener un crecimiento exponencial en los últimos años.

Si pensamos en los descubrimientos de gas y petróleo no convencional que potencialmente pueden convertir a la Argentina en la tercera reserva de gas de este tipo a nivel mundial, resulta evidente la desidia de Repsol, e incluso del grupo Petersen, y no sirve como argumento en contra de esta Ley, sino que justifica aún más la intervención del Estado. Esta ley condiciona tanto a estos como a futuros inversores y en esto tenemos que resaltar que la nacionalización implica nuevamente poner en marcha un costoso proceso de inversión que va a salir fundamentalmente de los bolsillos de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, los trabajadores deben ser parte central de la empresa para controlar qué se hace con nuestros recursos y nuestro dinero, y para decidir sobre los destinos de la compañía. Esto no es responsabilidad de un gobierno o de un partido, sino de todos los argentinos. Si bien se trata de un gran desafío, no es una misión imposible. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que la nacionalización se transforme en una verdadera gesta patriótica que vaya en beneficio del conjunto de nuestra sociedad. Pero esta nueva legislación nos ofrece un nuevo punto de partida. Nos permite repensar cuestiones como el precio cobrado a los consumidores argentinos, que tiene que guardar relación con los costos extractivos para incentivar la producción, pero no pueden estar sujetos a los profundos vaivenes que muestran los precios internacionales de estos productos. Asimismo, se debe aprovechar la nacionalización de YPF para acabar con la profunda injusticia que representa que aquellas personas que no cuentan con acceso a la red de gas natural (en general pertenecientes a los estratos de menores recursos), tengan que pagar por sus garrafas un precio que quintuplica el costo por metro cúbico de gas de aquellos usuarios de la red. El permitirnos proyectarnos en estas cuestiones nos muestra la real dimensión de la decisión soberana que estamos tomando en este honorable recinto.

No debemos ser dogmáticos y ver el panorama real de lo que estamos discutiendo. De la misma manera que una nacionalización por sí misma no resuelve nada, también permitámonos pensar en que la inversión que pueda hacer el Estado en esta compañía mixta pone en juego el valor social de la misma, como en su momento lo hizo la estatización de la administración de los fondos que manejaban las AFJP. No escuchemos falsos agoreros. Difícilmente la administración pueda ser peor que la que encabezó la multinacional Repsol. En los últimos 5 años, YPF tuvo utilidades por casi 5000 millones de dólares, lo cual demuestra que no sería un problema para el Estado ese desembolso, sino una inversión muy rentable y, por sobre todas las cosas, una medida



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que reafirmaría nuestra soberanía política y la independencia económica, como en su momento lo hizo la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner de pagarle al FMI. La experiencia de estos últimos años nos muestra que, sin dudas, el único actor que puede actuar como “burguesía” estratégica nacional para pensar la economía a futuro de nuestro país es el propio Estado.

Por último, quiero destacar que como expuso la CGT en su comunicado: “los trabajadores hacemos nuestra esta decisión” y también nos permitimos poner ciertos reparos, con la autoridad que nos da habernos opuesto históricamente a la privatizaciones, y recordar que el discurso privatizador se ocultó bajo la forma de la eficiencia, que solo fue una fachada para destruir y enajenar el esfuerzo y el sacrificio de miles de argentinos. La administración de YPF debe ser profesionalizada y responsable, por estar indisolublemente unida al bienestar de nuestro pueblo, para lo cual se hace necesario el compromiso de todos. De la misma manera que este proyecto ha conseguido un enorme apoyo de la sociedad manifestando un cambio cultural en la Argentina que se germinó a través de años de resistencias, pero también de algunas viejas y nuevas conquistas, sigamos comprometidos con una política real de soberanía energética en busca del beneficio de todo nuestro pueblo, para nunca más dar lugar a falaces argumentaciones que detrás de las críticas al Estado, busquen desprestigiar lo que es capital de todos los argentinos, en beneficio de unos pocos. Nadie podrá desandar el camino ni recuperar las pérdidas sufridas por el pueblo y la patria en 20 años, pero de ahora en más debemos poner todo nuestro esfuerzo en que YPF vuelva a ser el estandarte del desarrollo nacional, insignia de bonanza económica y por sobre todo de justicia social.

50. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MÜLLER

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Para comenzar, deseo reiterar una expresión que han emitido muchos de mis compañeros legisladores, pero que no debemos dejar de mencionar al conjunto de los argentinos: “Estamos viviendo un momento histórico...!!!”. Estamos tomando una decisión soberana, legislando para preservar el futuro de nuestros hijos y nietos.

Preservar nuestros bienes naturales se convierte en una garantía para que los hombres y mujeres que habitan este bendito suelo puedan desarrollar sus sueños, generar fuentes genuinas de trabajo y empleo, conformar sus familias y mejorar su calidad de vida.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

YPF fue, es y será argentina. Ninguna nación del mundo, por más poder económico que ostente, por más complicidad que logre, por más falacias que manifieste, podrá cambiar este hecho. Esta empresa fue creada por argentinos para el bienestar de los argentinos y durante muchos años de nuestra historia reciente, generó trabajo, desarrollo e integración territorial.

Traigo a la reflexión de todos nosotros, como me he permitido hacerlo en otras oportunidades, el pensamiento de un gran estadista y político argentino, el general Juan Domingo Perón que en 1972, anticipándose a los acontecimientos que, en forma vertiginosa, se desencadenarían en el mundo, años después, y que aún llegan a nuestros días, dijo en su documento denominado Mensaje ambiental a los pueblos y Gobiernos del Mundo:

“Son necesarias y urgentes, una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación en las estructuras sociales y productivas de todo el mundo, en particular de los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza.”

“Cada nación tiene el derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudades o pueblos.”

Estas palabras siguen teniendo vigencia y son necesarias para resaltar dos aspectos sustanciales: por una parte, la responsabilidad que tienen las naciones frente a fenómenos como los cambios globales y climáticos, la producción sustentable, y el consumo energético, como también, la deuda que mantienen los países centrales e industrializados para resolver los problemas ambientales que han generado su desproporcionado y desigual desarrollo, además de la apropiación de recursos estratégicos, más allá de sus fronteras.

Asimismo, los avances que, poco a poco, se registran no están a la altura de la situación que vive nuestro planeta y sus diferentes ecosistemas, postergando un cambio sustancial de las condiciones ambientales. Los intereses económicos sectoriales están primando sobre el estado de bienestar de los seres vivos y sus hábitats.

Por otra parte, el pensamiento del general Perón nos permite deducir el importante rol que tiene cada uno de los miembros de una comunidad organizada y los gobiernos en procura de proteger y preservar el ambiente. En ese sentido, nosotros tenemos una tarea incesante, buscando determinar la mejor legislación que interprete el espíritu del cuerpo social y la realidad nacional.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En función de mi experiencia y vocación como legisladora de la Nación, creo de suma importancia en este momento hacer referencia y reiterar cada una de las palabras que conforman los párrafos primero y segundo del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional:

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales."

En el marco de este artículo constitucional, el Congreso Nacional sancionó la Ley General del Ambiente 25.675, la cual presenta un capítulo específico que establece las normas que rigen "...los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva." En este sentido, debo señalar dos instancias fundamentales de este proceso que estamos legislando: el antes y el después.

El pasado debe ser minuciosamente revisado, determinando los pasivos ambientales que la empresa administrada por su accionista mayoritario, Repsol, ha provocado sobre el territorio que utilizó para el desarrollo de las actividades tanto extractivas como productivas. La responsabilidad es clara y precisa por los efectos ambientales negativos que se han generado. Se debe recomponer el ambiente, o en caso de que no sea posible, la Justicia establecerá una indemnización sustitutiva.

Son numerosas las demandas judiciales iniciadas contra Repsol por daños al ambiente. Estos deben ser ponderados y los costos deben ser integrados a la ecuación económica que determine el valor de las acciones expropiadas. Precisamente, el artículo 10 de la ley 21.499 sobre el Régimen de Expropiaciones nos indica que: "La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien...", y en el valor que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación se deben contemplar los daños y efectos negativos provocados.

Ahora, deseo hablar del futuro de YPF, que debe convertirse en una empresa modelo, con responsabilidad social y ambiental de trascendencia, la que deberá establecer, de cara a la sociedad, una política específica de preservación de los recursos naturales que utiliza y de los entornos que los contienen. El Estado nacional y provincial debe garantizar a las distintas comunidades, a través del Consejo Federal que se crea por esta ley, lo que determina el inciso h), del artículo 3º, es decir, la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad, y cuando hablamos de sustentabilidad, lo hacemos en términos económicos, sociales y ambientales.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Señores legisladores: además de sancionar esta norma que devuelve dignidad al pueblo argentino, nos queda la ímproba tarea de evaluar y controlar que el proceso de nacionalización del paquete accionario, de activos y obligaciones se realice de manera transparente, se garanticen, en particular, los derechos de los trabajadores y, en general, de todos los habitantes del territorio nacional.

Señor presidente: la política energética es un elemento fundamental de la política ambiental. No hay desarrollo sin energía. Tampoco hay soberanía política, ni independencia económica, ni justicia social, si no procuramos el autoabastecimiento energético. Estamos dando un paso fundamental con la sanción de esta ley. En ese sentido, seguimos consolidando un modelo de transformación política, económica y social de relevancia regional y mundial, por ello, los aspectos ambientales requieren de un tratamiento esencial, analizando el pasado, trabajando en el presente y garantizando el futuro de nuestra generación y las futuras.

52. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA OCAÑA

Fundamentos de la abstención de la señora diputada en la votación de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La explotación del petróleo en la Argentina, desde los primeros hallazgos, allá por 1907 en Comodoro Rivadavia, ha sido uno de los temas más controvertidos en la vida política de nuestro país, especialmente en estas últimas décadas.

Sabemos que a partir de la creación de YPF en 1922 -primera organización estatal surgida en el mundo y copiada luego en muchos aspectos por otras entidades similares- y más allá de toda polémica, el problema del petróleo, del gas, o mejor dicho de la capacidad energética es una cuestión que merece ser resuelta de manera urgente.

Es importante resaltar que en aquella época de 1900 cuando se descubre el petróleo en tierras estatales en la Patagonia, el hallazgo fue recibido en un marco de apatía social y de poca trascendencia, actitud que resulta hoy irónica si se tiene en cuenta que nuestro país dependía, por entonces, enteramente del combustible importado. Pero en esos tiempos los grandes intereses económicos se centraban en la exportación de carne y cereales.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Aún así hubo hombres visionarios que comprendieron cabalmente lo que la novedad significaba. Lucharon por mantener la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, aumentar la producción y ampliar la exploración en busca de nuevos yacimientos.

A ellos les debemos nuestra esperanzada soberanía energética y que podamos hablar de la existencia de YPF. Algo similar ocurrió con el carbón. En la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales resalta la figura del general Enrique Mosconi, pionero de la aviación militar, quien entendió como ninguno el sentido independentista de la cuestión petrolera industrial y la impulsó aún contra la opinión de muchos.

Noventa años después, estamos ante un hecho crucial y fundamental para la Nación Argentina como lo es esta valiente decisión política de comenzar a recuperar el patrimonio nacional en pos de construir una nación inteligente.

Debemos acabar con esta situación que nos encuentra luchando contra la pobreza, mientras las economías más poderosas del mundo se aprovechan de nuestros recursos y riquezas naturales. La nacionalización de los recursos petrolíferos representa una reivindicación histórica y debemos ejercer plenamente nuestros derechos como Estado soberano.

La expropiación del 51% del patrimonio de YPF por causa de utilidad pública representa un paso legal, legítimo, patriótico, en pleno ejercicio del acto de derecho vigente en nuestro país. No somos una colonia de España por YPF, ni del Reino Unido, ni de ninguna nación extranjera, las grandes potencias hoy reaccionan porque este país llamado la Argentina se puso de pie.

Señor presidente: YPF representa una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y la desigualdad social, YPF es del pueblo argentino, fue concebida, nacida y organizada con un espíritu social, soberano y popular para el bien de la Nación Argentina.

En la historia de YPF dejaron su marca presidentes de diferentes orígenes políticos que – con aciertos y errores – determinaron su derroteo como Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Perón y nuestro querido don Arturo Illia.

Este proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo nacional considera que la expropiación de aquel 51% no viola ningún derecho. Se viola un derecho cuando un niño, o un anciano sufren hambre, frío y enfermedad. Cuando los hospitales no pueden cumplir con su misión, cuando se cierran escuelas, cuando se carece de energía, cuando se cierran fábricas o no se las instala, entre otras cosas precisamente por el costo y la escasez del combustible. ESO ES VIOLAR DERECHOS.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La grandeza de este proyecto está en haber propuesto una vía contraria a dogma. Aquí, en este Parlamento de la democracia, es donde tenemos la oportunidad, diputadas y diputados, para ejercer capacidad creadora generando acciones, no en contra de nadie, sino todos a favor de una mejor calidad de vida para los argentinos.

Por lo tanto, resulta urgente contar con herramientas que permitan llevar adelante políticas sociales que progresivamente acaben con la pobreza de la Argentina. Nuestra Presidenta así lo cree, así lo piensa y así lo ejecuta.

Por primera vez hablo en este recinto donde vengo a representar a mi provincia, Santiago del Estero, y a mi gobierno, elegido con el 84% de los votos de un pueblo que manifestó así, contundentemente, su apoyo a este proyecto nacional y a quienes han puesto en la senda del crecimiento sostenido a nuestra postergada provincia. Mal estaría representándolos si no acompañara esta iniciativa.

Por eso, desde esta banca adelanto mi voto afirmativo al proyecto que se debate.

52. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA OCAÑA

Fundamentos de la abstención de la señora diputada en la votación de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Desde el descubrimiento en Comodoro Rivadavia del primer pozo de petróleo en diciembre de 1907, se comenzó un largo camino para asegurar que este recurso estratégico fuera explotado en beneficio del país. El gobierno de Hipólito Yrigoyen creó la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales designándose como director general, en 1923, al coronel Enrique Mosconi, quien desarrolló una labor central para el desarrollo de la empresa estatal.

Según relata Horacio Salas en su libro Centenario del Petróleo Argentino: "...una de las primeras acciones llevadas adelante por Mosconi fue la elaboración de un plan cuatrienal; contrató geólogos con el objeto de explorar nuevas posibilidades en la zona de reserva, adquirió maquinarias de perforación, incorporó a la flota petrolera el buque tanque "Danville" y habilitó surtidores para venta de nafta y kerosene.

Asimismo, organizó la Oficina de Estadística, que debía reunir toda la información sobre hidrocarburos, precios en la Argentina y el mundo, y toda información al respecto...".

Por su parte Mosconi, en su libro El petróleo argentino expone: "...Y esto no se



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

obtendría mientras la Dirección General de Petróleo no pudiera conocer con exactitud y diariamente, por información directa de la Aduana, la cantidad de petróleo y derivados importados al país.”

Pensar que casi cien años después, nos encontramos como en esos primeros tiempos: sin controles y descubriendo de golpe que la Argentina aumentó sus importaciones y bajó considerablemente el nivel de reservas del país.

Sin duda el déficit de los recursos de hidrocarburos que afecta a la Argentina es consecuencia del colapso generalizado producido por la política energética implementada en el proceso de desregulación y desnacionalización de los hidrocarburos, llevadas adelante a partir de la década de 1990 y que fueron continuadas e impulsadas por muchos de los integrantes del Frente para la Victoria, que hoy las plantean como un grave error.

Estoy convencida de que todos podemos equivocarnos y rectificar errores, pero por honestidad intelectual se debe reconocer lo hecho y las equivocaciones. No vale justificar que en esa década de los 90 no se podía resistir a esas políticas. Muchos resistimos y peleamos para que esta entrega de los recursos argentinos no se produjera. Basta leer los periódicos de esos años o el propio Diario de Sesiones para comprobarlo. O analizar los procesos vividos en los países vecinos que jamás vendieron las “joyas de la abuela” y comprendieron que ellas constituían un eje central para el desarrollo de sus naciones.

Los que defendieron la privatización lo hicieron enarbolando banderas de soberanía, de transformación, de recuperar recursos para las provincias productoras que posibilitaran su desarrollo.

Se justificaban, como ahora, en la necesidad del autoabastecimiento, el impulso a las exportaciones, la necesidad de no destinar las divisas al pago de la deuda –hoy a las importaciones de energía-, ampliar las reservas mediante una intensiva exploración. En definitiva, garantizar a las futuras generaciones una riqueza que es central para el crecimiento del país.

Hoy sabemos, según lo expresado en los considerandos del proyecto de ley enviado por el PEN, que este proceso benefició únicamente a Repsol, que habría dismantelado y vaciado, bajo el descontrol de la propia administración estatal, a la principal petrolera argentina.

Que, según expone en sus considerandos “...la política predatoria ejecutada por Repsol YPF implicó una creciente necesidad de importaciones de combustible.”

Lo extraño, insistimos, es que todo esto lo lleven adelante aquellos que propiciaron estas políticas, sin reconocer su falta de visión estratégica, presentándose como el bombero heroico, que viene a apagar el incendio que ellos mismos crearon. Y llevan en su dotación de salvataje a los responsables del descalabro y la privatización.

Nos preguntamos ¿quién va ejercer la potestad y el control estatal? El decreto de intervención nos dice que los mismos que consintieron y avalaron con su firma en nombre del Estado el dismantelamiento, el vaciamiento y la estrategia predatoria.

Señor presidente: temo que en los próximos años descubramos que otras empresas tuvieron la misma situación predatoria que hoy se le atribuye a Repsol YPF por ausencia de control. Por eso, me parece central que este proyecto contenga una artículo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que establezca la realización de una auditoría sobre el nivel de reservas existentes en el territorio de la Nación en materia de gas y petróleo, llevada adelante por técnicos independientes designados por la Auditoría General de la Nación, la Facultad de Ingeniería de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.

También temo que en los próximos años volvamos a discutir los errores cometidos por la falta de aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y fundamentalmente la discusión de una política de Estado sobre energía que tenga en cuenta la generación de energías limpias.

Sin duda, el debate sobre YPF merece ser analizado desde dos ejes concretos y bien diferenciados. Falta la discusión de una ley de hidrocarburos.

Uno de esos ejes tiene que ver con la forma en la cual se pretende llevar adelante la nacionalización, que incluye procedimientos controvertidos, deficiencias en el proyecto de ley y antecedentes cuestionables de la medida y de quienes fueron designados para llevarla adelante, entre otras múltiples aristas a las cuales me referiré en detalle más adelante.

Y el otro eje reside en el fondo de la cuestión; en un análisis tal vez acotado al posicionamiento histórico, conceptual y personal de cada uno de nosotros frente al dilema “nacionalizar versus privatizar”.

Yo siempre me opuse a la privatización de YPF. Estoy convencida de que los hidrocarburos son bienes nacionales y de la necesidad de que, como país, pensemos estrategias de largo plazo en materia de exploración y producción. Es imprescindible que exista una verdadera política de Estado en materia energética.

Pero, seamos claros: el gobierno no promueve esta ley impulsado por la necesidad de proyectar una estrategia productiva para el país, sino que avanza sobre YPF por la crisis energética y los problemas fiscales que aquejan la caja nacional, entre otras urgencias que, a pesar de las infinitas señales que advertían lo que ocurría, no parecieron preocuparle hasta ahora.

La historia del vaciamiento de YPF ha sido un derrotero de malversación de recursos, desmanejo empresario, complicidad y falta de control gubernamental. Los funcionarios de este gobierno, los mismos que ahora figuran al frente de la intervención de la empresa, han sido los mismos que ocasionaron la caída general de las reservas y el incremento de las importaciones de energía.

El país pasó de ser exportador de hidrocarburos a importar más de lo que vende afuera, las reservas se desbarrancaron y la producción cayó en picada.

El crecimiento económico demandó inversiones en exploración y explotación cada vez más fuertes, pero el Estado no las exigió ni las promovió.

Estos acontecimientos se han producido principalmente en los últimos dos o tres años con la anuencia del actual ministro de Planificación, Julio De Vido, del secretario de Energía, Daniel Cameron, y del representante del Estado nacional en el directorio de la empresa, Roberto Baratta (mano derecha del ministro), quien aprobó cada uno de los balances, las resoluciones y las distribuciones de dividendos que hizo YPF.

Sin duda que hay responsabilidades penales y políticas por lo ocurrido y este gobierno, que ahora propone la nacionalización en un escenario de discusión binaria en el cual se está de un lado o del otro, ha estado de ambos lados, es el principal responsable y debe



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

investigar todo lo actuado.

Junto con el proyecto de expropiación, el Estado debió hacer en la Justicia la correspondiente denuncia sobre los funcionarios públicos, los síndicos y también los empresarios españoles que administraban Repsol, porque estamos hablando del vaciamiento de una empresa y, en este caso particular, de la principal empresa de la Argentina.

Sin embargo, en lugar de investigar lo ocurrido, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, premia a los funcionarios como De Vido, flamante interventor de YPF, que conducía la política energética nacional e incrementaba las importaciones de combustible mientras el vaciamiento se hacía efectivo.

En su propuesta el gobierno nacional omite informar cuáles son sus planes concretos para la empresa. Es decir, el oficialismo pretende que el Parlamento apruebe a libro cerrado un proyecto de ley carente de un plan integral que explique a este Congreso, y a todos los argentinos, en qué va a consistir su política energética de aquí en más y qué va a hacer con YPF.

Se habla de millones de dólares de reservas de petróleo, pero no se discute qué implica sacar esos recursos, de dónde saldrán o qué capitales se asociarán en ese emprendimiento. Esas discusiones son las que el gobierno no da, porque no quiere o porque no sabe cómo dar.

Tampoco han explicado qué harán con las acciones de la empresa Petersen, traspasadas en una operación sin precedentes, y a costo nulo, configurada de la mano del ex presidente Kirchner, a través de la cual la familia Ezkenazi obtuvo el 25 % de las acciones contra el pago de regalías de la propia empresa, que hoy critican bajo el rótulo de "vaciamiento".

A continuación enumeraré una serie de argumentos que he presentado como observación al dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, correspondiente al proyecto expediente 29-S-12, que resumen los elementos que considero preocupantes y fundamentales cuando hablamos de la forma en la que se pretende llevar adelante esta nacionalización: Se pretende asumir el control de una empresa sin conocer cuál es su situación patrimonial y financiera, sin efectuarse due diligence, procedimiento básico que lleva adelante hasta el comprador más inexperto.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional adolece de graves deficiencias producto del apresuramiento en su confección y tratamiento.

La ley en discusión resulta una medida parcial y débil. Se alega la promoción y recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina pero, sin embargo, no se altera en lo más mínimo el sistema de concesión de áreas de explotación y permisos de exploración existente en la actualidad.

La ley debería como punto previo fijar la realización de una auditoría integral de las reservas de hidrocarburos a fin de establecer, conforme lo propuesto en el proyecto de ley presentado por el diputado Fabián Rogel, los reales niveles de reserva sin depender de lo informado por las empresas de explotación, las cuales tienen interés en alterar la información sobre las mismas.

Debería contemplarse la creación de una comisión bicameral con facultades para auditar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

los niveles de inversión de las empresas que poseen concesiones de áreas y permisos de explotación, a fin de evaluar si han cumplido con los compromisos asumidos y, en caso de incumplimiento, declarar la caducidad automática de los acuerdos y/o convenios oportunamente celebrados.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sólo provocó un cambio en la tenencia del paquete accionario de YPF S.A., sin que ello resulte una verdadera recuperación de la soberanía alegada. El Estado nacional es socio mayoritario, pero socio al fin de una empresa privada donde inexplicablemente el grupo Petersen sigue asociado y sentado en la mesa del directorio. Es inocente pensar que los españoles son sólo responsables de los malos resultados.

Sin perjuicio de lo expuesto, y con el objeto de alcanzar la verdadera soberanía en materia de hidrocarburos, el proyecto debe contemplar la creación de una empresa nacional gestionada e integrada en un 100 % de sus acciones clase "D" por el Estado Nacional y todas las provincias y no sólo por las provincias petroleras. Ello afianzaría la verdadera naturaleza federal de los recursos de gas y petróleo.

La ley debe contemplar la intervención de la Auditoría General de la Nación para asumir el rol de oficina técnica competente en los términos del artículo 13 de la ley 21.499, conjuntamente con el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Compartiendo lo propuesto por el diputado Rogel, se deberá prever la creación de una comisión bicameral con facultades de auditar el cumplimiento del plan de inversión de las concesiones otorgadas desde el año 1990, y en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, proceder a su revocación.

La ley enviada por el Poder Ejecutivo en la redacción de su artículo 9º contiene una trampa para las provincias. Se habla de la cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones expropiadas a favor de las provincias, pero la cesión incluye de manera obligatoria la celebración de un pacto de sindicación para ejercer en forma unificada los derechos accionarios por 50 años.

No debemos engañarnos. Es el Estado nacional quien fijará e impondrá las condiciones del voto a las provincias y los términos del pacto de sindicación. En los hechos las provincias serán nominalmente tenidas en cuenta. Se pretende mostrar un federalismo que en los hechos no se materializará: se le da al Estado nacional un cheque en blanco. Deberá designarse a la Auditoría General de la Nación, órgano de fiscalización externo de YPF en resguardo del patrimonio estatal mayoritario, sin perjuicio de la fiscalización establecida por la ley 19.550.

Para concluir, considero que el fondo de la propuesta de nacionalización de YPF va en la dirección que muchos de quienes nos oponemos a este gobierno hemos propiciado a lo largo de nuestra trayectoria, sobre todo en los momentos en los que quienes integran hoy el oficialismo impulsaban y votaban lo contrario.

De manera que sería contradictorio si hoy me opusiera a que YPF volviera a ser parte del Estado.

Sin embargo, estoy convencida de que la forma en la cual se está llevando a cabo este proyecto es corrupta y conlleva un gran daño para el país.

Siempre he luchado por romper con las estructuras corruptas en el Estado. He trabajado incansablemente como legisladora, como funcionaria y desde la sociedad civil para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

eliminar las mafias enquistadas en el poder que producen daños irreparables en la sociedad.

No puedo avalar la trampa que esconde este proyecto.

Es inadmisibles el marco de encubrimiento por parte del gobierno a quienes tomarán las riendas de su conducción y que, insisto, son los mismos que deberían ser investigados por producir la mayor crisis petrolera de nuestra historia.

Es un error estatizar esta empresa para que sea manejada como una sociedad anónima, ajena a procedimientos de auditoría por parte de los organismos de control. Ya hemos visto lo que sucede en Aerolíneas Argentinas u otras empresas a las cuales despojan de controles institucionales y desvían fondos ilimitados y discrecionales, cuyo destino desconocemos.

El proyecto es arbitrario, profundiza la superposición de la figura del gobierno sobre la del Estado y lleva a su punto máximo la evasión del control de otros poderes sobre el Ejecutivo. Adolece de graves deficiencias, la ley es parcial y débil y, fundamentalmente, no plantea la recuperación soberana que proclama el gobierno así como tampoco permite la configuración de un esquema verdaderamente federal de los recursos hidrocarburíferos como pregonaba el oficialismo.

En la política existe la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

Sigo teniendo la convicción de que YPF debe ser estatal, pero mi responsabilidad como diputada y como representante de todos aquellos que luchan por construir una sociedad mejor, más justa y menos corrupta y que me votaron para que dé esa pelea, no me permite apoyar esta iniciativa.

Muchas veces se ha dicho que la corrupción está alejada de los problemas o las preocupaciones de la gente. No es cierto. Hubo una mafia en la Argentina que vendió medicamentos adulterados a nuestros enfermos.

Yo llegué a una institución como el PAMI, que era modelo de la corrupción, y la saqué de ese lugar para transformarla en una obra social para los jubilados. Sé que eso se puede hacer con decisión política.

No es fácil y menos aún hacerlo sola, pero se puede hacer si uno tiene las manos limpias y no tiene compromisos.

Tal vez, como dicen algunos, la corrupción sea algo estructural al Estado. El problema es que en la Argentina a la corrupción se le suma la impunidad.

No me resigno a convivir con la impunidad. El día que hacer política me obligue a soslayar la corrupción o a justificarla por un objetivo mayor, ese día dejaré de dedicarme a la política.

Por lo tanto voy a solicitar autorización para abstenerme de votar.

53. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO OLIVA

Fundamentos del apoyo del bloque del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Dijimos que nuestro bloque acompañaba el proyecto de ley de expropiación remitido por el Poder Ejecutivo nacional, por gozar el mismo de constitucionalidad. También por enmarcarse dentro del pleno ejercicio de la soberanía nacional. Sobre este punto merece agregarse que una gran cantidad de países son titulares del 100% de las acciones, y otros que sin alcanzarlo, cuentan con un paquete accionario que les asegura el control de la empresa, como es el caso de Brasil.

Y también dijimos que se trata de una medida de gobierno indispensable y plenamente justificada, como consecuencia de los variados incumplimientos de parte de la Empresa, lo que motivara caer en una grave crisis energética al país.

Y esto debe quedar muy en claro, sobre todo hacia los observadores externos.

En un contexto de crecimiento económico del país, consecuencia de la promoción del sector industrial, como así también de una sociedad que exige mejor calidad de vida y, consecuentemente, un aumento de consumo energético, es necesario, como dice el mensaje de elevación del proyecto de expropiación, asegurar la disponibilidad de los recursos que resultan estratégicos para sostener la expansión de la producción.

Las reacciones y defensas esgrimidas por Repsol, resultan hasta obvias. Estamos analizando una cuestión en donde hay intereses contrapuestos, por un lado, una empresa, que cuida sus negocios, teniendo como objetivo principal obtener ganancias, y por otro el Estado nacional, que tiene la obligación de cuidar los intereses de todos los argentinos.-

Esto sirve para aventar cualquier interpretación malintencionada de falsos nacionalismos, lo cual podría abrir otro tipo de discusiones.

Es una medida adoptada con premura ante una situación generada por el incumplimiento de una empresa, que pone en una encrucijada al gobierno argentino, no dejando otra posibilidad que concretar la expropiación.

Respecto de las voces que escuchamos desde el gobierno español, debe quedar claro que no se trata de una medida adoptada por un gobierno imprevisible, ni que evidencia, como se pretende instalar, acciones que hablan de inseguridad jurídica para los inversores. Basta para ilustrar el comportamiento que ha tenido la Argentina con el resto del mundo, y las señales claras de honrar los compromisos el tema de la deuda externa, en el que no sólo ha cumplido, sino que ha efectuado pagos anticipados para su cancelación mediante el uso de las reservas del Tesoro nacional.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, no se puede dejar de tener en cuenta el respaldo popular y de las fuerzas con representación parlamentaria.

Estos argumentos en que se sustenta el proyecto expropiatorio también los sostienen muchos bloques de la oposición.

Hemos visto algunas medidas similares en otros países, que internamente han sido



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

resistidas por los sectores de la oposición, dejando solos al oficialismo de esas naciones para llevar adelante la medida.

En la Argentina, esta medida es impulsada por el oficialismo gobernante, pero es acompañada también con firmeza por prácticamente todo el arco opositor con representación parlamentaria.

Una oposición que si por algo no se caracteriza es por ser complaciente con el gobierno; sin embargo nos están acompañando, porque en definitiva debemos estar todos los argentinos, de todo el país, cualquiera sea la pertenencia partidaria, embarcados en este problema y abocados a trabajar en su solución.

Yo soy de quienes piensan que la privatización de YPF fue un gran error para la Argentina.

En algunas etapas de nuestra historia los argentinos tuvimos muchas veces posiciones pendulares, oscilando de un extremo a otro, o transitando caminos sinuosos, con marchas y contramarchas.

Nosotros aspiramos, sinceramente, que a partir de la sanción de esta ley que se producirá en pocas horas, comencemos a transitar un camino a pasos firmes, hacia los objetivos que todos compartimos, que es lograr el autoabastecimiento energético que asegure y acompañe el crecimiento con desarrollo de nuestro país.-

Por estas consideraciones nuestro bloque votará afirmativamente el presente proyecto de ley.-

54. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ORTIZ CORREA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En primer lugar expresar mi satisfacción por formar parte de este Parlamento y de este bloque FPV, también el orgullo de sentirme representante de todo el pueblo de la Nación Argentina, como también del pueblo de mi provincia de Catamarca. En segundo lugar, quiero manifestar mi apoyo al proyecto de Ley que hoy estamos tratando y que hace al modelo de país de crecimiento con inclusión social, tal cual se expresa en el mensaje 529 del PE.-

Es de destacar lo acertado respecto al título del proyecto “DE LA SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”, porque cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de soberanía. Y en este sentido es necesario, en base a algunas opiniones vertidas en este recinto, como así también en la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

reunión conjunta de comisiones o en algunos medios, echar luz sobre el concepto de soberanía. Soberanía no es un término aplicable solo para dirimir conflictos determinando la pertenencia o no de recursos o territorios a uno u otro Estado. Su significado es mucho más abarcativo.

Soberanía, principalmente, hace referencia a la facultad de decidir sobre aspectos esenciales de la vida y la continuidad de la unidad política Estado. En definitiva, “la facultad de decisión sobre la conducta e intereses de todos los sujetos dentro de su territorio”. Y es en este sentido que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de la recuperación de la soberanía de los recursos. Se trata de un modelo de recuperación y no de estatización. Es así que la decisión de controlar nuestros recursos hidrocarburíferos es del interés de todos los argentinos en pos del bien común de la comunidad en su conjunto.

Por su parte, sabemos que Repsol YPF explotó demasiado los yacimientos pero no descubrieron prácticamente nuevos, produciendo con ello políticas de vaciamiento de nuestras reservas, políticas de no producción ni exportación. Todo lleva a justificar la expropiación de las correspondientes acciones a que hace referencia el proyecto de ley, sin que ello signifique discriminación ni una cuestión que cree tensión con hermanos extranjeros sino que, simplemente, entendemos que los que sean o son accionistas extranjeros deben obrar bajo el principio de solidaridad que a todos atañe. Si obtienen ganancias va de suyo que deben reinvertir en el país para apoyar el crecimiento y la producción, y tanto es así que no se trata de discriminar a los capitales extranjeros por cuanto en la ley se prevé la posibilidad de que la nueva YPF SA realice o lleve adelante acuerdos o asociaciones con empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.

Otro punto importante a tener en cuenta es que a partir de la aprobación de este proyecto, quien quiera vender el patrimonio del Estado deberá declarar la utilidad pública para la expropiación de las acciones, encontrándose prohibida su transferencia futura sin la autorización del Congreso, votada por las 2/3 partes de sus miembros – mayoría agravada-.

Es necesaria la Administración de la empresa de manera profesionalizada: gente que cuente con los conocimientos y capacidades necesarios al efecto, pero que además esté comprometida con un proyecto de país en crecimiento, comprometida con nuestra historia.

Por último, deseo expresar que los jóvenes que formamos parte de este proyecto, apoyamos con plena convicción el modelo de crecimiento y no respondemos a ninguna disciplina partidaria; tenemos desplegadas las banderas y también la emoción en nuestros corazones, porque con el ex presidente, Néstor Kirchner y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hemos dejado de ser meros expectadores para sentirnos protagonistas de la historia de nuestra patria, y esto se siente de punta a punta porque los jóvenes estamos de pie de Norte a Sur, de Este a Oeste, en defensa de todo lo que tanto nos costó.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

55. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PARADA

Fundamentos del apoyo en general del bloque de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Después de la entrega brutal que signó los años del Consenso de Washington, del neoliberalismo depredador, este paso, pequeño pero significativo, está en los albores de la finalización del consenso privatizador que socavó y aún socava nuestra tierra, generando tal cantidad de daños colaterales que no alcanzará un siglo para revertir lo que una treintena de años le hicieron a la humanidad y a la naturaleza toda.

La lucha por el petróleo en el mundo, deja al descubierto nuestro costado más primitivo, como la guerra del fuego. Está rodeada de violencia, muerte y hambruna para los pueblos que son saqueados, de un modo u otro, para la extracción de este recurso energético.

Nuestro país también ha sido uno de los tantos saqueados y sometidos bajo una brutal dictadura que alcanzó sus cometidos bajo la legalidad de la democracia, hasta el grito del “Que se vayan todos!”, del que formé parte.

Pasaron 10 años y los sucesivos gobiernos han tomado debida nota de que no pueden detener el proceso de memoria del pueblo argentino, y han ido efectuando reivindicaciones sesgadas y con cuentagotas, para disimular que la matriz productiva continúa intacta.

Ahora bien, puesto en debate el proyecto que hoy nos toca votar, frente a la importancia que tiene pensar al Estado desde otra concepción que rompe aquel acuerdo desnacionalizador, aun desde lo simbólico, no cabe duda de qué lado hay que estar.

No cabe otra respuesta que el cambio de rumbo. No hay posibilidad de soberanía energética, alimentaria y ambiental, sin soberanía política de los mercados como gerentes de los bienes comunes de los pueblos.

Sabemos que el proyecto en análisis no reúne las condiciones para ser la respuesta suficiente, pero sí resulta conducente para la edificación de un nuevo consenso que recupere el rol del Estado como responsable de la planificación de políticas públicas que construyan soberanía, en lugar de un Estado “bobo” y dependiente de las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

multinacionales.

Paradójicamente, la ley 21.499 que sirve de base a la expropiación que nos ocupa, es una ley de la dictadura, y lo paradójico es que aun así, contiene algunos conceptos que no merecen ser cuestionados.

Por ejemplo, el artículo 1º establece claramente: “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.

Es decir que para poder declarar de utilidad pública al 51% de las acciones de YPF, primeramente había que instituir cuál era el bien común a satisfacer, y es por ello que el Poder Ejecutivo se ve obligado a declarar de interés público a la actividad hidrocarburífera, con el objetivo declamado de lograr un abastecimiento acorde con las necesidades actuales y futuras.

Es la única interpretación posible dado que si la toma de control de YPF fuera una consecuencia o una herramienta de una nueva política energética, debería haberse incorporado al título I un nuevo marco regulatorio, derogando el que rige actualmente para YPF y que seguirá rigiendo para el 70% de la actividad, en manos de otros operadores.

Que se crea que la presente iniciativa es la consecuencia inevitable del fracaso de una política que el gobierno se niega a admitir, no implica no reconocer que puede significar el inicio de una nueva que, efectivamente, nos lleve a recuperar grados de soberanía energética, dada la dependencia hidrocarburífera de nuestra matriz energética.

Es por ello que es conveniente en estos momentos reflexionar sobre cuáles corresponderían ser los principios que deberían regir una política de Estado en materia energética que cumpla los objetivos planteados en el título I del proyecto a consideración.

El primer principio es la sostenibilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza. Como ha quedado demostrado en los últimos veinte años, hay distintas formas de lograr el autoabastecimiento, pero no todas implican un mayor grado de soberanía.

Es cierto que el petróleo y sus combustibles derivados revisten carácter de estratégicos, pero tan importante como ello es que sus costos principales son los asociados a la amortización de las inversiones realizadas, por lo que, si todo se deja librado a los mecanismos de asignación del libre mercado, lo más probable que suceda -y de hecho es lo que ha venido sucediendo históricamente en el sector privado de nuestro país-, es que se constituyan barreras de entrada a nuevos competidores y que el oligopolio



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

existente sea quien tome las decisiones sobre cantidades y precios, privilegiando maximizar la rentabilidad de corto plazo sobre cualquier interés estratégico nacional.

Es decir, si se adopta un modelo energético sin regulación estatal, como el que existe en nuestro país, lo que se obtiene es la máxima producción presente (que se dio en 1998 en petróleo y 2004 en gas) a costa de una caída cada vez más pronunciada a futuro, como en la actualidad.

Es por ello que solamente con planificación, coordinación de los actores privados, e intervención directa por parte del Estado, es posible mantener un flujo estable de energía a lo largo del tiempo, lo que se conoce normalmente como sostenibilidad del recurso.

El segundo principio a tener en cuenta es la Sustentabilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza.

Otro aspecto que tiene relación directa con que las generaciones futuras puedan disponer de energía es la cuestión ambiental. Nuestra matriz energética debe diversificarse, no solamente para lograr sostenibilidad del flujo sino para incorporar cada vez una mayor proporción de energías limpias, de fuentes renovables y que no impliquen una pérdida de soberanía en otra cuestión esencial, como la alimentaria.

El gobierno ha alentado la producción de los denominados “biocombustibles” principalmente a partir del procesamiento de la soja, como forma de sustituir parcialmente al combustible derivado de petróleo, incentivando con subsidios y exenciones impositivas a la producción en exceso de estos commodities y por lo tanto estamos equivocándonos nuevamente, como en el caso del petróleo. Cuando se pierda la biodiversidad y el monocultivo reemplace a la producción de los alimentos adecuados para nuestras necesidades, será tarde y no creo que expropiar el 51% de la tenencia accionaria de las cerealeras pueda solucionar la crisis. Actualmente, producimos diez veces la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias de nuestra población, y aun tomando los datos oficiales de dudosa composición, hay cerca de un millón de personas que padecen hambre en la República Argentina.

El tercer elemento es la accesibilidad. Con el autoabastecimiento no alcanza. En abstracto, tener “suficiente” energía significa en realidad tener lo suficiente del tipo adecuado, en el lugar correcto y en el momento adecuado para satisfacer lo que los potenciales consumidores y usuarios deberían poder ser capaces de adquirir en la forma de bienes y servicios. En un sentido más estricto, el acceso de un país para el suministro de energía puede ser “adecuado”, aun cuando para muchas personas les resulte tan caro que no puedan obtener lo que les gustaría.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Es por ello que una planificación desde una perspectiva de soberanía -que sólo tiene sentido en tanto soberanía popular- no puede desentenderse de la relación entre el consumo energético y la distribución del ingreso, como así también debe establecer un piso mínimo de necesidades cubiertas en términos de derecho al acceso universal a la energía eléctrica y a un sistema moderno de cocción de alimentos, tal como lo reconocen las agencias internacionales sostenidas por los países desarrollados.

Por último, y de manera inescindible, el principio que debe iluminar todos los demás, es el de Soberanía: seguridad energética más participación popular más integración latinoamericana:

La FAO y la CEPAL proponen el siguiente concepto de seguridad energética:

“Asegurar el abastecimiento energético requerido por un territorio para proseguir su desarrollo económico y social mediante la garantía de eficiencia en el suministro del recurso energético, eficacia en su distribución, protección del medioambiente gracias a una política que privilegie la sustentabilidad, la elaboración de marcos regulatorios adecuados y la contribución al objetivo de equidad social sobre la base de la defensa, preservación y soberanía de su infraestructura ante eventuales amenazas de carácter interno o externo”.

Un norte similar al expresado por esta definición debe guiar el accionar del Estado, pero teniendo en cuenta que el concepto de soberanía debe reformularse para legitimar los procesos de integración latinoamericana, que en la cuestión que estamos abordando es parte fundamental de una estrategia exitosa.

Es claro que el camino es largo y hay que deshacer uno a uno los nudos que nos atan a una “matrix” dominante. No obstante y a la luz del proyecto que vamos a acompañar en general, es sumamente importante que al menos esta vez estemos en camino.

56. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PEROTTI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Quiero sumar mi adhesión al proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. El cambio



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

propuesto tiene como objetivo principal retomar el control sobre YPF y lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos de nuestra Nación. A la vez, estamos recuperando una herramienta principal para incrementar la producción de combustibles, revertir el déficit comercial de hidrocarburos y retomar la iniciativa en la exploración de nuevas cuencas hidrocarburíferas.

Quiero expresar en este sentido mi especial interés porque la empresa recupere y diseñe un plan nacional de exploración, tarea futura del Consejo Federal de Hidrocarburos, espacio creado por el proyecto de ley que estamos tratando, que prevé su integración con todas las provincias de nuestro país –tanto las productoras de hidrocarburos como las que todavía no lo son- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, el último antecedente de exploración en territorio santafesino se dio a partir de la firma del convenio entre YPF y el gobierno de Santa Fe, realizado el 29 de marzo de 2010, en el que se daba el marco por el término de dos años para comenzar las tareas de relevamiento. El plazo ha finalizado, por lo que esperamos los informes técnicos de las exploraciones realizadas en territorio provincial.

Quiero recordar que mi provincia experimentó la primera perforación en busca de petróleo en 1935, en la localidad de San Cristóbal, la misma empresa perforó luego en 1945 los pozos San Cristóbal 2 y 3; Ceres-1, en 1963 y Josefina es-1, en 1978. También el Saira es-1 (éste, en la localidad homónima de la provincia de Córdoba, apenas traspasado el límite interprovincial que marca el arroyo Tortugas), en 1977. Luego, en 1989 la compañía Shell perforó el pozo Las Mochas x-1; en 1993 la empresa Marathon realizó el sondeo Firmat x-1 y en 1996 los últimos pozos perforados por YPF fueron los llamados Arroyo Saladillo x-1 y x-2.-

En la década de los '80, YPF realizó cateos en la denominada cuenca del Noreste o Chacoparanaense, zona que abarca una superficie de más de 950.000 kilómetros cuadrados y que abarca las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero parte de Córdoba y Buenos Aires, Misiones, Corrientes, además de Entre Ríos y Santa Fe

Además de estos objetivos estratégicos, estamos ante una gran oportunidad de convertir a YPF en un actor clave del desarrollo tecnológico argentino, incrementando la inversión por parte de la mayor empresa del país en investigación y desarrollo. Nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha definido una clara política en ciencia y tecnología, no sólo para convertirnos en un país con acceso a las tecnologías, sino también para tener capacidad propia de producirla de acuerdo a sus objetivos estratégicos.

Señor presidente: las empresas petroleras por la magnitud de los recursos que manejan y por el propio perfil de su actividad, no sólo desarrollan el conocimiento y la tecnología necesaria para mejorar la explotación petrolera, sino que investigan sobre formas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

alternativas de energía, nuevos materiales y estimulan innovaciones en sus proveedores y clientes. Una empresa con esta orientación será también un espacio vital para la formación de ingenieros y técnicos especializados.

Aquí reside mi esperanza en que YPF se convierta en un actor clave del desarrollo tecnológico argentino, como lo fue Gas del Estado o como lo es en la actualidad la empresa INVAP.

No voy a repetir en mi intervención las cifras de facturación o utilidades de Repsol ya expresadas aquí por mis compañeros de bloque, pero quiero detenerme en un aspecto a partir del cual podemos visualizar la magnitud de la posibilidad a la cual nos enfrentamos. Repsol ha declarado a la Comisión de Valores de Estados Unidos haber destinado en 2010, la exigua cifra de 8 millones de dólares para investigación y desarrollo, sobre un total de ventas en ese período de 13.730 millones de dólares.

Comparemos en este aspecto la estrategia de Petrobras, que en 2010 ha destinado para investigación más de 900 millones de dólares y ha registrado 42 patentes en Brasil y 120 en el exterior, poseyendo más de 3.500 investigadores y proyectos conjuntos con más de 100 universidades para distintas soluciones tecnológicas aplicables a diferentes negocios de la empresa.

Decía el gran pensador argentino Don Arturo Jauretche: “Sólo nos basta ver la línea nacional para saber cuál es el camino”. No tengo dudas que este proyecto presentado por la presidenta está en esa dirección correcta, por eso adelanto mi voto positivo.

57. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PIETRAGALLA CORTI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Ante todo voy a cumplir una promesa. Voy a leer la carta de Adrián, un compañero que trabaja como playero en una estación de servicio de YPF. Él me pidió que haga llegar su mensaje como trabajador, en el marco de este debate. Su carta manuscrita dice así:

“Hola: Mi nombre es Adrián y soy empleado de estaciones de servicio desde hace 20 años y trabajo para YPF desde 1998. Quiero aprovechar la oportunidad que me



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

ofrecieron para expresarme con respecto a la expropiación de YPF. Más allá de lo que se habla sobre la falta de inversiones y demás. Yo he notado a lo largo de estos últimos 14 años que trabajo para YPF la presión que se ejerce sobre los empresarios. Y como todos sabemos la gran cantidad de estaciones de servicio en todo el país que tuvieron que cerrar debido a la falta de combustible, dejando así sin trabajo a miles de compañeros. Pienso que YPF vuelva a manos argentinas es otra decisión acertada de nuestra señora presidenta, quien nos muestra una vez más su valentía, coraje y patriotismo. [firmado:] Adrián”.

Me parecía importante poder consultar una opinión calificada, es decir: la de uno de los trabajadores -en este caso: de la etapa de comercialización del combustible- que conocen cómo actúa la empresa y pueden dar cuenta del mal momento que está atravesando.

Las siglas YPF nos remiten a nuestra historia: a los pioneros del petróleo en el Sur, a la construcción de rutas y a la fundación de pueblos y ciudades, al desarrollo económico. Cargar nafta en YPF era, como decía su eslogan, “comprarle al país”.

Pero nuestro país padeció la larga noche neoliberal, que comenzó con el baño de sangre disciplinador y represivo del genocidio militar. Hablamos de Martínez de Hoz y de sus seguidores. El modelo económico era defendido a sangre y fuego por las armas de la dictadura. Ya con democracia, las mismas ideas económicas seguían vigentes y fuertes. Se puso de moda sostener que el Estado debía reducirse al mínimo posible porque era ineficiente por naturaleza, que debían desregularse todas las actividades económicas, que la mano invisible del mercado produciría un círculo virtuoso que nos beneficiaría a todos. Pero el “efecto derrame” nunca llegó. La “modernización” le sirvió a unos pocos. Nos mostraban estaciones de servicio futuristas, nos decían que la Argentina había entrado al Primer Mundo porque las acciones cotizaban en la bolsa de Nueva York. Pero la primera medida fue despedir a miles de trabajadores, lo que impactó profundamente en la vida de las ciudades. En muchas de éstas, las puebladas y el surgimiento del movimiento piquetero fueron la expresión de la lucha social contra este proceso devastador: Mosconi, Tartagal, Cutral Có, entre otras.

YPF pasó a ser una sigla sin significado, porque con la trasnacionalización se nos fueron los yacimientos y el petróleo, y en los hechos ya no eran más fiscales. Si no se controlan los recursos naturales, la soberanía hidrocarburífera queda sólo en los papeles.

Después vino la debacle de 2001, que no es un dato menor, porque significó el fracaso rotundo de ese modelo económico que sirvió de base y de razón de ser al proceso de privatización de YPF. Otros tiempos demandan otras recetas, en eso consiste aprender de nuestra historia.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El resultado de la experiencia fue amargo: a más de 20 años de su privatización, la Argentina, un país gasífero y petrolero por excelencia, tiene hoy que importar gas y petróleo. Y, por supuesto, se exportaron cifras siderales en ganancias para Repsol.

La multinacional le sirvió a muchas naciones menos a la nuestra, y la gran empresa respondió a los grandes intereses, pero no a los nuestros.

El otro día me contaban de un trabajador de una de las empresas controladas por YPF, que si bien no adhiere a nuestro espacio político estaba muy contento con la expropiación. Porque hasta ahora él se dedicaba a proyectos en otros países y que le constaba en su día a día que la inversión en la Argentina no existía. Nuevamente, basta hablar con los trabajadores para comprobar lo que dicen los números de la presidenta.

La dirigencia empresarial no estuvo a la altura de las circunstancias: subestimaron nuestras perspectivas de crecimiento económico y no las acompañaron. Se brindaron de lleno a la especulación financiera en vez de concentrarse en la exploración y explotación. Más preocupados por la situación de su casa matriz, relegaron la producción y la inversión que el país necesitaba.

Ante un panorama así, en el cual la empresa no pone al servicio del pueblo un recurso estratégico por excelencia, no debe extrañarnos la necesidad de la declaración de esta actividad como de “utilidad pública”.

El autoabastecimiento no es una consigna vacía; es a lo que apunta todo país que desee crecer soberanamente y no ser sujeto de extorsión. Significa que los combustibles tengan precios justos para el consumidor, significa desarrollo energético e industrial, significa el insumo para que Aerolíneas Argentinas, otra empresa de bandera recuperada por el país, siga reduciendo las distancias de nuestro gran territorio. Significa que las provincias tengan participación en las decisiones referidas a sus propios recursos naturales.

Y hoy, este proyecto político que nace en esa Patagonia petrolífera tiene la decisión política de cambiar esta historia. En estos 20 años algunas voces se han levantado a favor de la recuperación de este recurso natural, pero la grieta, la bisagra, la oportunidad se abre y es realidad gracias al coraje y a la visión a futuro de nuestra presidenta. Es impensable que una medida de este tipo, expresada en forma clara y contundente, se hubiese tomado en otras circunstancias y por otras personas. Una vez más, se avanza con un acierto.

Y unos pocos nos criticarán por eso, siempre lo hacen. Primero, nos querían hacer creer que una medida de este tipo nunca iba a ser tomada, que los intereses era muy fuertes y no obstante hoy la estamos debatiendo y convirtiendo en ley. Ahora, se oponen porque desconfían de lo público –siempre lo hicieron- y como única bandera levantan la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

seguridad jurídica a cualquier precio para la inversión privada. Nosotros creemos que la mayor seguridad jurídica es la que garantiza la sustentabilidad de un país y de su gente, y su desarrollo económico presente y futuro; la tranquilidad de saber que se puede contar con energía y combustible para nosotros y para los que vendrán. Y sabemos que el 16 de abril se inició un largo proceso que nos trasciende, del que se van a beneficiar nuestros hijos. Hoy se siguen fundando las bases de un país liberado.

Esta medida surge como una pieza clave del modelo de crecimiento iniciado en 2003 y, prueba de ello, es el consenso político y popular que ha generado. Me siento orgulloso de ser parte de esta sesión y poder acompañar, votar y defender este hito. Ver renacer a YPF al servicio de la inclusión social y estar acá, siendo parte de esta historia.

Volvemos a tener yacimientos, volvemos a tener petróleo y vuelven a ser de todos.

58. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PILATTI VERGARA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Estamos haciendo historia, porque estamos recuperando nuestra soberanía y, a la vez, impulsando una profundización de las transformaciones sociales y políticas iniciadas en la Argentina a partir del 25 de mayo de 2003.

En este momento, con coraje y entusiasmo patriótico, el pueblo argentino nos acompaña.- Y acompaña mayoritariamente porque el pueblo sabe que el mundo actual es escenario de una lucha implacable por los recursos naturales, que se lleva a cabo con botas militares o agazapada en privatizaciones arregladas.- Para comprobar lo que decimos, basta con observar la conflictividad social e internacional vigente en los últimos tiempos. Y ello, con una matriz, cual es la concepción neoliberal de que el Estado debe estar al servicio de la rapacidad multinacional. YPF Repsol es un calco repetido de esta experiencia impuesta por el neoliberalismo en el mundo. El modelo consistió siempre en que el Estado privatizador debía asumir las deudas de la empresa, mientras ésta implementaba solamente las inversiones necesarias para obtener su máxima rentabilidad y, por lo tanto, omitiendo y excluyendo todas las implicancias de las inversiones y las estrategias productivas relacionadas al interés nacional y al bien común. Y por eso- justamente- es que el accionar de empresas como Repsol YPF deriva en situaciones inverosímiles, como que países con grandes reservas y potencial de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

producción energética se ven obligados a importar energía a precios mayores que los que les costaría producir. Por esta simple razón los medios de comunicación que se oponen al despegue del interés nacional, se han esforzado en tergiversar la necesidad y la trascendencia del proyecto de ley. Tampoco han ahorrado manipulaciones mediáticas sobre el contenido y la significación de las medidas adoptadas por el gobierno, a sabiendas de que el país no puede crecer sin manejo autónomo y soberano de la energía, que la continuidad del desarrollo actual y del futuro se hace imposible sin el manejo de los recursos propios.- No son comunicadores sociales comprometidos con la verdad. Están comprometidos con la promoción y sustentación del neocolonialismo extractivista, que disfraza el saqueo bajo el ropaje de la apertura comercial internacional. Tras este concepto que se pretende dogma de fe que debemos abrazar, se esconde la idea y la práctica de que el Estado está para abogar por empresas tramposas como Repsol, y no para servir a la sociedad y preservar el futuro de la Nación. Por todo ello, debemos asumir que la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, la intervención de YPF y la introducción de la gestión estatal en la empresa, son medidas necesarias para comenzar A REVERTIR LA DEPRDACION ENERGETICA.- Según el informe del equipo dirigido por el investigador y economista Claudio Katz: “Durante una década, Repsol lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones preexistentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Sin embargo, esta conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de la expropiación en curso.”- Ahora, cuestionan la “violación del orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por parte de la firma.- Y recíprocamente, estos mismos personeros son los que aprueban los atropellos contra los derechos de los trabajadores petroleros, sin extender a ellos los mismos principios de seguridad jurídica.

En su afán de conmocionar a la opinión pública, para empañar de algún modo la alegría y el fervor que despiertan las medidas de recuperación de YPF, advierten tenazmente sobre las apocalípticas consecuencias de “aislarse del mundo”, sin mencionar el récord Guinness de pronósticos fallidos que los han acompañado en estos últimos nueve años. Alertan sobre todo contra el inminente conflicto que la expropiación suscitará entre argentinos y españoles, como si Repsol fuera la representación del pueblo español, cuando en realidad es una empresa privada en la que el grueso del capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Además, no se especializa en enriquecer el mercado interno español, sino en localizar sociedades en paraísos fiscales, POTENCIANDO ASI LA EVASION IMPOSITIVA QUE HA DETERIORADO las finanzas españolas, contribuyendo a la necesidad de ajuste y la recesión, que enfrentan al gobierno defensor de Repsol contra su propio pueblo.

Por todo lo dicho, el proyecto de ley que estamos tratando es una propuesta emancipadora. Inicia una etapa de la vida nacional hacia el destino buscado por todos los grandes argentinos. Y eso exige y obliga a todos los argentinos de bien, a comprometer su apoyo, porque hoy se abre un proceso para hacer entre todos el país que soñamos. La Argentina ha dado muestras -a lo largo de su historia- de su capacidad para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

realizar y llevar adelante los grandes emprendimientos de la modernidad.- Y también esa misma historia ha dado muestras de que todos los intereses estratégicos del país han sido siempre blanco de otros grandes intereses que codician el usufructo de nuestras riquezas.-

Los procesos de los 90 y las denostaciones sistemáticas de hoy, no estaban fundados sólo en la rentabilidad de nuestras empresas y patrimonios estratégicos, sino en la voluntad de desmantelarnos como Nación.

Por eso, es que en nuestra actualidad la tarea esencial no trata sólo de déficit mas o déficit menos, sino en volver a organizar el desarrollo de la energía, la siderurgia, los transportes... y en estos campos solo el Estado puede actuar con el objetivo de beneficiar a la Nación y por extensión, al pueblo argentino. Por esta razón, hoy como siempre la disputa por el futuro se resume en: procesos populares o neoliberalismo. El viento no se puede parar con las manos: la Argentina marcha ahora, irremediabilmente, hacia su destino.

59. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PUIGGRÓS

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Desde fines del siglo XIX, el petróleo se transformó en el elemento central de todo proceso económico, emancipador e industrialista. Y ha sido uno de los principales objetos de disputa entre los países. Basta con observar los genocidios y usurpaciones por parte de los países agrupados en la OTAN y la usurpación y exploración petrolera de Inglaterra en las islas Malvinas. Las consideraciones antecedentes dejan en claro la legitimidad de la histórica decisión del gobierno nacional de recuperar YPF e YCF. En 1938 Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de la industria petrolera en México. Dijo en su discurso: “Las compañías petroleras han gozado durante años de grandes privilegios (...) cuyos factores, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la Nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.”

Tenemos que hacer historia, memoria argentina y latinoamericana que desnuda el vaciamiento al cual las grandes potencias sometieron y pretenden seguir sometiendo a nuestros pueblos, apoderándose de sus riquezas y de su trabajo. Eso pensaba Hipólito



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Yrigoyen cuando el 3 de julio de 1922 fundó YPF, la primera petrolera estatal del mundo. Se enfrentó a la Standard Oil lo que constituyó una de las causas de su derrocamiento, como denunció Raúl Scalabrini Ortiz. Durante los siete años de la gestión del primer director de YPF, el general Mosconi, la empresa multiplicó 400 veces su capital inicial. En 1949, durante el gobierno de Perón, el art. 40 de la nueva Constitución otorgó al gobierno jurisdicción sobre todas las concesiones petroleras por primera vez en la historia.

En la misma época, el presidente Getulio Vargas, de Brasil creaba la empresa estatal Petrobras, en tanto Perón inauguraba el primer gasoducto de América Latina, que recorre 1700 km entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. Arturo Frondizi escribió *Petróleo y Política*; usó ese texto para la campaña presidencial de 1957 y estableció un compromiso con el exiliado Perón que incluía la defensa del petróleo. Fue el primer compromiso que rompió, otorgando concesiones a las petroleras multinacionales. Ahí empezó la debacle.

Poco después, el presidente Illia anuló esos contratos, y ello fue una de las razones de su derrocamiento. La dictadura cívico militar comenzada en 1976, endeuda fraudulentamente a YPF y a Gas del Estado con empréstitos millonarios, derivados al sistema rentístico financiero. El FMI y el gobierno de Carlos Menem idearon el plan de convertibilidad, que les permitió privatizar las empresas públicas. Se permitió comprar las dos compañías más grandes de la Argentina, YPF y Gas del Estado, con bonos de la deuda, que valían sólo el 15% de su valor nominal.

Con la privatización, en 20 años, el país cedió a las petroleras 5.000 millones de barriles, una riqueza equivalente a precios de hoy a 550 mil millones de dólares. Gas del Estado, que había sido la tercera compañía gasífera del mundo, modelo de varios países, fue vendida por la tercera parte de su valor. Las privatizaciones no fueron dirigidas a la exploración y al incremento de reservas, sino a la sobreexplotación. En 1999, finalizó el proceso con la venta de la empresa a Repsol. El país perdió aceleradamente sus reservas y no se desarrollaron fuentes de energía alternativas. YPF e YCF nacionales eran productoras de conocimiento y organizadoras sociales. Desarrollaban investigación y formaban técnicos. Las características de la explotación obligaban a combinar tecnología con los saberes adquiridos por los trabajadores en la experiencia laboral. Dentro de YPF se desarrollaron estrategias para legitimar e incorporar esos saberes.

¿Qué hubiera sido de América Latina si Cárdenas no nacionalizaba el petróleo, trazando el límite con el imperio que tanto le cuesta hoy sostener?

Hoy, podemos decir con orgullo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tomado esa bandera y trazado el límite a la usurpación de las riquezas latinoamericanas, desde la Argentina, aquí en el Sur.

60. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA RASINO

Fundamentos del apoyo en general del bloque de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Históricamente, desde el Partido Socialista hemos sostenido que la soberanía sobre los recursos energéticos es inalienable e intrínseca a cualquier política pública para el desarrollo sostenible de nuestra economía. En el año 1992, frente a la sanción de la Ley 24.142, el entonces diputado socialista por Santa Fe, Guillermo Estévez Boero, junto con los también diputados del distrito al que pertenezco, Ricardo Molinas y Ángel D'Ambrosio, votaron en disidencia total el dictamen que emitieron en conjunto las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Economía, de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, sobre el proyecto de ley de transferencia del dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias, de la transformación empresarial y privatización del capital de YPF S.A., y de la privatización de activos y acciones de YPF S.A.

Vale recordar que la sanción de la ley 24.142 por parte de esta Honorable Cámara fue el broche de distintas normas que, durante la ola privatizadora de la década de los noventa, dispusieron el vaciamiento de recursos energéticos estratégicos para el desarrollo autónomo de nuestra economía productiva, opacando de esta manera la rica historia de propiedad pública de los hidrocarburos argentinos. Una historia que es indispensable tener presente en este momento porque es el marco para la reconstrucción de lo que alguna vez, y de la mano de grandes hombres, se construyó junto con el más valioso y sentido patrimonio simbólico nacional. Un legado que está vivo y que, sin dudas, hoy alienta a la mayoría del pueblo argentino a acompañar esta iniciativa del Ejecutivo.

En 1907, se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia. La Argentina no tenía en ese momento legislación específica para los hidrocarburos. En realidad, eran pocos los países del mundo que poseían legislación específica. Jorge Newbery y Justino Thierry, en el Centenario de nuestra patria, formularon un corpus legislativo y administrativo en su tratado El petróleo, a fin de no dejar sin control a las empresas petroleras. Para 1907, sólo existía el Código de Minería; Newbery y Thierry tomaron la ley de minería de Rumania, y así el gobierno conservador de Figueroa Alcorta reservó áreas petroleras en los territorios nacionales para salvar la producción local.

En 1922, YPF era la segunda empresa pública de petróleo del mundo y la primera de América Latina, convirtiéndose en empresa estatal modelo de muchos países latinoamericanos. En aquel momento, el general Mosconi propició una empresa exclusivamente pública (ya que para la época se promovían empresas mixtas). Él consideraba que no se podía ser socio de los enemigos. El debate de la época hacía eje en dos cuestiones: primero, en la propiedad nacional del petróleo; y en segundo lugar, en la gestión gubernamental a través de la empresa YPF. Durante los gobiernos conservadores, radicales y peronistas, hubo hitos importantes que mantuvieron el petróleo en manos nacionales. Newbery con los conservadores, Mosconi con los radicales, y Canessa con el peronismo enfrentaron intereses corporativos para establecer



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

un recurso y una empresa de carácter nacional y estatal; ya que entendían que el Estado podía ser eficaz y eficiente y debía administrarse con honestidad.

Newbery, junto con los ingenieros Huergo, Krause, Hermitte, Mosconi y Baldrich, formaron parte de una generación que asumió el desafío de fijar las bases de la industrialización del país, así como el ejercicio de una ética de la gestión pública al servicio del interés nacional. El conflicto entre lo público y lo privado, entre la corrupción administrativa y la ética republicana, fueron grandes tensiones del universo de los hidrocarburos que, desde la militancia nacional de lo público, argentinos de diferente extracción ideológica defendieron contra la corrupción. Enrique Mosconi y Alonso Baldrich desde el radicalismo, Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios desde el progresismo, Julio Canessa y el general Savio desde el peronismo y, en el primer Centenario, un liberal progresista como Jorge Newbery.

El golpe militar de 1955 fue una bisagra histórica para el nacionalismo petrolero iniciado por Yrigoyen en 1927. La ley 17.319, dictada por Onganía, restableció las concesiones y permitió la captura, por parte de capital foráneo, de zonas de explotación de altas tasas de rentabilidad, mediante la locación de servicios. Este período largo que atraviesa los gobiernos de Onganía y de Frondizi, que transita la larga noche de la última dictadura militar y llega al gobierno de Alfonsín, operó como mecanismo de vaciamiento interno y externo, avanzando en la explotación monopólica de las áreas de extracción y cediendo terreno a la empresa estatal. Sin embargo, nunca se dejó de sostener que los hidrocarburos eran argentinos y que el petróleo, tan caro a nuestra historia nacional y a la grandeza de los argentinos, constituía un recurso estratégico para el desarrollo en celeste y blanco de nuestra Nación.

Empero es en la década de los noventa cuando se produce el punto de quiebre en la historia de nuestro petróleo. La implementación de las políticas neoliberales del Consenso de Washington horadó esa rica historia.

La desregulación, la apertura económica y las privatizaciones fueron las consignas de la época. El cumplimiento de estas sentencias nos convertiría en aquel país del “Primer Mundo” al que “históricamente habíamos sido negados y éramos merecedores naturalmente”. Esta “receta” permitió la internacionalización de los capitales en sectores como las comunicaciones, el petróleo, el gas, la electricidad, el agua, la industria química, petroquímica, etc.

En el año 1990, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, y hoy asesor del Ministerio de Planificación, Roberto Dromi, promovía las privatizaciones con el argumento de que ya habíamos perdido soberanía de nuestros recursos por los abultados déficits de la administración de empresas estatales burocratizadas, metaforizadas como grandes “elefantes blancos”. Hoy, en 2012, a la hora de fundamentar el mensaje del PEN para la expropiación del 51% de las acciones clase “D” en propiedad de Repsol, la señora presidenta nos habla de la caída exponencial de la producción del crudo de nuestros yacimientos en manos del capital privado, sin explicar en base a qué proyecto energético el gobierno argentino aprobó lo actuado por la empresa en todos estos años y por qué no se impidió el vaciamiento literal de nuestros recursos, haciendo uso de la legislación vigente.

Ambos tiempos históricos son consecuentes con un Estado que no planificó para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

garantizar la sostenibilidad de sus recursos y que procede a tomar medidas aisladas sin una política energética que las sustente. Un Estado hasta ahora ausente en el cuidado de los recursos energéticos.

La implementación de políticas neoliberales encontró en las instituciones republicanas el andamiaje normativo necesario para fundamentar las privatizaciones de las empresas del Estado; tal es la ley de emergencia económica (23.697) y la ley de Reforma del Estado (23.696). Leyes sancionadas por este Parlamento que habilitaron la venta de las empresas públicas a través de decretos del Poder Ejecutivo nacional, permitiendo a los acreedores del Estado que capitalizasen la deuda a través de su participación en los procesos privatizadores.

Los decretos firmados por el gobierno de Carlos Menem –1.055/89, 1.212/89, 1.589/89, 2.778/90, 1.727/91, 2.408/91– fueron un eslabón previo para privatizar YPF. Estos decretos provocaron un quiebre en la política petrolífera argentina y un golpe artero a la soberanía nacional, ya que abrieron la puerta al vaciamiento de recursos estratégicos para un desarrollo sostenible y detrajeron a niveles impensados las riquezas nacionales. Las decisiones administrativas del neoliberalismo de Menem establecieron:

- la libre disponibilidad del crudo extraído;
- la asociación entre YPF y capitales privados para la explotación de las áreas centrales (con la consecuente monopolización de áreas de explotación);
- la liberación de la importación y exportación de hidrocarburos;

- la desregulación de refinerías y de bocas de expendio con la consecuente liberalización de precios internos;

- la concentración monopólica del mercado de naftas;

- la transferencia a las provincias de la administración de los hidrocarburos disponibles en sus territorios, a cambio de regalías a la administración central;

- y la posibilidad de mantener fuera del país el 70% de las divisas giradas en ocasión de exportación petrolera.

El golpe de gracia (decreto 2.778/90) fue la transformación de YPF en sociedad anónima (participación accionaria fragmentada y dispersa, y regulación a tenor de lo dispuesto en el derecho privado), abandonando la figura de sociedad del Estado (100% del patrimonio en manos públicas, controles en el marco de lo dispuesto para toda la administración central).

Finalmente, en las sesiones del 23 y 24 de octubre de 1992, esta Honorable Cámara dio sanción definitiva al proyecto oficialista. En su participación, el entonces miembro informante, activísimo propulsor de la privatización y hoy secretario general de la Presidencia, fundamentó su postura de esta forma: “Existe un acuerdo en la teoría económica de que los mercados competitivos son los más eficaces... maximizando así el bienestar económico general. Estos mercados son aquellos... con oferentes y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

demandantes... en número suficiente como para que las decisiones individuales de alguno de ellos puedan cambiar precios y/o cantidades de equilibrio”. Otra fundamentación del hoy secretario general de la Presidencia era: “...el petróleo significaba industrialización, desarrollo social y también defensa nacional... mientras el petróleo fue un recurso estratégico preponderante, YPF realizó un valioso aporte... en síntesis el petróleo dejó de ocupar el lugar de recurso natural estratégico preponderante que tuviera durante gran parte de nuestro siglo”.

Fueron pocos los que izaron la bandera de la soberanía nacional. En su despacho de minoría, el diputado Estévez Boero, junto con otros legisladores (Quezada, Molinas, D'Ambrosio), señalaron que era inaudito e improcedente vender una empresa de la que se desconocía cuál era su capital social, ni cuál era su valor de venta. (Jaitte Pablo, XXI Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Caseros 23-26 de septiembre de 2008, ISBN 978-950-34-0492-8)

La liquidación de YPF se justificó bajo dos banderas: el federalismo, por la transferencia de yacimientos a las provincias, y la disponibilidad de recursos para hacer efectivo el 82% a nuestros jubilados. Veinte años después estas premisas siguen sin haberse cumplido.

En 1993 un 45% de las acciones fueron a manos privadas. A sólo cuatro meses esos papeles se revalorizaron un 50%. En 1998 Repsol, luego de haber comprado la importante empresa Astra en 1996, adquiere del Estado nacional un 5,01 % de las acciones de YPF S.A.; y en enero de 1999, por decreto, otro 14,99 % restante de las acciones de clase “A”.

En junio de 1999, Repsol completó su casi total apoderamiento de YPF S.A., comprando el 55 % de las acciones que cotizaban en bolsa, el 10 % de la “propiedad participada” de los trabajadores y el 11 % en poder de las provincias. Hay que recordar que en ese momento Repsol estaba en su propio proceso de privatización: había nacido bajo órbita estatal (participación mayoritaria de la Caixa de Catalunya). Este proceso implicó un nivel de concentración que hizo que en el 2000 el grupo Repsol (YPF, Astra y Pluspetrol) extrajera el 47,3 % del total del crudo argentino, mientras que en el 2002 el grupo Repsol era ya el responsable del 58,5 % de la elaboración del crudo y de sus subproductos en el país. La estructura del sector energético sufrió un fuerte proceso de “oligopolización”, concentración, centralización y transnacionalización de su capital. (op. cit.)

Durante la década de los noventa, la producción de petróleo ascendió de 28 millones de metros cúbicos a 45,1 millones en el 2001 (incluyendo picos de producción de 48,4 y 49,1 millones de metros cúbicos en 1997 y 1998 respectivamente), pero ese incremento fue exportado casi en su totalidad. La coyuntura de buenos y crecientes precios internacionales se dio en un marco desregulado, donde las empresas tributaban al fisco nacional en base a las declaraciones juradas de los volúmenes que extraían. (op. cit)

A veinte años los resultados son:

- retroceso de la industria petroquímica;
- importación de hidrocarburos;
- desinversión en la exploración de nuevas fuentes de recursos energéticos y en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

tecnología aplicada a la producción;

- falta de planificación y retracción estatal en la previsión y distribución equitativa de recursos energéticos;
- trato desigual dispensado a usuarios y consumidores ante el sobreprecio en los combustibles;
- desabastecimiento en las bocas de expendio, en la dispersión geográfica de la República Argentina.

La grave crisis energética que atraviesa nuestro país se expresa con dureza en la situación de YPF, cuya enajenación ha sido a la vez causa y paradigma de esa crisis. La generación que gobernó nuestro país en los años noventa entregó, en condiciones inmejorables, un recurso clave, limitado y no renovable, junto con la mayor parte de su renta. La forma en que se realizó la privatización de YPF posibilitó también que las empresas pudieran evitar hacer grandes inversiones, dado que el costo mayor de la exploración ya estaba cubierto. Algunos de aquellos protagonistas de la entrega, precisamente esos que argumentaron acerca de una supuesta pérdida del valor estratégico del petróleo, están hoy en el lugar donde se deberán generar políticas públicas para superar la crisis provocada. No será fácil, porque esas decisiones, y la ausencia hasta acá de una política energética nacional, nos han llevado a un problema que no es de coyuntura, sino estructural, y que se inscribe en un contexto de precios internacionales altos, de lucha despiadada por los recursos naturales claves para el desarrollo (agua, petróleo, minerales), y de un cuasiagotamiento de las reservas hidrocarburíferas.

Por lo expuesto, este momento histórico al que asistimos debe convocarnos a todas las instituciones de la República a reescribir el legado para las generaciones futuras. Somos responsables de que las nuevas generaciones cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo con equidad y en forma sustentable. Y las seguridades que ofrezcamos no sólo se deben relacionar con el recupero de la soberanía sobre los recursos naturales sino y, fundamentalmente, con la calidad de las instituciones que dan marco y proyecto a la explotación de esos recursos.

Recuperar el 51% de YPF es un paso, pero desprivatizar al Estado de intereses espurios que nada tienen que ver con la Nación debe ser nuestra ética legislativa. Es el Estado nacional, administrando los recursos públicos de cada argentino con transparencia y eficacia, quien evitará otras aventuras como la de los noventa. Es la confluencia de intereses nacionales genuinos de todos los sectores políticos, económicos y sociales, convencidos de que el Estado es capaz de administrar sin corrupción y participando, sea como trabajadores o desde los diferentes órganos de administración o de control, la que dará el marco para que lo que ocurrió en el pasado con nuestras empresas nacionales no vuelva a ocurrir. Construir ese espacio institucional es una tarea diaria que debería materializarse en cada acción de las instituciones de la República. Lamentablemente, eso no se refleja en este proyecto de ley ni en la metodología con que el proyecto se ha tramitado.

La democracia ha consagrado instituciones legitimadas por la voluntad popular. Debemos hacerlas funcionar con el sentido que nuestra Constitución les asigna, porque



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sólo con participación y consenso podemos evitar que la historia se repita. Nadie puede desconocer que la privatización de YPF se realizó con gran consenso popular, con el voto mayoritario de este cuerpo y en base a un proyecto del gobierno democráticamente elegido.

Sin embargo, eso no evitó que se cometiera uno de los más grandes daños a nuestra economía. La democracia, hoy, ya no se define exclusivamente desde las mayorías. Las democracias modernas saben del valor de la suma y de la escucha de las opiniones diversas, de las múltiples miradas para abordar la complejidad de los problemas. Los progresismos políticos y sociales no se construyen desde de la “supremacía del más apto”, formulación que tan bien sustenta a los modelos liberales, sino todo lo contrario. La reconstrucción de una empresa que sirva verdaderamente a los intereses nacionales no es coherente con la ausencia de controles y la no participación. Es por ello que abogamos por el diseño y la aplicación, por parte del Ejecutivo, de una política de hidrocarburos aprobada por este Parlamento y con el control de la Auditoría General de la Nación.

Desde la bancada a la que pertenezco, y en consonancia con lo expresado por los legisladores del Frente Amplio Progresista, quiero ratificar mi voto afirmativo en general a la decisión de expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), hoy en poder de la empresa Repsol, para recuperar el manejo estatal de nuestra empresa de hidrocarburos. Por ello, hoy acompañamos con responsabilidad política y ciudadana esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, pero presentamos objeciones en particular al proyecto girado.

61. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA RE

Fundamentos de la abstención de la señora diputada en la votación de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Habiendo escuchado en este recinto a tantos diputados hablar durante muchas horas de la historia de YPF, y sobre todo abundar en su historia reciente, me vienen a la mente dos palabras que se repiten constantemente: SAQUEO y CORRUPCIÓN.

Saqueo y corrupción, es el modelo, el mismo de los noventa, su continuidad. Acceder al poder para tomar como botín el patrimonio de todos los argentinos.

El Estado soy yo parece decir este gobierno, confundiendo Estado con gobierno.

En los noventa tenía la pátina neoliberal, en nuestros días la patina nacionalista estatista. ¿Todavía queda alguien que crea que Menem era neoliberal o que los Kirchner son estatistas?



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Fueron socios ayer y hoy de nuevo están juntos.

Podríamos decir repitiendo la frase de Bill Clinton: ¡Es el NEGOCIO, estúpidos!

¿Expropiamos? No, confiscamos. Estamos por arriba de la Constitución y de las leyes.

¿Nacionalizamos? No, YPF representa el 30% del mercado de hidrocarburos; nos apropiamos del 15%.

¿Estatizamos? No, YPF sigue siendo una sociedad anónima sin ningún control del Estado y de sus organismos, ni de este Congreso Nacional.

Ayer “privatizar” para el negociado con los amigos; hoy “estatizar” para el negociado de la familia y los amigos.

Van a controlar los que ayer la vaciaron, van a administrar los que nunca administraron nada, ni los trenes.

Una nueva mentira porque el globo de Malvinas se desinfló, las encuestas preocupan y la caja está exhausta.

Mientras entretenemos con Malvinas y el petróleo, vamos por las tierras de los campesinos argentinos, cuyos títulos de propiedad son la mejor y última garantía de soberanía que nos queda, la última barrera para la codicia de adentro y de afuera.

Los perseguimos con trabas burocráticas, los empobrecemos con impuestos escandalosos e impagables, nos apoderamos de sus ingresos brutos, no de su renta y los denostamos discriminando e insultando, cuando con la soja son los grandes sostenedores del modelo.

La tierra esta en manos de miles de campesinos argentinos. Este gobierno quiere que esté en pocas manos: el modelo Calafate, y nos preguntamos, si esta concentración es exitosa, ¿quiénes serán los nuevos dueños de la tierra, el agua y los minerales? Unos pocos y nuevos oligarcas.

En un mundo que requiere más y más recursos naturales, ¿cómo resistiremos la presión de los poderosos si los tenemos concentrados en pocas manos?

La tierra y el agua, lo que quedó sin privatizar en los 90, es lo que queda para vaciar y entregar.

No podemos ser cómplices de esta nueva farsa, ni acompañantes de la comparsa que aplaude un nuevo negociado con falsas banderas. Como no lo fuimos en los 90, cuando como ciudadanos resistimos el discurso único privatizador, porque nos parecía suicida como país entregar nuestra energía y regalar el petróleo, un recurso natural no renovable. Ningún país lo hizo, salvo nosotros. Cuando la crisis del tequila los mexicanos se resistieron y conservaron la mayoría accionaria estatal, los brasileños también.

Por ello, como explicaba tan bien nuestra compañera de bloque María Eugenia Estenssoro, YPF valía al momento de su venta por el menemismo 18.000 mill de dls, igual que Petrobras y hoy ésta, que copió el modelo impuesto por su padre, José Estenssoro, vale 280.000 mill de dls.

Hoy, estamos otra vez repitiendo el discurso único, y como en los 90, dicen que la mayoría acompaña.

En los noventa la mayoría aplaudía a Menem y su entrega hoy los que ayer la privatizaron dicen que la estatizan. ¿Qué estatizan?

Parece más una apropiación del gobierno y sus funcionarios que una estatización, una



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

nueva caja para un gobierno insaciable que confunde sus intereses con el Estado. Nos hablan de soberanía: solamente la recuperaremos cuando lleguemos al autoabastecimiento y podamos exportar, con políticas de Estado que se respeten de un gobierno a otro independientemente del signo político de cada uno. No podemos ser cómplices como no lo fuimos ayer, de una nueva mentira y un nuevo negociado de esta nueva “oligarkia” y de los nuevos señores feudales que se adueñan del patrimonio de todos sin respetar la Constitución y las leyes. Por todo lo expuesto voy a acompañar el dictamen firmado por la diputada Elisa Carrió y voy a solicitar permiso para abstenerme en la votación general y particular.

62. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RECALDE

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Razones de justificados límites temporales en el debate en el recinto me constriñeron a dejar de lado algunas temáticas en la intervención que allí tuve, pero no es mi intención omitirlas y de allí la presente inserción.

La nacionalización de YPF que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitiera a este Congreso constituye la reafirmación y profundización del modelo inaugurado por el ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003.

A la luz de opiniones vertidas por sujetos interesados y por constitucionalistas que, bajo un ropaje aséptico tienen ideología –tal como todos, pero algunos las exteriorizamos y otros no-, que califican la medida como arbitraria y violatoria de la propiedad, destaco que la expropiación por razones de utilidad pública es un resorte institucional expresamente previsto en el art. 17 de la Constitución Nacional que, al establecer que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”, prevé inmediatamente después que “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”

A su vez, el art. 2.511 del Código Civil establece que “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, previa la desposesión y una justa indemnización” y la ley 21.499 de Expropiación establece que “La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.”



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La normativa constitucional y legal apuntada –que prevé y regula la expropiación por causa de utilidad pública- ya se encontraba vigente al momento de privatizarse YPF, y por ende constituía parte del plexo normativo vigente en nuestro país que, como tal, era conocido por Repsol cuando decidió adquirir las acciones de aquélla. En consecuencia, la doctrina de los actos propios la alcanza, y le impide invocar que el ejercicio de tal facultad institucional por parte del Estado argentino constituya una medida arbitraria o que atente contra su derecho de propiedad.

Por otra parte, vale destacar que la previsión de la expropiación por causa de utilidad pública no constituye una particularidad de nuestro sistema jurídico nacional. También, y no paradójicamente, la prevé la Constitución española en su art. 33, que luego de reconocer el derecho a la propiedad privada y establecer expresamente que el contenido de tal derecho está delimitado por su “función social”, prevé la expropiación en el apartado 3 diciendo que “...Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”.

Como se advierte, la facultad de expropiar bienes por razones de utilidad pública no es una singularidad argentina. El propio Estado de origen de Repsol se ha resguardado el ejercicio de idéntica facultad que la que hoy está ejerciendo nuestro Estado nacional. Debo destacar también que a nivel de la Comunidad Económica Europea está prevista la expropiación. En tal sentido el “Protocolo Adicional” del 20 de marzo de 1952 al “Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas” -ratificado por España el 2 de noviembre de 1990-, a la par de reconocer en su artículo 1º el derecho a la propiedad privada, en el apartado primero establece el derecho de toda persona física o moral al respeto de sus bienes sin que nadie pueda ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional, reconociendo el apartado segundo a los Estados el poder de regular el uso de los bienes conforme al interés general, diciendo literalmente que “las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes, de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de multas”. También se encuentra prevista la expropiación por razones de utilidad pública o de interés social a nivel regional americano, mediante el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, al prohibir la privación “arbitrariamente” de la propiedad privada habilita la conversión de un bien privado en público cuando lo justifiquen razones de bien público. Bien vale resaltar, además, que ambos tratados poseen en nuestro país jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).

Tal como puede apreciarse, la comunidad internacional reconoce jurídicamente a los Estados la atribución de disponer, por razones de utilidad pública o de interés social, la expropiación de bienes sin que pueda argumentarse que su ejercicio constituya una afectación al derecho de propiedad ni convierta en arbitraria la decisión soberana al respecto.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Por ende, estamos hoy, en esta H. Cámara de Diputados, transitando el mecanismo institucional constitucional y legalmente previsto para llevar a cabo la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF y, lo que resulta sustancial, declarando de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.

Ello a su vez constituye un mandato constitucional a este Honorable Congreso, en tanto el art. 75, inciso 19 de nuestra Carta Magna nos impone “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo...” entre otros bienes a cuya satisfacción tiende, precisamente, la temática que estamos tratando.

El logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones, es la indiscutible razón de utilidad pública que justifica y torna necesaria la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Hay quienes con mayor sutileza pero con iguales fines, siendo conscientes de no poder jurídicamente desconocer la potestad estatal, pretenden centrar la descalificación de la expropiación de nuestra empresa petrolera en los aspectos indemnizatorios. A ellos decimos que el monto de la indemnización a abonar será objeto de encauzamiento también por los carriles institucionales vigentes.

Pero al respecto debo destacar que la propia Ley de Expropiaciones 21499 establece expresamente que para la determinación de la indemnización no se tomarán en cuenta ganancias hipotéticas ni se pagará lucro cesante.

Además, en la valuación de los activos de la empresa deberán deducirse las amortizaciones en función de su vida útil y restar todos los pasivos -tanto los financieros, los ambientales como los daños y perjuicios generados por el incumplimiento de los contratos de concesión- así como las ganancias exorbitantes que la expropiada ha obtenido y remesado en lugar de reinvertido, tal como sostuvieron Arístides Corti y Liliana Constante (Los Aspectos Legales de la Expropiación, Página 12, 24/04/2012).

Por ello, la eventual falta de acuerdo sobre el monto de la indemnización a abonar no obsta a la efectivización de la expropiación, máxime cuando la determinación de los factores señalados en torno de la valuación de las acciones expropiadas hacen factible la existencia de un largo proceso judicial –con posibilidad de chicanas dilatorias- que no puede obstar ni diferir la concreción de la medida. Por eso, basta que el Estado pague un peso para que pueda perfeccionar la transferencia, sin perjuicio del proceso posterior para su valuación para el caso de desacuerdo entre las partes.

Otra de las objeciones al proceso de expropiación apuntó a la intervención transitoria de la empresa dispuesta por el DNU 530/12 y su complementario 557/12, que fue



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

efectuada con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y la cobertura de las necesidades del país. Quiero resaltar a este respecto que la intervención transitoria dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional también encuentra sustento en el Código Civil, que en su artículo 2.512 establece que habilita a la disposición inmediata cuando exista urgencia en la expropiación (que dice que “Cuando la urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad, de tal manera imperiosa que sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada, bajo su responsabilidad.”), en la propia Ley de Expropiaciones cuyo título IX prevé la “ocupación temporánea” que puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, sea que responda a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita, o a una necesidad normal no inminente, por el lapso que resulte estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad y en el art. 2º, inciso g) de la Ley de Abastecimiento (ley 20.680) que prevé la intervención temporaria de empresas “...en caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o prestación de servicios”, por lo que tal como sostuvieron los autores citados, ni siquiera era necesario un DNU para disponer la intervención, ya que legalmente era suficiente con un simple decreto. Además, hay que destacar la figura de la inclusión de un director obrero, que se enmarca en la filosofía inclusiva de participación de los trabajadores en la “cosa pública” -a diferencia de los programas de propiedad participada de las privatizaciones que, como siempre sostuve, solo tendían a cooptar voluntades bajo una distribución de dividendos engañosa- y perfecciona la calidad institucional al concretar el imperativo del 14 bis de la Constitución Nacional de garantizar a los trabajadores “control de la producción y colaboración en la dirección”.

La expropiación de YPF implica un cambio estructural profundo que por su envergadura constituye un nuevo hito histórico, tal como lo fueron el desendeudamiento y liberación del FMI, la nacionalización de la administración del sistema previsional y la asignación universal por hijo.

Su relevancia radica en la recuperación de la soberanía sobre la administración de los recursos naturales, y sus proyecciones para el desarrollo nacional y las generaciones venideras son importantísimas, toda vez que en términos peronistas, enarbola las tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

63. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO REDCZUK

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El tema que nos convoca hoy es debatir un proyecto de ley que, como algunos sostenemos, es de suma importancia, ya que instala la cuestión de la soberanía de los hidrocarburos en el marco de un modelo que apunta y ha apuntado a poner en la misma dirección ciertos sectores que son considerados estratégicos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Esta decisión que considero acertada, pone en evidencia la integralidad del proyecto económico: el autoabastecimiento energético es un punto clave y necesario si pensamos que la Argentina está teniendo tasas inéditas en la producción industrial.

Asimismo, leo la recuperación de YPF como una decisión, por parte de nuestro gobierno nacional, de corregir los desvíos del pasado, de revocar uno de los pilares que sostuvo al modelo neoliberal de la década de los '90: la privatización de las industrias, la entrega de la mayor parte de nuestras empresas a capitales privados trasnacionales. En otras palabras, estamos vivenciando, una vez más, lo que para algunos de nosotros es un cambio de paradigma: pasamos de un modelo en donde primó la desindustrialización y el achicamiento del Estado en la toma de decisiones, a un modelo de reindustrialización y revitalización del mercado interno, donde el Estado tiene un rol protagónico y es soberano en sus decisiones internas. Hoy, las leyes que rigen la economía no las impone el libre mercado sino que es el propio Estado el que regula y protege los intereses del país.

Así, el objetivo que se ha puesto el gobierno de mejorar el abastecimiento y reducir el déficit energético y la balanza de pagos, se contrapone con los intereses que tiene este grupo transnacionalizado donde su principal preocupación es la expansión empresarial y el rédito económico. Como bien se dijo en varias oportunidades, Repsol no apoya el crecimiento del país y de nuestras industrias. Por el contrario, explotan los recursos argentinos a un ritmo tan elevado que hoy salta a la vista y se hace imperioso el control soberano de los recursos energéticos. Sabemos que las consecuencias se verán a futuro, pero estoy convencido de que serán positivas para el desarrollo de nuestro país.

Por otra parte, provengo de una provincia que ha sido pionera, y hoy se encuentra a la vanguardia de la protección de los recursos naturales, ejerciendo el dominio originario de estos. Un ejemplo palpable es la IV – N° 56, Nueva Coparticipación Económica para Misiones: la Soberanía Energética Proceso Decisional del Patrimonio Natural de los Misioneros. Con esta ley nuestra provincia tiene la plenitud de dominio, imprescriptible e inalienable, sobre los recursos naturales hídricos existentes en su territorio y regula los mecanismos de democracia semidirecta como requisito para la implementación de emprendimientos hidroeléctricos.

El año pasado el pueblo misionero me dio la oportunidad de ser parte de la sesión que aprobó la ley provincial citada. Hoy la cuestión de los hidrocarburos es nacional y, otra vez, el pueblo misionero y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me han dado la oportunidad de participar en esta sesión histórica, en la que estamos recuperando nuestra identidad como argentinos.

Celebro la iniciativa acompañando el proyecto en cada uno de sus puntos, votando positivamente.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

64. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RIESTRA

Fundamentos del apoyo en general del bloque del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Estamos transitando la etapa final de este intenso debate, donde seguramente quedará consagrada por una amplísima mayoría la expropiación del 51% de las acciones que la española Repsol posee de nuestra YPF. Nos encontramos frente a una instancia que podemos definir como histórica, por el punto de inflexión que significa para la política petrolera del Estado nacional. No estamos realizando una reestatización, pero la decisión que vamos a adoptar mejora la posición estructural del país para avanzar en esa dirección. Como ya explicaron otros integrantes del Interbloque FAP, apoyamos en general el proyecto del oficialismo, pero marcando nuestras disidencias en varios puntos: planteamos modificaciones al marco regulatorio; corregimos la discriminación que favorece al grupo Petersen; establecemos garantías para la participación estatal mayoritaria y el destino de las utilidades; reivindicamos el carácter federal de la petrolera; avanzamos en la constitución de una empresa pública; ampliamos los criterios de valuación y fijamos mecanismos de control.

Estas diferencias se explican en primera instancia en la mirada estratégica distinta que tenemos sobre el problema energético, pero sobre todo por el lugar que ocupamos en la historia reciente de las luchas de nuestro pueblo por recuperar su soberanía energética. Propongo una pregunta: ¿De dónde sale el enorme consenso político y social que está generando este proyecto de expropiación de las acciones de YPF? Estoy seguro de que ninguno de los presentes podrá decir que este apoyo se construyó a partir de los aciertos de la política del ministro De Vido. Saludamos el golpe de timón, pero todos sabemos que los arrepentidos no generan mística en las masas. Tampoco los tecnócratas. Pero hoy no estamos para jugar con la retórica, porque creo que es necesario acercarnos a la dimensión histórica y política de lo que vamos a votar, para no confundir el escenario y saber hacia dónde tenemos que marchar.

Detrás de YPF hay 70 años de inversión social acumulada en la construcción del Estado nacional. No me equivoco si digo que hablar de la petrolera de bandera es la mejor manera de expresar nuestra concepción de soberanía. Por eso, no nos tiene que sorprender que la imagen de una YPF estatal despierte algo similar a lo que sentimos por Malvinas.

Lo decíamos antes: para terminar de remover el cepo estructural que los gerentes locales del neoliberalismo le pusieron a nuestro desarrollo tenemos que dar este primer paso que nos permita llegar a la efectiva nacionalización del petróleo y el gas. Como lo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

venimos reclamando desde las privatizaciones en marchas, petitorios y cientos de tribunas levantadas por la CTA y el conjunto de organizaciones, trabajadores y profesionales del sector energético que conformaron el Grupo Moreno.

Por eso, considero oportuno traer a este recinto las palabras que el compañero José Rigane, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina pronunció en la audiencia pública realizada por esta Cámara el pasado 24 de abril. Decía este dirigente: “Si hay algo que hay que destacar de este modelo energético es la extranjerización, precisamente de nuestra riqueza, que son nuestros recursos (...) Por eso nos parece que hay una oportunidad, que hay que aprovecharla y esa oportunidad tiene que ver con la necesidad de cambiar todo el modelo energético. No sólo no alcanza con el 51% de las acciones de YPF, sino que tampoco hay que pensar que acá la única que se portó mal es Repsol. Acá se porta mal Petrobras, Chevron, Panamerican Energy, Total, etc., y en ese sentido a nosotros nos parece que hay que avanzar y cambiar este modelo energético, modelo energético que ha llevado al fracaso y a necesidades de crisis energética al pueblo argentino pero que ha sido un modelo exitoso para los grupos multinacionales que no sólo extrajeron la riqueza de nuestro país, sino que además obtuvieron ganancias espectaculares a través de dividendos y otras iniciativas”.

Estamos hablando de recuperar soberanía, de transformar la matriz energética, que en este país depende esencialmente del gas y del petróleo, y volver a reconstruir el entramado productivo que se desarmó con el proceso de privatización.

Por eso nosotros, desde la provincia de Santa Fe, estamos impulsando la recuperación de la destilería San Lorenzo, otrora parte de la cadena productiva de YPF y actualmente en manos de la empresa OIL Combustibles, de Cristóbal López, tras el proceso de desguace de la petrolera estatal.

A continuación, deseo reseñar algunos antecedentes jurídicos esenciales respecto de la privatización de YPF, a saber:

Ley 23.696, sancionada el 17 de agosto de 1989: denominada de “Reforma del Estado” que, al declarar la emergencia administrativa, fue el primer avance en el esquema de privatización de las empresas del Estado.

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2778, firmado en fecha 31 de diciembre de 1990: dispone que a partir del 01 de enero de 1991 se transforma a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, poniendo en marcha el plan de transformación global de la empresa.

Dicho decreto tiene dos anexos muy importantes, a saber: I) El plan de acción para la transformación de la empresa, y II) El estatuto de YPF Sociedad Anónima. El anexo I) tuvo una gran incidencia en la provincia de Santa Fe, en virtud que definió el destino de la destilería que YPF S.A. tenía en la ciudad de San Lorenzo, y de la planta de despacho de combustibles que tenía en la ciudad de Santa Fe.

En este punto, el dato que no debe pasar desapercibido refiere a que la verdadera transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado y el estatuto social de YPF S.A. se instrumentaron por decreto, y no por ley.

Ley 24.145: también denominada de “Federalización de Hidrocarburos y privatización del Capital de YPF S.A.”, que dispuso cómo se iba a realizar el primer proceso de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

“entrega” del Capital Social de la empresa.

Dicha ley en su artículo 8° establecía las clases y porcentajes de distribución de las acciones: “El capital social de YPF Sociedad Anónima está representado por acciones, cuyas clases serán atribuidas del modo que a continuación se señala: a) Clase ‘A’: Las acciones pertenecientes al Estado nacional, equivalentes al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del Capital Social, con el derecho de acrecer; b) Clase ‘B’: Las acciones que adquieran las provincias en cuyo territorio se hallen ubicados yacimientos de hidrocarburos o, en su caso, por las provincias no productoras de hidrocarburos, hasta un TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) del Capital Social, distribuidas entre ellas. Las acciones de esta clase a vender al capital privado se convertirán en Clase ‘D’; y c) Clase ‘C’: Las acciones que adquiera el personal de la empresa hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social, bajo el régimen de propiedad participada. Lo cierto es que esa composición duró muy poco tiempo, terminando todo el Capital Social en manos privadas; lo que permitió que se hagan grandes negocios sobre la base del siguiente dato:

Las acciones de YPF S.A. comenzaron a venderse en el mercado privado (Bolsa de Comercio), el día 07 de julio 1993 a un precio de diecinueve pesos mientras que en febrero de 2011 llegaron a una cotización superior a los doscientos pesos.

Resulta importante señalar que, al momento de la privatización, YPF había desarrollado las siguientes estructuras empresariales en nuestra provincia:

- La Divisional Rosario (que se ubicaba en las calles Montevideo y San Martín), donde operaba el centro de comercialización para todo el litoral, que fue cerrada después de la venta de la destilería San Lorenzo, concentrando la actividad comercial en la Terminal San Lorenzo.
- La planta de despacho de combustibles de la ciudad de Santa Fe (que funcionaba dentro del puerto), que terminó siendo cerrada y desguazada en el marco del decreto 2.778/90.
- La destilería San Lorenzo y la planta de despacho de combustibles (ubicada sobre el margen ribereño de la ciudad), que fueron vendidas a capitales privados el 01 de abril de 1993 en el marco del Decreto 2778/90.
- La cabecera del Poliducto San Lorenzo y la Terminal de Despacho de Combustibles (ubicada en el acceso norte de la autopista Rosario – Santa Fe), que en la actualidad siguen perteneciendo a YPF S.A.

En el caso puntual de la destilería que YPF tenía en la ciudad de San Lorenzo, ésta fue vendida en el marco del decreto 2.778/90.

Los compradores, por un precio vil, se apropiaron en esa misma operación de una terminal de despacho de combustibles (que actualmente funciona), ubicada sobre el margen ribereño de la ciudad que, entre otros bienes valiosos, posee cuatro muelles para buques de gran porte.

Durante un buen tiempo YPF S.A. quedó sin muelle en San Lorenzo y alquilaba uno de los muelles que había vendido (luego el residual de Gas del Estado pasó a ser de YPF S.A., y a partir de entonces opera en el muelle que esa empresa poseía en la misma ciudad).

Además, como si se tratara de un combo, también se quedaron con el club que YPF



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

había construido para la comunidad sanlorencina.

La destilería San Lorenzo fue vendida el 01 de abril de 1993 al único oferente que se presentó a la licitación, que fue una sociedad conformada de la siguiente manera: 42,5% Pérez Companc, 42,5% Soldati y 15% Petroquímica Argentina Sociedad Anónima (que pertenecía a Pérez Companc).

El precio de venta fue \$ 12.200.000 (doce millones doscientos mil pesos) y con referencia a ese precio, sirve tener presente los siguientes datos:

- a) YPF S.A. pagó \$ 16.000.000 (dieciséis millones de pesos) en concepto de indemnización de los trabajadores que despidió por la venta de la destilería (es decir cuatro millones más de lo que percibió por la venta de la misma);
- b) Soldati, en 1997, vendió su porcentaje accionario a Repsol en \$ 75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos).

Cuando Repsol compró YPF S.A., vendió la parte que tenía de la destilería San Lorenzo a Pérez Companc. Luego se vendió la totalidad del paquete accionario a Petrobras, y actualmente pertenece a OIL Combustibles (como ya he mencionado, empresa de Cristóbal López).

Considero imprescindible que el Estado recupere el control de la destilería San Lorenzo, lo cual obedece a una necesidad estratégica.

Tengamos en cuenta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, según el diseño estratégico del general Enrique Mosconi, poseía seis destilerías distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, con la finalidad de asegurar el abastecimiento de combustible en todo el territorio nacional, a saber:

- } Campo Durán (Salta).
- } San Lorenzo (Santa Fe).
- } Dock Sud (Buenos Aires).
- } Ensenada (Buenos Aires).
- } Luján de Cuyo (Mendoza).
- } Plaza Huincul (Neuquén).

Las tres primeras fueron vendidas por disposición del anexo I) del decreto 2.778/90, es decir que dejaron de pertenecer a YPF S.A.: razón por la cual, ahora la destilería San Lorenzo no queda alcanzada por el proyecto de ley de control estatal mayoritario.

Debe observarse que el decreto 2.778/90 preveía para esa refinería dos opciones: a) cierre, y b) venta.

Ello se debe a que el Ing. José Estenssoro era partidario de que la destilería San Lorenzo se cierre, porque le reconocía un gran valor estratégico (otorgado por las ventajas comparativas de su ubicación geográfica); lo que implicaba un serio riesgo para el caso de que terminara en manos de la competencia de YPF S.A..

Fue por planteo hecho por el sindicato, en defensa de las fuentes de trabajo, que esa destilería no se cerró.

Es cierto que la capacidad de procesamiento de la destilería San Lorenzo es relativamente pequeña (puede procesar hasta 6.000 mts. cúbicos de petróleo por día, mientras que la destilería de Ensenada puede procesar 50.000 mts. cúbicos diariamente).



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Sin embargo, con la inversión denominada “mayor conversión”, que en muchas oportunidades fue proyectada pero nunca se realizó, se podría duplicar o triplicar su capacidad de procesamiento, y eso sería un aporte fundamental en el camino del autoabastecimiento.

Hay que tener presente que las tres refinerías que actualmente posee YPF S.A. (Ensenada, Luján de Cuyo y Plaza Huincul) mantienen la misma capacidad de procesamiento que tenían 20 años atrás, circunstancia que hace imprescindible contar con más destilerías (si realmente se pretende lograr el autoabastecimiento).

En ese contexto, por claras razones estratégicas, habría que incluir también la participación estatal mayoritaria en la sociedad que actualmente posee la Destilería San Lorenzo, del mismo modo en que se incorporó al proyecto original la expropiación de YPF GAS S.A..

Si ello sucediera, la provincia de Santa Fe tendría un argumento más sólido para sustentar su pretensión de participar en el paquete accionario de YPF S.A. porque, en el proceso productivo, la etapa de la refinación es tan importante como la de la extracción. Por otro lado, querría introducir una perspectiva de análisis que tanto en el debate como en el texto del proyecto no aparece, ya que se ha privilegiado la cuestión económica en desmedro de abordajes ambientales y sociales. Puntualmente, me refiero a dos temas que considero de vital importancia: el resguardo de los territorios indígenas y el cuidado del ambiente. En ningún momento se mencionan estas dos cuestiones en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En el artículo 3° se enumeran los principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina. El cuidado del ambiente y la sustentabilidad en todas las etapas de la extracción de hidrocarburos, debe ser uno de ellos. Sin embargo, el proyecto no los menciona.

Muchas de las concesiones hidrocarburíferas se encuentran en territorio indígena, los pueblos originarios reclaman que se exprese en el texto de la ley el respeto a los Derechos de los territorios comunitarios. Esta preocupación es central para las comunidades afectadas por la explotación petrolera ya que, en las últimas décadas, los estados provincial y federal no garantizaron sus derechos, produciendo desalojos y conflictos ambientales y sociales.

Entonces es necesario que se incluya entre los principios enumerados en el artículo 3° “la explotación sustentable, ambientalmente responsable y respetuosa de las comunidades cercanas a los yacimientos, garantizando el cumplimiento del convenio 169 de la OIT respecto de territorios y comunidades indígenas”.

Se dice en el proyecto oficial que para obtener el autoabastecimiento se recurrirá a los yacimientos no convencionales, lo que generará un escenario de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional. Las actividades extractivas de este tipo representan y generan en la actualidad grandes costos ambientales y sociales. La explotación de yacimientos no convencionales requiere de procesos enormemente contaminantes, tal como lo advierte la Agencia de Protección Ambiental de EEUU.

Creemos que una mayor participación estatal en la actividad debe asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando los derechos de los pobladores



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

a un ambiente sano y de los pueblos originarios sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, derechos que las empresas transnacionales del sector vienen vulnerando y desconociendo en nuestro país.

Para terminar, quiero recordar algunos párrafos del documento que dio inicio a la campaña por un millón de firmas para lograr la nacionalización del petróleo y el gas, impulsada por el Grupo Moreno, la CTA, ex trabajadores de YPF y Gas del Estado, organizaciones socia-

les, políticas, de derechos humanos, gremiales, de desocupados, cooperativistas y estudiantiles, diputados, personalidades y dirigentes de todos los ámbitos. Decíamos ayer:

“Hay que parar cuanto antes ese saqueo vergonzoso. La renta petrolera debe estar al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, y no de las multinacionales. Por eso reclamamos:

- Nacionalización integral del petróleo, el gas y todos los recursos energéticos, y potestad soberana de la Nación sobre el subsuelo. La provincialización adoptada por la reforma constitucional de 1994 es el subterfugio a través del cual se canalizan los negociados.
- Reestatización de YPF y Gas del Estado, anulando esas privatizaciones sin indemnización. Por una empresa de hidrocarburos estatal, integrada, monopólica y eficiente, bajo control democrático de sus trabajadores y consumidores, único camino para lograr una política genuinamente nacional y revertir la caída en la exploración y explotación”.

65. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA RISKO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Las consignas siguen siendo las mismas, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Como pueblo nunca más debemos conformarnos con menos. Está claro que cuando las convicciones son fuertes y reales las decisiones transformadoras de fondo se pueden tomar. Y no sólo es una cuestión de coraje, sino de saber esperar el momento político, económico y social necesario para contar con el respaldo del pueblo ante la iniciativa política del Estado y, sobre todo, tener documentación respaldatoria que avale y proteja dicha decisión.

YPF es desde hace muchos años una pregunta sin respuesta para muchos argentinos.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Nadie ha podido contestar cómo se pudo vender la primera petrolera estatal integrada verticalmente en el mundo.

Cómo, cuando otros declaran, inventan o arman guerras para apropiarse de los yacimientos petrolíferos, nosotros fuimos capaces de regalarlos a capitales buitres extranjeros.

Cómo pasó a ser nuestro petróleo un elemento más de extorsión al gobierno nacional, provocando desabastecimientos injustificados en todo el país, y así generando un gran perjuicio económico desde lo micro a lo macro. Pero, además, utilizándolo también como herramienta electoral de los grupos económicos a los que poco les importa el bienestar y crecimiento de los argentinos. Muy por el contrario, siempre han estado en contra de la soberanía popular, de la democracia y de un Estado que sea capaz de implementar las medidas necesarias no sólo para garantizar el hoy sino para resguardar el mañana.

La recuperación de YPF era hasta hace un mes atrás un sueño de muchos militantes del campo popular; un dolor de los verdaderos peronistas que creemos que la base del bienestar general es la fortaleza de nuestra Nación y más aún, de los que estamos convencidos de que la unión de la Patria Grande es el mejor respaldo de nuestros intereses y de nuestros capitales.

Festejamos y nos sentimos acompañados cuando el tema “MALVINAS” pasó a ser un tema de la UNASUR y Latinoamérica: no estamos más solos. Es una batalla contra el colonialismo que la estamos dando desde todos los frentes y sumando aliados.

El colonialismo no solo se da con la invasión de las tierras, sino también con los capitales económicos como es YPF.

Este es un nuevo paso en el plan estratégico del gobierno nacional; nada es improvisado. Los JUICIOS A LOS GENOCIDAS, la recuperación de ANSES, de AEROLINEAS ARGENTINAS, la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO, la NUEVA LEY DE MEDIOS, la declaración de interés público de PAPEL PRENSA, la culminación de la represa YACYRETA, entre tantas otras medidas, van dando forma al GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR.

Falta mucho por hacer, pero, a diferencia de los que han tenido la oportunidad y no la supieron o quisieron aprovechar, nosotros avanzamos con pasos firmes, recuperando lo nuestro y garantizando que no sea tan fácil volver a saquearnos, no sólo económicamente sino, sobre todo, ideológicamente.

Pero también es cierto que debemos empezar a fortalecer un verdadero y sólido federalismo, que no sólo se dé con la autonomía de las provincias, sino con el reparto equitativo de las utilidades que dejan la explotación de nuestros recursos, creando por qué no, en un futuro muy cercano, un fondo nacional coparticipable con parte de las regalías y utilidades que deja la explotación de los recursos naturales y energéticos.

Todos necesitamos energía y todos aportamos para la obtención de la misma; algunos con los recursos hídricos, otros con la minería, el gas, carbón, petróleo, los vientos y, por sobre todo, el trabajo y compromiso de nuestro pueblo.

Como representante del Frente Renovador de la Provincia de Misiones, apoyo totalmente esta nueva medida necesaria e indispensable para obtener soberanía económica en un mundo que cae a pedazos y confiando en una futura inversión para la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

exploración petrolífera en zonas como la nuestra. Como peronista y militante, un sueño cumplido.

El gran desafío es saber LA VERDAD, mantener viva LA MEMORIA, hacer JUSTICIA, vivir siempre en DEMOCRACIA y sobre todo ser un PUEBLO SOBERANO.

66. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RIVAROLA

Fundamentos del apoyo del bloque del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Desde Jujuy los diputados del Frente para la Victoria saludamos la recuperación de YPF para el patrimonio y futuro de los argentinos.

Vivimos en tiempos en que la utilización de energía ha tenido un incremento fastuoso. A nivel mundial, durante el último siglo, se calcula que el aumento del consumo de recursos energéticos trepo hasta multiplicarse en 19 veces.

Dentro de los recursos naturales, el protagonismo que posee el petróleo es indudable, dada su cualidad de recurso estratégico para el funcionamiento del sistema capitalista de producción y para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial. De ahí que las zonas con recursos energéticos se perfilan como valiosas.

Ese incesante flujo de transferencia de recursos energéticos hacia los países centrales, principales consumidores, se ha convertido a la fecha “en el saqueo colonial moderno”, que se sostiene con el ropaje del comercio internacional.

Dentro de este contexto surge la imperiosa necesidad de replantearse el aprovechamiento integral de los recursos estratégicos de nuestro país.

Con la privatización de los yacimientos argentinos, las provincias periféricas son las que más han sufrido los abandonos y las políticas de insensibilidad de las empresas, que solo han maximizado sus utilidades, obviando la inversión para acompañar la marcha del país. No hay que olvidarse, compañeros, de que el interés privado extranjero raramente es el mismo que el interés nacional, la experiencia así lo ha demostrado. Me resulta irresistible destacar que el crecimiento económico y la explotación y asignación de los hidrocarburos, debe ser realizada dentro de un marco equitativo y sustentable para las provincias y regiones, para así lograr el uso de los recursos en condiciones de producción razonables y previsibles en el tiempo, cosa afirmada por los redactores de este proyecto.

La provincia de Jujuy se encuentra alejada de los grandes centros de producción y distribución, encontrándose el puerto más cercano a 1.300 km de distancia, no obstante,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

desde hace largo tiempo que pagamos el gas oíl a precios más caros, afectando enormemente la producción de nuestra zona. También las naftas tienen enormes recargos a la hora de llegar al surtidor, siendo nuestra realidad la de hacer colas de varias cuadras y al momento de realizar la carga encontrarse sólo con Naftas de línea premium (que poseen un 20 % de precio extra) y, a veces, con precios diferenciales adicionales, con cupos de carga y con pago en efectivo.

Quienes me conocen saben que abagué por la defensa de los usuarios de mi provincia en reiteradas ocasiones. Por ello festejo la creación de organismos como la OFEPHI y OFEMI, donde seguramente, con la participación que posee Jujuy y la hermana Salta, se nos abrirán nuevas perspectivas con miras del crecimiento regional de la cuenca Norte del país.

Ya en el año 2000, se calculaba que solamente la cuenca Noroeste de la Argentina (Salta, Formosa, Jujuy) poseía el 6% de reservas de crudo, siendo más importantes las de gas que se calculaban en un 20% del total país.

Nuestra zona es de una gran riqueza al respecto, y con mucha historia, datando los primeros antecedentes en la materia del año 1860.

En 1969, en Jujuy se producían diariamente 526 m3 de petróleo (hoy se producen 56 m3) y 110 m3 de gas (hoy 13 m3.). En 1975, existían ocho pozos en producción, sobre 17 perforados, que rendían un promedio diario de 4.200 m3 de petróleo.

Hay que volver a esas capacidades de producción, e incluso superarlas, siendo ello posible con políticas de gran inversión como las que se están promoviendo, mediante la participación conjunta del Estado Nacional, las Provincias “dueñas de los recursos” y, las empresas multinacionales con la capacidad técnica y económica, las que irresistiblemente son necesarias para emprendimientos de este tipo, siendo siempre necesario el examen riguroso y tenaz del Estado en su calidad de garante, para evitar desviaciones y errores del pasado.

Venimos desde Jujuy a acompañar con nuestro voto la recuperación de YPF. Tenemos confianza en la decisión que se va a tomar. Tenemos confianza en el modelo. Creemos en nuestra Presidenta, con la misma fuerza con que creímos en el año 2004, cuando nuestro presidente, Néstor Kirchner, nos dijo en Jujuy, en plena quebrada de Humahuaca: “...Jujeños, sepan que en Jujuy comienza la Argentina”.

Así de simple y sencillo es este compromiso, y así de clara y fuerte es la decisión que traigo como mandato de mi partido, para acompañar este proyecto.-

67. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ROGEL

**Texto del proyecto de ley del señor diputado sobre
concesiones para la explotación de recursos
hidrocarburíferos**

H.Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1.- Deróganse los decretos 1055/1989, 1212/1989 y 1589/1989

Artículo 2.- Se revierten al Estado Nacional todas aquellas concesiones de explotación y permisos de exploración que:

a) Excedan el número de cinco (5) concesiones permitido por los arts.34 y 25 de la Ley 17.319.

b) Las obtenidas por reconversiones y contratos de explotación derivados de los decretos 1055/1989, 1212/1989 y 1569/1989.

c) Las prorrogadas en violación a la Ley 17319

d) Todas aquellas tipificadas como de explotación con exploración complementaria, que excedan la superficie o los plazos permitidos por la Ley 17319.

Artículo 3.- Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente Ley, se constituirá una empresa del Estado Nacional integrada entre el mismo y las provincias, cuya gestión conservara el Estado, de acuerdo a las normas y reglamentación que oportunamente se dicte.

Artículo 4.- De forma

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El problema de los recursos de hidrocarburos que afecta ya gravemente a nuestro país, es simplemente el emergente de un colapso generalizado que se ha empezado a detectar a través de los propios informes de las compañías petroleras más importantes del mundo. Las informaciones disponibles, muestran que lo que decimos, no son simples manifestaciones de oportunismo político, sino lo que hemos receptado de esos informes. Como ejemplo podemos citar que Chevron Texaco, la segunda empresa energética de los EE.UU. informa de la existencia de un notable desequilibrio entre su producción y la restitución de sus reservas. Royal Dutch Shell declaró que había sobreestimado sus reservas de crudo y gas natural en un 20%, habiendo bajado sus reservas en más de un 10%, lo que implica una pérdida de neta de 5.300 millones de barriles de crudo. Es importante mencionar que la tasa de reposición de Repsol YPF, es la más baja entre las compañías petroleras del mundo, siendo de 18%.

Estos ejemplos demuestran que la voracidad financiera de las empresas, donde lo único importante ha sido extraer, vender sin explorar nuevas fuentes, está creando complicaciones cada vez mayores, con un horizonte a la vista altamente preocupante. Al respecto Mike Rodgers que firmara un estudio publicado por PFC ENERGY de Washington D.C. sostuvo que "En efecto, las existencias mundiales de crudo son todavía muy dependientes de las posesiones de antaño, descubiertas durante los tiempos de auge de la exploración" lo que revela la falta de exploración y de búsqueda de nuevas reservas, y el Dr. Michael Klare, profesor del Hampshire College, y autor de Blood an Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Petroleum Dependency, es contundente al explicar "Qué tan pronto ocurrirá el aplastamiento energético y qué tan severo puede ser son materia de un debate considerable. En gran medida, este debate gira en torno al concepto de "clímax petrolero" o producción máxima sostenible diaria.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En los cincuenta un geólogo del petróleo, M. King Hubbert, publicó una serie de ecuaciones que muestran que la extracción de cualquier pozo o reserva de crudo seguirá una curva parabólica en el tiempo. La producción aumenta rápidamente después de la perforación inicial y luego pierde fuerza conforme la extracción alcanza su máximo, su "clímax" o "pico", como se lo conoce por lo común. Este se alcanza casi siempre cuando se ha extraído la mitad del monto total del petróleo de dicha fuente, después de lo cual la producción cae a una tasa de caída más y más pronunciada. En 1956 y usando esas ecuaciones, Hubbert predijo que la producción de crudo convencional (es decir líquido) en Estados Unidos tendría un pico o clímax a principios de los setenta. Su predicción provocó mucha mofa en esa época, pero le dio gran renombre cuando en efecto la extracción estadounidense llegó a su nivel pico en 1972. Debido a los insuficientes datos que había entonces, Hubbert no pudo aplicar sus ecuaciones a la producción estadounidense. Sin embargo, él predijo que la producción global -al igual que la estadounidense- alcanzaría eventualmente su nivel pico y después iniciaría su declive irreversible. Sostuvo que "Aun con una producción mayor de tales sustitutos, la inevitable contracción en las existencias mundiales de petróleo solo pospondrá unos cuantos años la crisis. Eventualmente, los científicos y los ingenieros podrían desarrollar fuentes totalmente nuevas de energía -por ejemplo sistemas geotérmicos, de biomasa o con base de hidrógeno- pero a las tasas actuales de desarrollo, ninguna de estas alternativas estará disponible en la escala suficiente cuando los productos del petróleo comiencen a ser escasos.

Así, aunque en este momento los principales accionistas de Exxon, Chevron y otros gigantes del petróleo no manifiesten su preocupación, el resto de nosotros quedamos muy perturbados por los informes recientes. Pese a todo el optimismo mostrado por Washington, estamos ante una amenaza difícil de escapar y sustancial: la escasez global de energía solo traerá penosas consecuencias para nuestra economía y la de resto del mundo. Esta escasez próxima no puede evadirse con solo desecharlo ni puede borrarse perforando en el refugio nacional ártico, que contiene, por lo que se sabe tan poco petróleo que no hace diferencia significativa en las existencias estadounidenses. Solo un ambicioso programa en materia de conservación de la energía que entrañe la imposición de estándares mucho más estrictos de eficiencia en los combustibles usados y un financiamiento masivo en la investigación y desarrollo y luego un despliegue de gran escala de combustibles alternativos, ambientalmente amigables, pueden ofrecer la esperanza de evitar la crisis que de otra manera se avecina."

Si el panorama global que muestra el distinguido investigador estadounidense es preocupante, lo referido al caso argentino llega a extremos de gravedad que no pueden soslayarse y demuestra que todo el proceso de desregulación y desnacionalización de los hidrocarburos, no fue el producto de decisiones desacertadas de política económica, sino el resultado de un plan deliberado para agotar nuestros recursos, sin las inversiones indispensables para restablecer el equilibrio necesario entre la explotación y las reservas.

Como se podrá ver en datos que se consignarán más adelante al consignar las consecuencias de la desregulación la explotación irracional de los recursos energéticos preanuncia una crisis que es necesario evitar. Y los antecedentes que se pueden mostrar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

lo evidencian claramente. Solo cabe recordar que el 26 de marzo de 2004 la Secretaría de Energía dio a conocer la Resolución 265 por medio de la cual se ponía de manifiesto que la situación de abastecimiento de gas al parque generador termoeléctrico se transformó en complicada dado que el mismo "no está plenamente en condiciones de operar física y financieramente sobre la base de combustibles líquidos". Eso la llevó a establecer un programa de racionalización energética, buscando la importación de combustibles líquidos y gaseosos y estableciendo un plan para alentar la reducción del consumo de gas y electricidad (Resolución 415) Estas racionalizaciones determinadas por un comienzo de crisis, no reparaban que se hablaba de reducciones al consumo, ignorando el hecho de que hay más de 13 millones de personas que carecen de provisión de gas por redes según el Indec, aunque nuestros propios estudios llevan esa cifra a 15 millones de personas. A partir de allí y no obstante las medidas restrictivas adoptadas, la situación no ha variado sustancialmente, y es por eso que es necesario importar gas, para cubrir el faltante necesario que satisfaga el consumo interno. Ejemplo de ello es el preacuerdo firmado por ENARSA con la empresa Qatargas de Qatar para importar durante veinte años 5 millones de metros cúbicos anuales de GNL.

No existiendo una auditoria integral de reservas, por parte de técnicos argentinos independientes, no vinculados a las empresas privadas no se puede saber con exactitud el nivel de reservas existentes, ya que no resultan confiables los datos que suministran las petroleras privadas.

En el actual estado en que se encuentra la producción, el consumo y la exportación, los niveles de reservas de gas y petróleo no llegan a los 7 y 6 años respectivamente, cuando a fines de la etapa estatal llegaban a 36 y 16 años respectivamente. No obstante ello reiteramos los datos que circulan no nos merecen fe, por lo tanto cualquier decisión técnica, económica o política que se adopte en el futuro sobre la base de los mismos, no es creíble, y tiene grandes posibilidades de estar equivocada. Ante los constantes requerimientos de desgravaciones impositivas para los gastos exploratorios, son muchos los técnicos independientes que piensan que realizando una estimación disminuida de las reservas de petróleo, los concesionarios pueden conseguir exenciones impositivas desusadas en el mundo. También existen presunciones sobre una sobrestimación de las gasíferas, originada en la necesidad de conseguir autorizaciones de exportación, que se ha convertido en la parte más rentable del negocio de gas natural.

Siendo el conocimiento de las reservas de gas y petróleo un dato insoslayable en la fijación de la política energética, y considerando las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo hasta hoy, la conclusión natural es que la política del sector la siguen fijando las empresas concesionarias de acuerdo a sus intereses, que no son precisamente los de la Nación y el actual estado de cosas está perjudicando de manera irreversible el futuro de la comunidad, al entregar sus bienes estratégicos, limitándose el Estado a ejercer retenciones sobre lo que exportan, como si ello fuera un considerable logro, y aportara recursos importantes. No se tiene en cuenta que tampoco existe el debido control sobre lo que declaran las empresas, lo que no es algo nuevo en nuestro país, pero a lo que debe ponerse fin, y si bien deben liquidar lo que obtiene por exportaciones ello no es suficiente porque el control es casi inexistente.

La crisis energética en ciernes provocada por toda la estructura jurídica inconstitucional



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

del menemismo que no fue modificada quedó una vez más evidenciada, por un importante personaje del mundo petrolero, Alí Moshiri, Presidente de la división para exploración de América Latina de Chevron Texaco, quien el día 10 de agosto de 2006, en la conferencia "Argentina: crecimiento y oportunidades de inversión" que organizó el Consejo de las Américas, dijo "la inversión actual solo alcanza para mantener la producción pero no para sumar nuevas exploraciones", mostrando un gráfico donde se señalaba el agotamiento total de las cuencas de gas y petróleo para el año 2030, lo que fue ratificado por Gustavo Cañonero, economista-jefe del Deutsche Bank quien dijo " la Argentina se beneficiaba de la coyuntura internacional que era muy favorable con las economías que producen commodities. Hasta 2007 está todo controlado. Pero después hacen falta fuertes inversiones. Estamos hablando de un mínimo de 5000 millones de dólares en los próximos cuatro años y 10.000 si lo que se quiere es ampliar la oferta actual" (La Nación, 11 de agosto de 2006) Esta palabra "commodities" del banquero, no es casual y muestra cual es el concepto que nos imponen sobre nuestro petróleo: una simple mercancía negociable. Lo que es un recurso estratégico para las grandes potencias, que prefieren importarlo para cuidar sus reservas, ha pasado a ser en la Argentina, nada más que un simple comoditie, con lo que se lo despoja de su valor histórico y de su utilidad para el servicio público, pudiendo así exportarlo sin limitación Desde el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, comenzó una larga lucha para asegurar que esa riqueza fuera explotada en beneficio del país. El 3 de junio de 1922 el presidente Irigoyen dictó un decreto creando la "Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y el 19 de octubre del mismo año el presidente Marcelo T. de Alvear mediante un instrumento análogo designó como Director General de la entidad al Coronel Enrique Mosconi, quien desarrolló una fundamental labor para consolidar a la empresa como una de las petroleras más importantes. Su labor permitió demostrar la mentada falacia que era necesario contar con grandes capitales para desarrollar una industria nacional, sin tener en cuenta que esos capitales habrían de obtenerse de los beneficios producidos por la empresa. Es bien conocida la actuación de este notable hombre público que se enfrentó a los trust petroleros, y desplazando a las principales compañías, consiguió controlar todo el mercado interno del petróleo.

Desde ese año 1922, hasta 1989, la industria petrolera sufrió una gran variedad de alternativas que no es del caso comentar aquí en homenaje a la brevedad, y que son suficientemente conocidas; pero a pesar de ello, en ningún caso hubo duda alguna que los recursos hidrocarburíferos eran propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación. El art. 40 de la Constitución de 1949 nacionalizó el subsuelo y terminó con las concesiones, y aún cuando esa ley fue derogada por una disposición emanada de un gobierno usurpador, nunca estuvo en peligro cierto la propiedad de los recursos del subsuelo, pese a una serie de alternativas contractuales que llevaron a la celebración de contratos con empresas extranjeras durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, los que fueron anulados por un decreto del Presidente Arturo Illia.

Aunque no se tenían las ideas de Mosconi, y eran otras las concepciones económicas vigentes, el gobierno presidido por el Gral. Onganía, sancionó la ley 17.319 (B.O. 30/6/67) en cuyo artículo 1º se establece que "Los yacimientos de hidrocarburos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

líquidos y gaseosos situados en el territorio del República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado Nacional" y en la exposición de motivos elevada con la firma del Ministro Adalbert Krieger Vasena si bien se admite la intervención de empresas particulares para la explotación de hidrocarburos, queda muy en claro que la misma estará subordinada a la explotación que lleve a cabo YPF, indicando que " La intervención subsidiaria de las empresas particulares en modo alguno afectará el papel fundamental que Y.P.F. y Gas del estado, seguirán desempeñando en la política nacional de los hidrocarburos, ni menoscabará los poderes de que dispone el estado para reglar la exploración, la explotación, el transporte, la industrialización y la comercialización de esas sustancias, desde que tanto la fijación de la política en la materia, como la conducción y el contralor de su aplicación estarán totalmente a cargo del Poder Ejecutivo" agregando que la actividad de las empresas particulares sería "tributaria del quehacer de las empresas estatales, únicas titulares de los derechos mineros referidos a yacimientos de hidrocarburos". Es decir que ni remotamente se suponía que YPF abandonara el papel rector que tenía en materia petrolera ni que el Estado pudiera resignar sus potestades en materia de control sobre tales recursos. Pigretti sostiene que la ley 17.319 es casi una copia literal de la ley española del 26 de diciembre de 1958 sobre Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de los Hidrocarburos, es decir que no se trató de algo original de ese gobierno, sino que se adoptó un texto legal que más allá de algunas falencias, seguía asegurando la propiedad estatal de los recursos (cif. Eduardo A. Pigretti, El nuevo Régimen Legal de los Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos, ADLA. XXVIII-B 1967, págs. 1486 y sig.). A su vez, y determinando el carácter que tenían los hidrocarburos, la Corte Suprema afirmó: "Que la ley 17.319 -cuyo art.1º fue declarado constitucionalmente válido por esta Corte en la causa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c.Mendoza, Pcia. De y otros/nulidad de concesión minera" del 3 de mayo de 1979- confirió a los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la República y su plataforma continental, el carácter de establecimiento de utilidad nacional -por su calidad de complejo de obras y servicios-, en los términos del art. 67, inc. 27 de la Constitución Nacional, quedando sometidos a la legislación exclusiva de la Nación y en las condiciones inherentes a la vital importancia que revisten para la economía general del país y su defensa" (CSJN., 6-12-84, "B.J. Service Argentina S.A. c. Provincia de Mendoza", considerando 2º, La Ley 1985-B, 199) y cuatro años después volvió a ratificar tales criterios al sostener "Que si bien la utilidad nacional de los yacimientos de hidrocarburos puede derivarse racionalmente de su propia naturaleza (doctrina de Fallos t.302, p. 1223) cabe señalar que su incorporación entre los establecimientos amparados por el art. 67, inc. 27 de la Constitución es consecuencia de la interpretación de las normas de la ley 17.319 y, por consiguiente, de la voluntad del legislador nacional al que esta Corte ha reconocido, por principio, la atribución de determinar la existencia del fin nacional así como la elección de los modos de satisfacerlo (Fallos, t. 259, pág. 413, consid.. 8º)" (CSJN. 2/8/88, "Provincia de Mendoza c. Estado Nacional, La Ley 1989-A, 447)

Durante la dictadura cívico-militar hubo algunos intentos de privatizar a YPF, a través de proyectos propiciados por el ministro de Economía de Galtieri, Dr. Roberto



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Alemann, y por los Dres. Juan Alemann y Alberto Grimoldi, pero más allá del descomunal endeudamiento al que se sometió a la empresa durante esa dictadura, que la llevó a tener que afrontar obligaciones por casi 6.000 millones de dólares, YPF seguiría manteniendo el control de la política petrolera. Sería con el advenimiento del presidente Menem, donde se instrumentaría en proceso de liquidación de la petrolera estatal, entregando el dominio de los recursos del subsuelo a empresas extranjeras a través de los decretos desregulatorios 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que se convirtieron en un verdadero "corpus" reglamentario para terminar con el control del Estado sobre el sector; convirtiéndose tales normas en los antecedentes inmediatos para proceder a convertir a YPF en una sociedad anónima, despojándola de su carácter de sociedad del Estado, y luego privatizarla hasta la entrega final a la petrolera Repsol.

La producción total de hidrocarburos a fines de 1989 se encontraba en constante aumento, habiéndose establecido en ese año un record histórico de 51.028.000 m³. (26.702.000 de petróleo y 24.326.000 de gas equivalente en valor calórico al petróleo)

La cantidad de pozos perforados hasta esa fecha, se mantuvo con altibajos en un promedio del orden los 800 anuales, solamente superado en América Latina por Brasil en los últimos años y superior a los de México y Venezuela, y a países de la OPEP como Arabia Saudita, Nigeria o Indonesia. Los aspectos negativos que podían señalarse estaban dados por la actividad de recuperación secundaria que era inferior en un 13% al promedio mundial. Esto no ocurría por la baja actividad de la industria o por el no alineamiento con la economía petrolera mundial, sino que la baja producción relativa de petróleo se debía a las características geológicas del territorio que situaba a la producción de sus yacimientos en los 7 m³/pozo/día, mientras que en Venezuela es de 100/pozo/día y en Arabia Saudita de 1000m³/pozo/día.

La capacidad instalada de refinación estaba en condiciones de satisfacer las necesidades del país hasta el año 2010. Las destilerías de YPF de La Plata y Luján de Cuyo se encontraban en un nivel tecnológico de avanzada. La balanza comercial energética arroja resultados positivos.

Las grandes obras de infraestructura realizadas hasta 1989 correspondían en gran parte al área de los hidrocarburos, destacándose entre las principales; el aumento de la capacidad de conversión y procesamiento de las destilerías de La Plata, Luján de Cuyo y Campo Durán, de propiedad de YPF, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, la construcción por parte de Gas del Estado del gasoducto troncal NEUBA II que demandó una inversión de 480 millones de dólares y la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto del Norte. YPF, concretó el Oleoducto Puerto Hernández-Cerro Divisadero; la realización de las plantas de tratamiento de gas venteado en la provincia de Mendoza; la finalización y puesta en marcha de las plantas satélites del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, con aportes realizados que excedieron los 400 millones de dólares y el avance del 95% de las obras correspondientes al Complejo de Aprovechamiento de Olefinas de Petroquímica General Mosconi en el Polo de Ensenada, con inversiones superiores a los 180 millones dólares

La relación creada entre las empresas estatales del sector con la infraestructura científico-tecnológica de las universidades nacionales, permitió que YPF, en su laboratorio de Florencio Varela, desarrollara exitosamente el primer catalizador de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

origen nacional, dando así un paso de importancia en la ruptura de la dependencia con el exterior en el campo de los insumos críticos. Todo lo anteriormente mencionado en apretada síntesis se logró por intermedio de la acción desarrollada por las sociedades estatales mencionadas y, a pesar de la continua "sustracción" de ingresos genuinos que el Ministerio de Economía realizaba sobre YPF. Esa apropiación se originaba en un desmedido e ilegal avance tributario sobre la renta o ingresos petroleros que impedía a la empresa estatal efectivizar el total recupero de sus costos y la obtención de una razonable y legítima utilidad. En el caso de Gas del Estado, la situación presentaba ciertas analogías, ya que por razones de política internacional era obligada a adquirir a Bolivia grandes volúmenes de gas natural que no necesitaba, a un precio varias veces superior a los costos de YPF. En razón de esto esta empresa gasífera del Estado, debía cargar en sus resultados empresarios con una pérdida anual aproximada de 250 millones de dólares. Para dar una idea de la magnitud de toda esta situación, incluyendo los préstamos internacionales que se obligó a tomar a YPF sin necesidad durante la dictadura militar, debemos decir que el desvío de ingresos a que era sometido el sector de las empresas del Estado, superaba anualmente los 2.500 millones de dólares, lo que demuestra lo falaz de la afirmación sobre las pérdidas multimillonarias de esas empresas. Solo se trató de afirmaciones sin sustento para justificar la venta de las empresas del Estado y la desregulación de todo el sector-

A fines de 1989, cuando asumió Menem la legislación vigente era:

Ley 17.319 de Hidrocarburos

Ley 21.778/78 de contratos de riesgo

Decreto 1.443/85 y decreto 623/87.

Es decir que existía una legislación, que a pesar de sus falencias conservaba la autonomía de YPF en el sector y el control del Estado sobre las operaciones. El gobierno menemista vendría a modificar todo ese sistema a través de una arquitectura "paralegal" que se iría perfeccionando a través de numerosas resoluciones y diversos actos administrativos para terminar con propiedad estatal, desregulando el sistema. De tal manera y a través de lo ocurrido de allí en adelante el país perdería su renta petrolera, sería enajenada la empresa estatal, y las empresas extranjeras, especialmente, pasarían a ejercer el manejo total de los recursos hidrocarburíferos, sin controles efectivos por parte del Estado.

Pero esta historia comienza mucho antes, y tiene que ver con un plan minuciosamente preparado para quedarse con las empresas públicas, a través del mecanismo de la deuda externa. En efecto, en el mes de octubre de 1983 se reunieron en un "foro" Henry Kissinger, Alan Greenspan, miembro del consejo directivo de Morgan Guaranty Trust, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing y otros prominentes personajes para tratar distintos problemas internacionales, dedicando parte sustancial del encuentro a tratar el "apremiante problema de los países en desarrollo". Allí Greenspan planteó la idea de que los países pagaran con acciones de sus empresas, mientras Kissinger manifestó que la idea era acabar con ciertos conceptos de soberanía que podían obstaculizar los planes. Además de decidir que no se otorgarían más créditos bancarios a los países deudores, se comenzó a planificar una adecuada estrategia para solucionar el problema de las deudas. Fue así que David Rockefeller creó una Comisión de la Deuda Latinoamericana, cuya



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

dirección ejecutiva le fue confiada a Robert Hormats, asistente de Kissinger en la casa bancaria Goldman Sachs and. Co.. Uno de los miembros de esta comisión declaró al poco tiempo en Nueva York "Las leyes de América Latina sobre inversión extranjera, tienen que cambiar, y eso es un problema de soberanía nacional...La Comisión ha recogido las ideas de la mayoría de las empresas multinacionales y los bancos de los Estados Unidos y ahora se las estamos explicando a los gobiernos de América Latina. Por ejemplo nos vamos a reunir en breve con funcionarios del Ministerio de Hacienda de Argentina para decirles lo que los norteamericanos piensan sobre nuevas inversiones...Tomemos el caso de Fabricaciones Militares, propiedad del Ejército y que participa en la industria y la minería mucho más allá de las necesidades militares. Les vamos a decir Tienen que suprimir todos los subsidios de su economía, empezando por las empresas públicas. La verdad es que de algún modo hay que introducir el concepto de quiebra al sector público. Se tienen que cambiar las leyes estatales de Argentina, Brasil, México y otros países. Primero, ningún subsidio estatal a empresas públicas como Fabricaciones que no operan sobre bases comerciales, como cualquiera compañía privada normal. Segundo, se les debe permitir declararse en quiebra o, si necesitan más dinero, abrirlas a la inversión privada extranjera...Una vez que se pueda llevar a una empresa del sector público en quiebra a los tribunales, los acreedores pueden hacer lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en el caso de la Chrysler o lo que hacen los bancos en Alemania cuando una empresa deudora tiene dificultades. Se convierte parte de la deuda en acciones y se la ayuda a resolver sus problemas...No hay sustituto para el proceso de austeridad... Es completamente cierto que causa caos social, pero las protestas de masas se pueden usar para promover cambios. Debido al desempleo, habrá una tremenda presión pública sobre esos gobiernos para que cambien sus leyes a fin de obtener nuevos créditos. Tenemos que usar la austeridad y el caos social para quebrar las instituciones de esos países y cambiar las leyes" (Cif. EIR, Resumen Ejecutivo, Vol. 1, N° 8. 1 de octubre de 1983)

Estas propuestas, junto a otras que permitían la privatizaciones del sector público de los países latinoamericanos, junto a una justificación teórica que se fue estructurando sobre lo que se dio en llamar el "Public Choice" sirvió para que uno de los principales acreedores de la Argentina en 1989 -el Citibank- pusiera en marcha un plan minuciosamente estudiado para quedarse con las empresas públicas y las industrias más rentables del país. El mecanismo idóneo y la justificación para realizar ese operativo sería la "deuda externa argentina".

El audaz proyecto sería revelado en forma minuciosa al Ministro de Alfonsín Dr. Rodolfo Terragno, en el mes de octubre de 1988, por Edwin Yeo, quien era para ese entonces asesor del Federal Reserve System (el banco central de los Estados Unidos). Yeo le informó a Terragno, que en Estados Unidos se sabía que la economía argentina no funcionaba, que estábamos sitiados por el Fondo Monetario y los acreedores, y que la intención del Citibank, del FMI, y del Tesoro de los Estados Unidos, en particular el subsecretario David Mulford era de que se pagara la deuda con industrias y empresas de servicios públicos. Le indicó que para el Citibank, la deuda no era un problema sino un verdadero negocio a instrumentar.

En el memorando redactado por el Dr. Terragno después de la entrevista consignó que



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Yeo le había dicho textualmente "Mulford trabajó siempre para los árabes. A fines de los 60 ya era asesor de la SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency-banco central saudita) Mulford es el nexo con dictaduras y gobiernos corruptos en América Latina y otras partes del mundo. Les hace prestar todos los dólares que quieran sin garantías. Los gobiernos reciben los que Uds. llaman plata dulce. Los banqueros saben que no van a recuperar capital, pero no les importa. El objetivo de ellos= cobrarse en especie. Ahora están quedando al descubierto. Ahí lo tiene a Rhodes, persiguiéndolos a Uds.; y a Mulford dándole apoyo a Rhodes desde el Tesoro. Ellos quieren que los países deudores conviertan su deuda en bonos. Y los van a ayudar a Uds. a colocar los bonos argentinos en fondos de inversión, que manejan la plata de pequeños ahorristas diseminados en todo el mundo. Cuando llegue el momento de pagar, y no puedan, ¿cómo van a hacer Uds. para renegociar con millones de ahorristas dispersos por todo el mundo? No van a poder. Entonces les dirán: PAGUEN CON ACCIONES. Para resolver el problema de la deuda Uds. tendrán que entregar hasta la última empresa pública. Y no solo eso: los obligarán a que abran de golpe el mercado interno. La industria argentina no lo resistirá y ellos se quedarán también con empresas privadas. El Citi ya está saliendo a comprar bonos de la deuda argentina, y les dice a los tenedores "No esperen 20 años ni corran riesgos; reciban dinero contante y sonante ya mismo; eso si con descuento. El Citi compra títulos de la deuda argentina a 15 y después, cuando quiera quedarse con una empresa argentina les va a dar a Uds. esos mismos bonos como si valieran 100.

Además, ellos quieren transformar créditos en bonos al portador. ¿Por qué? Para facilitar la compra de las empresas a precio vil. O Uds. reaccionan, o esta gente se va a quedar con toda la Argentina" (cif. Rodolfo Terragno, La Simulación- Argentina y el FMI: dos décadas de mentiras y autoengaños. Planeta, Buenos Aires, 2005, Pág. 22) Para posibilitar la puesta en marcha de una política de desguace del Estado Nacional, se dictó la ley 23.696 de Reforma del Estado, que habilitó todo el sistema de privatizaciones y abrió el camino para la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales. También se dictó la ley 23.697 de Emergencia Económica, que determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables de pago de regalías petroleras. En referencia a este tema puntual, se estableció que las regalías serían abonadas sobre la base del Valor Boca de Pozo (VBP), que el mismo no sería del 80% del valor internacional del petróleo y que esas regalías, que eran del 12%, podían reducirse hasta el 8% del total producido. Dado el apuro con él que intentaba privatizar, se produjeron notorias contradicciones entre las normas, ya que si bien la ley de emergencia prohibía los subsidios, estos se otorgaron generosamente.

Pero además, para perfeccionar ese plan de extranjerización de la economía se dictó la ley 24.156 de administración financiera que daba amplias facultades al Ministerio de Economía de la Nación para renegociar todo lo que tuviera que ver con la deuda externa, tanto en lo relacionado con los acreedores privados, como con los organismos multilaterales de crédito. Esta ley, y todo lo relacionado con el endeudamiento estarían inescindiblemente relacionado con la política de hidrocarburos que se llevaría a cabo en adelante.

Para comenzar la articulación de todo este plan, y después de promulgada la ley 23.696,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

se comenzó por dictar el decreto 1055 el 10 de octubre de 1989, uno de cuyos objetivos era "reemplazar en forma creciente la intervención del Estado en la fijación de los precios, márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etc. por los mecanismos de asignación del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda" y "la desregulación progresiva e integral de la actividad, que conduzca a la efectiva y libre competencia en todos los segmentos en el menor tiempo posible reflejando los valores internacionales, debiendo en consecuencia conceder la libre disponibilidad de la producción obtenida bajo estos esquemas de explotación tanto en el mercado interno como para la eventual exportación de los productos".

El 8 de noviembre del mismo año se firmó el decreto 1212 por medio del cual se indica la necesidad de transformar a YPF en una empresa competitiva "y darle las condiciones de autonomía que permitan su inserción, en igualdad de condiciones con las empresas privadas, en un mercado local más competitivo y en los mercados internacionales" y posteriormente con el decreto 1589/89, se completó una estructura reglamentaria que serviría para poner en ejecución la política de todo el sector. Se alteró así el régimen establecido en la ley 17.319, dando nacimiento a un mercado de competencia internacional abierto, que determinaría oligopolizar en manos privadas y mayoritariamente extranjeras, todos los segmentos del ciclo económico de los hidrocarburos.

Debemos decir que todo lo que se fue articulando mediante los decretos en cuestión estaba debidamente planificado, con un conjunto de Bancos y con la participación del FMI. No se trató de una improvisación circunstancial, sino que respondió a la necesidad de poner en práctica un nuevo modelo de Estado, que respondiera funcionalmente al sistema en el que debía insertarse el país, cuya asignación geopolítica estaba dada por la llamada doctrina del "realismo periférico" que suponía seguir las políticas neoliberales que se estaban implementando, donde la libre empresa iba a sustituir definitivamente otras concepciones del Estado, el que debía ser reducido a su mínima expresión.

Todo este proceso desregulador arrancaba de la evolución de una serie de teorías económicas, que para uno de sus apologistas ha hecho cimbrar los cimientos mismos de algunas instituciones clásicas del derecho administrativo, y que pueden resumirse en lo que se ha dado en llamar "nueva economía pública" (public choice). Esta nueva escuela ha cuestionado la función intervencionista del Estado, realizando un análisis de las supuestas falencias que tendría como regulador y aún como administrador, entendiendo que toda acción del Estado enderezada al bien común no es más que una simple teoría que los hechos se encargan de refutar a cada paso. La obra clave donde se desarrollan estas teorías, "The Calculus of Consent, (University of Michigan Press, An Arbor, 1962), fue publicada por los profesores James M. Buchanan y Gordon Tullock, del Virginia Politecn Institute, quienes crearon el Center of Public Choice en 1969. Otros autores como Henri Lepage (Demain le Capitalismo, Le livre de poche, Pluriel, 1978) y Dennis Mueller (Public Choice II, Cambridge University Press, 1989) fueron desarrollando a partir de allí una verdadera escuela destinada a demostrar la validez de estas teorías que en síntesis demolían la concepción jurídica clásica del Estado, atribuyéndole todo un conjunto de inequidades en su estructuración, mientras se ponderaban las virtudes del mercado libre como la única posibilidad de una



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

maximización de posibilidades para el hombre común, quien era caracterizado nada más que como "hombre económico" que solo persigue su interés individual.

En nuestro país, todas estas teorías y aquellas que fulminaban la capacidad del Estado como agente del bien común y promotor de la riqueza nacional, fueron divulgadas por algunos institutos de investigación como CEMA, FIEL, la FUNDACION MEDITERRANEA, que en diversas ocasiones suministraron sus cuadros más importantes para dirigir la economía del país. Como dice uno de sus apologistas refiriéndose a los trabajos preparados por estas organizaciones: "estos trabajos ayudaron a dimensionar la naturaleza de los graves problemas que había que enfrentar, proveyeron datos empíricos y comparaciones internacionales, focalizaron el debate y le dieron mayor profundidad a la discusión sobre políticas instrumentales" (Felipe de la Balze, *Reforma y Crecimiento en la Argentina*, en "Reforma y Convergencia" CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993, pág. 59)

Por supuesto no fueron trabajos desinteresados, ya que esos institutos de investigación estaban financiados por empresas privadas nacionales y extranjeras, para quienes resultaba prioritaria la desregulación económica, como la forma más viable, para poder controlar las mayores fuentes de recursos del país. Es importante señalar que precisamente en el mismo año en que se promulgó la ley de reforma del Estado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) publicó un libro que se llamó *Los costos del estado regulador* (Fiel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1989) en el que analizaba la imposibilidad de continuar con un Estado como el existente, siendo necesario adoptar un conjunto de medidas económicas que desregularan todos los sectores, para acabar con ese enorme Estado al que resultaba necesario achicar. Tales concepciones no hubieran pasado de tener un mero interés académico, o ser materia de reflexión para aquellos interesados en el análisis de los aspectos burocráticos del Estado; sin embargo se fueron afirmando en muchos países lo que determinó el concepto de que el Estado-Nación se debilitara, pasando a configurar una nueva forma de Estado: el posmoderno donde confluiría la globalización, con el liberalismo económico, la fluidez mediática, el hiperconsumo de los sectores privilegiados. Así se convirtió a la riqueza en el valor supremo en torno al cual debían girar todas las políticas, pasando el Estado a convertirse en un disminuido administrador de lo poco que le quedaba.

Uno de los propugnadores de esas condiciones limitativas del Estado fue el Dr. Roberto Dromi, propulsor de la reforma del Estado, para quien éste no debe intervenir sino "en subsidio... El Estado más pequeño, con menos funciones, es más libre para actuar. Surge a partir del traspaso a manos privadas de los cometidos prestacionales una nueva administración, la subsidiaria o no estatal, que hereda esas funciones del Estado servidor. (Roberto Dromi, *El Derecho Público en la Hipermodernidad*, Hispania Libros y Facultad de Derecho Universidad Complutense, Buenos Aires, 2005, pág.314) Dromi, como ministro del gabinete de Menem puso todo su empeño para lograr esa disminución del Estado, haciendo realidad la falacia propugnada durante la dictadura militar de que "achicar al estado es agrandar la Nación". Empero resulta de tal magnitud la indignidad del proyecto de reforma, que el citado Dromi habla de los anteriores planes de reforma, que cita como precedentes: "Prebisch (1955) de "restablecimiento



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

económico": Alsogaray (1958), de "austeridad y racionalización"; Krieger Vasena (1966), de "abaratamiento del gastos público"; Gelbard (1973), de "contención del gasto público", Martínez de Hoz(1976), de "racionalización administrativa", que fueron puestos en práctica por gobiernos que decidieron ejercer "siempre una lucha sin límites contra el déficit fiscal, la inflación y el desmedido tamaño del Estado" (cif. Roberto Dromi, Reforma del Estado y Privatizaciones. To. I, Legislación y Jurisprudencia, Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 37).

Los precedentes de Dromi no podrían ser más oportunos para poder analizar la filiación ideológica del proyecto que llevó a cabo el gobierno peronista de Menem, bajo la asistencia técnica de su ministro, que elaboró toda la corrupta estructura que posibilitaría el desguace del Estado, y la sustracción continuada de nuestros recursos para ser transferidos al exterior, como ha quedado ampliamente demostrado en hechos que son de público conocimiento. Además el ministro Dromi había confesado en el Congreso de la Nación que el país "estaba de rodillas" ante los acreedores, y no existían otras alternativas que la privatización total. Es decir que el proyecto de los banqueros funcionaría a la perfección encontrando un Poder Ejecutivo, que atropellando normas fundamentales de la Nación procedería a hacer el trabajo que se les exigía desde los bancos acreedores. Hoy este singular administrativista y supuesto asesor del Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, estaría proponiendo un plan para estatizar nuevamente YPF, lo que hace suponer que se trata de una nueva maniobra para beneficiar a algún grupo empresario y no para recuperar la empresa para la Nación.

Para llevar a la práctica, esas teorías - perfectamente funcionales al poder de los capitales extranjeros- se utilizaron diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo social, de las rigideces regulatorias, de la distorsión en la asignación de los recursos, de la ineficiencia administrativa, etc. etc., todo lo cual ocasionaba una especie de caos operativo que aumentaba exponencialmente los gastos del Estado, produciéndose déficit, que eran un constante factor de perturbación económica y de inequidad social, al que debía ponérsele término. También se argumentó sobre la necesidad de solucionar los graves problemas fiscales y amortizar el pago de la deuda externa, ya que los títulos de la misma a podrían ser utilizados como forma de pago por los activos públicos

Una de las formas utilizadas para implementar todo este plan desregulador y privatizador fue mostrar una situación de peligro inminente, como si un caos de consecuencias imprevisibles amenazara la misma estructura del Estado. Si bien es cierto que el gobierno de Alfonsín dejaba un estado hiperinflacionario preocupante, las empresas públicas y entre ellas las de hidrocarburos, funcionaban adecuadamente. Pero el problema no radicaba en ciertas insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de entregar los recursos para obtener en el corto plazo fondos que sirvieran para disminuir el problema del sector externo, y además desprenderse de lo que se consideraba eran factores de incremento del gasto público, caballito de batalla que no solo agitaban todos los economistas, sino los medios en su totalidad y los divulgadores de un discurso superficial que se había enseñoreado de la Argentina

Con el argumento del peligro y la necesidad de sanear al Estado, despojándolo de trabas que obstaculizaban su eficiencia se dictaron las leyes de reforma del Estado (23.696), y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de emergencia económica (23.697) por las cuales se le dieron amplias facultades al Poder Ejecutivo, para configurar esa situación. Es precisamente en estas dos leyes, donde parte toda esa especie de arquitectura que llamamos "paralegal" que daría fundamento a una singular batería de decretos, parte de los cuales son los que impugnamos, con el único propósito de proceder al desguace del Estado, a quien se le quitarían indispensables fuentes de recursos, para entregarlos a grupos internacionales, en negociaciones previamente acordadas. No es ocioso recordar también la sanción de la ley 24.156 de administración financiera, por la cual se delegó en la Oficina del Crédito Público la potestad legislativa de renegociar la deuda externa, con los organismos multilaterales y contraer nuevas deudas. Fue así que con el sustento de estas tres leyes se puso en marcha el mentado mecanismo de "reforma", determinando que el país se viera privado en corto tiempo de sus principales empresas, despojado de su renta petrolera, endeudado a límites insostenibles, y sometido al control de los grupos financieros y los organismos multilaterales.

Entre los argumentos que también se manejaron para justificar toda la legislación que se pondría en marcha, estuvo: la disminución de la deuda, el autoabastecimiento, el impulso de las exportaciones, ampliar las reservas de hidrocarburos a través de una intensiva exploración, y además garantizar a las nuevas generaciones una riqueza que sería factor fundamental para el crecimiento del país. La deuda no disminuyó sino que subió de 62.000 millones de dólares a 152.563 millones de dólares en 1999, las reservas de hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de exploración siendo muy comprometido el panorama futuro como lo demostraremos más adelante, y a las nuevas generaciones tal política solo les garantizó un futuro de pobreza, de exclusión, y de marginalidad.

La realidad de hoy es demostrativa de la intencionalidad política que tuvo todo el proceso que se llevó a cabo, beneficiando únicamente a las empresas petroleras privadas. Es importante mencionar al respecto, que los teóricos de la eficiencia empresarial solo evalúan en sus análisis la relación costo-beneficio desde una perspectiva de la incentivación de las ganancias, propia de una empresa privada. No se tuvo en cuenta que en determinados casos las empresas estatales -como en el caso de YPF- cumplían una función que la empresa privada no podía realizar, dado que sus objetivos eran sustancialmente distintos. En muchos casos YPF mantenía pozos que no eran rentables debido a que en torno a los mismos se habían desarrollado pueblos enteros que dependían de esa empresa pública. YPF había construido escuelas, hospitales, desarrollado zonas inhóspitas y contribuido con los recursos de la explotación de hidrocarburos a la realización de fundamentales obras de infraestructura que beneficiaron a toda la Nación Si bien ese manejo empresarial no resultaba demasiado ortodoxo dentro del concepto de la rentabilidad individual de lo que debiera ser una empresa, respondía a una función elemental del Estado que es la de promover el bien común de sus habitantes, aunque para ello necesite prescindir de los habituales mecanismos crematísticos con los que se manejan las empresas convencionales. Por otra parte toda la política privatizadora fue nada más que una herramienta del programa macroeconómico del gobierno menemista, en el que las reformas estructurales no eran nada más que un artificioso enunciado para que los recursos del Estado fueron



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

transferidos al sector privado, en el convencimiento que ello traería una profunda modificación del esquema productivo vigente, con un Estado meramente administrador de los ingresos fiscales. En ese momento los esquemas teóricos de la eficiencia, trazados por diligentes funcionarios subvencionados por las empresas transnacionales, mostraban a ese nuevo modelo como el único posible para insertar a la Argentina en el mundo.

La realidad actual de la política hidrocarburífera, consecuencia de esas políticas, es la que muestra un cuadro altamente preocupante, en el que puede observarse que según cifras oficiales, en el último año bajaron las reservas de petróleo en un xx% y las reservas de gas en un xxx%.

La caída de reservas, producto de la falta de inversión y exploración, no es algo nuevo, ya que estuvo presente desde el comienzo de la desregulación. Después de privatizada YPF, y cuando estaba en plena operatividad la política desregulatoria, comenzaron a caer los niveles de reservas de hidrocarburos. En la memoria de la sociedad de 1993, se confirma esto, cuando se dice que "a partir de 1991, la Sociedad comenzó un programa de transformación que incluyó la enajenación de reservas y otros activos, de acuerdo con la política del Gobierno de fomentar la competencia en la industria del petróleo y gas a través de la participación del sector privado y en cumplimiento del programa estratégico de la Sociedad y su rentabilidad. En gran medida como resultado de estas enajenaciones, las reservas probadas de petróleo y gas de YPF cayeron de 4.100 millones de barriles de petróleo (BPE-652 millones de m3) al 1º de enero de 1991 a 2.500 millones (397 millones de m3) al 1º de enero de 1994, cayendo la producción de petróleo de 127 millones de barriles (20 millones de m3) en 1991 a 109 millones (1,3 millones de m3) en 1993; y la producción de gas disminuyó de 619.000 millones de pies cúbicos (17.528 millones m3) en 1991 a 447.000 de pies cúbicos (12.658 millones de m3) en 1993" (YPF, Memoria, pág. 22) Y así se continuaría, al no haberse establecido compromisos de inversión y exploración que permitieran revertir la caída de las reservas.

Además de los datos que hemos consignado -fácilmente verificables- creemos necesario poner algunos ejemplos de cómo se adjudicaron algunas áreas a los efectos de que se pueda observar las reales intenciones de la desregulación, donde hubo singulares repartos de reservas entre multinacionales importantes y hábiles negociadores locales, que visualizaron la oportunidad de lucrar a costa de los bienes públicos. Enfáticamente podemos decir que las áreas secundarias fueron regaladas a empresas vinculadas con funcionarios del Estado en una increíble colusión de intereses.

1.- Áreas El Vinalar y El Mosquito: tenían 1005 y 763 kilómetros cuadrados respectivamente, con lo que excedían el límite impuesto por el art. 34 de la ley 17.319 de 250 kilómetros. Fueron adjudicadas a la empresa EPP Petróleo el 15 de enero de 1991.

2.- Áreas Puesto Guardían y La Brea: adjudicadas a un consorcio integrado por EPP Petróleo y Tripetrol, que pagó por ellas 8.500.000 y 200.000 dólares respectivamente.

3.- Ésta empresa EPP Petróleo, era del presidente de la "nueva" YPF José Estenssoro y la había constituido junto con él quien fuera Vicepresidente de YPF, Nells León, en el mes de febrero de 1990 con un capital de 2.500.000 australes, equivalente a la suma de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

120 dólares estadounidenses. Cuando Estenssoro hizo la presentación en la Inspección General de Justicia para la inscripción de la sociedad, ese mismo día 8 de febrero, se publicaba el edicto llamando a Concurso Público Internacional para la adjudicación de las áreas secundarias, lo que hace presumir cual fue la real intención de constituir la sociedad: quedarse con áreas que tenían la seguridad que les iban a ser adjudicadas.

4.-Área Cañadón Alfa: ubicada en Tierra del Fuego, significó una inversión por parte de YPF de 150 millones de dólares en casi veinte años, a través de diversas obras, habiendo perforado 71 pozos. A través de un extraño procedimiento de unitización (palabra desconocida) que integraba esa área con una explotada por la compañía francesa Total, se cedió a esta compañía el área, quien pasaría a operar y gerenciar el área unitizada, cuya estimación de reservas era de 1.000.000 de metros cúbicos de crudo, con reservas gasíferas aún mayores. A través del contrato firmado YPF le pagaba a Total por el petróleo que esta extraía en el área un precio cuatro veces superior al que le costaba, cuando operaba el área.

5.- Área Puesto Hernández: tenía 535 pozos perforados y 359 en producción, extrayéndose diariamente 40.000 barriles de petróleo, contando con una reserva aproximada de 106 millones de barriles. Se le adjudicó a Pérez Companc en sociedad con la compañía Occidental, por la irrisoria suma de 240,7 millones de dólares

6.- Área El Tordillo: tenía 846 pozos perforados, 376 en producción, extrayéndose diariamente 12.700 barriles, y contando con reservas comprobadas de 47,8 millones de barriles. Se adjudicó a Santa Fe Energy Company of Argentina (empresa norteamericana) y a Tecpetrol (del grupo Techint). El capital de ambas empresas no superaba los 5000 dólares, y Santa Fe Energy estaba asociada con Sol Petróleo, una empresa que Estenssoro había presidido. Por ésta área se pagaron 107,6 millones de dólares, pero no fue un pago en efectivo, sino que solo una parte fue en dinero y el resto en créditos contra el Estado que tenían empresas del grupo Techint.

Las ventas de las áreas centrales solo generó divisas por alrededor de 400 millones de dólares, lo que resultaba una suma ridícula respecto del valor que tenían las referidas áreas. Sin embargo, había que cumplir con el pago de la deuda externa y los objetivos del gobierno eran hacerse en el corto plazo de la mayor cantidad de recursos aunque para ello debiera rematar esos bienes "inalienables e imprescriptibles"

Como decía una representante del Banco Mundial "Uno de los beneficios del programa de privatizaciones en Argentina, ha sido permitir la movilización de los recursos necesarios para normalizar la relación con los bancos comerciales privados a través del Plan Brady, que se completó en 1993. Esto permitió a la Argentina obtener una reducción parcial de su deuda y la reestructuración en términos y condiciones. En gran medida esto se logró mediante el programa de privatizaciones. Bajo este programa, Argentina recibió unos 12.000 millones de pesos (dólares) de las deudas de los bancos extranjeros como pago parcial por parte de los nuevos dueños de las empresas privatizadas. Esto facilitó la reestructuración de unos 19.000 millones de pesos de la deuda externa pública argentina, una reducción de los intereses adeudados por un total de 7.5 mil millones de pesos y una reducción de la deuda en 3.3 mil millones de pesos...Asimismo, Argentina utilizó los créditos de 3 mil millones de pesos de la venta de las acciones de YPF en 1993, con el fin de pagar deudas nacionales...Los ingresos de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

las privatizaciones no sólo ayudaron al gobierno a concluir con el Plan Brady, sino que esos ingresos fueron también importantes fuentes que ayudaron a financiar el déficit fiscal público en la primera etapa del programa de reformas" (Myrna Alexander, Privatizaciones en Argentina, en Privatizaciones e Impacto en los Sectores Populares. Banco Mundial, Universidad de Belgrano. Instituto de Investigaciones del Nuevo Estado, Buenos Aires, 2000, pág.39-40) Se olvidaba decir la Dra. Alexander que los títulos entregados por las privatizaciones y reconocidos por el gobierno a su valor nominal fueron comprados en el mercado internacional por los bancos extranjeros al precio que fluctuaba entre el 12 y el 17% de su valor nominal, y que ese déficit, provenía precisamente del pago de los servicios de la deuda, ya que de excluir éstos, el país tenía superávit primario.

Para terminar con el análisis de las consecuencias que produjo este remate de la riqueza petrolífera vamos a consignar una serie de cifras oficiales que muestran como la explotación irracional va saqueando al país de este recurso hasta que en poco tiempo no quede nada, y debemos nuevamente recurrir a la importación

EXPORTACION DE PETROLEO

AÑO m3/día INDICE EXP. PET.

1990=base 100

1990 2,839 100.0

1991 3,939 138.8

1992 8,400 295.9

1993 13,789 485.7

1994 32,094 1,130.5

1995 44,353 1,562.3

1996 51,747 1,822.8

1997 52,956 1,865.3

1998 52,562 1,851.5

1999 42,708 1,504.4

2000 43,790 1,542.5

2001 44,816 1,578.6

2002 43,066 1,517.0

2003 36,571 1,288.2

Como lo indicáramos en los párrafos precedentes, cuando asumió Menem la Presidencia de la Nación, el endeudamiento artificial de YPF era singularmente cuantioso, y sería el pretexto para modificar sustancialmente todo el esquema sobre utilización de los hidrocarburos que regía hasta entonces. Las viejas teorías sobre el "Estado mal administrador" fueron desempolvadas y contra lo que enseñaba la propia experiencia argentina se comenzó a teorizar sobre las virtudes de la empresa privada, mostrando los males que habían aquejado al país por el manejo de empresas que debían entregarse a la explotación particular. Se utilizó una conocida retórica abundante en frases hechas sobre "empresas en crisis" "reducción del gasto público" "Estado ineficiente y burocrático" hábilmente integrada con otras afirmaciones fundadas en esa concepción vulgar pero repetida desde siempre que sostenía la "inevitabilidad de la privatización", "único camino viable", "no hay otra opción". Es decir que la creatividad de las nuevas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

autoridades para resolver la difícil situación de la administración del Estado, pasaba únicamente por enajenar todo el patrimonio disponible.

Según los artífices del proyecto era necesario descargar al Estado de todo ese peso antifuncional con su secuela de déficit estructural, crónica ineficiencia, carencia de recursos, estancamiento tecnológico, desinversión y falta de rentabilidad. La mejor forma de terminar con esta situación, era poner en práctica un régimen de irrestricta libertad de mercado, y fue el Dr. Roberto Dromi, uno de los que confeccionaría el andamiaje teórico de tal proyecto, que sería utilizado por los grupos financieros para controlar toda la economía del país. Para Dromi: "La libertad de mercado es un principio básico de la democracia económica, el derecho que tiene toda persona humana a definir, por su propia iniciativa, el ámbito del ejercicio de la libertad...La manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la iniciativa privada. Es incuestionable el papel del trabajo humano disciplinado y creativo con iniciativa y espíritu emprendedor...En el legítimo ámbito de la libertad de la actividad económica no debe intervenir el Estado" (Roberto Dromi, *Empresas Públicas- De estatales a privadas*. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 26). Naturalmente que estas expresiones nada tienen que ver con la realidad que funciona en cualquier estado periférico, donde el poder de las grandes corporaciones, controla los aspectos fundamentales de la actividad económica, cuando, como en nuestro país, no existen controles de ninguna naturaleza para regular la acción de tales grupos. Por otra parte toda esa infantil teorización del libre mercado no resiste un análisis serio de lo que es la influencia de los sectores monopólicos en la economía. Como con meridiana claridad lo afirmaba el Dr. Rodolfo Bledel en el dictamen presentado en noviembre de 1959 en la Sexta Conferencia Nacional de Abogados: Es un hecho indiscutible que en estos momentos la comunidad argentina está sometida a una firme y definida presión ideológica, realizada en nombre de la llamada doctrina económica de la libre empresa. No importa que la doctrina especializada en el estudio de las economías de los países subdesarrollados o de desarrollo intermedio aconseje, para situaciones similares a la nuestra, una política económica fundada en principios diametralmente contrarios. No importa el fracaso de la política libreempresista en varios países subdesarrollados, en particular de la América Latina. Se trata de imponer por todos los medios el ideario neoliberal. Se instaura el dogma según la cual la empresa privada y no el Estado constituye el agente impulsor del desarrollo económico. Se va más allá del pensamiento de Schumpeter, puesto que él veía en el empresario privado el ente impulsor del desarrollo en el mercado pero acá se trata del empresario privado que asume directamente el poder político y entonces se plantea un problema fundamental: si él puede ser el árbitro del interés público... Si no existe un orden jurídico-institucional que proteja el poder adquisitivo de las masas, que proteja a la industria nacional -que es el fundamento de la liberación económica de un país insuficientemente desarrollado-, si no mantiene o instituye un sistema de industrias claves en manos del Estado, nos encontraremos con que el país será un mercado abierto en el cual predominarán los intereses de los monopolios internos e internacionales. En tal caso habrá ocurrido que en este país habremos pasado de un intervencionismo estatal de bases jurídicas, fundado en el derecho público y en principios de justicia, a un intervencionismo de hecho, en el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

cual la fuerza de los monopolios, de los oligopolios y de las distintas combinaciones que pueden interferir en el mercado, serán los ejecutores del referido intervencionismo de hecho" El pensamiento de Bledel, era el reconocimiento de cómo funcionaba la economía bajo tales pautas, y el peligro de la injerencia de los capitales en la administración estatal. Por otra parte, esta concepción del Estado como mal administrador, había sido impugnada hacía más de un siglo, por el Gral. Roca, un personaje insospechable de concepciones trasgresoras o revolucionarias, que al oponerse a la venta de Obras Sanitarias a un consorcio inglés en 1897, escribió en una carta dirigida a su amigo Agustín de Vedia: "Ese proyecto de venta de las Obras de Salubridad ha sido, también, un proyecto desgraciado que se ha arrojado a los opositores, como buena presa para clavar su diente lleno de ponzoña. Yo aconsejé en contra, pero no me hicieron caso. Si a pesar de todo, el proyecto, rechazado casi por unanimidad en la forma de contrato, se convierte en ley, será una ley contraria a los intereses públicos en el sentir de la mayoría de esa capital, tan esquilada por las compañías de gas y otros servicios. A estar a las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bajo bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Telégrafo, a los puertos, a las Oficinas de Rentas, al Ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder".

Tampoco compartía el Presidente Roque Sáenz Peña, los planteos oportunistas sobre la ineficiencia de la administración estatal, y es así que en el decreto firmado el 24 de diciembre de 1910 y refrendado por el Ministro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos, creando la Comisión Administradora para la Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, decía: "Todos los estudios realizados demuestran satisfactoriamente la utilidad de la explotación directa por el Estado...las nuevas y legítimas exigencias de la economía social y financiera no pueden detenerse por el solo peligro de la incapacidad del Estado para llenar sus fines, mientras no se demuestre la ineptitud mayor de sus agentes para sacrificar su comodidad particular al interés común y para hacer efectiva la responsabilidad que comporta este olvido de su misión y sus deberes".

Por supuesto que al desenfreno privatizador menemista, no le interesaba resguardar el patrimonio público sino convertir al Estado en un ente que administrara aquello que habían decidido dejarle los grupos financieros que estaban diseñando ese nuevo modelo de país, que respondía a lo que uno de los teóricos de la nueva política llamaría "el realismo periférico"

Pero la propia historia de YPF, era la evidencia más incontestable de las posibilidades de la administración estatal, y del enorme factor de desarrollo que esa gestión había determinado en todos aquellos lugares donde la empresa tuvo presencia, por lo cual todos aquellos argentinos que tuvieron una visión nacional de lo que la riqueza petrolera significaba, vieron la necesidad de preservarla de toda ingerencia privada.

Sin embargo, el advenimiento de la dictadura cívico-militar en 1976, cambiaría todo ese gran proyecto nacional empresario y crearía las condiciones necesarias para justificar todo el posterior proceso de privatización, a través de un demencial e injustificado endeudamiento. En efecto, cuando fue derrocada María E. Martínez de Perón, la deuda de la empresa era de 324 millones de dólares, y la idea del Ministro de Economía Martínez de Hoz, de redimensionarla, encubría en realidad el propósito de generar las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

causas que posibilitarían su desaparición. Fue así que el endeudamiento de la empresa empezó a crecer, llegando en 1981 a una cifra estimada de 6.000 millones de dólares, tal como lo informara en mayo de ese año su presidente, Gral. Suárez Mason.

Cuando asumió el gobierno nacional el Dr. Raúl Alfonsín se encontró con una empresa petrolífera depredada, y se trató de encarar una reactivación de la misma a través de la implementación de diversos planes. El gobierno invirtió mil millones de dólares a través de un préstamo del Banco Mundial para efectuar la reconversión de las destilerías de Lujan de Cuyo y de La Plata. Luego a través del Plan Comodoro Rivadavia- Houston se realizaron alrededor de setenta contratos de riesgo, para que se explorara el territorio, llegándose a obtener una inversión de 700 millones de dólares. En ningún caso se puso en duda el control que debía ejercer YPF sobre toda la actividad petrolera, y recién a partir de los decretos que hemos citados, comenzó no solamente la reconversión a favor de los capitales trasnacionales, sino el proceso inexorable de enajenación de la empresa estatal, que comenzó gradualmente, para evitar que se manifestara una real oposición a esos proyectos.

Al asumir Menem, y después que firmara todos los decretos desregulatorios a que hiciéramos referencia empezaron las tratativas para dar cumplimiento efectivo al plan que se venía madurando de la liquidación de YPF. Fue así que contando con el asesoramiento de la consultora Mac Kinsey & Company, y previo pago de 1.000.000 de dólares, financiados por el Banco Mundial, se fue estructurando un plan que tendría varias etapas hasta llegar a la venta total de la empresa.

A los efectos de hacer posible el plan propuesto el 24 de septiembre de 1992 se dictó la ley 24.145 (B.O. 6/11/92), mediante la cual se dispuso la federalización de los hidrocarburos, y la transformación empresarial y privatización de YPF.

La última y definitiva etapa del proceso, se produciría cuando Repsol, adquiriera la mayoría accionaria de la empresa en 1999, operándose de tal manera la transferencia a un solo operador petrolero, quien repatriaría cuantiosas ganancias, producto de la explotación de una riqueza de propiedad de toda la Nación. Habiendo citado a las exportaciones, tanto de gas como de petróleo, es necesario señalar que las mismas tienen íntima relación con el nivel actual de reservas, especialmente con las comprobadas. La ley 17.319 ordena mantener un adecuado nivel de reservas y permite exportar sólo excedentes, que se produzcan cuando el mercado local está autoabastecido. En el caso del petróleo, con un horizonte de reservas de aproximadamente de siete años, lejos está de poderse afirmar que estamos autoabastecidos. Con el gas natural, el autoabastecimiento está más lejano, pues tenemos al 60% de la población sin poder acceder al mismo, y faltantes de abastecimiento pronunciados, que han podido ser cubiertos con la importación proveniente de otros países. En forma pública la Secretaría de Energía ha reconocido que solamente se dedica a sumar los informes que le elevan las concesionarias y permisionarias, avalados por los estudios de firmas auditoras especializadas contratadas por ellas mismas, con lo cual la independencia de criterio, sería por o menos dudosa, habida cuenta de los manejos que realizan las empresas, para incrementar sus ganancias. Respecto a las indexaciones a las que hiciéramos referencia, es de conocimiento público, que desde 1991 vivimos bajo el imperio de una ley de orden público llamada



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de "convertibilidad". Esta ley prohibía en forma expresa, incluso retroactivamente cualquier tipo de indexación. Ni el sector público pudo indexar sus impuestos, ni los propietarios pudieron hacerlo con los alquileres, ni los trabajadores con sus salarios, pero si lo pudieron hacer los concesionarios de producción con el precio del petróleo en boca de pozo, alegando la vigencia de los decretos desregulatorios 1055/89 y 1212/89, siendo numerosísimas las declaraciones de los máximos responsables de las empresas en apoyo de esa postura ilegal. La Ley de Emergencia Económica dictada en el 2002 mantenía la prohibición de indexar, pero las empresas petroleras no la respetaron. Al respecto cabe preguntarse: ¿si la ley era de orden público y fue transgredida, no correspondería la devolución de los importes incorrectamente cobrados a los consumidores? ¿Algún organismo de control, tomó alguna medida para terminar con esta flagrante violación de la ley?. Cabe apuntar que los decretos desregulatorios citados, están en un nivel inferior al de la Ley de Convertibilidad y de la Ley de Hidrocarburos, y de manera alguna puede invocarse su validez, para obviar las disposiciones de las leyes citadas.

Otra muestra de las ilegalidades que venimos señalando, es el que corresponde al origen de los contratos de concesión. La Ley 17.319 considera "absolutamente nulos" a los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto a lo establecido por ella. La gran mayoría de los actuales titulares adquirieron esa condición de concesionarios de producción, mediante una "reconversión" de sus contratos de obras y servicios, que son totalmente distintos. Cabe preguntarse también sobre la eventual responsabilidad de estas especiales adjudicaciones directas, sobre áreas que de acuerdo a la Ley citada, deberían haberse adjudicado.

Es importante señalar, que los decretos cuya derogación se pretende con este proyecto carecen de toda legalidad en razón de los puntos que siguen a continuación

- 1.- Los decretos cuestionados, se dictaron, como supuestas reglamentaciones a la ley, pero como ya lo hemos mencionado, en realidad solo trataron de modificarla, alterando el sentido que se le había dado sobre la indisponibilidad de los hidrocarburos como bienes "inalienables e imprescriptibles" Al decidir la libre disponibilidad, tal como surge del texto de los decretos, se estaba modificando la ley.
- 2.- Los tres decretos permitieron la reconversión de los contratos de explotación del Plan Comodoro Rivadavia-Houston (decretos 1.443/85 y 636/87), en concesiones de explotación, sin cumplir los requisitos exigidos por la ley 17.319, que exigía que para alcanzar la categoría de concesionario existían dos posibilidades: a) haber sido previamente un exitoso permisionario de exploración o b) haber ganado una licitación realizado por la Secretaría de Energía
- 3.- Se permitió la acumulación en una misma persona jurídica o física de más de cinco permisos de exploración, lo que hemos detallado en los puntos precedentes, cuando el artículo 34 de la ley establecía con toda claridad que "Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen. Como era natural para sortear tales limitaciones, el decreto 1212 dispuso en su artículo 18: El Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevará en el plazo de treinta días, un proyecto de ley propiciando la eliminación de las limitaciones previstas en los artículos 25 y 34 de la Ley No 17.319, a



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

fin de posibilitar la conversión de los contratos preexistentes al régimen previsto en el presente Decreto y promover la participación del mayor número de empresas en los concursos futuros. Hasta tanto no se produzca la derogación indicada precedentemente, las limitaciones de la ley 17.319 se aplicarán con ajuste a la reglamentación del párrafo siguiente. Para el cómputo de las limitaciones indicadas en los artículos 25 y 34, cuando los titulares constituyan una persona jurídica distinta o asuman la forma de Unión Transitoria de empresas o asociación, la restricción se aplicará exclusivamente respecto a dicha persona, Unión Transitoria de Empresas o asociación con igual composición de integrantes"

La ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (art. 367) es clara en cuanto a que las Uniones Transitorias de Empresas o asociaciones no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Es decir que la ficción buscada no tenía ningún respaldo normativo, ya que no existe manera de equiparar una UTE, con una sociedad debidamente constituida. Debe recordarse al respecto que las UTE, son uniones accidentales de empresas que se asocian para emprender un proyecto común. En el caso del petróleo, la ley 17.319, había querido evitar que precisamente se formaran conjuntos empresarios de naturaleza accidental, que a través de esa ficción societaria se apoderaran de áreas, monopolizando la comercialización de lo que extraían

Todas las empresas que hemos mencionado, poseen mucho más de las cinco áreas fijadas por la ley, ya que nueve de ellas, poseen 183 áreas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía. Como los datos están agrupados por operador, que es sólo uno de los integrantes del consorcio, los números de acaparamiento de áreas se acrecientan. Todos esos operadores superan el número máximo de cinco fijado en la ley de hidrocarburos, como lo indicamos en los párrafos anteriores. Por otra parte esos nueve operadores que hemos mencionado producen más del 91/92 % de la extracción local de gas y de petróleo; además integran el capital de transportadoras y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica; y las dos mayores empresas -las únicas verticalmente integradas Repsol-YPF y Petrobrás- dominan el 65% del mercado de refinanciación y comercialización de los combustibles líquidos, incluido el GLP (gas licuado de petróleo). Esta acumulación de ofertas en muy pocas sociedades obliga a considerar la relación que pueda existir en cuanto aparece la posible trasgresión a las Leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, e incluso con las nuevas normas constitucionales.

Para mostrar el acaparamiento de áreas que hemos señalado indicamos a continuación las que poseen diversas empresas de conformidad con las informaciones oficiales de la Secretaría de Energía.

PETROBRAS: posee las siguientes áreas:

25 de Mayo-Medanito S.E.

Aguada de la Arena

An-Aike (Santa Cruz II)

Atamisqui

Bajada del Palo

Bajada Fortaleza (Santa Cruz I)

Barda Las Vegas (Santa Cruz II)



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Campo Boleadora (Santa Cruz I)
Campo Indio (Santa Cruz I)
Cañadón Deus (Santa Cruz I)
Dos Hermanos (Santa Cruz I)
El Cerrito (Santa Cruz I)
El Mangrullo
Estancia Librum (Santa Cruz I)
Jagüel de los Machos
La Amarga Chica
La Menor (Santa Cruz I)
La Paz (Santa Cruz I)
La Porfiada (Santa Cruz I)
Laguna de Oro (Santa Cruz I)
María Inés (Santa Cruz II)
María Inés Oeste (Santa Cruz II)
Puesto Hernández
Puesto Peter (Santa Cruz I)
Refugio Tupungato
Rincón de Aranda
Río Neuquén
Río Turbio
Santa Cruz I
Santa Cruz I- Fracción A
Santa Cruz I- Fracción B
Santa Cruz I- Fracción C
Santa Cruz II
Santa Cruz II- Fracción A
Santa Cruz II- Fracción B
Sierra Chata (Chihuidos)
Veta Escondida
CHEVRON SAN JORGE posee las siguientes áreas:
Campo Bremen
Chorrillos
CNQXXVI- Río Negro Norte
Confluencia
El Sauce
Huantraico
La Carmen
La Tehuelche
La Terraza
Las Bases (CNQ-16/A)
Loma Negra (Río Negro Norte)
Moy Aike
Océano



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Palermo Ayke

Puesto Flores- E. Vieja- P. Prado

San Cristóbal

PAN AMERICAN posee las siguientes áreas

Acámbuco

Anticlinal Funes

Anticlinal Grande- Cerro Dragón

Cerro Tortuga- Las Flores- Río Chico

Chulengo

Koluel Naike- El Valle

Lindero Atravesado

Los Chorrillos

Piedra Clavada

Tierra del Fuego

PIONNER NAT. RESOURCES.ARG. posee las siguientes áreas:

Al Norte de la Dorsal

Al Sur de la Dorsal

Anticlinal Campamento

Bajo Baguales

Cerro Vagón

Cutral- Co Sur

Dadín

Dos Hermanas

Estación Fernández Oro

La Calera

Lago Fuego

Loma Negra- Zona NI

Meseta Sirven

Neuquén del Medio

VINTAGE OIL posee las siguientes áreas:

Agua Botada

Bella Vista Oeste

Bloque 127

Cacheuta

Cañadón León

Cañadón Minerales

Cañadón Seco

Cerro Overo

Cerro Wenceslao

El Cordon

El Huemul- Kolhuel Naike

Las Heras

Meseta Espinosa

Meseta Espinosa Norte



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Piedra Clavada. (CGSJ IV)

Piedra Colorada- Estruct. Intermed

Sierra Azul Sur

Sur Piedra Clavada

Tres Picos

TECPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Salada

Atuel Norte

Catriel Viejo

El Caracol Norte

El Tordillo

Fortín de Piedra

José Segundo

La Tapera

Los Bastos

Puesto Quiroga

San Antonio Sur

Sierra de Aguaragüe

Tres Nidos

PLUSPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Blanca

Aguada Baguales

Centenario

Cuchuma (Olleros)

El Porvenir

Loma Guadalupe

Loma Jarillosa este

Palmar Largo

Ramos

Puesto Bouquet

Tartagal Oeste

TOTAL AUSTRAL S.A. posee las siguientes áreas:

Aguada Pichana

Cam-1 (Tauro)

Cuenca Marina Austral

Octan- Pegaso (Cam I)

San Roque

Spica (Cam-I)

Taurus- Sirius (Cam-I)

No transcribimos las 56 áreas que tiene Repsol YPF, pero las mismas pueden consultarse en la Secretaría de Energía. En lo que respecta a las áreas que tiene esta empresa, el artículo 25 de la ley 24.145, eximió a YPF del cumplimiento de los artículos limitativos de explotación de áreas, pero entendemos que tal eximición no rige en la actualidad, por lo cual el acaparamiento es otra muestra del quebrantamiento de la ley.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Esto es así porque cuando se dictó la ley en el año 1992, se hizo mención a que YPF era una Sociedad de Estado (art. 3º, decreto 2778/90) y de tal manera, se justificaba históricamente, eximirla de esa limitación. Aún cuando ya se estaba desregulando el sector, el hecho de ser una sociedad del Estado, le daba el razonable privilegio de no encontrarse en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Empero la situación varió sustancialmente al ser privatizada en su totalidad, siendo la actual propietaria del paquete accionario Repsol, de allí que la nueva denominación de la empresa sea Repsol YPF S.A. Es decir que la empresa ahora, tiene una distinta conformación jurídica ya que ha dejado de ser una empresa del estado, para ser una convencional empresa privada.

La Ley 17.319, es estricta en cuanto en su artículo 79, inc.c establece que Son absolutamente nulos...los permisos y concesiones adquiridos en modo distinto al previsto en esta ley. Esto determina la nulidad de pleno derecho de todas las concesiones y privilegios concedidos en violación a la norma. Y esta nulidad como hemos dicho se produce desde el mismo comienzo en que el acto es realizado, por lo cual reviste el carácter de nulidad insalvable, no solucionable por cualquier medida posterior. En nada obsta a la nulidad que las concesiones y los privilegios hayan sido concedidos por los decretos impugnados, debido a que hemos demostrado de manera suficiente que tales decretos no pueden modificar la Ley 17.319, y la supuesta reglamentación que se invoca, no puede desnaturalizar a la Ley, contrariando su espíritu, además que debe tenerse en cuenta de la inferior jerarquía que tienen los decretos reglamentarios respecto a la Ley, ya que se trata de normas subordinadas. Al respecto Bidart Campos es claro cuando indica que "El exceso reglamentario transgresor de la ley que se reglamenta es siempre inconstitucional. Tal infracción a la Constitución no admite distinción según la naturaleza federal o común de la ley reglamentada...La facultad reglamentaria de que dispone el poder ejecutivo respecto de las leyes no presta fundamento para a) modificar o derogar leyes, ni siquiera so pretexto de necesidad y urgencia; b) ampliar incriminaciones legales, o incluir en ellas conductas ajenas a la tipificación legal, porque en tal supuesto queda violentado el principio de legalidad, c) ampliar tributos establecidos en la ley, o incluir en ella ampliaciones que resultan extrañas al hecho imponible que la ley determina claramente. (Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1997, Tº III, pág. 245). Es por ello que es más que palpable la inconstitucionalidad de los decretos impugnados, en cuanto mediante su articulación se modificó concretamente la ley en aspectos de la misma que hacían al manejo del estado de las reservas y se ha alterado su espíritu, sin perjuicio de todas las otras transgresiones que hemos señalado en cuanto a la forma, oportunidad situación en que fueron dictados tales reglamentos. En razón de las circunstancias expuestas, y los hechos invocados en esta fundamentación solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

68. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA RUCCI

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En materia petrolera, este gobierno ostenta récords que podrían definirse como históricos. Mientras la mayoría de nuestros vecinos de Latinoamérica producen cada vez más, en los últimos 10 años nuestras reservas de petróleo y gas decrecieron un 30 %. En relación con el autoabastecimiento que fuera motivo de orgullo nacional, después de más de 20 años hemos perdido nuestra condición de país autosuficiente en materia energética.

Es necesario hacer un poco de historia:

En 1992, auspiciado por el ex presidente Menem y con el acompañamiento de los entonces diputado Parrilli y senador Gioja como miembros informantes, se sancionó la privatización de YPF (ley 24.145), con un apoyo de la opinión pública de más del 70%. Ello le produjo a la entonces administración Kirchner de Santa Cruz beneficios de distribución de la renta petrolera por más de 600 millones de dólares a través de acciones de la empresa YPF, que luego vendió a la empresa española Repsol en el año 1999: acciones clase “D” por el 4% de la empresa y que son las mismas acciones que hoy se plantea expropiar. Esto le permitió a Repsol ir controlando progresivamente el paquete accionario equivalente al 99% del capital en el año 2000.

En 2007, Repsol YPF vendió a la empresa “argentina” de los Eskenazi, con sede en Australia, el 14,99% de sus acciones, en un proceso mal llamado “de venta a argentinos”, y con financiación de la propia Repsol y un pool de bancos.

En 2011, se completó la venta de un 10% más, con lo cual este grupo obtuvo el 25%, con igual sistema de pago a través de financiamiento.

Para garantizar ese pago por contrato, se estableció en forma obligatoria la distribución del 90% de las utilidades y también un monto de 850 millones de dólares por utilidades acumuladas.

Esto permitió ir cobrando la deuda de los Eskenazi, y también significó un excelente negocio para Repsol.

Todo esto fue consentido expresamente y convalidado por la autoridad de aplicación responsable de la política energética: Ministerio de Planificación (De Vido), Secretaría de Energía (Cameron), y Secretaría de Comercio y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Moreno).

Los dividendos distribuidos, que en los años noventa no habían superado los 310



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

millones de dólares al año, llegaron entre los años 2008 y 2010 a más de 1.600 millones de dólares, todo con la venia del representante de los intereses del Estado nacional, Baratta.

El resultado de ello, sumado a la falta de inversión, no podría haber sido otro: cayeron la exploración y explotación, y el país, que tenía autoabastecimiento y exportaba por más de 10.000 millones de dólares, hoy tiene como objetivo prioritario de la ley propuesta el autoabastecimiento que teníamos y supimos perder, ya que para este año deberemos importar combustible por más de 14.000 millones de dólares.

Claramente, el gobierno es el bombero heroico de esta situación, que viene a apagar el incendio que ellos mismos crearon. Y lleva –inexplicablemente- en su dotación de salvataje a Menem, Parrilli, Gioja y Dromi.

Esto no es estrategia. No es un planeamiento energético. No es pasar de un modelo neoliberal a uno de crecimiento con inclusión social. Ni es darle un rol a la producción de hidrocarburos en el desarrollo nacional. Esto no es serio.

Esto no es más que la búsqueda de un nuevo negocio para algunos, y así se verá en el análisis del proyecto en tratamiento. Además es, eventualmente, una nueva Caja para el Tesoro nacional, con el agravante de pretender envolverlo en una reivindicación nacional con raigambre popular que acalle cualquier posición en contrario.

Por ello, he presentado el proyecto contenido en el expediente 2.516-D.-2012, de expropiación del 100% de las acciones de YPF.

En mi proyecto se agrega al artículo primero una definición sobre los bienes de patrimonio del Estado nacional o provincial y establece la exclusividad de la actividad de YPF para el futuro, ya que se respetan los ya concesionados.

Asimismo se propone la expropiación del 100% de las acciones de la Sociedad Anónima YPF y no sólo del 51% de REPSOL. Ello por cuanto:

- a) Puede interpretarse la expropiación parcial como discriminatoria respecto de la empresa española (violando con ello el artículo V del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991, ratificado por la ley 24.118) que exige la declaración de utilidad pública y la no discriminación.
- b) Lo que se entiende por estratégico son los recursos hidrocarburíferos y no una porción accionaria de una sociedad anónima. Si no fuera así podríamos decir que lo estratégico para el país en el petróleo y el gas es el 51% de la participación de YPF en el negocio (un 15% aproximadamente) y no la totalidad del recurso.

Propongo repartir el paquete accionario de YPF entre todas las provincias, sean o no productoras. Se prevé tres casos: a) no productoras - participación simple - b) provincias con plantas elaboradoras del recurso (refinerías) participación 1,5 de las provincias no productoras y c) provincias productoras: participación del doble de las provincias no productoras. También se prevén el supuesto de una provincia que hoy no produce pero



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que por exploración pasa a ser explotadora, en cuyo caso aumenta su participación a la de provincia productora, mediante el aumento del capital social.

Agregamos el artículo 3 bis donde se le concede a YPF la facultad de celebrar contratos de obras y servicios limitándolos en cuanto a la forma de pago (sólo en efectivo o sea no en petróleo o gas) y prohíbe los contratos de producción compartida. También se prohíben las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Todo ello no lo establece el proyecto oficial.

Introducimos el tema de Acuerdo de promoción de Inversiones con España, porque:

- a) está firmado;
- b) está ratificado y por tanto es ley para nosotros. La expropiación al 100% le quita el argumento del incumplimiento del tratado por discriminación en la expropiación, que creo hoy está más que presente.

Por otra parte, eliminamos la exigencia de la mayoría de los 2/3 para la venta por dos razones:

- a) No puede una ley por mayoría simple establecer una mayoría calificada para su modificación.
- b) Una vez que las provincias son titulares de las acciones, debe ser la legislación provincial la que establezca las condiciones de enajenación, no el poder central.

Finalmente introducimos a la Auditoría General de la Nación como órgano de control externo, porque así lo establece el artículo 8, inc. b), de la ley 24.156 de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL ESTADO. Razones de conveniencia también aconsejan un organismo de control externo independiente de los responsables de la gestión.

Señor Presidente: la situación actual de YPF es la expresión más alta del fracaso de la política energética del gobierno. La expropiación del 100 % de las acciones de YPF que propongo creemos será un paso importante –sólo el primero- para iniciar el camino de la recuperación de nuestro petróleo.

69. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SEGARRA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Señor presidente: la cuestión de la tierra radica, históricamente en nuestro país, sobre la preocupación de las modalidades de entrega y venta, y consecuentemente sobre su concentración. Esta ley frena el proceso de extranjerización de las tierras por el cual se establece un límite del 20% de las hectáreas cultivables totales del país a la posesión que puedan hacer personas físicas o jurídicas foráneas, estén o no afincadas en el país. Hoy en día, existe un gran déficit en la información catastral. Esta nueva Ley contempla la realización de un censo en los próximos 180 días para crear un Registro Único de Tierras Rurales. Es importante destacar que se realizó un relevamiento que indica que de las 170 millones de hectáreas cultivables que tiene el país, unos 20 millones están en poder de extranjeros y que el proceso se aceleró desde 2002, con la debacle económica, cuando por entonces sólo 7 millones de hectáreas habían sido extranjerizadas. Casi el 12% de la superficie argentina está hoy en manos extranjeras (los capitales que más compraron tierras en la última década son estadounidenses, italianos, chilenos y malayos). Es oportuno señalar que esta ley no afectará los derechos adquiridos, es decir que no afectará a quienes ya compraron "de buena ley" tierras.

El objetivo central es conservar el dominio nacional de las tierras para aquellos argentinos que tienen la posibilidad de invertir. El proyecto limitará la venta de tierras a capitales extranjeros, lo cual no indica que no se puedan hacer inversiones. Tiene que ver con la posibilidad de que lleguen a nuestras tierras inversiones que le agreguen valor a la producción. Que nos traigan algo que nosotros no tenemos y que le agreguen valor a las posibilidades propias que da la tierra. Nosotros tenemos la tierra, los inversores tendrán que traer algo que le agregue valor a los commodities agropecuarios.

Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada como inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Es inversión cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo.

Señor presidente: la sanción de la ley no afectará derechos adquiridos. Sin embargo, hubo adquisiciones de tierras que se concretaron en la década del 90 y que, ahora, están siendo investigadas. Si se trata de compras ilícitas, la vía correcta es la vía judicial.

Aquí establecemos la titularidad de la tierra por parte de los pueblos y no de los gobiernos de los pueblos. Esto dentro del marco de un déficit alimentario y teniendo en cuenta a la tierra rural como un recurso estratégico y productivo. Una de las principales dificultades que aparecen, es la determinación de la cantidad de tierras y qué cantidad de ellas son productivas. Este proyecto establece la necesidad de tener la información precisa. Se realizará mediante un mapeo y con la colaboración que deberán prestar los registros de la propiedad inmueble de cada una de las provincias. Además, en la actualidad contamos con aportes tecnológicos, como la fotografía satelital, una herramienta que, sin duda, ayudará a dejar en claro cuánto es la superficie de tierra productiva y qué porcentaje de ella está en manos extranjeras. Será una tarea enorme,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

pero es una tarea necesaria y urgente. Las estimaciones que existen no son precisas y presentan diferencias entre ellas.

Es justo impulsar y propiciar la sanción del proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra, dado el avasallante proceso de enajenación al que nuestro país fue sometido sin freno ninguno, seguido hasta completar la suma de 20.000.000 de hectáreas en manos extranjeras hasta el momento.

Por otra parte, es también una estrategia de orden geopolítico controlar y salvaguardar la tierra que contenga recursos tan valiosos como el agua, bosques naturales, recursos minerales, y también áreas de alta calidad agrícola ganadera que hoy en este escenario de alto requerimiento de alimentos hace estratégico el control de estos. Los intereses estratégicos actuales cambian parcialmente de sustancia, dado que no se definen por la posición relativa en los marcos de las guerras ideológicas, sino en el marco del acceso, apropiación y flujos de recursos energéticos, en primer lugar, y de recursos de subsistencia general, en segundo lugar, como son el agua potable, la tierra cultivable, los minerales críticos, regiones de gran biodiversidad y mares costeros con yacimientos de hidrocarburos.

Veamos ahora los factores de degradación de la tierra arable en el mundo y la importancia del control de su dominio por parte de los Estados. En la segunda mitad del siglo XX la humanidad ya perdió el 18% de la tierra cultivable. Las actuales políticas ambientales, poco cuidadosas, más el calentamiento global terrestre hacen prever que este proceso continúa acrecentándose en esta primera década del siglo XXI. Esta situación revaloriza significativamente los espacios semivaciados de clima templado y subtropical del mundo, como existen en gran parte de América del Sur. Con lo anteriormente detallado es imprescindible iniciar el camino del cambio progresivo y gradual del modelo productivo hegemónico en salvaguarda de la tierra, el medioambiente y la salud de las poblaciones de las zonas de producción, dada la insustentabilidad del mismo.

Tomando las palabras de nuestra presidenta Cristina Fernández, sostengo que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha), cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la autoridad de aplicación".

La política pública demanda mecanismos que incentiven que los recursos estratégicos estén en manos de argentinos o del Estado, la opción de compra a favor del Estado y, fundamentalmente, un Registro Nacional de Tierras Rurales con información catastral georreferenciada y dominial, con especial atención de las sociedades anónimas, como una manera de contrarrestar la heterogeneidad y dilución de información en las 24 jurisdicciones provinciales. Inclusive, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre las experiencias de buena gobernanza en la tenencia y administración de tierras, promueve la producción de registros precisos, completos y actualizados para lograr un manejo eficiente y transparente. Un estudio de esa institución en diecisiete países de América Latina y el Caribe descubrió intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras en la región. Según un análisis de la entidad, el fenómeno de acaparamiento de tierras (land grabbing) se investigó a fondo y se topó con que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

donde participan gobiernos extranjeros, se restringe a Brasil y la Argentina, aunque finalmente el interés está puesto en toda América Latina. El fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un tema que afecta a gran parte de la región.

Señor presidente: para una mejor comprensión de cuáles son los intereses de los extranjeros como personas físicas o jurídicas, qué regiones les interesan, qué tipo de producción apuntan, cuáles son los cuidados que debemos tener, es que dividiremos las áreas de su interés. En primer lugar los recursos naturales, sobre todo con el crecimiento de la población y la escasez. En este sentido, el agua constituye uno de los recursos estratégicos del futuro y nuestra región está asentada sobre una de las reservas más grandes e importantes del universo. En segundo término, la forestación es otro de los factores de futuro, no sólo como proveedor de insumos sino como captura de carbono. Los alimentos comprenden otra área. Una demanda mundial cada vez mayor en alimentos con una población en crecimiento y regiones de alta población, como los países asiáticos que crecen a tasas altas incorporando nuevos actores al consumo, y un país como la Argentina con un potencial de producción aún no explorado, constituyen una gran base de interés por sus producciones, no sólo en la compra de campos sino en el uso que también es un factor oculto de acceso a alimentos baratos y seguros. Por último, la minería, el uso extractivo y los fabulosos intereses que la rodean también constituyen un factor de preservación, sobre todo cuando los beneficios que quedan en el país son escasos.

Señor presidente: por estos motivos voto a favor del Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales

71. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO THOMAS

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

No puedo dejar de reconocer lo importante y trascendente de lo que se ha vivido en estas jornadas en el Congreso. Por supuesto que hubiéramos deseado “otras formas” en todo el tratamiento del denominado proyecto YPF, ya que hubiera sido muy distinta esta página de la historia si todos hubiéramos tenido la posibilidad de aportar nuestras ideas para construir el mejor proyecto. Pero una vez más, esto no fue posible.

Se da nuevamente la situación de llevarnos a las patadas a donde TODOS QUEREMOS IR.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La posición de la mayoría del Bloque Frente Peronista es absolutamente clara: decimos NO al proyecto oficial.

Ratificamos el SI a la estatización por ley que garantice la participación de las provincias, el debido control, el no uso como “caja”, el gerenciamiento profesionalizado y no politizado de la compañía, la participación de los trabajadores y el límite a los fines de la ex-propiación. Este es el contenido de nuestro dictamen, ya perfectamente explicitado por diputados del Frente Peronista.

Aclaramos esto porque nuestra posición es contundente, “ENTENDEMOS LA POLITICA COMO DIALOGO, CONSENSO Y DISENSO. Los diputados oficialistas y opositores también estamos para gobernar y para cumplir el rol que se nos ha encomendado: a los oficialistas, para apoyar al gobierno, sin preguntar nada. A los opositores, para controlar. Todos tenemos algo para aportar. Todos queremos lo mejor para nuestro país. No deberíamos ser tan miopes como para reducir la política a la antinomia de amigos y enemigos. Un proyecto a libro cerrado es eso, una miopía.

Y votamos en contra porque TENEMOS DERECHO A DESCONFIAR. Son tantas las contradicciones, que desconfiamos. Es tanto el rechazo a dejarse controlar, que desconfiamos. Es tanto el poder que le queda al Ejecutivo nacional, en desmedro de las provincias, que esto también nos hace desconfiar. Son tan sospechadas las personas de los funcionarios designados interventores, que estamos obligados a desconfiar.

Pero esta desconfianza no es irracional y ni siquiera emocional. Esta fundada y sustentada en las razones que pretendo exponer en esta oportunidad.

Se han escuchado en los últimos días, y aún dentro de este recinto, demasiadas apelaciones emocionales en torno del proyecto de expropiación parcial de YPF. Apelaciones que suelen confundir mucho más de lo que aclaran. Confunden, por ejemplo, la expropiación parcial de YPF con la estatización petrolera y la estatización petrolera con la nacionalización energética.

Pero hay notables diferencias entre estatizar, parcial o totalmente, y nacionalizar en sentido estricto.

Una cosa es la estatización integrada a un proyecto de desarrollo nacional, con su respectiva política energética, al estilo del proyecto que se inició en 1922 en la Argentina con la creación de YPF.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Y otra cosa muy distinta es la estatización parcial que nos presenta el oficialismo, planteada desde la urgencia de la crisis desatada por y desde el propio gobierno y completamente desprovista de proyecto.

Para comprender la magnitud del repentismo y la improvisación del oficialismo, basta con recordar que el representante del Estado en YPF, el señor Roberto Baratta, en noviembre de 2011, declaró que “el Estado nacional está en todo de acuerdo con las actividades que la compañía viene desarrollando”.

Nos preguntamos, entonces, si hasta fines del año pasado no se habían dado cuenta del vaciamiento petrolero que sufría nuestro país, ¿cuál es el tiempo de maduración que tiene el proyecto que estamos ahora discutiendo?

La estatización que presenta el oficialismo no sólo no nacionaliza YPF o el petróleo argentino, sino que ni siquiera alcanza a constituir una empresa del Estado. Se trata de una sociedad anónima que carece absolutamente de un programa para orientar, ya no lo es estratégico de la política petrolera, sino lo más elemental e inmediato, que es resolver el problema profundo del vaciamiento energético en la Argentina.

Por eso, sería prudente tomar cierta distancia de las manipulaciones publicitarias para pensar con claridad.

Por otro lado, sería ingenuo creer que quienes durante nueve años sostuvieron a las empresas que enviaban dividendos fuera del país e incumplían las inversiones, se hayan vuelto nacionalistas de la noche mañana, sólo porque a sus publicistas se les ocurrió poner, cada tanto, la imagen del general Mosconi en la tanda de Fútbol para Todos.

Pero ni el general Mosconi, ni Yrigoyen, ni Perón hubieran estado “del todo de acuerdo”, como dijo el señor Baratta, mientras el país perdía 8.000 millones de dólares en importaciones que hubiesen sido innecesarias con una política energética de carácter nacional. Además de perder otros 10.000 millones de pesos en subsidios directos, con los famosos programas “plus”, a las mismas empresas que se estaban llevando nuestras riquezas.

Es que, afortunadamente y a pesar de los esfuerzos de la inteligencia gubernamental, la historia es demasiado vasta para dejarse capturar por simples técnicas publicitarias.

Y la historia de nuestro pueblo indica que existen sólo dos posiciones posibles en materia de política energética: la que persigue el interés nacional como objetivo estratégico y la que se subordina a la rentabilidad empresarial privada y a las llamadas leyes de mercado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Esta última posición es la que ha prevalecido desde 1992 hasta la fecha, con el silencio cómplice del Estado.

Adoptando el camino inverso del oficialismo, en el bloque que presido y por medio de un dictamen de minoría, hemos presentado lo que consideramos una posición estratégica nacional y federal para YPF.

La Argentina necesita hoy una empresa estatal petrolera y gasífera con posición dominante en el ámbito nacional y ligada a objetivos de desarrollo autocentrado. Es decir, de un desarrollo basado en las condiciones históricas particulares de nuestro país y las prioridades que conciernen a nuestra independencia económica definitiva.

Por consiguiente, no convalidamos este proyecto de ley, porque consideramos que carece de los lineamientos necesarios para definir una política energética nacional, ya que:

- No propone discutir una nueva ley nacional de hidrocarburos.
- No se expresa sobre desregulación petrolera vigente.
- No se expresa sobre la concentración de áreas de exploración y explotación en manos de un mismo concesionario.
- No define un marco de control parlamentario para la nueva empresa.
- No define un marco regulatorio para el conjunto de la producción que, en un porcentaje mayoritario, sigue en manos privadas.
- No se explicitan los medios para financiar la explotación de los yacimientos.
- No existen reglas claras para las provincias productoras.

Y sobre este último punto, quiero expresarme a modo personal, como provinciano.

Según el proyecto que estamos discutiendo, el Estado nacional mantendrá el 26,3 por ciento del paquete accionario total y las provincias el 24,99 por ciento.

Pero como no hay definiciones sobre los activos del grupo Petersen, que controla el 25,46 por ciento, nada indica que sumados este porcentaje con el del Estado nacional no se constituya una mayoría controladora de YPF.

De este modo, las provincias productoras, en tanto socias de YPF, podrían resignar su autonomía para negociar tanto las inversiones como el otorgamiento más conveniente



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

para la economía provincial de las áreas de explotación. Condición ésta consagrada en el art. 124 de la Constitución Nacional.

Es decir, estamos frente a un proyecto que no muestra una identidad federal. Y tampoco nacional.

Incluso, lo actuado hasta ahora por la intervención estatal parece indicar que la expropiación parcial sólo ha servido para una reasignación de negocios entre monopolios petroleros privados.

Lo demuestra el "casting de inversores", como lo llama Página/12, donde se le siguen ofreciendo ventajas y oportunidades únicas a las grandes empresas transnacionales. Hasta el propio viceministro Axel Kicillof dio algunas señales en este sentido en su exposición ante el Senado.

Tal vez ésta hubiera sido una buena oportunidad para convocar a los empresarios de menor formato y establecer articulaciones con empresas latinoamericanas. Y recién después, desde una situación económicamente más sólida, hablar con inversores poderosos como la Exxon para la explotación de las cuencas que requieren mayor inversión.

Ni hablar de la convocatoria a los sindicatos ligados a la administración del Estado o a la producción petrolera, para avanzar con los trabajadores hacia una política de cogestión. Que es muy distinto que nombrar un director de extracción sindical.

Los trabajadores argentinos serían los primeros en apoyar una política petrolera nacional. Está a la vista. La propia conducción de la CGT, agredida desde el gobierno nacional, ha brindado su apoyo. También lo ha hecho, privilegiando legítimamente su condición de secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros, nuestro compañero Alberto Roberti.

Pero el gobierno nacional parece haberse especializado más en vender humo que en extraer petróleo. Recordemos a la sociedad anónima ENARSA, que iba a representar al Estado argentino en el desarrollo off shore, del cual es titular del dominio por ley de creación. Sin embargo, en seis años no se han realizado exploraciones significativas en el mar argentino.

Volviendo a nuestra discusión, en nuestro bloque hemos decidido establecer una drástica diferencia con el oficialismo. Para ello, vamos a ser consecuentes con el pensamiento estratégico del peronismo, siguiendo lo expresado en el art. 40 de la Constitución Nacional de 1949 que dice:



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

"La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social".

Esta es para nosotros la línea de acción: fijar primero las necesidades de la sociedad argentina, tanto en el orden del consumo como en el de la producción, en materia de abastecimiento y precios. Acordar con claridad la participación de las provincias productoras y no productoras. Y recién después hablar con las empresas extranjeras.

El gobierno nacional ha hecho todo al revés. Si hasta parece que ya está reprivatizando YPF cuando todavía ni siquiera está aprobada su expropiación parcial.

Mientras tanto, las provincias productoras no saben qué pasará con sus regalías, el resto de las provincias no sabe si tendrá alguna participación en la nueva empresa, los productores reclaman precios diferenciales para el gasoil y nadie sabe cuál es la deuda real de YPF o cuál será el precio de los combustibles cuando termine la ronda con los grandes oligopolios petroleros.

Por otro lado, ¿cómo puede pretenderse que avancemos en una política energética nacional cuando ponen a cargo a personajes como De Vido, Baratta y Cameron, responsables directos del vaciamiento de YPF?

Respecto a la deuda, el diario *Ámbito Financiero* informó el pasado 24 de abril que existe una cláusula por la cual "en caso de que Repsol pierda el control mayoritario, sus acreedores podrán reclamar la totalidad de sus deudas sin esperar los plazos previstos".

¿Será esto cierto? Estamos hablando de una deuda que, según los datos presentados en la Bolsa de Nueva York, asciende a 8.351 millones de dólares. Y de ser así, ¿dónde estaban el director estatal en Repsol o el ministro de Planificación o el secretario de Energía que no denunciaron esta cláusula leonina, por la que queda obligada la conducción estatal?

Señor presidente, A TRAVÉS SUYO ME DIRIJO A LA SEÑORA PRESIDENTA

Creo que tantas contradicciones y tantos baches y retaceo de información me dan derecho a desconfiar.

Como dije, desconfío de que el proyecto oficial ofrezca alguna solución a corto, mediano o largo plazo porque carece de política energética.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Desconfío de que se vaya a gestionar correctamente la empresa. Quienes administran hoy la intervención son los mismos que permitieron el envío de dividendos fuera del país y la falta de inversión de Repsol.

Desconfío, porque evidentemente no quieren ser controlados, de que no utilicen a YPF como caja, tal como se hizo con el sistema previsional.

Desconfío por que nada me asegura que Mendoza, mi provincia, no sea perjudicada, como lo serán el resto de las provincias, productoras o no.

Desconfío, en suma, porque sin política energética nacional; sin una gestión idónea; sin controles por parte del Congreso Nacional; sin participación de las provincias y el movimiento obrero en el trazado estratégico; esta seudoestatización que se propone sólo puede servir para afianzarnos en la posición liberal de mercado que este gobierno tan celosamente ha protegido en los últimos nueve años.

Por eso, mi voto es negativo.

71. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO THOMAS

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

No puedo dejar de reconocer lo importante y trascendente de lo que se ha vivido en estas jornadas en el Congreso. Por supuesto que hubiéramos deseado “otras formas” en todo el tratamiento del denominado proyecto YPF, ya que hubiera sido muy distinta esta página de la historia si todos hubiéramos tenido la posibilidad de aportar nuestras ideas para construir el mejor proyecto. Pero una vez más, esto no fue posible.

Se da nuevamente la situación de llevarnos a las patadas a donde TODOS QUEREMOS IR.

La posición de la mayoría del Bloque Frente Peronista es absolutamente clara: decimos NO al proyecto oficial.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Ratificamos el SI a la estatización por ley que garantice la participación de las provincias, el debido control, el no uso como “caja”, el gerenciamiento profesionalizado y no politizado de la compañía, la participación de los trabajadores y el límite a los fines de la ex-propiación. Este es el contenido de nuestro dictamen, ya perfectamente explicitado por diputados del Frente Peronista.

Aclaremos esto porque nuestra posición es contundente, “ENTENDEMOS LA POLITICA COMO DIALOGO, CONSENSO Y DISENSO. Los diputados oficialistas y opositores también estamos para gobernar y para cumplir el rol que se nos ha encomendado: a los oficialistas, para apoyar al gobierno, sin preguntar nada. A los opositores, para controlar. Todos tenemos algo para aportar. Todos queremos lo mejor para nuestro país. No deberíamos ser tan miopes como para reducir la política a la antinomia de amigos y enemigos. Un proyecto a libro cerrado es eso, una miopía.

Y votamos en contra porque TENEMOS DERECHO A DESCONFIAR. Son tantas las contra-dicciones, que desconfiamos. Es tanto el rechazo a dejarse controlar, que desconfiamos. Es tanto el poder que le queda al Ejecutivo nacional, en desmedro de las provincias, que esto también nos hace desconfiar. Son tan sospechadas las personas de los funcionarios designados interventores, que estamos obligados a desconfiar.

Pero esta desconfianza no es irracional y ni siquiera emocional. Esta fundada y sustentada en las razones que pretendo exponer en esta oportunidad.

Se han escuchado en los últimos días, y aún dentro de este recinto, demasiadas apelaciones emocionales en torno del proyecto de expropiación parcial de YPF. Apelaciones que suelen confundir mucho más de lo que aclaran. Confunden, por ejemplo, la expropiación parcial de YPF con la estatización petrolera y la estatización petrolera con la nacionalización energética.

Pero hay notables diferencias entre estatizar, parcial o totalmente, y nacionalizar en sentido estricto.

Una cosa es la estatización integrada a un proyecto de desarrollo nacional, con su respectiva política energética, al estilo del proyecto que se inició en 1922 en la Argentina con la creación de YPF.

Y otra cosa muy distinta es la estatización parcial que nos presenta el oficialismo, planteada desde la urgencia de la crisis desatada por y desde el propio gobierno y completamente desprovista de proyecto.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Para comprender la magnitud del repentismo y la improvisación del oficialismo, basta con recordar que el representante del Estado en YPF, el señor Roberto Baratta, en noviembre de 2011, declaró que “el Estado nacional está en todo de acuerdo con las actividades que la compañía viene desarrollando”.

Nos preguntamos, entonces, si hasta fines del año pasado no se habían dado cuenta del vaciamiento petrolero que sufría nuestro país, ¿cuál es el tiempo de maduración que tiene el proyecto que estamos ahora discutiendo?

La estatización que presenta el oficialismo no sólo no nacionaliza YPF o el petróleo argentino, sino que ni siquiera alcanza a constituir una empresa del Estado. Se trata de una sociedad anónima que carece absolutamente de un programa para orientar, ya no lo es-tratégico de la política petrolera, sino lo más elemental e inmediato, que es resolver el problema profundo del vaciamiento energético en la Argentina.

Por eso, sería prudente tomar cierta distancia de las manipulaciones publicitarias para pensar con claridad.

Por otro lado, sería ingenuo creer que quienes durante nueve años sostuvieron a las empresas que enviaban dividendos fuera del país e incumplían las inversiones, se hayan vuelto nacionalistas de la noche mañana, sólo porque a sus publicistas se les ocurrió poner, cada tanto, la imagen del general Mosconi en la tanda de Fútbol para Todos.

Pero ni el general Mosconi, ni Yrigoyen, ni Perón hubieran estado “del todo de acuerdo”, como dijo el señor Baratta, mientras el país perdía 8.000 millones de dólares en importaciones que hubiesen sido innecesarias con una política energética de carácter nacional. Además de perder otros 10.000 millones de pesos en subsidios directos, con los famosos programas “plus”, a las mismas empresas que se estaban llevando nuestras riquezas.

Es que, afortunadamente y a pesar de los esfuerzos de la inteligencia gubernamental, la historia es demasiado vasta para dejarse capturar por simples técnicas publicitarias.

Y la historia de nuestro pueblo indica que existen sólo dos posiciones posibles en materia de política energética: la que persigue el interés nacional como objetivo estratégico y la que se subordina a la rentabilidad empresarial privada y a las llamadas leyes de mercado.

Esta última posición es la que ha prevalecido desde 1992 hasta la fecha, con el silencio cómplice del Estado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Adoptando el camino inverso del oficialismo, en el bloque que presido y por medio de un dictamen de minoría, hemos presentado lo que consideramos una posición estratégica nacional y federal para YPF.

La Argentina necesita hoy una empresa estatal petrolera y gasífera con posición dominante en el ámbito nacional y ligada a objetivos de desarrollo autocentrado. Es decir, de un desarrollo basado en las condiciones históricas particulares de nuestro país y las prioridades que conciernen a nuestra independencia económica definitiva.

Por consiguiente, no convalidamos este proyecto de ley, porque consideramos que carece de los lineamientos necesarios para definir una política energética nacional, ya que:

- No propone discutir una nueva ley nacional de hidrocarburos.
- No se expresa sobre desregulación petrolera vigente.
- No se expresa sobre la concentración de áreas de exploración y explotación en manos de un mismo concesionario.
- No define un marco de control parlamentario para la nueva empresa.
- No define un marco regulatorio para el conjunto de la producción que, en un porcentaje mayoritario, sigue en manos privadas.
- No se explicitan los medios para financiar la explotación de los yacimientos.
- No existen reglas claras para las provincias productoras.

Y sobre este último punto, quiero expresarme a modo personal, como provinciano.

Según el proyecto que estamos discutiendo, el Estado nacional mantendrá el 26,3 por ciento del paquete accionario total y las provincias el 24,99 por ciento.

Pero como no hay definiciones sobre los activos del grupo Petersen, que controla el 25,46 por ciento, nada indica que sumados este porcentaje con el del Estado nacional no se constituya una mayoría controladora de YPF.

De este modo, las provincias productoras, en tanto socias de YPF, podrían resignar su autonomía para negociar tanto las inversiones como el otorgamiento más conveniente para la economía provincial de las áreas de explotación. Condición ésta consagrada en el art. 124 de la Constitución Nacional.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Es decir, estamos frente a un proyecto que no muestra una identidad federal. Y tampoco nacional.

Incluso, lo actuado hasta ahora por la intervención estatal parece indicar que la expropiación parcial sólo ha servido para una reasignación de negocios entre monopolios petroleros privados.

Lo demuestra el "casting de inversores", como lo llama Página/12, donde se le siguen ofreciendo ventajas y oportunidades únicas a las grandes empresas trasnacionales. Hasta el propio viceministro Axel Kicillof dio algunas señales en este sentido en su exposición ante el Senado.

Tal vez ésta hubiera sido una buena oportunidad para convocar a los empresarios de menor formato y establecer articulaciones con empresas latinoamericanas. Y recién después, desde una situación económicamente más sólida, hablar con inversores poderosos como la Exxon para la explotación de las cuencas que requieren mayor inversión.

Ni hablar de la convocatoria a los sindicatos ligados a la administración del Estado o a la producción petrolera, para avanzar con los trabajadores hacia una política de gestión. Que es muy distinto que nombrar un director de extracción sindical.

Los trabajadores argentinos serían los primeros en apoyar una política petrolera nacional. Está a la vista. La propia conducción de la CGT, agredida desde el gobierno nacional, ha brindado su apoyo. También lo ha hecho, privilegiando legítimamente su condición de secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros, nuestro compañero Alberto Roberti.

Pero el gobierno nacional parece haberse especializado más en vender humo que en extraer petróleo. Recordemos a la sociedad anónima ENARSA, que iba a representar al Estado argentino en el desarrollo off shore, del cual es titular del dominio por ley de creación. Sin embargo, en seis años no se han realizado exploraciones significativas en el mar argentino.

Volviendo a nuestra discusión, en nuestro bloque hemos decidido establecer una drástica diferencia con el oficialismo. Para ello, vamos a ser consecuentes con el pensamiento estratégico del peronismo, siguiendo lo expresado en el art. 40 de la Constitución Nacional de 1949 que dice:

"La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social".



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Esta es para nosotros la línea de acción: fijar primero las necesidades de la sociedad argentina, tanto en el orden del consumo como en el de la producción, en materia de abastecimiento y precios. Acordar con claridad la participación de las provincias productoras y no productoras. Y recién después hablar con las empresas extranjeras.

El gobierno nacional ha hecho todo al revés. Si hasta parece que ya está reprivatizando YPF cuando todavía ni siquiera está aprobada su expropiación parcial.

Mientras tanto, las provincias productoras no saben qué pasará con sus regalías, el resto de las provincias no sabe si tendrá alguna participación en la nueva empresa, los productores reclaman precios diferenciales para el gasoil y nadie sabe cuál es la deuda real de YPF o cuál será el precio de los combustibles cuando termine la ronda con los grandes oligopolios petroleros.

Por otro lado, ¿cómo puede pretenderse que avancemos en una política energética nacional cuando ponen a cargo a personajes como De Vido, Baratta y Cameron, responsables directos del vaciamiento de YPF?

Respecto a la deuda, el diario *Ámbito Financiero* informó el pasado 24 de abril que existe una cláusula por la cual “en caso de que Repsol pierda el control mayoritario, sus acreedores podrán reclamar la totalidad de sus deudas sin esperar los plazos previstos”.

¿Será esto cierto? Estamos hablando de una deuda que, según los datos presentados en la Bolsa de Nueva York, asciende a 8.351 millones de dólares. Y de ser así, ¿dónde estaban el director estatal en Repsol o el ministro de Planificación o el secretario de Energía que no denunciaron esta cláusula leonina, por la que queda obligada la conducción estatal?

Señor presidente, A TRAVÉS SUYO ME DIRIJO A LA SEÑORA PRESIDENTA

Creo que tantas contradicciones y tantos baches y retaceo de información me dan derecho a desconfiar.

Como dije, desconfío de que el proyecto oficial ofrezca alguna solución a corto, mediano o largo plazo porque carece de política energética.

Desconfío de que se vaya a gestionar correctamente la empresa. Quienes administran hoy la intervención son los mismos que permitieron el envío de dividendos fuera del país y la falta de inversión de Repsol.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Desconfío, porque evidentemente no quieren ser controlados, de que no utilicen a YPF como caja, tal como se hizo con el sistema previsional.

Desconfío por que nada me asegura que Mendoza, mi provincia, no sea perjudicada, como lo serán el resto de las provincias, productoras o no.

Desconfío, en suma, porque sin política energética nacional; sin una gestión idónea; sin controles por parte del Congreso Nacional; sin participación de las provincias y el movimiento obrero en el trazado estratégico; esta pseudoestatización que se propone sólo puede servir para afianzarnos en la posición liberal de mercado que este gobierno tan celosamente ha protegido en los últimos nueve años.

Por eso, mi voto es negativo.

72. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO TOMAS

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Por la presente vengo a expresar mi aprobación del proyecto que nos convoca.

Argentina debe controlar la explotación de sus recursos naturales, sin ceder la indebida medida de participación de los extranjeros. Tal es una demanda de cualquier país que tenga pretensiones soberanas; ese, afortunadamente, es el caso argentino.

Consiguientemente, apoyo firmemente la recuperación del control de YPF.

Si bien la recuperación de YPF por parte del Estado argentino es un tema capital, no nos podemos detener allí.

En ese orden de ideas, quiero resaltar la vital trascendencia del primer título del expediente.

Por un lado, no puedo dejar de realzar la declaración de interés público nacional, el autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así toda la actividad hidrocarburífera quedará positivamente vinculada al interés colectivo.

De esta manera, no sólo YPF responderá a prioridades públicas sino también todas las empresas productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En el nuevo marco legal, la puesta en producción de todas las áreas concesionadas, el aumento de capacidad de las refinerías y la extensión de gasoductos, estarán orientadas a la inclusión social y a la promoción de la industrialización. Esto avala una mayor injerencia estatal, que podrá transformarse en regulaciones de tarifas, implementaciones de políticas de stock de crudo y otros pormenores que hacen a la actividad hidrocarburífera total, para así solventar la calidad de producción y de vida de los argentinos.

Un país sin recursos no puede alcanzar el progreso material. Progreso que a su vez va de la mano del aumento de la industrialización nacional, la aceleración de la dinámica del mercado interno y, por último, de un mayor volumen de exportaciones y más protagonismo en la competencia del comercio internacional. Paradójicamente todo esto fue percibido en buena parte por nuestro Sarmiento cuando escribió su pretendida obra utópica Argirópolis. Pero Sarmiento sabía bien a qué apuntaba. Por eso no se detenía en el crecimiento exponencial del mercado interno, sino que decía que todo progreso material es vacío sino garantizan pautas democráticas, en ámbito de libertad e igualdad. Y, por sobre todas las cosas, realzaba la importancia de derechos sociales, como la educación.

Así, un Estado únicamente puede perseguir un aumento de producción mirando los derechos de sus ciudadanos. Y eso hace este proyecto, en particular el artículo 1, cuando declara el interés público y también reconoce expresamente los siguientes fines: 1) garantizar el desarrollo económico con equidad social; 2) creación de empleo; 3) incremento de competitividad de todos los sectores económicos y 4) el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y las regiones.

Ahora, entonces, se consagra explícitamente la sujeción de los hidrocarburos a la faz social, por ejemplo promoviendo la creación de empleos y salarios.

No será sencillo complementar los intereses en juego. Lo importante, en todo caso, es que cuando se busque la maximización de inversiones y recursos, la incorporación de nuevas tecnologías y la sustentabilidad de la explotación hidrocarburífera, se tenga siempre en claro que todo eso se hace para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Asimismo, para que la equidad social acompañe todo desarrollo material y económico. Por todo lo expresado, acompaño la iniciativa. Estamos ante una oportunidad única para todo el pueblo argentino. De hecho, quizá no sería impropio aprovechar la ocasión y pensar en un nuevo régimen legal que regule el rol y los límites del Estado nacional y las provincias, por mencionar un punto. Y así también, robustecer los ejes de la equidad social, la promoción económica nacional y el desarrollo sustentable.

73. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO UÑAC

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Si bien es cierto que, a veces, la historia de nuestro país parecería ser una experiencia frustrante, no lo es menos que nos encontramos ante la oportunidad de “dar vuelta la taba” como señaló nuestra presidenta. Tenemos una nueva oportunidad, de las tantas que el gobierno nacional viene generando desde 2003, a fin de reparar las consecuencias negativas que dejó el modelo neoliberal implementado en nuestro país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Somos una sociedad que se reconstruye cada día. Son tiempos donde el Estado y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos “unirnos y organizarnos” como expresó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora bien, unirnos y organizarnos ¿para qué?, ¿para quién? Sin lugar a dudas para distribuir el producto social a nuestro pueblo, es decir cubrir las necesidades que el mercado por sí solo no puedo cubrir. La política sigue siendo la herramienta para la lucha por la mejora social; este es el mensaje que transmitimos a los jóvenes que se acercan a participar.

El rol del Estado ha cambiado. No es el Estado que se abrió al neoliberalismo, que aceptó los principios del Consenso de Washington y generó los fundamentos que permitieron las privatizaciones. Quedó demostrado que el neoliberalismo no proporcionó una solución a los problemas que enfrentaba nuestro país allá por los comienzos de la década de los 90, más bien los profundizó: el alto desempleo, el crecimiento de los índices de pobreza, con la contracara del aumento de la deuda externa, son testimonio del fracaso. La estrategia de “crecer primero y distribuir después” no llegó nunca a los más desposeídos; la realidad comenzó a ser intolerable para miles de compatriotas.

Era imprescindible romper con ese esquema. No sirve un Estado con reservas ricas y un pueblo pobre. La salida exitosa de la crisis de 2001/02 dio lugar a un nuevo modelo de desarrollo basado en lo productivo, alto crecimiento del producto, competitividad cambiaria, desendeudamiento y superávits fiscal y comercial.

El siglo XXI implicó un cambio sustantivo para nuestro país. La presidencia de Néstor Kirchner inició un nuevo proceso de industrialización basado en el mercado interno, apoyado en la capacidad productiva ociosa que nos dejaron los noventa y en una creciente demanda externa de productos agrícolas.

El ex presidente Kirchner nos permitió vivir momentos históricos que sólo estaban en nuestros sueños de militantes: la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Punto Final devolvieron la esperanza de justicia para todos aquellos compañeros desaparecidos que resisten en nuestra memoria y nos impulsan a construir un país mejor.

Otros hechos: el sistema jubilatorio volvió al Estado. La estatización y nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones posibilitó una de las medidas sociales más justas de los últimos años: la asignación universal por hijos. Los derechos de nuestros niños y de nuestros mayores están en la agenda política y hoy son realidad.

Estamos comprometidos a promover un desarrollo productivo con mayor grado de inclusión social. Creemos que lo inclusivo resalta la dimensión ética del desarrollo y de la justicia del Estado. Pensamos en un país donde cada argentino ejerza su derecho a trabajar y vivir dignamente.

En este nuevo modelo económico y social, el rol activo del Estado es esencial para pensar en políticas para el corto, mediano y largo plazo. Señala Aldo Ferrer en su libro *La densidad nacional*, el caso argentino que “la densidad nacional abarca el conjunto de circunstancias que determinan la calidad de las respuestas de cada nación a los desafíos y oportunidades de la globalización. Y es determinante, por lo tanto, de su desarrollo o atraso, de su autonomía o subordinación”.

También dirá que: el “El desarrollo no se importa. Es, en primer lugar, un proceso de construcción dentro de cada espacio nacional, una responsabilidad que no se puede delegar”

Comparto que: el desarrollo es un proceso de construcción dentro de cada espacio nacional, una responsabilidad que no se puede delegar. Nuestra presidenta no delega esa responsabilidad; dirige la construcción de un nuevo modelo de país. Los diputados nacionales tampoco delegamos la parte de responsabilidad que nos corresponde.

La matriz energética respaldada en el gas y el petróleo es del 90% en nuestro país; esto hace suponer que si es el Estado quien maneja la energía en el futuro, tendremos las llaves de toda estrategia económica y política en la materia. La generación de energía debe estar orientada al uso y disfrute de la sociedad en su conjunto. La mayor parte de la actividad que realizamos a diario está relacionada con la producción energética.

En nuestro país, desde 1907 hasta 1993, este vital recurso fue controlado por el Estado nacional. Gracias a ese control se pudieron construir la casi totalidad de los diques y represas, así como la mayor parte de los gasoductos y oleoductos. Además, con la renta energética se construyeron escuelas y hasta nuevos pueblos, en lugares donde parecía imposible. Entonces, hoy, al declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos, estamos recuperando mucho más que



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

un recurso natural, estamos recuperando valores, signos de una nueva Argentina. Somos parte de un proyecto colectivo.

Recuerda la historia que el petróleo ha alterado el curso de la política y la economía de varios países. El surgimiento de políticas petroleras nacionalistas en los países subdesarrollados fue y es uno de los fenómenos políticos más significativos de nuestros tiempos.

Nuestra empresa petrolera emergió, al igual que tantas otras, en medio de la crisis energética de la Primera Guerra Mundial. Fue ahí cuando nuestro país comenzó a pensar en la importancia de encontrar nuestro recurso no explotado. Ya en 1922, YPF creció con rapidez y se posicionó como una competidora de petroleras extranjeras.

El general Enrique Mosconi creía que sólo los monopolios petroleros estatales podían ser capaces de proteger los recursos petroleros de América Latina, para promover la industrialización que él creía esencial para el bienestar económico y la independencia política de la región. Ese hombre pragmático combinó su fe en la idea del monopolio estatal con el deseo de alcanzar la máxima productividad.

El nacionalismo petrolero argentino ha influido en la dirección de la política petrolera en gran parte del resto de América Latina. Vale recordar que Mosconi en su viaje interamericano, de 1927-28, atacó a las compañías petroleras internacionales e impulsó una política petrolera latinoamericana coordinada; ese fue sólo el paso inicial de su campaña petrolera continental.

En aquellos tiempos se adoptó un horizonte sobre una capacidad de reserva no menor a los 20 años. Actualmente, las reservas de nuestro país apenas llegan a los 7,8 años ya que las grandes empresas transnacionales del sector que operan nuestros yacimientos, al tiempo que agilizaron la extracción con innovación tecnológica, no realizaron inversiones previstas en materia de exploración y perforación. Las reservas de gas natural cayeron un 51% en el transcurso de la década del 2000. Es sin duda una situación muy complicada para un país cuya matriz energética depende en casi el 50% del gas natural. En tanto, las reservas de petróleo disminuyeron en los últimos 10 años un 16%. Desde el año 2000, la cantidad de pozos terminados fue un 50% menor que la registrada durante la década de los 90.

La no inversión y la merma en las reservas hicieron que el gobierno nacional tomará la histórica decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF Repsol Petróleo y Gas.

Convencidos de que el crecimiento económico rápido y sostenido necesita y depende de los recursos petroleros, hoy venimos a este recinto a retomar la propiedad nacional de los recursos petroleros con el objetivo de lograr el autoabastecimiento. Estamos reafirmando nuestra soberanía energética.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El artículo 1° del proyecto en tratamiento declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Resulta ser una definición de la política de hidrocarburos que, estratégicamente, pensamos para nuestro país, es general e involucra a todos los actores del sector.

En el artículo 4° se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos donde tendrán representación, además de los ministerios nacionales involucrados, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, en el artículo 8° se establece la distribución de las acciones entre la Nación (51%) y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (49%). Además de otras cuestiones específicas de la titularidad de acciones y las condiciones de la cesión de los derechos políticos y económicos.

Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto donde la coherencia de los hechos marca el rumbo desde el 2003. Siento enorme satisfacción de estar representando al pueblo de San Juan en esta Cámara, en estos días, en esta hora donde lo que creíamos imposible comienza a hacerse realidad: los sueños colectivos también se cumplen. La propuesta de nacionalizar YPF tiene un significado que va más allá del aspecto económico, reafirma el cambio cultural que emana de nuestro pueblo y nos fortalece como país.

El desafío propuesto es grande, pero sabemos hacia dónde vamos. Voto afirmativamente porque creo en este proyecto de país.

74. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VILARIÑO

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En esta jornada histórica que vivimos quisiera hacer referencia a algunos temas que considero de relevancia. El primero de ellos se refiere a la historia de esta empresa tan importante en nuestro país. YPF, creada en 1922 durante el gobierno de Hipólito



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Yrigoyen, fue conducida por el general Enrique Mosconi, brindando una base para nuestra industrialización e independencia económica y dando empleo a muchos argentinos. A partir de allí, Mosconi permaneció en la empresa por ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.

Excluyendo a la Unión Soviética (URSS), YPF fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. Desde su fundación, la empresa realizó todas las actividades que fuesen necesarias para la explotación de petróleo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la extensión de la explotación de YPF en Salta, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz desde la década de 1920, implicó una movilización de recursos y trabajo en la construcción de infraestructura muy importante para el interior del país. Además de abrir nuevos polos de producción, se construyeron barrios para los obreros, se abrieron caminos, se mejoró la comunicación y se instalaron escuelas para las poblaciones que se creaban alrededor de la explotación del petróleo. YPF fue pionera en un tipo de concepción del trabajo que involucraba, junto con el empleo, la preocupación por la satisfacción de la vivienda, la educación y el tiempo libre de los trabajadores. Es decir, YPF fue siempre motor de generación de empleo, desarrollo y dignidad social.

Luego, en 1947, el presidente Juan Domingo Perón aplica una política desarrollista y nacionalista en YPF. Entre 1940 y 1970, la producción se multiplicó 7 veces y la de gas 14 veces. El principio de la caída se da a partir de 1976. Durante la última dictadura militar, se desindustrializó el país, predominó el desmantelamiento expreso de YPF a fin de garantizar el costoso endeudamiento externo. Dejando la empresa exhausta, sumida en una crisis financiera, pero todavía potencialmente pródiga quedaba como última “joya de la corona”, cuando el gobierno de Carlos Menem, en los 90, optó por obviar la importancia económica y estratégica de este recurso natural y no renovable, permitiendo la privatización primero y su extranjerización después. Como lo vivieron la mayoría la mayoría de las empresas públicas argentinas, YPF fue privatizada. Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas, cuyo primer paso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una sociedad del Estado) para convertirse en una sociedad anónima (YPF S.A.).

Mientras que países vecinos como Brasil con Petrobras, Venezuela con PDVSA y México con Pemex mantenían el petróleo en manos del Estado, la Argentina lo vendía apresuradamente para intentar salvar una falsa estabilización cambiaria.

En 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Finalmente, en 1999, se culminó la privatización al venderse el último 24% de acciones estatales y provinciales a la española Repsol por un valor de 9.000 millones de dólares. Repsol compró en el mismo año otro 73% de acciones que pertenecían al sector privado.

Pero estos duros datos, históricos, que relato aquí, nos llevaron a lo que hoy es la compañía. En mi provincia los datos son alarmantes. En el año 1992 la producción de petróleo de la provincia fue de 500.028,301 m3, y la producción de gas fue de 2.400.134,335 miles de m3. Para el año 2011, la producción de petróleo fue de 461.381,233 m3, y la producción de gas fue de 4.580.071,314 miles de m3.-

En Salta hay aproximadamente 1000 pozos, los cuales se encuentran en diferentes estados (abandonados, a abandonar, en estudio, productores, productores en parada transitoria, etc). En el año 2011, el número de pozos en actividad (discontinua, que no produjeron todos los meses) fue de 89 pozos. Mientras que a diciembre fueron 64 pozos los que produjeron en la provincia.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Energía de nuestra provincia, se observa que existen variables que se repiten desde 1992 hasta la fecha: aumento de los precios tanto internos como internacionales, aumento impresionante de la demanda de 2003 a la fecha por el actual modelo de recuperación económica y descenso de la producción tanto de gas como de petróleo. Y esto es inadmisibile.

Además, a nivel nacional observamos que los países de la región han aumentado la producción de petróleo en estos últimos años, salvo México que se mantuvo estable. Nuestro país ha descendido la producción. Estos son los datos:

Perú aumentó un 68 %

Bolivia aumentó un 51 %

Colombia un 34%

Brasil un 28%

Chile y Venezuela un 14%

México se mantuvo estable

La Argentina pasó de 612 millones de barriles a 572 millones. Mientras que su PBI aumentó casi el 50 % de 2003 a la fecha. Sólo hubo movimientos exploratorios en 17 pozos. El resultado final está a la vista.

Frente a esta situación es que la señora presidenta toma la decisión de recuperar el control de la compañía más importante del país. Y entiendo que por lo antes expuesto, tiene sus razones. Además, a partir del año 2003, en nuestro país se han experimentado cambios sustantivos. En el terreno económico, se produjo una radical alteración en el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

patrón de crecimiento, dejando atrás el modelo neoliberal de sobreendeudamiento con exclusión social puesto en marcha en marzo de 1976 y cuya expresión más acabada puede ubicarse en los 10 años de vigencia del régimen de convertibilidad.

La batería de políticas económicas implementada fue conformando un modo de intervención del Estado en la economía completamente distinto, lo que dio como resultado un ciclo de crecimiento de una magnitud y duración inusitadas para la historia de nuestra Nación. Este nuevo patrón de crecimiento implicó, sobre todo, trastocar las bases materiales y conceptuales sobre las que se asentaba el modelo neoliberal. Las transformaciones en curso resultan elocuentes al comparar los resultados económicos y sociales del modelo de crecimiento con inclusión social, construido a partir del año 2003, con los que arrojaron las políticas de corte neoliberal durante el período 1991-2002. Entre 1991 y 2002, el producto bruto interno se expandió a una tasa anual promedio de 2,2%, mientras que el modelo de crecimiento con inclusión social permitió alcanzar un crecimiento del 7,7% promedio anual en el período 2003-2011. En lo que respecta a la reindustrialización del país, se observa que mientras entre 1994 y 2002 la producción de bienes se contrajo a un ritmo promedio de -0,6% anual, entre 2003 y 2011 este tipo de producción se expandió al 7,7%. Otro tanto ocurrió con el comportamiento de la inversión, ya que el crecimiento del salario, el empleo y el consiguiente fortalecimiento del mercado interno, probaron ser la mejor señal para dinamizar la inversión, que pasó a representar en el período 2003-2011 el 24,4% del producto bruto interno, muy por encima del piso de 11,9% del año 2002 y también del promedio de la convertibilidad, que ascendió a 18,2%.

La razón por la cual detallo todo esto es porque este modelo lo que terminó generando, entre otras cosas, es una mayor demanda de combustible, como ya se señaló en éste recinto. Y la empresa Repsol no está a la altura de este proceso histórico que se está llevando a cabo en el país. Por ello, es que voy a acompañar con mi voto este, uno de los proyectos más importantes que me tocará votar.

Por último, quiero rendir un homenaje a los luchadores de Tartagal y Mosconi, que no se rindieron. La lucha por la recuperación del trabajo cuando los ex empleados de YPF empezaron a organizarse. Las primeras batallas fueron muy duras. Pequeños grupos de hombres y mujeres cortando el acceso a las plantas de las petroleras multinacionales, en las lejanas rutas del Norte. Muchas barreras han sorteado los luchadores de Mosconi y Tartagal para recuperar cientos, miles de puestos de empleo. Y con el tiempo y la experiencia fueron encontrando nuevas armas para seguir luchando por el “trabajo genuino”, entre ellas una: el emprendimiento productivo. Ahora que tenemos la oportunidad de dar vuelta la historia y recuperar YPF, es que quiero rendir un homenaje a estos hombres y mujeres que en esta memorable sesión están representados por el señor intendente de Tartagal, señor Sergio Leavy y por el intendente de general Mosconi, doctor Julián Albarracín, a los que agradezco su presencia.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

75. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VILLA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Considero de utilidad aportar algunas consideraciones referidas a la reciente nacionalización de YPF. En primer término, quiero señalar el realismo de la decisión que hoy nos convoca. Nadie puede ignorar que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta la tendencia mundial al conflicto por los recursos energéticos.

Concluida la primera década del siglo XX, según lo vemos actualmente, aquella tendencia está provocando los primeros conflictos de intervención armada y cuestionamiento de la soberanía en casi todas partes. Lamentablemente, el gobierno español, en abierta complicidad con otros Estados europeos colaboró en arrasar, ayer nomás, la soberanía de Libia sin pararse a considerar la seguridad jurídica o la autodeterminación de su pueblo.

Contra lo que muchos han negado por ignorancia o interés, es un hecho que los peronistas siempre nos apoyamos en una clara percepción del marco mundial en que nos movemos. En el año 1944, el general Perón relacionaba el problema que ahora nos ocupa nada menos que con la defensa nacional y con el grado de autonomía que necesita un país libre y no una semicolonía. En el año 1954, recordemos que también había advertido que las metas del modelo de crecimiento argentino se verían frustradas y la actividad económica caería un 40% si el país no avanzaba en el autoabastecimiento petrolero. Lo que entonces extraía YPF no resultaba suficiente para abastecer el mercado interno, y en ese año 1954 fue preciso negociar la participación privada, teniendo lugar conversaciones con una empresa norteamericana para efectuar inversiones en Comodoro Rivadavia.

En el año 1954, el general Perón no dudó en enviar al Congreso Nacional aquel acuerdo, curiosamente, la presidenta acaba de hacer la propio. Antes y ahora el peronismo nunca negó la participación privada; tampoco la niega la presidenta KIRCHNER. Pero del mismo modo antes y ahora también el Estado nacional ejecutó la decisión política de preservar en forma dinámica y reproductiva las riquezas del subsuelo argentino.

Sin la pretensión de hacer historia deseo aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la memoria del doctor Orlando Santos, ministro de Industrias de Perón y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que fuera el que firmara la carta de intención con aquella empresa extranjera; lo menciono aquí porque nuestra presidenta, sin duda alguna, con su decisión de nacionalizar YPF ha conseguido ingresar en el curso de la historia de la soberanía energética. Esta Cámara de Diputados la acompañará desde el lugar que le corresponde pensando también en las futuras generaciones.

En el año 1955, el consorcio de importadores de petróleo, aliado a los intereses británicos, hizo su parte en el derrocamiento de Perón. Y lo hizo con las banderas de defender nuestro petróleo bajo la tierra para poder seguir comprándolo al exterior. El 21 de febrero de 1972, Perón envió una carta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en la que señalaba (cito textual): “Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos (...) Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado.”

Finalmente, en el año 1974, el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional reitera la problemática de los recursos naturales señalando en qué grado la distribución del poder internacional está asociada a su control y explotación.

Vengo de la provincia de San Juan. Allí el desarrollo de la minería, en el marco del control y la regulación provincial de normas ambientales y fiscales, ejerce una influencia positiva en su crecimiento económico y en la masa salarial de los trabajadores. Muchos aspectos de la explotación minera son actualmente discutidos, pero no corresponde hacerlo aquí ni ahora.

Pero la cuestión de fondo es muy simple: los recursos minerales están para ser extraídos y rendir beneficios a la comunidad mediante los controles que correspondan.

En lo tocante al petróleo argentino, la presidenta ha señalado la gravedad que implica para la economía argentina un desequilibrio ya insostenible desde el año 2011; basta con mirar el balance energético. Por eso mismo advirtió también que de mantenerse este desequilibrio su consecuencia sería el carácter “no viable del país”.

No podemos ser un país dedicado a custodiar reservas sin explotarlas, con el argumento tan simple como equivocado de estar caminando sobre una riqueza subterránea. Cuando se nos informa que la Argentina es una de las tres grandes reservas de energía del planeta y asociamos dicha información al hecho de que para el año 2025 el 37% del consumo del petróleo corresponderá a los Estados Unidos y China, debemos preocuparnos. Y creo que debemos preocuparnos porque si no ponemos en estado de valorización nuestras propias reservas y quiénes y cómo lo llevarán a cabo.

Lo peor del caso es que la necesidad imperiosa de nuestro abastecimiento externo de petróleo y gas no se debe a la carencia de recursos sino a prácticas empresariales que suelen ir a buscar rentas y girarlas al exterior; tal vez la presidenta pensaba en esas empresas de cultura capitalista pero de hábitos feudales en la depredación de los recursos y las reservas ajenas. Y en los hechos REPSOL ha obrado en cierto modo como cuña para el vaciamiento de nuestra “soberanía material”.

En segundo término sostengo que no es una cuestión menor el carácter político de la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

decisión del gobierno nacional respecto a YPF: todos sabemos que la gran política siempre la hace el gobierno, pero la ejecutan los Estados. Los ciudadanos no votamos un Estado, votamos un gobierno. Podrán discutirse los niveles de eficiencia y racionalidad de la gestión de diversas áreas y el grado de profesionalización. Pero no puede discutirse la legitimidad y adhesión que recoge un gobierno para tomar determinadas decisiones. Acá no hay un problema de gestión. Acá hay un problema de interés nacional, creo que lo bastante trascendente como para subordinar los demás problemas y ordenarlos de acuerdo con una meta superior. Para nosotros los medios están en función de los fines. El nuestro es un nacionalismo de fines y no de medios. Está a la vista que la decisión de nuestra presidenta ha recogido el consenso de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso mismo considero que bien puede llamarse a esta decisión el inicio de una batalla por el petróleo, pero esta vez bajo nuevas condiciones y criterios.

He procurado y no he buscado establecer, sin excederme en el uso de la palabra que tomarán otros señores diputados o diputadas, un juego de analogías históricas. Lo que he buscado determinar es una línea más o menos visible de la continuidad de un proyecto nacional.

El proyecto nacional es el interés nacional en estado de ejecución en el tiempo. Naturalmente que las condiciones históricas son cambiantes. Sin embargo, lo que permanece es el interés nacional inseparable de su patrimonio. En ese sentido, la nacionalización de YPF es un acto afirmativo de ese interés y un punto de consenso para llevar a cabo los procedimientos y arreglos jurídicos y técnicos que correspondan. Si como se predice ampliamente, las reservas mundiales de petróleo empiezan a disminuir, entonces nuestros países estarán encerrados en una peligrosa lucha por unos recursos cada vez más limitados. La presidenta Cristina Kirchner ha considerado el presente y las enseñanzas del pasado. El presente de un mundo en conflicto abierto por la energía y el pasado de un nacionalismo popular para el cual las fuentes de energía son su patrimonio y su condición vital.

76. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO YAZBEK

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por habernos traído un gran presidente como Néstor Kirchner, que ha revertido toda la situación que estábamos viviendo y ha transformado y recuperado un país devastado y al borde de la desintegración, sin haber



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

hecho ningún ajuste o daño a alguien o perjudicado a algún sector, y lo más interesante es que sacó adelante al país con el mismo sistema tributario que heredó y con los que otros nos llevaron al fracaso.

En octubre del año pasado, nuestra querida presidenta ganó las elecciones y debo resaltar su capacidad, coraje y valentía en las decisiones que ha tomado, que son importantísimas para el país y nos llenan de orgullo.

Ganó ella y todos ganaron: los industriales, comerciantes, el campo, el sector turístico, los jubilados, todos los oficios argentinos, los hogares con asignación universal, fútbol para todos y televisión e información gratuita. La única que perdió fue la usura internacional. Como consecuencia de eso muchos mayores, entre ellos 1.800.000 mujeres de 60, 70 y 80 años que ni soñaban tener una retribución, con este gobierno -en una decisión sin precedentes- han logrado el beneficio previsional, la obra social PAMI, contención, dignidad e independencia económica.

Esta ley que debatimos es trascendental; pretende que la empresa más grande del país, como es YPF, vuelva a sus orígenes para siempre y en forma definitiva, para el crecimiento y el desarrollo energético del país, que significa el bienestar e inclusión social de todos los argentinos.

Siento una gran alegría de haber llegado a esta Cámara y estoy de orgulloso integrar este bloque y tener la oportunidad de votar esta ley hoy.

Me atrevo a decir que los dedos de una mano sobran para encontrar en el país una persona de las calidades de nuestra presidenta, a la que no le tiembla el pulso para hacer cambios profundos, que toma decisiones justas y acertadas en el momento oportuno, y resalto esto porque algunos diputados o medios reclaman: “por qué no se hizo antes”. El general Perón decía “todo en su medida y armoniosamente”, por ello, luego del amplio respaldo popular en las urnas, la circunstancias fueron otras a las que teníamos los dos años anteriores de predominio del grupo opositor denominado “A”, que sistemáticamente trababa cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo, al extremo de dejar a la Nación sin ley de presupuesto. Ahora, en esta coyuntura, con toda la legitimidad popular demostrada, a menos de dos meses de apertura del periodo legislativo, inmediatamente cuando las condiciones políticas están dadas, es posible dar este paso y garantizar el respaldo a una ley estratégica como la que hoy vamos a votar.

Comparto mi enorme emoción de estar hoy en esta jornada histórica, en esta banca representando a mi provincia, y poder ser parte del cambio que tanto necesitábamos porque en Catamarca, y en todo el Norte argentino, donde se hizo boicot de escasez de combustibles, semanas antes de las elecciones, y tuvimos que padecer el humillante y triste espectáculo de ver, kilómetros de colas de vehículos que llegaban a estar horas para conseguir unos litros de nafta, cuando en REPSOL se llevaban miles de millones al exterior, a costa del esfuerzo argentino.

Con esta ley que me honra votar estamos diciendo basta de “vivillos”. Ahora, los empresarios españoles tendrán que pensar que habrá que trabajar, invertir y disponer mejor y equitativamente de los recursos que se les conceden para administrar.

Con Néstor Kirchner recuperamos el país. Con Cristina, ahora, recuperaremos YPF.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

**77. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA
ZAMARREÑO**

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

EXPOSICION YPF

El proyecto de ley que estamos debatiendo, viene a cambiar de raíz el paradigma impuesto sobre la política hidrocarburífera y por ende energética de nuestro país. La soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, contenida en el proyecto enviado por el PEN, es de una trascendencia e importancia tal que resulta un punto de inflexión en la historia política de nuestro país.

El espíritu del mismo es declarar de INTERES PÚBLICO NACIONAL EL AUTOABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS, tanto como la explotación, industrialización, el transporte y la comercialización de los mismos.

En este contexto, nuestra presidenta ha llevado un paso más allá el proceso de transformación y de refundación del Estado, comenzado con Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. A lo largo de estos casi nueve años, este proceso político le ha dado un rol preponderante y fundamental al Estado como el articulador de políticas, siempre orientadas a la inclusión y a la igualdad social. En este sentido se inscriben medidas - entre muchas otras- como la estatización del sistema de previsión social; la recuperación de la línea de bandera aérea (Aerolíneas Argentinas) y hoy nos encontramos ante la posibilidad de hacer ley, un proyecto de soberanía hidrocarburífera, que como primera consecuencia implica la recuperación de YPF a manos del Estado nacional.

Es por ello que este proyecto de ley tiene una importancia fundamental. Un Estado no puede desarrollar políticas de ningún tipo si no es un Estado soberano, y la soberanía no se predica, se lucha y se consigue. Y ser soberano implica poder contar con las herramientas que el desarrollo de un Estado activo requiere, y poder decidir el modo en el cual deben ser utilizadas dichas herramientas. Por ello, la recuperación de YPF a manos del Estado, viene a saldar una deuda; es imposible pensar un país desarrollado e inclusivo, con equidad social, si el mismo no puede contar con sus recursos para ponerlos al servicio de sus habitantes.

Ello no solo implica la recuperación para el Estado nacional (y los estados provinciales) de la mayor empresa hidrocarburífera de nuestro país, y por tanto el control de la política en la materia, sino que el proyecto declara de interés público “la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, con el fin de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones” tal como reza el artículo 1° del proyecto.

Además, la importancia de lo que hoy debatimos radica en que el mismo establece los principios de la política hidrocarburífera de nuestra nación (en el artículo 3 del mismo), lo cual fija las bases de una política de Estado, a largo plazo, con prescindencia de quien ocupe circunstancialmente el gobierno. Son políticas que definen el modelo de país por el cual bregamos desde hace años quienes no compartimos la visión neoliberal del Estado ausente, del Estado en manos de intereses ajenos a nuestra Nación.

Con esta iniciativa, la presidenta está dando un paso más en la afirmación de que no somos una pieza más del gran tablero mundial diseñado por las superpotencias; no somos una colonia ni el patio trasero de nadie; somos un Estado soberano haciendo ejercicio de sus facultades.

Debemos tener en cuenta el contexto mundial en que esta iniciativa es propuesta: el siglo XXI está marcado por los recursos estratégicos y por el dominio de esos recursos (agua, tierras, recursos naturales no renovables en general como los hidrocarburos). La escasez de los mismos los transforma en un botín que ha valido invasiones y guerras, con las innumerables pérdidas de vidas humanas.

Hoy en día no existe país productor de hidrocarburos que no tenga el control de los mismos y no participe activamente diseñando las políticas energéticas en base a ellos; y esto es así porque es inviable el desarrollo de un país sin el manejo de sus recursos naturales. Es así que todos tienen una participación decisiva y rectora en la política hidrocarburífera que permite desarrollar la idea integral de un país, un desarrollo **SOBERANO**.

En este sentido, es válido hacer una breve mención a un aspecto que se ha venido tratando desde los sectores afectados por esta medida y por sus satélites locales, los medios oligopólicos de comunicación: con estupor y desagrado vengo leyendo en el diario La Nación, que el tema de YPF es tratado como la CONFISCACION de YPY, y no como la EXPROPIACION de YPF.

A esta altura uno no puede creer que se deba a un error o a la ignorancia del derecho; es simplemente la intención de tergiversar la realidad y de mentirle a la población.

Confiscación: es el desapoderamiento de los bienes de una persona que pasan al poder del Estado sin compensación alguna. Se constituyó como una pena que incidía sobre el patrimonio del reo, y se aplicaba a los proscriptos y a los condenados por crímenes ordinarios. Es un instituto absolutamente extraño a nuestro ordenamiento jurídico, y fue prohibido ya en la Constitución de 1853 en su artículo 17 (la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino)

Expropiación: instituto de derecho publico mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad publica, priva de la propiedad de un bien a su titular, siguiendo un determinado procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero, integralmente justa y única.

Es una limitación administrativa al derecho de propiedad, que concilia los intereses públicos con los privados



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Debe tenerse en cuenta que el 3 de octubre del año 1991 se firmó un Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España, el cual fue aprobado por ley 24.118 de agosto de 1992, con el fin de intensificar la cooperación económica en beneficio de ambos países, y proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada una de las partes en el territorio de la otra, según reza su preámbulo.

Ahora bien, el artículo 5 de dicho tratado expresamente dispone: “Artículo V: Nacionalización y expropiación. La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una parte contra las inversiones de inversores de la otra parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”.

Es decir, este proyecto político, cuya ratificación en las urnas es de una contundencia conmovedora, sigue firme en su objetivo de que sea el Estado y no los mercados, quienes articulen las políticas de nuestra nación; que sea el Estado y no los mercados quienes determinen cual es el interés público nacional; que sea el Estado, en definitiva, quien permita la inclusión y la equidad en el desarrollo de sus habitantes. El Estado al servicio de las personas, y no de las empresas.

Creemos firmemente en que las políticas deben ser implementadas por y desde el Estado y no por las empresas; éstas pueden y deben participar, y es el espíritu de este proyecto que las inversiones privadas coexistan con el Estado, pero es éste quien debe decidir el rumbo de la política y en este caso la política hidrocarburífera, a efectos de ser auténticamente soberano.

Como bien se desprende de las palabras de nuestra señora presidenta en el año 2005 “Es hora de que quienes tienen la inmensa responsabilidad de generar riquezas, porque han sido beneficiados en la distribución de la riqueza, asuman esa responsabilidad social. Y también, si no se acuerdan o no se hacen cargo de esa responsabilidad social, hay un Estado y hay un gobierno que sí se van a hacer cargo de esa representación”.

Finalmente, quisiera expresar que soy de la generación que en los años 90 observaba con ojos de niño como se desmantelaba el Estado y se hundían en la más extrema pobreza millones y millones de argentinos. Soy de la generación que en el 2001 estaba piqueteando en los distintos rincones de nuestro país y soy de la generación que en el 2003 se enamora del proyecto político que con Néstor Kirchner a la cabeza volvió a poner en valor a la política como herramienta de transformación social, y que hoy con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner está dando un paso más en la transformación de este modelo político y económico con desarrollo económico y equidad social, para bienestar de los 40 millones de argentinos. Mi voto es positivo, muchas gracias.